TERCERA EDICION

Edelberto Torres Rivas
Ennio Rodríguez G.
José Luis Vega Carballo
Xabier Gorostiaga
Manuel Rojas Bolaños
Leonardo Garnier
Hugo Alfonso Muñoz
Guillermo Zúñiga Ch.
Pedro Soto
Carlos Campos
José Manuel Valverde
Carlos Sojo Obando
Oscar Madrigal
Ludwig Güendell
Elisa Donato
Víctor Hugo Acuña
Luis Arosena P.
José Merino del Río
Ronald Campos

COSTA RICA CRISIS Y DESAFIOS





COSTA RICA
CRISIS
Y DESAFIOS

Colección UNIVERSITARIA

Edelberto Torres Rivas
Ennio Rodríguez G.
José Luis Vega Carballo
Xabier Gorostiaga
Manuel Rojas Bolaños
Leonardo Garnier
Hugo Alfonso Muñoz
Guillermo Zúñiga Ch.
Pedro Soto
Carlos Campos
José Manuel Valverde
Carlos Sojo Obando
Oscar Madrigal
Ludwig Güendell
Elisa Donato
Víctor Hugo Acuña
Luis Arosena P.
José Merino del Río
Ronald Campos



COSTA RICA CRISIS Y DESAFIOS



TERCERA EDICION



EDICION GRAFICA Y CORRECCION: Jorge David Aruj
PORTADA: Carlos Aguilar Quirós
CORRECCION: Guillermo Meléndez

320.97286
C837c3 Costa Rica: crisis y desafíos/ Edelberto Torres Rivas... /et al./.
—3a. ed. — San José: DEI, 1989
224 págs.; 21 cm. — (Colección Universitaria)

ISBN 9977-83-005-3
(ISBN 9977-904-95-2 Segunda Edición)
(ISBN 9977-904-50-2 Primera Edición)

1. Costa Rica — Política.
2. Economía.
I. Torres Rivas, Edelberto. II. Título. III. Serie

Hecho el depósito de ley

ISBN 9977-83-005-3
(ISBN 9977-904-95-2 Segunda Edición)
(ISBN 9977-904-50-2 Primera Edición)

Impreso en Costa Rica • Printed in Costa Rica

PARA PEDIDOS O INFORMACION ESCRIBIR A:

EDITORIAL DEI
Departamento Ecuménico de Investigaciones
Apartado 390-2070
SABANILLA
SAN JOSE — COSTA RICA
Teléfonos 53-02-29 y 53-91-24
Télex 3472 ADEI CR

CONTENIDO

III PARTE
LA CRISIS CENTROAMERICANA

IV PARTE
LA ALTERNATIVA

V PARTE
LA INVESTIGACION Y LA EDUCACION POPULAR

PRESENTACION

Los días 18, 19 y 20 de febrero de 1987, el Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS), realizó su segundo coloquio anual "Costa Rica: balance de la situación". En esa ocasión se logró reunir a un grupo heterogéneo de personas, compuesto por dirigentes de organizaciones populares, científicos sociales, analistas políticos y miembros de centros de educación popular, interesados en realizar una discusión amplia sobre los problemas que enfrenta la sociedad costarricense en la actualidad y sus desafíos.

Con la celebración de este coloquio se buscaban dos objetivos: en primer lugar, realizar un diagnóstico del estado de la economía y la sociedad costarricenses en los años ochenta, señalando tendencias de desarrollo e identificando posibles líneas de evolución de los acontecimientos, dentro de la conflictiva situación del área centroamericana. En segundo lugar, analizar las propuestas que pretenden convertirse en alternativas válidas frente a los planteamientos oficiales y el rumbo que parecen estar tomando los acontecimientos en el país.

Aunque tres días de discusión es poco tiempo para poder alcanzar objetivos tan ambiciosos, el coloquio rindió indudablemente sus frutos y se avanzó en la dirección propuesta. Este libro es muestra de ello. En él se presentan las ponencias que alimentaron las discusiones de los tres páneles y de las tres mesesas redondas que se realizaron. Un conjunto de visiones y posiciones diferentes, algunas de ellas todavía en proceso de maduración, cuyo punto de unión lo constituye la preocupación por el destino del país.

El primer capítulo agrupa a un conjunto de trabajos que permiten vislumbrar la complejidad de la situación actual, así como las posibles líneas de evolución de la sociedad, la política y la economía. Los cinco trabajos atacan el problema desde perspectivas y ángulos diversos: la cuestión de la democracia, la situación actual de los sectores populares

y sus organizaciones, los problemas de la economía, la política social y la seguridad nacional.

El segundo capítulo recoge dos trabajos sobre un problema que se ha convertido en centro de interés en todos los análisis que se hacen sobre América Latina: la deuda externa. ¿Cuáles son las opciones? ¿Es posible conciliar el enfrentamiento de la deuda con las necesidades de la reactivación económica y las exigencias de legitimación del régimen político? Dos enfoques y una polémica en torno a un tema de candente interés, tanto por sus implicaciones para el presente como para el futuro del país.

La crisis regional es otro tema que no puede ser dejado de lado en un análisis serio sobre la situación del país. Por esa razón el capítulo tercero recoge tres trabajos sobre el tema, que abordan el conflicto y sus implicaciones tanto desde el punto de vista nacional, como del regional.

En el capítulo cuarto se presentan cuatro ensayos que plantean el problema de la alternativa al modelo de Estado y sociedad que aparentemente se está imponiendo en el país. Desde puntos de vista diferentes, los autores de esos trabajos hacen propuestas polémicas, que indudablemente constituyen aportes a un debate que apenas se está iniciando en el país.

Finalmente, en el capítulo cinco se analizan también desde perspectivas diferentes, el papel de la investigación social y de la educación popular, en el actual contexto de crisis nacional y regional. La diversidad de los enfoques señala la necesidad de avanzar por el camino de la reflexión, en busca de un acortamiento de las distancias entre los intelectuales y las organizaciones populares.

Como generalmente el gran público no tiene acceso a este tipo de debates, el CEPAS ha considerado conveniente dar a conocer las ponencias, sin que ello signifique vinculación institucional con algunas de las posiciones esbozadas. Ante un futuro que se presenta como incierto, es necesario que los diferentes sectores de la sociedad expresen libremente sus puntos de vista. Contrariamente a lo que piensan algunos, solamente a través de un debate abierto es posible asumir colectivamente los retos del presente y del futuro. Estimular este debate y crear las condiciones para que se realice, es el gran desafío democrático de la Costa Rica de nuestros días.

CEPAS
Mayo de 1987

Sobre los colaboradores

Víctor Hugo Acuña
Historiador, Doctorado en la Universidad de París IV, actual Director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, Miembro del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS).

Luis Arosena P.
Sacerdote, Párroco de Fray Casiano de Madrid, Chacarita, Puntarenas.

Carlos Campos
Dirigente campesino, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico.

Ronald Campos
Sindicalista, actual Secretario de Organización de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR).

Elisa Donato
Licenciada en Sociología, Miembro del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS).

Leonardo Garnier
Economista, Candidato a Doctor en la New School for Social Research, New York, actual Director de la Maestría en Política Económica de la UNA de Heredia y Asesor del Ministro de Planificación.

Xabier Gorostiaga
Sacerdote Jesuita, panameño, economista, Doctorado en la Universidad de Cambridge, actual Director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

Ludwig Güendell
Sociólogo, Maestría en la Universidad de Costa Rica, actualmente es Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Heredia.

Oscar Madrigal

Subsecretario General del Partido Vanguardia Popular.

José Merino del Río

Director del Semanario Libertad.

Hugo Alfonso Muñoz

Abogado, Doctorado en la Universidad de París II, Ministro de Justicia en la Administración Monge, actualmente es Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Ennio Rodríguez C.

Economista, Doctorado en el Institute for Development Estudies de Sussex, Profesor de la Universidad de Costa Rica, Ministro de Financiamiento Externo en la Administración Monge, actual Secretario de Planes y Programas del Partido Liberación Nacional.

Manuel Rojas Bolaños

Sociólogo, Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Profesor en la Universidad de Costa Rica, Miembro del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS).

Carlos Sojo Obando

Sociólogo, Miembro del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS).

Pedro Soto

Sociólogo, Miembro del Centro Nacional de Acción Pastoral (CENAP).

Edelberto Torres Rivas

Sociólogo Centroamericano, nació en Guatemala. Maestría en Sociología, en la FLACSO-Chile. Actual Secretario General de la FLACSO.

José Manuel Valverde

Sociólogo, Maestría en la Universidad de Costa Rica, Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Heredia, Actual Director del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS).

José Luis Vega C.

Sociólogo, Maestría en la Universidad de Princeton, actual Subdirector de la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de Costa Rica.

Guillermo Zúñiga Ch.

Economista, Maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, Actual Decano Académico de National University con sede en Costa Rica.

I PARTE

LOS DIAGNOSTICOS

Ocho tesis sobre la realidad nacional

Manuel Rojas Bolaños

I

La crisis se ha transformado en un proceso de cambio. Han pasado más de seis años desde que los indicadores de crisis hicieron su aparición en el escenario nacional. Desde entonces mucha agua ha pasado bajo los puentes, pero los costarricenses siguen sin entender realmente lo sucedido, y en sus corazones ha permanecido latente la esperanza de un retorno al pasado, a los años inmediatamente anteriores a la crisis. Años que cada vez son más idealizados, como si no fuera precisamente en ellos cuando la crisis se encubó.

Como las explicaciones de la crisis que tienen mayor circulación entre el público, están fuertemente contaminadas por el factor político partidista, los orígenes reales de este fenómeno han terminado por caer en una especie de zona de oscuridad, y su lugar ha sido ocupado por la personificación de una suerte de espíritu maléfico, que quién sabe con qué aviesas intenciones desató los demonios de la crisis. Para amplios sectores de nuestro pueblo, esa es la única explicación posible de la crisis, y la figura de Carazo ha sido señalada como culpable no solamente de la crisis nacional, sino también de la existencia de un proceso revolucionario más allá de nuestras fronteras. ¡Cómo si la paternidad de un fenómeno tan complicado como la crisis, y más aún, de una revolución, pudiera ser atribuida a un solo individuo!

Pero también el significado real de la crisis, su impacto político y social, ha permanecido velado por las promesas del retorno a la situación de 1978-79, y por las afirmaciones de que los años de desastre han quedado atrás y que el país se encamina con paso seguro hacia la recuperación. Estas afirmaciones se han visto reforzadas, en primer lugar, por la relativa y precaria estabilidad económica alcanzada en los años 1982-86, lograda en su mayor parte por la ayuda económica norteamericana, y, en segundo lugar, por el temor que el ciudadano medio siente al enfrentar la realidad de los hechos: lo irrecuperable del pasado y la incertidumbre del futuro.

Pero la crisis ha comenzado a revelar su verdadero carácter. No se trata de un disturbio pasajero de la sociedad y la economía, sino de un complejo proceso de cambio que está llevando a Costa Rica por rumbos muy diferentes a los que siguió en las décadas del reformismo, de los cuarentas a los setentas. Cambios que en conjunto arrojarán hacia finales del Siglo, de no invertirse la dirección, una sociedad mucho más estratificada, con sectores sociales empobrecidos mucho más extensos, más dependiente económica y políticamente de los centros mundiales de poder, y también más autoritaria que la actual.

II

A estas transformaciones estamos contribuyendo todos los costarricenses, la mayoría sin clara conciencia de lo que está sucediendo. Imbuidos de un patriotismo mal entendido, que los medios de información procuran exacerbar, y de una ciega obediencia a la "autoridad" de políticos y comunicadores sociales, la mayoría de los costarricenses está aceptando sin mayores resistencias los cambios, sin preguntarse sobre su sentido. Con la promesa de un mañana mejor acepta sacrificios y ajusta sus expectativas de mejoramiento inmediato. En cierta medida ocurre lo que Franz Hinkelammert[1] ha denominado "dialéctica maldita", "que destruye el presente en función de simples imaginaciones" sobre el futuro. "Todo se promete –dice Hinkelammert–, a condición de que hoy se acepte lo contrario. Y mañana se hará lo mismo, y así sucesivamente. Mayores salarios, sí; pero para mañana. Quien quiere mayores salarios mañana, tiene que aceptar las condiciones de hoy. Sin embargo, el ahorro de hoy es la inversión de mañana y mayor producto pasado mañana; y entonces puede haber mayores salarios. Pero para que haya mayores ahorros hoy, los salarios tienen que bajar. Por tanto, mayores salarios mañana, menores salarios hoy. El mismo razonamiento sirve para cualquier reivindicación de hoy. Mañana sí, pero menos hoy".

Esta aceptación de restricciones a cambio de un hipotético futuro mejor, está profundamente condicionada por el peso de la historia, sobre todo por el reformismo de las pasadas décadas, que estimuló la modernización de la sociedad, con sus secuelas de movilidad social y de mejoramiento real para amplios sectores de la población, todo eso dentro de un régimen político donde la negociación y las concesiones, antes que el enfrentamiento directo, fueron características muy acusadas. A lo largo de tres décadas la población alcanzó niveles de vida relativamente altos, sobre todo si se les compara con los del resto de la región, y se acostumbró a recibir una serie de beneficios por parte de las instituciones del Estado, en aspectos relativos a la salud, la educación y el bienestar social.

Como en el pasado ese sistema funcionó relativamente bien, posiblemente la mayoría de los costarricenses se pregunta: ¿por qué no

1. Franz Hinkelammert, *Crítica a la razón utópica,* San José: DEI, 1984, p. 89.

habrá de hacerlo hoy, y también mañana? La confianza del presente tiene también sus raíces en el pasado, impidiendo visualizar los cambios que están ocurriendo y, mucho menos, la lógica que hay detrás de ellos. En este sentido, la mayoría de los costarricenses viven todavía atrapados en las telarañas del pasado.

III

Las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad y el Estado costarricenses tienen una tonalidad conservadora. Con esto queremos decir que las medidas que se proponen para enfrentar los viejos y nuevos problemas del país están lejos de plantear la transformación global de la sociedad, con el propósito de alcanzar metas de mayor justicia y democracia, sino que colocan el énfasis en las restricciones como única forma de conservar el imperfecto presente, que es elevado a la categoría de único horizonte posible.

Puesto que ningún sistema social puede sobrevivir sin responder a las demandas de los grupos sociales que viven del trabajo asalariado, de la explotación de pequeñas unidades productivas o de las actividades informales, se diseñan programas y se ejecutan obras que recuerdan el reformismo de otras épocas; pero el trasfondo es diferente. En efecto, sin negar que subsiste una tensión entre la herencia del pasado y los planteamientos del presente, detrás de éstos hay una visión diferente de la sociedad y de las relaciones entre los individuos.

El acento se coloca hoy en el bienestar que los individuos pueden lograr sin la ayuda de ninguna instancia social. Por esa razón se aboga por una reducción de la intervención del Estado en el ámbito civil. Los programas que otrora eran calificados como de "bienestar social", y que significaban, por muchas razones, una conquista para las mayorías de este país, hoy en día son señalados como privilegios indebidamente disfrutados por los grupos sociales más pobres.

Para quienes pregonan estas ideas, los males que aquejan al país son el producto del Estado benefactor, o del paternalismo estatal, como se acostumbra calificarlo. Se olvida, como lo señala el ilustre filósofo italiano Norberto Bobbio,[2] que "El Estado paternalista de hoy no es la creación del príncipe iluminado, sino de los gobiernos democráticos", y que "El Estado de servicios, en cuanto tal, siempre más amplio y burocratizado, fue una respuesta, que hoy se critica con agudeza, a las justas demandas que venían de abajo. Hoy se sostiene que el fruto era venenoso, pero es necesario reconocer que el árbol no podía dar más que esos frutos".

En ese sentido, la crítica al paternalismo estatal lleva implícita una crítica a la democracia política alcanzada en el país, puesto que ella fue

2. Norberto Bobbio, *El futuro de la democracia,* México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 96.

posible gracias a los mecanismos de redistribución del ingreso propios de las décadas del reformismo.

Al buscar el desmantelamiento del Estado benefactor, rebajando subsidios a los pequeños propietarios, recortando gastos en programas de bienestar social, entregando actividades productivas y de servicios (como la salud y la educación) a la explotación privada, y restringiendo otros mecanismos de redistribución del ingreso, las transformaciones cobijadas dentro de este esquema contienen un carácter regresivo, que dista mucho de la concepción socialdemócrata prevaleciente en el período anterior a la crisis.

Por supuesto que el Estado benefactor no es la panacea para los problemas de la sociedad, pero mucho menos lo es esa receta, mezcla de neoliberalismo y neoconservadurismo, con la que se quiere responder hoy en día a las demandas de nuestro tiempo.

En mayor o menor medida, las líneas de acción de los dos grandes partidos políticos del país están enmarcadas dentro de esta visión del mundo, aunque unos insistan en llamarse socialdemócratas y otros abran el paraguas del socialcristianismo. Por supuesto que hay diferencias de matiz, y en una y otra agrupación existen verdaderos creyentes en la socialdemocracia o en el socialcristianismo, pero la corriente de pensamiento dominante en ambos partidos es la que hemos descrito a grandes rasgos.

IV

El predominio de estas concepciones de la sociedad y el Estado en el plano nacional, es el resultado de una confluencia de factores. En primer lugar, al sobrevenir la crisis, el paradigma liberacionista, hasta entonces hegemónico en el plano de las propuestas políticas, perdió vigencia, sin que su lugar pudiera ser ocupado por una propuesta más avanzada. Como la crisis nacional debe verse también como la crisis de los planteamientos que el PLN había venido sosteniendo a lo largo de muchos años, difícilmente podría esperarse que del seno de este Partido surgiera un planteamiento alternativo, basado en su propia experiencia histórica.

En segundo lugar, a la debacle de la plataforma liberacionista tradicional, se unió otro hecho: la carencia de una alternativa viable en la izquierda, tanto al PLN como al neoliberalismo. La inexistencia de una sólida cultura política de izquierda, que permitiera pensar la crisis sin dogmatismo, impidió el brote de respuestas novedosas, atractivas para las masas, a los problemas que se planteaban. Paradójicamente, la izquierda es hoy en Costa Rica más débil orgánicamente que en el período anterior a la crisis. Esta no sólo reveló la carencia de una propuesta viable, sino que se instaló en el seno de las organizaciones

políticas existentes, produciendo divisiones y subdivisiones que aumentaron la atomización que existía previamente. Ha ocurrido una erosión de bases y de cuadros, algunos de los cuales se han trasladado a las filas de los dos grandes partidos, fundamentalmente a Liberación Nacional, mientras que otros se han quedado a la deriva, indiferentes a la actividad política.

En tercer lugar, el ascenso del reaganismo, con su imagen bipolar del mundo y su agresiva política intervencionista hacia la región, junto con los condicionamientos provenientes de las instituciones financieras multinacionales, han provocado la redefinición local de las posiciones político-ideológicas, empujándolas hacia la derecha. Una extensa red de difusión se encarga de trasmitir los valores del neoconservadurismo y del neoliberalismo a todos los intersticios de la sociedad, obstaculizando la difusión de valores alternativos.

En cuarto lugar, la Revolución Sandinista ha tenido en Costa Rica un efecto de demostración negativo, empujando a importantes sectores sociales hacia las tiendas del neoconservadurismo local. Los grandes medios de información se han encargado de trasmitir una imagen distorsionada de la realidad nicaragüense; pero el "hecho" revolucionario mismo, como todo cambio histórico de importancia, ha espantado a muchos y desanimado a otros.

Esta suma de elementos colocó en el primer plano del escenario nacional, el planteamiento neoconservador en lo político-ideológico y neoliberal en lo económico; planteamiento que, con diferencia de matiz, como fue señalado, comparten los dos grandes partidos políticos del país.

V

Las transformaciones que se están realizando en el ámbito económico, están llevando al país hacia una situación de mayor dependencia y vulnerabilidad. En efecto, desde 1982 el país se ha vuelto excesivamente dependiente de la ayuda económica proporcionada por los Estados Unidos y por los organismos financieros multinacionales (FMI y BM). La relativa y precaria estabilidad económica alcanzada en los años 1982-86, como fue señalado, es en su mayor parte producto de la ayuda procedente de los Estados Unidos. Entre 1982 y 1985 se recibieron 642 millones de dólares, el 72 por ciento de los cuales fueron utilizados en el programa de estabilización económica. Según palabras del propio Presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, entre 1982 y 1986 (supongo que al mes de mayo), se recibieron en total 2.000 millones de dólares procedentes de diversas fuentes. Sólo en 1985 se recibieron 314 millones de dólares.[3]

3. CEPAS, *Costa Rica: balance de la situación*, No. 15 (abril-mayo de 1986), pp. 5 y 8.

Cuadro No. 1

Costa Rica: Ayuda proporcionada por los Estados Unidos, en millones de dólares, 1982-1986 (años fiscales de los EE.UU.)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986*
ASISTENCIA ECONOMICA	16,00	15,30	51,70	214,10	178,92	198,15	187,00
préstamos	12,00	10,00	42,70	166,20	74,60	26,60	
donaciones	4,00	5,30	9,00	47,90	104,32	171,55	
1. AID	13,60	11,50	11,50	28,47	22,72	16,75	
préstamos	12,00	10,00	9,70	20,20	17,10	5,20	
donaciones	1,60	1,50	1,80	8,27	5,62	11,55	
2. P.L. 480 alimentos p/ la paz	0.40	1,80	19,10	28,20	22,50	21,40	
préstamos	–	–	18,00	28,00	22,50	21,40	
donaciones	0,40	1,80	1,10	0,20	–	–	
3. Fondos de apoyo económico	–	–	20,00	155,74	130,00	160,00	
préstamos	–	–	15,00	118,00	35,00	–	
donaciones	–	–	5,00	37,00	95,00	160,00	
4. Otros**	2,00	2,00	1,10	1,70	3,70	–	
préstamos	–	–	–	–	–	–	
donaciones	2,00	2,00	1,10	1,70	3,70		
ASISTENCIA MILITAR	–	0,03	2,05	2,64	9,15	9,20	2,73+
préstamos	–	–	–	–	–	–	–
donaciones	–	0,03	2,05	2,64	9,15	9,20	2,73

* Solicitados.

** Cuerpo de Paz, Programa de Narcóticos y otros

\+ No incluye la solicitud de $9 millones para entrenamiento antiterrorista.

Fuente: Edelman, Marc, "Back from the Brink", *NACLA; Report on the Americas*, Vol. XIX Number 6 (November-December 1985), 41 (con datos del U.S. Department of State and *U.S. Overseas Loans and Grantes and Assistance fron International Organizations July 1, 1945–September. 30, 1982).*

Esta dependencia no parece que va a cesar a corto plazo, aunque ciertamente no depende solamente de los deseos del Gobierno de Costa Rica, sino también de la coyuntura internacional. En ese sentido Costa Rica se ha aprovechado bien de la situación geopolítica de la región, pero no ha salido incólume del lance. En efecto, desde 1982 el país entró en una nueva fase histórica, caracterizada por la creciente influencia del Gobierno de los Estados Unidos y de los organismos financieros multinacionales, en la definición de las políticas internas (económicas y sociales), y en el manejo de las relaciones exteriores, sobre todo en lo que atañe a Nicaragua. Pese a lo que digan en sentido contrario políticos y comunicadores sociales, lo cierto es que el país ha sufrido una limitación de su soberanía.

Los dos convenios que se firmaron durante el gobierno de Monge con el FMI y el programa de ajuste estructural suscrito con el Banco Mundial, así como la ayuda proporcionada por la AID, implican una serie de condiciones que el país debe cumplir, que apuntan hacia la reducción de las funciones y el tamaño del aparato estatal, y la reorientación del aparato productivo en términos de productos y de mercados. El fin es la "liberalización de la economía" y la manipulación de su apertura hacia el exterior, tanto desde el punto de vista de la orientación de la producción (el mercado interno tiende a perder importancia), como desde el de la captación de recursos de capital (ampliación de la inversión externa privada).

Estos cambios, que aisladamente parecen inocuos y hasta razonables en muchos casos, conllevan sin embargo un conjunto de modificaciones en la estructura de las clases sociales, en sus posibilidades de mejoramiento en los niveles de vida, y en sus relaciones con el Estado. Significa asimismo, cambios en las formas tradicionales de organización de estos grupos sociales, y en el tratamiento recibido por parte de las instancias gubernamentales.

A la dependencia económica creciente y a la mayor apertura de la economía, se suma el problema de la deuda externa, cuyo pago se ha ido dilatando una y otra vez, con alivios momentáneos para la economía, pero sin que se logre vislumbrar una solución definitiva a mediano plazo. Mientras tanto, el moento de la deuda sigue creciendo año con año.

Pese a las declaraciones optimistas de algunos funcionarios, la economía se mantiene estancada y las perspectivas a corto plazo no son nada buenas. Como lo ha señalado recientemente en una entrevista a *Tribuna Económica*, el exministro de Planificación Nacional y Política Económica, Juan Manuel Villasuso,

> Las perspectivas para la producción en 1987 no son demasiado halagüeñas. No contamos con el ingrediente de los mayores precios del café y los menores precios del petróleo. Y, todavía más grave, las negociaciones con el FMI impondrán al país condiciones muy duras,

que constreñirán todavía más la demanda interna. Todo parece indicar que en 1987 se pospondrá la reactivación económica. Incluso es peligroso un retroceso en materia de crecimiento. Las negociaciones con los organismos internacionales serán definitivamente cruciales, sobre todo en lo que se refiere a la inversión productiva. Si la política crediticia es impuesta por el FMI y resulta excesivamente austera, no podremos esperar para 1987 ningún repunte de la producción.[4]

Cuadro No. 2

Costa Rica: Indicadores de la deuda externa, 1982-1986
(millones de dólares)

	1982	1983	1984	1985
Saldo total al 31 de diciembre	2.981,8	3.427,2	3.630,6	3.708,8
porcentaje del PIB	121,6	110,1	101,6	102,1
Servicio total de la deuda	*	744,7	374,6	573,9
Porcentaje de las exportaciones		85,3	37,2	59,6
Interés pagados	*	565,6	227,8	317,9
porcentaje de las exportaciones	*	64,8	22,6	33,0
porcentaje del PIB	*	18,2	6,4	8,8

* En 1982 no se hicieron pagos por concepto de la deuda externa.

Fuente: Republic of Costa Rica, *Information Memorandum.* September 1985, 5.

VI

El desmejoramiento de la situación social de la mayoría de los costarricenses, ocurrido en los años ochenta, no es un fenómeno meramente coyuntural. Más allá de los efectos solamente atribuibles a la crisis, existen procesos que buscan fijar la situación en el nivel actual, sin posibilidades de mejoramiento real en el mediano plazo. Por otra parte, las fronteras entre las clases sociales tienden a hacerse mucho más rígidas, anulando prácticamente los procesos de movilidad social.

4. *Tribuna Económica,* año 4, No. 12 (diciembre de 1986), p. 19.

No es que en el pasado la situación fuera ideal; la sociedad costarricense nunca ha sido igualitaria desde el punto de vista social, pero en las décadas del reformismo las políticas de redistribución del ingreso permitieron un relativo mejoramiento de las condiciones de la población, en campos como la salud y la educación. Por supuesto que dichas políticas nunca fueron un escollo para la concentración de la riqueza en una minoría de la población, como lo muestran estudios realizados al respecto.

El trabajo de Víctor Hugo Céspedes,[5] realizado en 1971, muestra una elevada concentración de los ingresos totales de las familias costarricenses (50,6%) en el estrato alto de esas familias (20% superior); mientras que el estrato bajo de ellas (20% inferior), solamente percibía el 5,4% del total de los ingresos percibidos por la totalidad de las familias del país. La concentración se percibe más claramente cuando se observa que el 10% más alto recibía 34,4% del total, mientras que el 10% más bajo solamente recibía el 2,1%

Con la llegada de la crisis y las consiguientes modificaciones estructurales, la situación ha tendido a agravarse: los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. El desempleo, la desvalorización salarial, el deterioro de los servicios prestados por las instituciones del Estado, la inflación y la devaluación, son elementos que operan contradictoriamente, agravando aún más la situación de unos y favoreciendo a la minoría poseedora.

Los datos emanados de un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica en 1983,[6] revelan una agudización de la concentración de la riqueza. Para ese año, el estrato alto de las familias (20% superior) había aumentado su participación dentro del ingreso total de las familias costarricenses, mientras que el estrato bajo había disminuido su participación. El 10% más alto recibía el 36,7% de los ingresos totales, mientras que el 10% más bajo solamente percibía el 1,5%.

Ciertamente, con la estabilización económica, ciertos indicadores han cambiado, mostrando en algunos casos mejoría, pero la tendencia se mantiene. La recuperación salarial es insuficiente para restituir los niveles de vida de 1979; la desocupación total ha bajado pero ha aumentado el llamado sector informal; las familias clasificadas como de "bajos ingresos" constituyen el 36,7 del total en todo el país, y el 49% en el sector rural; se han incrementado notablemente los problemas de vivienda, salud, tenencia de la tierra, acceso a la educación y delincuencia. Este último aspecto, a menudo dejado de lado por los estudios sobre los

5. Ver al respecto J. D. Trejos y M. L. Elizalde, *Costa Rica: la distribución del ingreso y el acceso a los programas de carácter social*, San José: Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad de Costa Rica, 1985, p. 42.
6. *Idem.*

efectos de la crisis, es buen indicador del deterioro alcanzado por la sociedad costarricense. El ciudadano medio cotidianamente se ve expuesto a la agresión y a la violencia que durante los últimos años ha alcanzado niveles desconocidos en la historia del país.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,[7] señalan importantes disminuciones en la proporción del gasto público dedicado al sector social, fundamentalmente en salud, educación, trabajo y seguridad social. Esta disminución responde a la política de reducción del tamaño y las funciones del aparato estatal, con la consiguiente privatización de lo público, desde actividades productivas hasta servicios.

Cuadro No. 3

Costa Rica: Proporción del gasto público dedicado a los principales sectores sociales, 1975-1984

AÑO	% dedicado Sector social	Salud	Educación	Trabajo y Seg. Social	Vivienda
1976	51,3	23,1	16,5	9,2	2,5
1977	46,4	21,1	15,3	7,7	2,3
1978	52,0	24,8	16,0	8,9	2,3
1979	54,3	26,5	15,5	9,7	2,6
1980	52,5	25,7	15,3	8,0	3,5
1981	45,2	21,1	15,4	6,7	2,0
1982	41,0	18,3	13,8	7,2	1,7
1983	39,3	17,4	12,3	6,9	2,7
1984	41,5	17,6	12,6	8,7	2,6

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 1986, con datos de la Contraloría General de la República.

Los resultados de todos estos cambios apenas comienzan a ser observados, pero es indudable que las restricciones del presente, lejos de proyectar una imagen optimista para el futuro, arrojan serias interrogantes sobre los efectos sociales negativos, tanto en las condiciones de vida de las clases no propietarias, fundamentalmente de menores ingresos, como en lo que se refiere a su comportamiento político.

7. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, *Evolución Social en Costa Rica, 1980-1985,* San José: mimeo, 1986, s.p.

VII

En el plano político también están ocurriendo transformaciones. Ante la imposibilidad de avanzar por el camino de la democratización de la sociedad, usando al mismo tiempo el recetario neoliberal para enfrentar los problemas de la economía, la democracia ha sido reducida a la existencia de un conjunto de reglas más o menos formales para la elección de gobernantes. Esta es la concepción predominante en las declaraciones de políticos y comunicadores, que hacen abstracción del problema de la desigualdad social. Cualquier iniciativa que busque la conquista de nuevos espacios para la democracia, es señalada de inmediato como un peligro para la estabilidad de la sociedad en su conjunto.

El nivel de democracia política alcanzado en el país no es en modo alguno despreciable; pero se observan tendencias regresivas. Se está tratando de establecer artificialmente un sistema bipartidista, colocando escollos económicos y legales para la inscripción y funcionamiento de nuevos partidos políticos, con la consiguiente lesión de los derechos políticos de las minorías. A la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, dado el enorme costo de la propaganda, se suman los intentos de reformar el Código Electoral, a fin de elevar considerablemente el número de firmas que se necesitan para inscribir un nuevo partido.

A ello habría que agregar otro elemento: el espacio para la emisión de mensajes alternativos a la ideología dominante está sumamente limitado en los grandes medios de información. Los ciudadanos están inmersos en una especie de proceso de comunicación unidireccional, a través del cual se les lanzan mensajes y "opiniones autorizadas" que no pueden ser confrontadas. De esa manera se logra distorsionar la realidad de la crisis regional, crear falsos enemigos internos (por ejemplo, los conflictos agrarios y laborales), y equiparar la defensa de la democracia con la defensa de los valores de la libre empresa. En esas condiciones la libertad para crear nuevas opciones políticas, divulgar ideas políticas diferentes y escoger entre opciones reales, se convierte cada vez más en una libertad "formal", y la democracia costarricense en una "democracia controlada".

Por otra parte, ante la posibilidad de que el conflicto social sufra un considerable incremento, sin que se pueda recurrir a los instrumentos de negociación usados en el período reformista, el Estado ha venido modificando el carácter policial que tenían sus cuerpos represivos. El conflicto regional y la ingerencia norteamericana han jugado un papel determinante en las variaciones operadas. Desde 1982, la ayuda norteamericana, en equipo y asesoría técnica, se ha incrementado notablemente. La Guardia Civil y la Guardia Rural han recibido entrenamiento básico que las capacita para realizar la vigilancia de las fronteras, enfrentar motines y encarar brotes de insurgencia, dejando de lado el entre-

namiento propiamente policial. Además, se ha integrado un cuerpo de voluntarios, la llamada "reserva", y los grupos de carácter paramilitar han sido fortalecidos en los últimos años.

Las limitaciones para el desarrollo de la democracia política y el apuntalamiento de los aparatos represivos, son indicadores de un futuro nada halagüeño para la democracia costarricense, si se continúa transitando por una vía como la señalada.

VIII

Sin embargo, no estamos en un camino sin retorno. Si bien es cierto que las presiones externas, enlazadas con las intenciones de ciertos políticos y tecnócratas locales, empujan a esta sociedad por el camino del cambio conservador, no se trata de un proceso simple, libre de contradicciones y obstáculos. El peso del pasado y los intereses del presente se reflejan en un complicado juego de actores sociales, que impone un ritmo determinado a los cambios y que en ocasiones provoca la redefinición de los planteamientos ideales.

En ese sentido es posible afirmar que desde 1982 la sociedad costarricense se encuentra en una situación de relativa ambigüedad, entre los esfuerzos por acelerar el ritmo de los cambios con sus pretenciones de ruptura total con el pasado, y los intentos de recuperación de parte de ese pasado en las actuales condiciones de restricción económica. En ambos casos se buscan los mismos objetivos, pero la segunda vía busca no arrinconar demasiado a los sectores medios y bajos de la sociedad. Es la llamada "estrategia gradualista".

Es una vía que goza del apoyo de una parte importante del empresariado, preocupado por los efectos que podría tener un programa de cambios acelerados; de la mayor parte de la dirigencia sindical; de la jerarquía eclesiástica, y, por supuesto, de la mayoría de la cúpula dirigente del PLN. También en la Unidad Social Cristiana podrían encontrarse sectores favorables a esta vía.

La idea de una concertación social, que desde hace meses ha estado circulando en el plano nacional, debería analizarse dentro de este contexto. A cambio de algunas concesiones se podrían contener las manifestaciones más fuertes del conflicto social, evitando el uso extendido de la represión. De hecho ya ha ocurrido una especie de concertación, con algunos grupos de pequeños agricultores, con los comités de lucha por la vivenda y con parte del movimiento sindical.

La situación actual del movimiento popular favorece la implantación de una vía como la señalada. Ciertamente, después de seis años de inflación, desempleo y desvalorización salarial, los sectores populares no parecen estar muy dispuestos a soportar nuevas restricciones; pero como carecen de una alternativa propia, se mueven como gusanos

ciegos, que al chocar con obstáculos remueven algunos, mientras que otros les obligan a redefinir su rumbo, sin saber exactamente a dónde dirigirse. Es indudable que los movimientos de protesta juegan un papel importante, impidiendo la aceleración de los cambios, pero no conforman aún un movimiento social capaz de invertir la dirección del proceso de cambio.

Por otra parte, aún cuando el conjunto del sector empresarial está de acuerdo en la dirección de los cambios, hay discrepancias en cuanto a la velocidad del proceso. Algunos quisieran que la implantación del modelo neoliberal fuera rápida, sin consideraciones políticas de ninguna especie; pero otros, afectados a corto plazo por medidas concretas, prefieren un ritmo más lento.

Este conjunto de elementos ha introducido una dualidad al proceso, que a veces confunde hasta a los observadores más expertos; pero detrás de las apariencias lo que descubrimos son cambios con una direccionalidad definida, que terminarán por acumularse hasta llegar a alcanzar un punto de no retorno. Para entonces las consecuencias del cambio conservador serán totalmente visibles, pero quizás será demasiado tarde para reaccionar. El futuro se está decidiendo hoy.

Por esa razón es necesario y urgente que las organizaciones populares y sus dirigentes tomen conciencia del rumbo que está tomando la sociedad costarricense, a fin de que usen sus posibilidades de presión social para invertir la dirección del proceso. Antes que admitir una democracia con restricciones, todos los que estamos interesados en la transformación de esta sociedad, debemos luchar, hoy más que nunca, por la ampliación de la democracia en el sentido definido por Rousseau hace más de dos siglos.

Crisis, desarrollo y democracia en Costa Rica

Leonardo Garnier

Del éxito a la crisis

¿Un desarrollo periférico exitoso?

Hacia 1978 Costa Rica se presentaba como uno de los más claros ejemplos de lo que podría llamarse un desarrollo periférico exitoso.

En términos de la evolución de su estructura productiva, Costa Rica no se apartaba significativamente del modelo de capitalismo periférico que caracterizaba a prácticamente todos los países del continente. Por un lado, sus relaciones económicas con los países centrales seguían caracterizadas por la exportación de bienes primarios que, si bien eran producidos con una alta productividad, dependían de un uso extensivo de recursos humanos y naturales cuya remuneración era claramente inferior a la correspondiente en los países cantrales; las importaciones, por el contrario, estaban principalmente constituidas por bienes producidos en los centros mediante procesos industriales más complejos y con recursos mejor remunerados.

Por otro lado, su estructura productiva permanecía internamente desarticulada, lo que minimizaba el aprovechamiento de potenciales efectos dinamizadores "hacia adelante" y "hacia atrás" y, en especial, inhibía el desarrollo de una base científico-tecnológica nacional (o regional) capaz de apoyar un proceso de desarrollo en el cual los aumentos en la productividad y en la remuneración de los factores productivos fueran de la mano.

La industrialización de los años sesenta y setenta no contribuyó a alterar este panorama, ya que no surgió como alternativa sino como complemento del modelo de desarrollo agroexportador que la precedió. En consecuencia, se mantuvo inalterado tanto el carácter de las relaciones exteriores del país como la desarticulación interna de la economía: el Mercado Común Centroamericano –que tantas expectativas despertó en sus inicios– no pasó de ser una zona de libre comercio en la que predominaron bienes ensamblados en la región (armados, pegados, pintados, empacados) a partir de insumos importados de los centros y, en muchos casos, bajo el control del capital extranjero.

A pesar de estas limitaciones, como dijimos, el desarrollo periférico de Costa Rica podía considerarse como exitoso a la altura de los años setenta. Las tasas de crecimiento de la economía, la diversificación de la estructura productiva, la modernización social, las mejoras impresionantes en los niveles de vida de la población, y los elevados niveles de participación política en un régimen de democracia liberal, conformaban un cuadro atípico en el conjunto de los países periféricos, y claramente excepcional en la región.

Como se observa en el cuadro 1, hacia finales de los años setenta los indicadores básicos de calidad de vida en Costa Rica mostraban una situación mucho más cercana a la de los países industrializados que a la de los llamados países en desarrollo (excepto en la tasa de natalidad).

Cuadro No. 1

Indicadores básicos de calidad de vida
(fines de los años setenta)

	En desarrollo	Costa Rica	Industriales
Tasa natalidad (x1000)	32,5	30,3	13,8
Esperanza vida al nacer	58,9	72,1	74,9
Mort. Infantil (x1000)	93,6	28,2	10,7
Mort. Niños (x1000)	12,7	0,8	0,4
Población x Médico	5706,0	1470,0	554,0
Pob. x cama hosp.	1011,0	290,0	120,0
Alfatetismo adultos	55,5	90,0	98,9

Fuente: World Bank, World Report 1979

¿Cómo explicar esta combinación particular de una estructura social y política relativamente avanzada con una estructura productiva típicamente periférica? ¿Qué mecanismos promovieron y permitieron este resultado en Costa Rica, mientras en los países vecinos la desarticulación y el atraso de los sectores productivos se reflejaba directamente en la pobreza de la población y en el predominio de regímenes políticos autoritarios?

Creo que una respuesta a tales interrogantes tendría que privilegiar el papel que ha jugado el Estado en Costa Rica como instancia legítima de resolución institucional de los conflictos sociales, tanto al interior de

la clase dominante, como entre ésta y los distintos grupos sociales que conforman la población costarricense.

En este sentido, caracterizaciones como las de un "Estado proteccionista-paternalista", o un "Estado desarrollista-benefactor", si bien insuficientes, apuntan a un hecho real. En efecto, desde el siglo pasado, pero especialmente a partir de los años cuarenta del presente, el Estado costarricense ha jugado un papel explícito y socialmente aceptado de conducción del proceso de desarrollo nacional. A partir de las instituciones estatales se ha promovido la transformación de la estructura productiva, el fortalecimiento de unos sectores socales *vis a vis* debilitamiento de otros, la modificación significativa de los mecanismos distributivos, y hasta la creación de nuevos sectores sociales.

Esto lógicamente ha resultado en un complejo aparato institucional en el cual se canalizan de distintas formas y con distintos pesos las inquietudes y los intereses de los diversos sectores, generándose así una enorme cantidad de medidas que a menudo resultan confusas y ambiguas pero que, en definitiva, han ido definiendo el carácter del desarrollo costarricense en un sentido claramente distinto al que habría resultado de la simple –y a menudo brutal– aplicación de las "leyes del mercado".

El carácter progresista de muchas de estas medidas probablemente se relaciona con la necesidad que tuvieron los grupos políticamente ascendentes en los años de posguerra, de generar una amplia base social que apoyara la consolidación de su proyecto político y económico. De la misma forma, las limitaciones del proceso de desarrollo costarricense de las últimas décadas se relacionan también con el hecho de que estos grupos ascendentes lograron su cuota de poder no mediante un enfrentamiento abierto y excluyente con los viejos grupos dominantes, sino más bien por una compleja relación que podríamos llamar de "alianza conflictiva", mediante la cual fueron incorporados a las altas esferas de la vida política costarricense, sin desplazar por ello a sus viejos ocupantes.

En este contexto, el papel de los sectores medios y bajos de la población en la vida política del país, aunque importante, ha mantenido un carácter eminentemente pasivo: han servido de apoyo a determinados proyectos políticos, y han recibido los beneficios correspondientes, pero no han sido capaces de generar y concretar su propio proyecto político.

De los problemas manejables a la crisis

Ahora bien, este estilo relativamente exitoso de capitalismo periférico que caracterizó al desarrollo costarricense de posguerra no estaba exento de problemas. Por un lado, si bien se logró una mejora sustancial en la calidad de vida del grueso de la población, subsistían importantes desigualdades sociales y regionales. Se ha estimado que en 1977 cerca

del 30% de la población vivía en condiciones de pobreza (entendida como la necesidad de gastar dos terceras partes del ingreso familiar en satisfacer las necesidades nutricionales básicas) y un 15% vivía en condiciones de pobreza extrema (es decir, con un ingreso insuficiente para satisfacer dichas necesidades); la pobreza, además, seguía siendo una característica que afectaba más fuertemente las regiones rurales, en las que la proporción de familias pobres alcanzaba el 40%. La distribución del ingreso, finalmente, seguía mostrando una marcada desigualdad ya que, para 1977, el 20% más pobre de la población recibía apenas un 3,9% del ingreso total, en tanto el 20% más rico recibía un 53% del mismo (Trejos, Juan Diego: 1983).

Por otro lado, la estructura productiva del país se mostraba sistemáticamente incapaz de generar los fondos necesarios para financiar las mejoras en la calidad de vida que se estaban promoviendo. En general, esto se expresaba en un constante déficit comercial con el exterior: año a año Costa Rica importaba más de lo que era capaz de exportar y la diferencia debía ser cubierta con fondos externos, ya fuera en la forma de inversión, o en la de préstamos y donaciones. A un nivel más particular, el papel central que jugó el Estado en este proceso de desarrollo, aunado a las características particulares de las alianzas políticas que lo sustentaban, se expresaron también en una tendencia permanente al déficit fiscal: el Estado costarricense tenía la capacidad política de generar programas y actividades vinculadas al proceso de desarrollo nacional, pero era incapaz de generar los fondos para financiar dichas actividades, las cuales entonces debían cubrirse inflacionariamente o mediante endeudamiento.

Para 1978 el déficit comercial del país alcanzaba unos $300 millones, lo que representaba un 35% del valor de las exportaciones totales; el déficit del sector público llegó a representar un 6% del Producto Interno Bruto; y la deuda pública externa había alcanzado ya los $1.115 millones, con un servicio de la misma que representaba un 25% del valor de las exportaciones (Céspedes et. al.: 1985).

El que estos desequilibrios se mantuvieran –como decía Figueres– dentro de límites "manejables", y que la década de los setenta se convirtiera en uno de los períodos más significativos de nuestra historia en términos de las mejoras en los índices de calidad de vida, se debió en buena medida a una coyuntura externa relativamente favorable (recordemos, por ejemplo, los precios del café de 1976 y 1977), y a un aprovechamiento inteligente de esa coyuntura (cuyo mejor ejemplo está en la agresiva política bananera que se siguió en esos años).

En los años que siguieron, esto cambió radicalmente. La coyuntura internacional se volvió cada vez más difícil para la economía costarricense: en tanto los precios del petróleo y de las importaciones industriales de las que dependía la estructura productiva costarricense aumentaron vertiginosamente, los precios de las exportaciones se reza-

garon de tal forma que los términos de intercambio se deterioraron en un 25% entre 1978 y 1982; el déficit comercial, consecuentemente, aumentó de $300 a más de $500 millones en 1980, reduciéndose después de ese año no como resultado de una mejora en las exportaciones, sino por una brutal contracción de más del 40% en las importaciones (Mideplan, 1985).

La situación se vio complicada por el hecho de que las alianzas políticas que se habían gestado en la posguerra, y que se habían constituido en el soporte principal de la legitimidad y estabilidad de las instituciones y las transformaciones estructurales de las últimas tres décadas, se encontraban seriamente erosionadas hacia 1978. No parecía existir en ese momento una clara fuerza social con capacidad de impulsar una estrategia definida para confrontar la crítica situación que se empezaba a vivir; en ese contexto, una política económica zigzagueante en la que los intentos liberalizantes y las políticas desarrollistas se alternaban en cuestión de semanas –y hasta coexistían en distintas instituciones– tendió a actuar no como un remedio, sino como un factor adicional en la profundización de la crisis.

La producción no sólo dejó de crecer, sino que disminuyó en términos reales: el producto per cápita cayó en un 16% entre 1979 y 1982, con lo que se ubicó a un nivel inferior al de 1973; la tasa de desempleo abierto, que había permanecido por debajo del 5% hasta 1979, llegó a 9,4% en 1982; la inflación saltó de 6% en 1978 a 90% en 1982; los salarios reales cayeron en más de un 40% en ese mismo período; el déficit del sector público creció vertiginosamente, pasando de representar un 6% del PIB en 1978 a un 9% en 1980; la deuda pública externa llegó a la asombrosa suma de $3.117 millones en 1982, con un servicio que, de pagarse, habría representado más del 70% de las exportaciones costarricenses de ese año; y el tipo de cambio, finalmente, sufrió una dramática devaluación, pasando de 8,60 colones por dólar en 1978 a más de 60 colones por dólar en el mercado libre en 1982 (Trejos, J.D.: 1985; Céspedes et. al.: 1985).

La administración de la crisis y sus perspectivas

Estructura productiva vs. estructura social

Con esta crisis se hacía explícita una de las principales limitaciones del desarrollo costarricense de posguerra: la dificultad de promover y mantener una estructura social democrática y relativamente equitativa sobre la base de una estructura económica típicamente periférica.

Con la crisis se hacía evidente que la estructura productiva costarricense era efectivamente incapaz de financiar los niveles de vida que se habían alcanzado hacia 1978; que el Estado costarricense era incapaz de financiar sanamente las funciones que había desarrollado a lo largo de las últimas tres décadas.

Esto era lo que necesitaban los grupos más conservadores de la sociedad costarricense para volver a levantar cabeza. De pronto sus argumentos, que habían caído justamente en el olvido desde la gran crisis de los años treinta, volvían a parecer razonables; a fin de cuentas, eran ellos los que siempre habían sostenido que los costarricenses consumían más de lo que producían, que la intervención pública en la economía sólo problemas causaba, que la industrialización no respondía a las verdaderas ventajas comparativas del país, etc.

Este renacimiento del pensamiento conservador, ahora con ropaje "neo-liberal", no sólo le permitió presentarse como un modelo de desarrollo alternativo al modelo "desarrollista-benefactor" que –se decía– había causado la crisis; sino que llegó incluso a permear de manera significativa el pensamiento de sus viejos "enemigos" desarrollistas: el espectro ideológico de la política económica costarricense giró claramente a la derecha en los últimos años.

En este contexto, la necesidad de expandir las exportaciones tanto y tan rápido como sea posible se ha convertido en el elemento central de la nueva política económica, junto con el énfasis en restringir la demanda interna, la que se percibe como un freno al desarrollo de las nuevas exportaciones. Paralelamente, se insiste en la imperiosa necesidad de reducir el tamaño y el papel del Estado en la vida económica del país, volviéndose a plantear el mecanismo del mercado –y los criterios de rentabilidad privada– como los instrumentos más adecuados para la asignación de los recursos.

Ahora bien, en Costa Rica –al igual que en otros países– es posible distinguir dos versiones distintas de este argumento conservador básico. Por un lado, está la variante típicamente ortodoxa neo-liberal que propone simplemente el reestablecimiento de la competencia internacional de acuerdo a las ventajas comparativas, mediante una liberalización total de la economía (comercial, cambiaria, financiera, etc.); por otro lado, está la variante que podemos llamar "pragmática", que acepta un cierto grado de intervencionismo estatal, pero orientado esta vez a la creación de condiciones subsidiadas de oferta para el capital privado exportador.

Es esta última posición la que finalmente ha predominado en Costa Rica, determinando –junto con las consabidas presiones externas– la forma en que se ha administrado la crisis en los últimos cinco años.

La administración de la crisis

Esta forma de administrar la crisis que, como decía, es la que ha predominado en Costa Rica, tiende a reemplazar el viejo sistema de protección indiferenciada para las industrias que producían bienes de consumo final dirigidos al mercado interno centroamericano, con un nuevo –pero igualmente indiferenciado– sistema de promoción pa-

ra aquellas actividades productivas dedicadas a la exportación, sin importar mayor cosa qué tipo de productos se va a exportar, cuál es su ubicación sectorial, su capacidad de articulación horizontal o vertical con otros sectores o ramas productivas, su contribución potencial al aumento de la productividad y de los ingresos, etc. Lo único que parece importar desde esta perspectiva es mejorar las condiciones de rentabilidad de los exportadores (o, como se ha dicho: "que los exportadores puedan hacer clavos de oro") a la vez que se mantiene –condición indispensable para la viabilidad política de la propuesta– la paz social.

Los primeros dos años de la administración Monge (1982-1984) vieron los esfuerzos del gobierno concentrados en las políticas de estabilización necesarias para la deseada reactivación: se logró una rápida estabilización financiera, se firmaron convenios con el FMI, se renegoció la deuda externa, se logró frenar el proceso inflacionario, y se redujeron los déficits fiscales y de comercio exterior –si bien por medio de aumentos en los impuestos y tarifas y de reducciones en las importaciones–. Se implementaron además programas de "compensación social" y de "salvamento de empresas" con el fin de minimizar los costos sociales y políticos de las medidas restrictivas implícitas en el proceso de estabilización.

Si bien en las políticas de estabilización fue el "pragmatismo" local el que matizó las medidas tomadas, por encima de las presiones de los organismos financieros externos, en las políticas de reajuste estructural de los dos años siguientes el peso de dichos organismos se hizo sentir con mayor claridad, apoyado (y apoyando) las posiciones más conservadoras del sistema político costarricense.

La Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, conocida como "Ley de Emergencia" y aprobada en febrero de 1984, impuso restricciones importantes al crecimiento del sector público, incluyendo medidas dirigidas a su eventual contracción. Se reducía también el papel del Estado en la asignación de los recursos, eliminando subsidios y controles de precios, así como comprometiéndose a mantener una política flexible de tipos de cambio y sin recurrir a restricciones cuantitativas de las importaciones. Tanto en esta ley como en otras se insistía en la necesidad de vender las empresas de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA); las presiones externas llegaron al punto en que la AID realizó una donación de $140 millones para que el gobierno pagara las deudas de CODESA, a condición *sine qua non* de que sus subsidiarias fueran efectivamente vendidas a capitales privados.

La liberalización de los mercados financieros fue otro de los aspectos importantes de las políticas de reajuste estructural implementadas en los últimos años, y también uno de los aspectos en los que la intervención foránea ha sido más explícita. La elevación de las tasas de interés, la eliminación de la asignación discrecional del crédito y su sustitución por el criterio de rentabilidad –con pocas excepciones–,

y el estímulo al desarrollo del sector financiero privado, han sido los principales resultados de esta tendencia liberalizadora.

Con respecto al reajuste en la estructura productiva, la política económica se ha dirigido básicamente a la promoción de las exportaciones no tradicionales. La Ley de Emergencia contenía todo un capítulo dedicado a los incentivos a la exportación, incluyendo exenciones totales del impuesto sobre la renta a aquellos ingresos generados por exportaciones a terceros mercados, así como exención total a las importaciones de los insumos requeridos en la producción de tales exportaciones; contenía también la creación de "Contratos de Exportación" en los que se coordinaban los beneficios a las exportaciones establecidos mediante diversas leyes, incluyendo tarifas portuarias especiales, simplificación de los procesos de exportación, acceso a crédito con tasas de interés preferencial, otras exenciones fiscales, depreciación acelerada de los activos, etc.; incluía además toda una serie de beneficios especiales para las industrias de maquila.

Con la modificación del arancel, condicionada por las negociaciones con el Banco Mundial para la obtención de un Préstamo de Ajuste Estructural por $80 millones, y aprobada a fines de 1985, se pretende –según las declaraciones oficiales– lograr un sistema de protección racional que reduzca la protección efectiva para mejorar la asignación de recursos y la competitividad de los productos costarricenses en los mercados internacionales; y se espera que la reducción de la protección a una industria que dirigía el grueso de su producción al mercado interno y centroamericano, genere un aumento significativo en las exportaciones a terceros mercados.

Es importante resaltar, sin embargo, que si bien esta ha sido la tónica dominante en las políticas de ajuste estructural, no han estado completamente ausentes las políticas y medidas que van en algún sentido "contra corriente", y que resultan de los conflictos y negociaciones naturales a todo proceso social de toma de decisiones. Así, entrelazadas con las políticas predominantes dirigidas a promover las nuevas exportaciones, a reducir el tamaño y papel del Estado, a liberalizar el sistema de precios y las instituciones financieras, y a restringir la expansión del mercado interno, se han mantenido algunos intentos por defender –y hasta reforzar– la estructura productiva vigente, la importancia del sector público como fuerza motriz del proceso de desarrollo, la tradicional política de salarios crecientes y democratización económica, y la importancia del mercado interno y centroamericano.

Estos conflictos, además, han permitido una mayor gradualidad en el proceso de ajuste: de nuevo, como oficialmente se ha planteado, el reajuste estructural no podría lograrse de la noche a la mañana, su consolidación requiere tiempo, y durante ese tiempo –se dice– el actual sistema productivo debe transformarse gradualmente, sin destruir

lo que existe ni deteriorar aún más las condiciones de vida de la población.

Los límites de la política económica vigente

Desde el punto de vista de la administración de la crisis, la política económica de los últimos cinco años ha sido enormemente exitosa; de hecho, es difícil encontrar otros países en los que se haya logrado reducir los efectos desestabilizadores de la crisis sin generar a su vez un mayor estancamiento económico; en el caso de Costa Rica, además, esto se logró con un mínimo de conflicto social y político.

Las crisis económicas, sin embargo, son situaciones extraordinarias, y como tales exigen medidas extraordinarias para ser realmente superadas; la estabilización, siendo una condición necesaria para la superación de la crisis, no llega a ser una condición suficiente.

Tenemos así que, en tiempos de crisis, no se trata simplemente de saber si debemos incentivar estas o aquellas exportaciones más o menos de lo que en el pasado estimulamos la sustitución de importaciones, sino de descubrir cuál es el tipo de estructura productiva que necesitamos desarrollar, cuáles son sus sectores clave, y cuáles las interrelaciones entre ellos. El problema tampoco se reduce a saber si el Estado debe ser más pequeño o más grande, sino que se trata de establecer cuál es el tipo de Estado necesario para enfrentar los retos del futuro; es esto lo que permitirá decidir sobre su tamaño, y no viceversa. No se trata de distribuir más o menos tierra para resolver los problemas agrarios; de en cuánto subir (o no) los salarios para evitar (o no) un mayor deterioro en la distribución del ingreso; de si subir o bajar el gasto en educación, salud, nutrición, vivienda y otros servicios . . . se trata más bien de enfrentar la cuestión fundamental de cuál es el estilo de desarrollo y el modo de vida que los costarricenses queremos tener.

Es sólo en este contexto que la resolución de los problemas más inmediatos cobra su verdadera dimensión política y trasciende su aspecto administrativo. Y es ese precisamente el punto central de mi argumento: una crisis no se administra, sino que se enfrenta políticamente.

La crisis que el país vivió en los años cuarenta dio paso a importantes transformaciones en nuestra estructura socioeconómica y en nuestra vida política gracias, entre otras cosas, a la imaginación y audacia de los pensadores y dirigentes que la enfrentaron, quienes supieron plantearse la crisis que vivían en su verdadera dimensión: como oportunidad histórica para llevar adelante transformaciones fundamentales, y no simplemente como un momento difícil que había que sortear.

Y es que ese es el supuesto que pareciera subyacer la política económica de los últimos años: la crisis pasará, los problemas quedarán

atrás, lo importante es "sostener la burra" mientras se aclaran los nublados . . . y de ahí que parezca suficiente una sana administración de la crisis.

Las crisis, en efecto, pasan. Pero no pasan sin dejar huella, no pasan sin antes transformar significativamente el entorno social, político y económico en que se mueven nuestros países. En el caso de la presente crisis, uno de los rasgos que más claramente tienden a consolidarse es una nueva división internacional del trabajo que transfiere a los países periféricos un sinnúmero de actividades y procesos industriales que hacen un uso extensivo de la mano de obra y que, consecuentemente, buscan ubicarse donde los niveles de salarios sean más bajos; a la vez, se mantienen en los países centrales aquellas actividades más sofisticadas, intensivas en capital, y que emplean una fuerza de trabajo calificada y bien remunerada.

Desde el punto de vista de los países periféricos, las estrategias de desarrollo que activa o pasivamente conduzcan a integrarse en esta nueva división internacional del trabajo dejándose guiar para ello por los criterios de rentabilidad privada, conllevan riesgos muy altos. En particular, esta integración tiene el riesgo de perpetuar una especialización en actividades productivas que no sólo son menos dinámicas que aquellas en que se especializan los centros, sino que, al depender de la utilización masiva de una fuerza laboral de bajo costo, tienden a perpetuar la pobreza como condición necesaria de su competitividad.

Esto es especialmente grave para países que, como Costa Rica, han invertido una gran cantidad de sus recursos y su esfuerzo en generar mayores ingresos y mejores niveles de consumo para la población en su conjunto, a pesar de las limitaciones que enfrentaba su estructura productiva. La integración irrestricta de Costa Rica a la nueva división del trabajo no haría más que ponernos a competir con países más pobres que nosotros para exportar a los países centrales, bienes cuyos precios bajos dependen, principalmente, de los bajos salarios de quienes los producen.

En cierta forma el argumento conservador es correcto: no podemos pretender producir como pobres y consumir como ricos, y por muchos años eso fue precisamente lo que hicimos. A largo plazo, debe haber una correspondencia entre la capacidad productiva de un país y los niveles de vida de su población. El problema es que la salida conservadora sólo es salida en el peor de los sentidos: si producimos como pobres –nos dicen– entonces para ser competitivos tenemos que vivir como pobres.

El silogismo, sin embargo, tiene otra salida: si no queremos abandonar los logros del pasado; si no queremos echar por la borda lo invertido en salud, en educación, en alimentación, en la modernización de la sociedad costarricense; si no queremos que los costarricenses

—como tantos otros pueblos— se vean forzados a convertir la pobreza en la condición de su existencia económica, entonces, tenemos que plantearnos seriamente el problema de nuestra estructura productiva. En otras palabras: si no queremos vivir como pobres . . . no podemos producir como tales.

Hacia una propuesta alternativa

Hacia un estilo de desarrollo alternativo

Empecemos por plantear lo que podrían ser los objetivos de una propuesta alternativa de política económica, en la dirección planteada hace un momento.

En primer lugar, se trata de impulsar un proceso capaz de generar aumentos significativos en el bienestar social. Y en segundo lugar, debemos plantearnos como objetivo el que dicho proceso tenga un carácter dinámico y de largo plazo. Es preciso entonces plantear explícitamente los criterios que permitirían el mayor grado de dinamismo a un proceso de desarrollo prioritariamente dirigido a la maximización del bienestar social.

Creo que, dadas las características estructurales de nuestra economía, el logro de tales objetivos requiere de transformaciones estratégicas en al menos cuatro direcciones fundamentales.

Primero, se requiere avanzar hacia una estructura productiva que se apoye principalmente en la creciente productividad de nuestros recursos humanos y naturales, y no simplemente en un falso bajo costo que resulta más bien de la pobre remuneración de dichos recursos. Es decir, nuestros productos deben ser baratos por la eficiencia con que seamos capaces de producirlos, y no por someter a nuestros trabajadores y nuestros recursos naturales a un proceso de sobreexplotación.

Esto, que a primera vista parece obvio, no lo es tanto, ya que —como he dicho— lo que los enfoques conservadores nos proponen es, en definitiva, que nos especialicemos en producir para el mercado externo sobre la base de un uso extensivo y mal pagado de nuestros recursos naturales y nuestra fuerza de trabajo. Es preciso avanzar en otra dirección: cuanto mejor pagados sean nuestros recursos productivos, y sobre todo el trabajo, seremos un país más rico y con un mayor nivel de bienestar social; para lograr esto debemos especializarnos en aquellas ramas productivas en las que la rentabilidad no dependa prioritariamente del bajo costo unitario del trabajo (de los bajos salarios) sino de su calificación y productividad; ramas en las que los avances tecnológicos permitan generar mejoras sistemáticas en la calidad de la vida.

Segundo, el logro de los objetivos planteados requiere avanzar hacia una estructura productiva y distributiva prioritariamente dirigida

a la satisfacción de las necesidades de consumo de los sectores mayoritarios de la población; prioridad que también está ausente en las propuestas conservadoras, para las que lo importante es exportar a como haya lugar y a toda costa. Es evidente que, en las actuales circunstancias, las exportaciones tienen que ser un elemento importante en cualquier estrategia de desarrollo: sin embargo, no pueden y no deben ser su eje central. Las exportaciones no tienen sentido como un fin en sí mismas, sino como un medio para alcanzar de mejor manera los objetivos del desarrollo nacional.

Ahora bien, la democratización del consumo nacional requiere de una estructura socioeconómica más equitativa. Los nuevos patrones de consumo que dicha democratización entraña contribuirán a su vez a la consolidación de los sectores productivos cuyos esfuerzos se dirijan —directa o indirectamente— a la satisfacción del consumo popular.

Tercero, se requiere que la estructura productiva se desarrolle con un alto grado de articulación entre sus partes, de manera que tanto la producción dirigida al consumo nacional como aquella dirigida al mercado externo, se vinculen entre sí y con un sector de bienes de producción que permita maximizar el valor agregado nacional a todos los niveles. En las propuestas tradicionales, la importancia de esta articulación vertical de la estructura productiva es sustituida por el recurso al comercio internacional irrestricto, bajo el supuesto de que con las divisas generadas por las exportaciones podemos comprar en los mercados internacionales todo lo que necesitemos. No hace falta insistir aquí en las graves consecuencias que estas ilusiones han entrañado siempre.

La integración de las necesidades de consumo popular, una estructura fuertemente articulada en un contexto de creciente productividad y eficiencia, y niveles de calidad de la vida en constante mejoría, resultarían en una dinámica de desarrollo acorde con nuestro objetivo fundamental. Además, sólo con una estructura productiva articulada de esta forma sería posible generar un desarrollo científico y tecnológico acorde con las necesidades y las posibilidades del país.

Es importante tener presente, sin embargo, que un país pequeño como Costa Rica no puede constituirse por sí solo en base suficiente para tal tipo de desarrollo. Esta propuesta presupone, por tanto, los procesos de integración como un elemento clave para su efectiva realización. Por lo demás, sobra decir que la acción coordinada de los países periféricos frente a los organismos financieros internacionales y los países centrales, y el logro de una solución al problema del endeudamiento acorde con las posibilidades de pago y los legítimos derechos al desarrollo en los términos aquí planteados, son también condición necesaria para el éxito de este tipo de propuesta.

En cuarto y último lugar, no se alcanzarán los objetivos planteados sin una profunda democratización de la estructura económica en todos

sus niveles. Por un lado, Costa Rica –en tanto nación– debe recuperar y ejercer efectivamente el control soberano sobre las decisiones fundamentales que afectan su desarrollo. En las propuestas conservadoras, por el contrario, la soberanía ha sido uno de los principios más rápidamente olvidados o negociados; sin soberanía, sin embargo, no tiene sentido siquiera hablar de democracia.

Por otro lado, la participación democrática en los procesos de toma de decisiones debe ser una posibilidad para todos los costarricenses. Como veremos a continuación, esta participación debe darse tanto en los niveles de definición y coordinación global de la política económica –de ahí la importancia de la democracia representativa– como en los niveles más específicos pero no menos importantes de las decisiones cotidianas y particulares –de donde se evidencia la importancia de la democracia participativa.

Democracia y desarrollo

Reducir nuestra estrategia de desarrollo a la expansión indiscriminada de las exportaciones, siguiendo el criterio de la rentabilidad privada y las supuestas ventajas comparativas que se reflejan en los precios internacionales –tal y como propone la versión más radical del argumento conservador–, resultaría como he dicho en una especie de "racionalidad perversa" según la cual se preserva la rentabilidad del sistema económico a costa de perpetuar la pobreza de los recursos del país –y en especial la pobreza de la población trabajadora.

Ahora bien, si no hay razón para que este criterio de rentabilidad coincida, a través del mecanismo del mercado, con la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población y con los requerimientos de un proceso de desarrollo dinámico y autosostenido, tampoco hay garantía de que otros mecanismos de coordinación social satisfagan tales criterios, a menos que los persigan explícita y sistemáticamente.

Desde nuestra perspectiva, por tanto, no basta con agregar la participación estatal como complemento –o incluso como sustituto– del mercado. Ese no es el problema. Lo que se requiere es establecer una vinculación satisfactoria entre los criterios del bienestar social, las necesidades del desarrollo, y los procesos de toma de decisiones. Para ello es indispensable democratizar efectivamente dichos procesos y, en particular, los referidos al ámbito de la política económica.

Curiosamente, los enfoques neo-liberales utilizan una argumentación similar para defender el uso irrestricto del mercado, al que ven como la forma más acabada de la democracia. El mercado –se dice– no sólo garantiza la máxima eficiencia social en la asignación de los recursos, sino la máxima libertad de los agentes individuales y el carácter democrático de las decisiones económicas. El argumento es tan hermoso como falso.

El mercado es capaz de alcanzar tales objetivos sólo en presencia de una serie de condiciones tan restrictivas que ni lejanamente se acercan a sus condiciones reales de funcionamiento. Entre estas últimas sobresalen la desigual distribución del ingreso y el desigual acceso a la propiedad, la lucha desigual entre pequeños y grandes productores, las evidentes desarticulaciones de la estructura económica, y la existencia de múltiples factores que a pesar de su importancia social pasan desapercibidos para el mercado (para el que sólo existe lo que tiene precio). Estas y tantas otras "desviaciones" de la realidad con respecto al modelo económico que sostienen los neo-liberales hacen más que evidentes las limitaciones que enfrenta el mercado para ser un mecanismo efectivamente democrático de asignación de los recursos de la sociedad.

Una racionalidad alternativa, que incorpore lo que podríamos llamar la "lógica de las mayorías" como criterio fundamental de los procesos de desarrollo, requiere de una democratización efectiva –y no simplemente formal– de la vida económica en todos sus niveles.

Esto significa que es preciso avanzar hacia un sistema de coordinación democrática de la vida económica capaz de integrar las necesidades e intereses de los distintos grupos sociales en el proceso de desarrollo nacional. Este sistema de coordinación democrática no elimina el papel del mercado, pero lo ubica en su justa perspectiva, es decir, como un instrumento subsidiario de un proceso dirigido prioritariamente a la maximización del bienestar social; esto deberá complementarse y concretarse en transformaciones que promuevan la democratización de la propiedad, de la distribución del ingreso, y de los procesos de toma de decisiones.

A pesar de sus logros, el sistema político costarricense tal y como hoy lo conocemos no es el más adecuado para llevar adelante este tipo de tareas. Es un sistema político que, al haber evolucionado en apoyo de nuestro desarrollo reciente, ha generado el tipo de instituciones y reglas del juego que a él corresponden; cualquier transformación significativa del estilo de desarrollo deberá sustentarse por tanto en una transformación igualmente significativa del sistema político y, en particular, del Estado. Se necesitan, pues, nuevas reglas del juego que respondan a los objetivos económicos, sociales y políticos de la transformación propuesta.

En los últimos años, la discusión sobre la adecuación del Estado costarricense a los retos que la crisis explicitó de manera brutal se ha limitado al falso problema de su "tamaño". En la perspectiva aquí planteada, por el contrario, el verdadero problema se refiere al carácter mismo del Estado: no se trata del problema "técnico" de descubrir cuál es el tamaño "óptimo" del Estado, sino del problema político de decidir qué tipo de Estado y de sistema político queremos.

El Estado que hoy conocemos no es sino el reflejo de las alianzas que han dominado la vida política costarricense durante las últimas décadas; esto incluye principalmente a los grupos agroexportadores, comerciantes e industriales, junto con sectores de las clases medias dentro de los que sobresale una fracción "estatizante". De hecho, muchos de los problemas de nuestro desarrollo reciente han sido resultado, precisamente, de las limitaciones que tal alianza le impuso: la débil representación de los grupos medios y la ausencia casi total de los grupos bajos, el carácter incipiente de los grupos estatizantes en contraposición con la fuerza de los sectores agroexportadores, comerciales e industriales, y el peso incuestionable del capital extranjero y los intereses foráneos en nuestro país, han marcado definitivamente las insuficiencias que son la base de la crisis que hoy vivimos. Sólo una alianza distinta pudo haber generado un proceso de desarrollo distinto.

Esto cobra importancia crucial en momentos como el actual, en que la crisis debilita las viejas alianzas y abre posibilidades para otras nuevas. En este contexto, la propuesta de "desmantelar" el aparato estatal para volver a seguir sin desviaciones los mandatos de la rentabilidad privada y el mercado sugiere el predominio de una alianza que privilegia la participación de los grupos exportadores y comerciales, así como la de los industriales más ligados a los mercados y capitales externos, y los nuevos grupos financieros. Esto a su vez estaría yendo en detrimento de la cuota de poder de los grupos medios y bajos.

Por el contrario, la racionalidad de alternativa que aquí se ha esbozado requeriría de un Estado que represente prioritariamente los intereses de los sectores mayoritarios de la población.

Creo que esta es la única salida que queda a los sectores progresistas de los grupos industriales y estatizantes para salvar el proyecto de desarrollo nacional que originalmente perseguían. Para ello, sin embargo, deben dar un serio paso político: deben reconocer cuáles fueron las alianzas que los limitaron en el pasado y que están abortando su proyecto en el presente, y cuáles son las alianzas que podrían darle nueva vida, enmarcándolo dentro de una estrategia global de desarrollo que, como dije, privilegie el bienestar social. En tal sentido, se impone un rompimiento con los grupos más conservadores para formar una nueva alianza en la cual los grupos medios y, en especial, los grupos pobres del campo y la ciudad jugarían un papel fundamental.

Las implicaciones que este tipo de alianza tendría para la institucionalidad costarricense son difíciles de exagerar. En particular, exigiría la articulación de la democracia representativa con la democracia participativa, lo que a su vez requeriría de sustanciales reformas estructurales e institucionales. Sólo así se garantizaría que la ampliación de las funciones del Estado fuera acompañada por la profundización de la democracia y la libertad.

Paradójicamente, mientras que en esta propuesta se conjugan un Estado más fuerte y el aumento de la libertad y la democracia como condiciones de un desarrollo dinámico y equitativo, en las propuestas conservadoras el debilitamiento y desmantelamiento del Estado amenaza no sólo con el estancamiento económico y la profundización de las desigualdades sociales, sino con un debilitamiento paralelo de nuestras instituciones democráticas.

Bibliografia

CEPAS, *Costa Rica: balance de situación,* CEPAS, varias fechas.

Céspedes, Víctor Hugo et. al., *Costa Rica, recuperación sin reactivación,* La Academia de Centroamérica, Costa Rica, 1985.

Fallas, Helio, *Crisis económica en Costa Rica,* Editorial Nueva Década, Costa Rica, 1982.

Garnier, Leonardo, "Industria, estado y desarrollo en Costa Rica", en: *Estudios Sociales Centroamericanos,* No. 37, CSUCA, Costa Rica, enero-abril 1984.

MIDEPLAN, *Evolución económica de Costa Rica,* 1985.

OFIPLAN, *Evolución socioeconómica de Costa Rica: 1950-1980,* EUNED, Costa Rica, 1982.

Rivera, Eugenio, *El Fondo Monetario Internacional y Costa Rica: 1978-1982,* DEI, Costa Rica, 1982.

Rovira, Jorge, *Estado y política económica en Costa Rica: 1948-1970,* Editorial Porvenir, Costa Rica, 1982.

Rovira, Jorge (ed.), *Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas,* EUNED, Costa Rica, 1983.

Rovira, Jorge y Trejos, Juan Diego, "El curso de la crisis de Costa Rica y las opciones de política económica en el segundo lustro de los años ochenta", en: *Avances de Investigación,* No. 53, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR, 1985.

Sojo, Ana, *Estado empresario y lucha política en Costa Rica,* EDUCA, Costa Rica, 1984.

Trejos, Juan Diego, "La distribución del ingreso de las familias costarricenses: algunas características en 1977", en: *Documentos de*

trabajo, No. 50, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, UCR, 1983.

Trejos, Juan Diego, "Costa Rica: crisis económica y política estatal: 1978-1984", en: *Occasional Papers Series*, Latin American and Caribbean Center, Florida International University, May 1985.

World Bank, *World Development Report*, 1979.

Costa Rica 1987: ¿Seguridad sin desarrollo o desarrollo para la seguridad?

José Luis Vega Carballo

I

Agradezco a los organizadores que me permitan plantear algunas ideas, aunque a lo mejor se salen un poco de la tangente o del tono imperante de la discusión centrada en torno a problemas internos.

Voy a hacer una serie de consideraciones, a manera de introducción, para centrar el problema desde un ángulo distinto y tratar esta coyuntura que atraviesa el país, *no* como una crisis interna de hegemonía o de vacío de poder en el sentido clásico de Gramsci o más contemporáneo de Poulantzas, sino, más bien, en un sentido más claro, directo, y de mayor urgencia de respuesta, como una *crisis de seguridad nacional* de nuevo tipo.

Es decir, en este momento, una crisis de seguridad nacional del "bloque de poder" en su conjunto y principalmente de las fracciones con más capacidad y con más recursos para reaccionar ante una definición de la situación que me parece sumamente importante que se tome en serio; porque se está traduciendo visiblemente en una serie de reacciones y de acciones muy concretas, de reordenamiento de ese bloque de poder y de exploración de alternativas o de cambios en el modelo de desarrollo e invisiblemente en otra cosa más peligrosa.

Obviamente que no somos magos ni nada por el estilo, para intentar predecir desde acá, con certeza, cuál es el rumbo que va a tomar el desenvolvimiento del país en los próximos años o décadas. Yo creo que de lo más que podemos nosotros hablar acá —y tal vez ahí sí voy a ser un poco weberiano—, es en términos de alternativas u opciones de cambio o de modelos de desarrollo, señalando las distintas fuerzas que se mueven alrededor de algunas de esas alternativas y la mayor o menor viabilidad que puedan tener sus impulsos en los actuales momentos. Al final de cuentas serán las correlaciones de las fuerzas sociales y de sus luchas, las que nos vayan indicando en qué sentido definitivo se nos va cerrando un poco la vía de la historia, sabiendo que ésta siempre tiene aperturas, a pesar de todo, hacia el futuro.

Voy pues a analizar la crisis de seguridad de Costa Rica "desde afuera", remontándome a unos cuantos años atrás y tratando de verla más bien desde el contexto internacional, para desde ahí elaborar "hacia adentro" algo sobre la actual situación y sus alternativas.

II

La caída de Somoza en 1979 coincidió con virajes en la política exterior de la Casa Blanca que anunciaban la presencia, en la Administración Carter, de elementos ya muy avanzados en mi concepto de elaboración y ejecución de políticas que luego se llevarían a su máxima expresión en la llamada "era de Reagan".

Los cauces de esta confrontación se fueron ampliando y ya para 1982, cuando se quebró el esquema de la supuesta seguridad solidaria Estados Unidos-Latinoamérica –recuerden ustedes la guerra de Las Malvinas, por ejemplo– se iniciaron los forcejeos alrededor del pago de la deuda externa y se empeoró aceleradamente la recesión económica de América Latina. Pero ya para esa época el caso de Nicaragua había sido elevado a posición prioritaria como *crisis estratégica* y como escenario de la lucha este-oeste, ubicado en el llamado "eje cubano-soviético"; como problema principal de la seguridad hemisférica a resolverse eventualmente con el estilo aplicado en Grenada –1983–; y como medio oportuno de demostrar y a la vez asegurarse, entre otras cosas, que no podía cuestionarse la hegemonía norteamericana en su Mediterráneo o traspatio, ni mucho menos en la llamada América Latina del Norte, que se supone está geopolíticamente atada al destino del *Sun Belt* norteamericano y de un posible eje Miami-San José.

El problema para los nuevos estrategas era cómo superar el doble síndrome del "otro Viet Nam" y la "otra Cuba" que intimidaba a la opinión pública norteamericana. Grenada fue un *test* positivo, pero insuficiente. Por lo tanto, era preciso ir sindicando al régimen sandinista a todo trance como un peligro absoluto, pero *reversible*, a la seguridad global y hemisférica de las democracias occidentales –del tipo costarricense, por ejemplo– y como el peor enemigo inmediato e incuestionable de la estabilidad democrática, tanto en Costa Rica, como de la supuesta o fabricada "estabilidad democrática" de una cadena de represivos e ilegítimos *Garrison States* centroamericanos, que debían por la vía de elecciones montadas al estilo norteamericano, vestirse de nuevo con ropajes semejantes a los de la cándida Suiza centroamericana, para ser trasladados así al mismo plano de ésta y alinearlos en contra de los comandantes nicas.

En medio de esta definición de una crisis estatégica que debía venderse en la propaganda como producto creíble, se iría provocando una polarización exterior entre el régimen "sandino-cubano", el resto de los pueblos del área y de ser posible del hemisferio, tendiente a

reafirmar el espíritu y ojalá la misma letra de la doctrina Monroe. Entorpecida por el Grupo de Contadora, por la incredulidad de los aliados europeos, y principalmente, de la propia opinión pública norteamericana, esta funesta estrategia por lo demás harto simplista, se ha visto envuelta en crecientes dificultades. Recientemente ha mostrado sucesivas entradas en barrena y fracasos notables, especialmente en cuanto al manejo de los "contras" y del esquema militarista, como opciones ideales para suavizar al régimen de Managua, el cual aparentemente se ha endurecido más, no ha alcanzado su democratización ni dado mucha tranquilidad a los vecinos gobiernos, los cuales están sintiéndose cada vez más inseguros.

La idea central de esta estrategia geopolítica era ubicar, por todos los medios posibles, al caso sandinista bajo las mismas ecuaciones y ópticas que el caso cubano; pero los halcones del Norte no se percataron de ciertas diferencias en la situación histórica de los dos casos y que limitan ahora extremadamente el alcance y la efectividad de la administración norteamericana para lograr ese y otros objetivos estratégicos.

III

Igualmente, para Costa Rica, su coyuntura tanto interna como externa era distinta, a cuando se estaba formando el Frente Sandinista en los años 1960 y, luego, de 1979 para acá. Al estar ahora su estabilidad y posibilidades de retomar la vía del desarrollo en condiciones muy críticas, lo mismo que su seguridad exterior. De ahí el problema de la *ruptura*, o discontinuidad histórica, que hace que estemos en una situación bastante diferente. La inseguridad no existía tanto a principios de la década del 60 –repito– cuando se inició y sostuvo un largo ciclo de auge en Costa Rica y no había tanta turbulencia que tocara peligrosamente sus fronteras, pusiera en jaque su modelo de desarrollo, y espantara a su bloque de poder. En aquel entonces no se planteaba para el país la disyuntiva de "seguridad sin desarrollo" o "desarrollo para la seguridad". Pero hoy día ¿en qué consiste el "dilema costarricense", visto a la luz de las tendencias mundiales y regionales, así como de algunas opciones que se podrían abrir hacia el año 2000 para el bloque de poder?

Diría lo siguiente: para los halcones de la Casa Blanca y para el partido pro-norteamericano que se mueve en San José y controla casi todos los medios de difusión, el problema de la seguridad es un problema de *debilidad*. Es muy importante tomar esto en consideración, puesto que ante la debilidad hay que buscar la fuerza como elemento contrastante. ¿Por qué? Porque al igual que se hace con respecto a otras democracias occidentales y neocapitalistas, la costarricense se supone intrínsecamente débil, o por lo menos incapaz de generar fuerza o voluntad de poder y defensa, en un triple sentido.

En primer lugar, tal como lo diagnosticó Samuel Huntington, un estratega y politólogo norteamericano, para los casos del Sistema Trilateral, se piensa que Costa Rica padece sobre todo a raíz de la "estanflación" de esta década, de ciertos síntomas de *ingobernabilidad,* o sea, de dificultades también mostradas por otras democracias neocapitalistas para controlar el ascenso de las expectativas sociales en medio de profundas deficiencias de los mecanismos de acumulación de capital y participación política, y esto a pesar de la periodicidad de las elecciones y del manejo reformista de las oportunidades económicas reales.

En segundo lugar, para peores males se define como una democracia *desarmada* y *desprotegida* que renunció a militarizar el Estado y sus alianzas exteriores, lo que la hace excesivamente vulnerable o cobarde, ante la subversión de cualquier índole que sea. Ya esto lo enrostraba Jeanne Kirkpatrick cuando estuvo acá a principios de la administración Monge.

En tercer lugar, a pesar de todo ello y para rematar se le percibe ambigua y huidiza, en cuanto a que no se cobija cómodamente bajo el manto de CONDECA (Consejo de Defensa Centroamericano) y los pactos derivados del Tratado de Río, los que además difícilmente podrían ser invocados hoy día en el seno de la OEA después de la experiencia de las Malvinas y Grenada, y los avances del pacifismo explícito en la doctrina Monge de la neutralidad frente a conflictos bélicos.

Las clases políticas y económicamente dominantes del país definen de ese modo –aunque con algunas variantes poco significativas– la crisis de *su* seguridad externa y la confunden inmediatamente con la de la sociedad como un todo. Los esfuerzos por instaurar la doctrina de la neutralidad en la política exterior no han modificado, sino más bien acentuado en sus contornos defensivos y agresivos, esta percepción, ni algunos corolarios que se deducen de ella como los siguientes.

Primero, los defensores de la tesis del extremo "peligro externo" insisten en que se deben reforzar a toda costa las alianzas protectoras externas por la vía de obtener ayuda para montar, o mejorar el montaje de, ciertos mecanismos militar-policiales de seguridad, lo cual no se puede lograr fácilmente en un contexto de coexistencia y distensión con Nicaragua, Cuba o el Bloque Socialista. Sino que proponen un alineamiento muy fuerte con el sistema global de confrontación y seguridad de la llamada "Alianza Occidental" y en especial con las operaciones de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado y las fuerzas neo-conservadoras que por el momento dominan en la escena política regional y costarricense. Las mismas que están totalmente convencidas de que para sostener, cultivar y profundizar esta alianza protectora, debe darse prioridad en el diseño e implementación de la política económica y fiscal a la negociación, buen comportamiento y disciplina en el pago de la deuda externa, por sobre los de cualquier otra política orientada a reactivar y desarrollar la economía con miras a

movilizar los recursos propios para satisfacer las necesidades básicas y el bienestar de la población tal como en gran medida se hizo a través del modelo desarrollista, populista y democrático desde los años 50. En vez de seguir por esa ruta, lo que afirman es que procede reinsertar o "diluir" el país en las corrientes del neo-capitalismo, mercantilista y darwiniano, inyectándolo hasta los tuétanos con las políticas neoliberales de los organismos internacionales. Se buscaría así salvar supuestamente los intereses del capital nacional y extranjero entronizados en el país, dejando para después (o para cuando se pueda), los planteamientos desarrollistas, a los que se supone trasnochados, superados, agotados, etc., y ojalá, de paso, olvidándose de cualquier nacionalismo o autonomía en el plano de la política económica o en la toma de decisiones globales. Es decir, dar prioridad a la estabilización por sobre la reactivación, a la dependencia contra el desarrollo autogenerado, autosostenido e integrado tanto verticalmente como en escala regional o latinoamericana.

La prioridad sería pues, incrementar las exportaciones para generar divisas, pagar la deuda externa y reciclar el capital. Lo demás si acaso vendrá luego, por los "efectos de derrame", de la compasión o la caridad.

Tercero, nada importa que los costos mayores de la crisis y las políticas financieras de *shock* se descarguen sobre los bolsillos de los consumidores y contribuyentes de ingresos medios y bajos. Han aguantado esta política bastante bien y sus opiáceos sistemas de creencias y valores favorables al mantenimiento del orden establecido son sólidos y confiables; por lo cual se piensa que apoyarán la represión de cualquier minoría "desestabilizadora" que intente provocar un estallido social o promover un reto político o militar. Las campañas imperiales contra el terrorismo y el narcotráfico ayudarán por su lado a justificar cualquir limpieza o esterilización de fuerzas o de organizaciones antisistema. Lo mismo puede hacer, de manera suave y sutil, la guerra psicológica pro-sistema y pro-alianza atlántica que libran, en plan de prolongados refuerzos, muchos medios de difusión locales, en una especie de "guerra santa" ideológica que raya a diario con el terrorismo ideológico en favor del *Establishment.*

Tal es el esquema que en mi criterio sigue en lo básico y esencial, la actual política de seguridad sin desarrollo, sin debate, sin cuestionamiento y sin verdadera democracia participativa.

Es la sombría y oportuna paz de los espíritus y también de los estómagos acomodados.

Nadie piensa que bien podría ser también la incómoda antesala de la paz de los cementerios. En todo caso, debería por lo menos comprenderse como un intento desesperado de llegar a tener una *paz blindada.*

IV

Ahora bien, ¿hay opciones ante esta visión conservadora, aterrorizante y oportunista de la seguridad interna y externa del país, opciones que no nos lleven de cabeza a otro bloqueo o camisa de fuerza en favor de una gran potencia? Mi impresión es que sí las hay.

Primero que todo, debe aceptarse la conclusión de que la visión catastrofista se aparta radicalmente de la estrategia histórica de larga duración, que perseguía por medio de la hegemonía, el consenso y una básica armonización de intereses de clases, lograr en el medio nacional cierta estabilidad interna y por esa vía seguridad exterior, compatible todo ello con objetivos socio-económicos de bienestar general y progreso popular, alcanzables en un clima de tolerancia ideológica, apertura política y defensa de la soberanía.

La posición conservadora es militante, guerrerista, elitista, recalcitrante y polarizante, a la vez que impide o dificulta llegar a esos *acuerdos básicos* sobre los cuales se montaron sucesivamente en el pasado el Pacto de Concordia en 1821, la Constitución de 1871, y en gran medida la Segunda República, con su Constitución de 1949 y su Estado Democrático-Benefactor.

La mencionada posición, luce, por ello, como de ruptura y confrontación al tiempo que sacrifica tradiciones, logros y factores de índole interna ante condiciones de índole externa y coyuntural de dudosa veracidad, objetividad y compatibilidad con el interés nacional. Afirma y trasluce a la par de una ficticia imagen de voluntad nacional, una voluntad imperial. Anuncia una pérdida de soberanía, no necesariamente clara todavía en el plano territorial, pero sí en el institucional, donde se toman las decisiones cruciales para el futuro del país. Arrogantemente, impulsa políticas económicas o sociales orientadas a reducir o desmantelar el Estado y así desproteger más fácilmente para expoliar también más fácilmente a las clases populares, medias y empresariales vinculadas al mercado interno y a las tradiciones nacionales, incorporando a la vez esquemas darwinianos y oligarquizantes de privatización a cualquier costo y por cualquier vía.

Los pro-Cónsules herodianos ubicados en la tecno-burocracia pública y privada, que están de acuerdo con esa visión y esa política, divulgan por su parte con gran despliegue de imágenes y cifras incompletas, unilaterales e impresionistas —como las que surgen del Banco Central o el Ministerio de Hacienda—, que esto es lo único pensable y esa es la única ruta hacia la cual se nos abre el paraíso, o el auténtico "camino del futuro" por el cual debe ir "adelante Costa Rica".

V

¿Pero hay en verdad alternativas –nos preguntamos– ante este emergente estilo de desarrollo tan apartado de casi todo aquello que en materia de desarrollo social, democracia, paz y cultura, habíamos acordado los costarricenses, a través de una serie de difíciles y sucesivos pactos histórico-sociales?

A mi manera de ver, aunque el proyecto que se persigue instalar para conducir y justificar el cambio de estilo en el desarrollo nacional se presenta con tonos absolutistas, autoritarios e insolentes, por doquier carece de flexibilidad y viabilidad, y le sucede eso por múltiples flancos. Más que por lo que sus propulsores aseveran que desean alcanzar con su consabido tono idealista y propagandístico, por aquello *contra* lo cual choca en la realidad nacional y en la movediza arena internacional, en la cual ya muchos de estos planteamientos se hayan en retroceso o pleno derrumbe.

Como también se trata de buscar algunas otras alternativas hacia el final de este seminario, de inmediato propongo algunas *alternativas* viables, porque como ustedes ven no me he ubicado en el plano de un análisis económico ni estrictamente sociológico, sino más bien en un polémico plano del análisis crítico, estratégico o de abierto planteamiento político-ideológico; porque es ahí, en ese campo, donde está el reto y el peligro. No está en la discusión de esquemas abstractos sobre la bondad o malignidad de la política económica, o de la política social, sea o no de "apaga-incendios" de la actual administración. Está fundamentalmente, en el campo político-ideológico y estratégico en donde el examen y la exploración práctica de alternativas viables, se hace un imperativo, un deber y un acto de responsabilidad para con las próximas generaciones.

Entonces, yo me permito proponer, de rebote, un sistema de acción histórica y política que se proyecte como alternativa desde bases como las siguientes– y las pongo a manera de ejemplos y no para cerrar el debate.

Primero: defensa de las tesis de que el desarrollo económico al servicio de la democracia, la libertad, el bienestar y la igualdad social ha sido la piedra angular de nuestra fortaleza política interior y de nuestra seguridad exterior y no así la militarización, el ejército ni la manipulación de los esquemas centralizadores, concentradores y monopolizadores de poder del elitismo opulento, incluyendo el neo-elitismo que proponen ciertos exponentes de la meritocracia criolla. Así, como no aceptamos en el pasado la aristocratización de la oligarquía agroexportadora, no vamos a aceptar ahora, la aristocratización de una voraz oligarquía neoexportadora y financiera, mucho menos una eventual tiranización o imposición anti-democrática de su parte.

Segundo: reafirmación de la política de neutralidad y paz, autodeterminación y no-intervención como eje de una política exterior amplia, autónoma, no-alineada, multipolar, centrada en un claro reconocimiento y consenso alrededor de intereses nacionales y latinoamericanos, mayoritarios y democráticos. Rechazar, por esa razón, las opciones diplo-militares que nos quieren subordinar a experimentos y aventuras confrontacionistas que promueven la Tercera Guerra Mundial en los ejes Norte-Sur, Este-Oeste, para adoptar una posición más realista que reconozca la diversidad de cambios y condiciones que imperan en el mundo de hoy, especialmente en Latinoamérica. Esto exige, por ejemplo, una serie de arreglos negociados, internos y externos para garantizar la seguridad fronteriza, si fuera necesario; así como para asegurar la soberanía institucional de los centros nacionales de decisiones y gobierno, replanteando las tácticas de la deuda externa y la orientación de la política económica para que se diseñe e implemente en función de necesidades nacionales, regionales y latinoamericanas de desarrollo integral, con paz, bienestar y democracia para todos.

Tercero: no debe menospreciarse la importancia de que seamos los costarricenses –y en América Latina los propios latinoamericanos– quienes asumamos directamente la defensa y actualización de nuestras instituciones políticas y estructuras constitucionales, así como el desarrollo de sistemas descentralizados y supervisados de seguridad nacional acordes con nuestras tradiciones y planes de desarrollo, que privilegien el Estado de Derecho y sus mecanismos de Administración de Justicia. A la par de la neutralidad y para sostenerla, debemos demostrar a las grandes y pequeñas potencias, allende nuestras fronteras, que sabemos vivir y prosperar en paz y civilizadamente; y que además queremos hacerlo sin necesidad de gendarmes ni asesores militares, ni ejército, sabiendo que podemos protegernos con un aparato propio de seguridad, altamente profesionalizado, efectivo y ante todo legalmente controlado por los órganos de la administración de Justicia costarricense. Pienso en un aparato diversificado, abierto a la inspección y a la colaboración directa de la ciudadanía, y adaptado perfectamente a nuestra idiosincracia y a la satisfacción de las necesidades generales de protección de la población civil y no a las necesidades particulares de explotación o represión de minorías opulentas, egoístas y extranjerizantes. Esto significa un verdadero aparato institucional, éticamente cimentado, civilista y nacional para la seguridad de todos los costarricenses y la defensa de la neutralidad tanto en el plano nacional como latinoamericano.

Cuarto: debe existir un compromiso con la innovación y renovación de las instituciones en el campo de la política, la producción, la educación, la información, la ciencia, la tecnología, etc., para diseñar en esos ámbitos las mejores fórmulas para nuestro propio desarrollo, y superar rigideces e ineficiencias. Urge impedir que se fabriquen y se impongan desde afuera, o desde un Estado autoritario y burocrático

ajeno al sentir de la sociedad civil, las formas y métodos de cualquier nuevo estilo de desarrollo distinto al que aspiramos los costarricenses de mentalidad democrática y pluralista.

En esos cuatro puntos básicos, podría estribar lo que considero una alternativa de *desarrollo para la seguridad*, frente a la opción de *seguridad sin desarrollo* que esgrimen los estrategas conservadores de la nueva dependencia y los promotores de los escenarios de la Tercera Guerra Mundial.

La crisis, el estado y los sectores populares

*Elisa Donato M.**

Las condiciones de vida de los sectores populares

La fuerte crisis económica que se inició en la presente década tuvo importantes repercusiones en las condiciones materiales de vida de los sectores populares. Seis años más tarde y a pesar de la recuperación de los salarios mínimos y la disminución de la tasa del desempleo abierto, el nivel de vida de amplios sectores de la población continúa seriamente deteriorado.

En efecto, si bien el salario mínimo superó el de 1979, ello no asegura una remuneración que permita cubrir las necesidades básicas de los grupos de menores ingresos, ya que el salario mínimo fijado en 1986 cubría únicamente el setenta y dos por ciento del monto de la canasta básica salarial. Este problema adquiere alcances aún mayores si tomamos en cuenta que en julio de 1985 121.921 trabajadores (el catorce por ciento de la fuerza de trabajo del país) devengaban un salario inferior al mínimo vigente. Si a esto agregamos las 60.758 personas que para esa fecha se encontraban desocupadas, un total de 182.679 trabajadores no lograban obtener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia material. Este contingente de trabajadores remunerados por debajo del mínimo legal en unos casos, o desprovistos de ingresos en otros, formaba el 21% del total de la fuerza de trabajo del país.

En 1986 existían 94.639 precaristas (dieciocho por ciento de la PEA rural) en la zona rural, los cuales por su misma condición de precaristas, carecían de ingresos fijos y servicios básicos, es decir, vivían en una situación sumamente inestable. Precisamente, es en el área rural donde se concentra el sesenta y cuatro por ciento de la pobreza del país.[1]

* Este trabajo es el resultado de una reflexión colectiva con los compañeros Sandra Cartín, Hannia Franceschi y José Manuel Valverde, del Equipo de Movimientos Populares del CEPAS.

1. María Laura Elizalde y Juan Diego Trejos, "Costa Rica: la distribución del ingreso y el acceso a los programas de carácter social", *Documentos de Trabajo*, IICE No. 90, San José, noviembre 1983.

Al deterioro de las condiciones materiales de vida, experimentado como consecuencia de la crisis, se suma la disminución del aporte del Estado al salario social, como resultado de las políticas adoptadas por aquel para enfrentar la crisis. Durante la penúltima década, los programas sociales constituyeron un aporte significativo al ingreso monetario familiar y ascendieron en 1980 al treinta y dos por ciento de este.[2] Esta situación se invirtió a partir de 1981, con la disminución del rubro de gastos sociales en el presupuesto estatal. Si bien no es posible afirmar que se haya dado un desmantelamiento total de los programas sociales, la reducción del presupuesto asignado a estos ha ocasionado un serio deterioro de la calidad de los servicios prestados. Esta es la situación de los servicios de salud y educación.

En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, las autoridades de la institución pusieron en práctica en 1982 un plan de estabilización financiera, enmarcado en los convenios que se estaban negociando con el FMI y el BIRF. La disminución de los gastos de operación tuvo un alto costo social, por el deterioro que significó de la calidad de los servicios brindados.[3]

La proporción del presupuesto dedicado a vivienda se mantuvo baja hasta 1984 (2,6%), lo que explica la acumulación de problemas en este sector: en 1985 el déficit de vivienda alcanzaba las 275.912 casas. Con la nueva administración, los recursos asignados a proyectos de vivienda se incrementaron sustancialmente; sin embargo, la forma de su obtención acarreó serios problemas, puesto que se desfinanciaron otros programas. La ley del sistema financiero nacional para la vivienda, aprobada en noviembre de 1986, asigna el treinta y tres por ciento del presupuesto de Asignaciones Familiares al programa de construcción de vivienda, lo que significa una reducción sustancial de los fondos destinados a los comedores escolares, y a los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI).

La respuesta a la crisis y la relación del Estado con los sectores populares

La vía impuesta por los organismos financieros internacionales, y finalmente aceptada por Costa Rica, para la estabilización y la reactivación de la economía, ha significado, entre otras cosas, una fuerte reducción de las políticas sociales. Se ve con ello diezmada la capacidad redistributiva del Estado, que, en períodos anteriores, había desempeñado una importante función en la consolidación del régimen social

2. Juan Diego Trejos, "Las políticas de distribución y redistribución del ingreso en Costa Rica en la década de los años setenta", *Serie divulgación económica*, IICE No. 24, San José, junio 1983.
3. Ludwig Güendell, "Crisis financiera y reestructuración de la CCSS", *Tribuna Económica*, No. 9, año 4, San José, setiembre-octubre 1986.

imperante. En efecto, las presiones por la eliminación de los subsidios, el recorte del presupuesto de los programas sociales y la disminución del empleo estatal, aunados a la determinación de reducir el costo de la fuerza de trabajo, introducen importantes limitaciones materiales que afectan la relación entre el Estado y los sectores populares. Aquel enfrenta así el dilema de garantizar las condiciones de recuperación económica según los lineamientos acordados y mantener simultáneamente la estabilidad social. Es dentro de estas coordenadas que la administración Arias parece haber adoptado la vía de la redefinición consensual de sus relaciones con los sectores populares. Con ello estaría buscando un doble propósito: por un lado, extender y consolidar sus bases sociales de apoyo, y, por el otro, garantizarse, por medio de concesiones parciales, una especie de tregua que le permita llevar a cabo sin tropiezos su programa económico.

Esa redefinición se evidencia en la relación actual de la administración con las organizaciones populares, con algunas de las cuales implícitamente ha venido desarrollando una política de concertación social. En efecto, a cambio de concesiones materiales parciales, el gobierno ha logrado comprometer el "buen comportamiento" y la disminución de la presión ejercida por las organizaciones populares en puntos álgidos.

Estas propuestas gubernamentales han sido impulsadas con un discurso político legitimador, que trata de justificar la parcialidad de sus respuestas mediante una supuesta determinación ejercida por el contexto de crisis y las presiones internacionales que enfrenta el país. De esta manera, se ha logrado la legitimación de un Estado con una disminuida capacidad de respuesta material a las demandas de la población y se ha llevado así a importantes sectores de las organizaciones populares a aceptar como válidas las propuestas de solución de los problemas sociales esbozadas por el gobierno. Constituyen ejemplos claros de esta situación los acuerdos alcanzados con los frentes de lucha por vivienda y los resultados de la negociación salarial del segundo semestre de 1986 entre el gobierno y los empleados del sector público. En las postrimerías de las elecciones presidenciales, algunas de las organizaciones que luchan por vivienda –el Frente Costarricense de la Vivienda, el Comité Patriótico Nacional (COPAN) y el Frente Democrático de la Vivienda– suscribieron un pacto en el que se comprometían a no realizar ni promover invasiones de tierra: aceptaban en ese sentido las definiciones gubernamentales sobre el problema de la vivienda y su solución. Los frentes se convirtieron en una especie de intermediarios burocráticos entre las organizaciones de base y las instituciones estatales encargadas de atender el problema, lo que representó la aceptación y la legitimación de soluciones que difícilmente podrían satisfacer las demandas de la población afectada y que habrían sido rechazadas por insuficientes en períodos anteriores. Este hecho significó el inicio de un período de desmovilización de las organizaciones de vivienda y un proceso de institucionalización de sus demandas.

Con respecto a la negociación salarial en el sector público, a pesar de las fuertes discrepancias iniciales entre el monto del aumento salarial demandado por el Consejo Permanente de los Trabajadores y el ofrecido por el gobierno, finalmente este llegó a un acuerdo con un sector de las confederaciones que integran el Consejo, a pesar de la oposición de la CTCR, la CUT y APSE. Este convenio establece para el sector público una política salarial que mantendrá constantes los salarios promedio durante lo que resta del cuatrienio, lo cual significa detener cualquier recuperación de su nivel real y mantener un salario ya de por sí bastante deteriorado en relación con los niveles de la década anterior. Esta negociación garantiza al gobierno la estabilidad en uno de los puntos claves de su negociación con los sindicatos del sector público: los salarios.

En este mismo proceso de readecuación de sus relaciones con los sectores populares la administración Arias ha adoptado otras vías que, más que a la atenuación de conflictos específicos, parecen apuntar a la "pretensión de organizar las masas desde arriba, sentando las bases para un acuerdo fundamental".[4]

Es este el caso de la política seguida con las asociaciones de desarrollo comunal, y el impulso reciente a la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal. Al respecto, cabe señalar que con organismos como DINADECO el gobierno actual ha impulsado la revitalización de este tipo de organizaciones comunales. Lo anterior se ha llevado a cabo mediante el fortalecimiento de la asesoría técnica, financiera y jurídica que requieren para su incorporación activa en los programas sociales claves de la administración Arias: vivienda, empleo y participación de la mujer en la producción.

Paralelamente, el gobierno ha estimulado la constitución de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, un organismo de cobertura nacional con atribuciones para administrar y canalizar recursos para el funcionamiento de proyectos comunales, coherentes con los planes nacionales de desarrollo. Además, tendrá la potestad de nombrar los representantes del sector comunal ante una amplia gama de instituciones. La gran injerencia gubernamental y el acelerado proceso de constitución de la Confederación hacen pensar en que la institucionalización y el control orgánico del movimiento comunal es un componente básico de la estrategia gubernamental.

Como expresamos en un inicio, si bien la tónica sobresaliente del gobierno actual ha girado alrededor de una redefinición consensual de sus relaciones con los sectores populares, esta no ha prevalecido en todos los casos. La relación del gobierno con los campesinos sin tierra y

4. Ana Sojo, "La democracia política y la democracial: una visión desde Costa Rica", *Revista de Ciencias Sociales,* Universidad de Costa Rica, No. 31, San José, marzo 1983.

los pequeños productores, ha sido mucho más tirante, y se ha manifestado a menudo en enfrentamientos abiertos y la represión. El proceso de negociación del gobierno con las organizaciones de pequeños productores se inició con posterioridad a la marcha de protesta de campesinos ante el Banco Central. En este sector, las intenciones conciliadoras no han cristalizado: el gobierno no ha logrado satisfacer a cabalidad sus demandas y el programa que propuso para la solución de estos problemas todavía no ha sido financiado.

El camino escogido para la reactivación económica del país ha significado, en lo que se refiere al carácter del Estado, la introducción de modificaciones importantes que han incidido en su relación con los sectores populares. Como consecuencia de esto, se han adoptado medidas que lesionan el futuro de estos sectores. Sin embargo, ante esta situación, las organizaciones populares no han logrado generar una respuesta que impugne los fundamentos políticos que subyacen en las nuevas políticas gubernamentales.

En lo que se refiere a las medidas de privatización de los servicios públicos, la disminución del presupuesto de programas sociales y la reducción del empleo, algunos sectores de trabajadores del Estado y sus organizaciones, han externado su protesta y llevado a cabo medidas de presión. Sin embargo, las demandas se han presentado en forma aislada y esporádica, y en muchos casos, han tenido un carácter fundamentalmente corporativo. En esta dirección se inscriben: las denuncias del Sindicato de Profesionales de Ciencias Médicas (SIPROSIMECA) sobre el efecto de las restricciones presupuestarias en la calidad de los servicios prestados por la CCSS, en las condiciones de trabajo y las relaciones obrero-patronales de la institución; la oposición del Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional de Producción a la privatización de la Fábrica Nacional de Licores y a los despidos programados en los planes de transformación de dicha entidad; la protesta de los trabajadores de Asignaciones Familiares por la reducción del treinta y tres por ciento del presupuesto de esta institución; las medidas de presión ejercidas por el Comité de Defensa del Ferrocarril, constituido por organizaciones de diverso tipo, para evitar el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y otros casos más.

La reacción del movimiento popular ha tenido un carácter defensivo y limitado. La inconformidad y la protesta han surgido como oposición a los efectos inmediatos de medidas muy concretas sobre sectores sociales particulares, sin que se hayan formulado respuestas o planteamientos que cuestionen las nuevas políticas en su conjunto y cohesionen a los diferentes sectores.

El predominio de intereses dispares en el seno del movimiento popular imposibilitan formas de articulación sólidas y consistentes que concreten alternativas globales y formas de acción comunes. La forma-

ción de instancias unitarias como el Consejo Permanente de los Trabajadores, si bien constituyen un avance, no garantizan la consolidación de un frente común. En estas condiciones, las soluciones de tipo corporativista y los procesos de cooptación encuentran terreno fértil para imponerse. El problema se acentúa por el impulso de políticas privadas a soluciones que, como el solidarismo, apuntan en el mismo sentido.

Además de la dificultad para formular alternativas, el movimiento popular enfrenta serios obstáculos para desarrollar y defender en la práctica sus propuestas. La capacidad de convocatoria y movilización continúa siendo muy escasa. Esta debilidad es, en gran medida y en el nivel de lo general, la expresión de la situación interna del grueso de las organizaciones populares: estas subsisten más bien como estructuras sostenidas por la permanencia de alguno de sus miembros que como organismos efectivos de participación popular.

Perspectivas y tareas

Hemos esbozado aquí lo que consideramos es la tendencia predominante en la relación entre el Estado y las organizaciones populares en el período reciente. Sin embargo, creemos importante reiterar que, tanto esta como la situación de las organizaciones populares, adquieren matices diferentes que es necesario contemplar para evaluar adecuadamente las perspectivas del movimiento popular.

Los problemas y las debilidades que enfrenta el movimiento popular no parecen ser un secreto. La reflexión sobre esta problemática ha generado en algunos sectores la preocupación por desarrollar organizaciones que tiendan a su superación. Se inscribe en esta perspectiva un grupo importante de organizaciones campesinas que han venido impulsando la participación real de sus afiliados y defendido la autonomía de sus organizaciones. Gracias a la presión y la movilización de sus miembros, han logrado impugnar algunas de las medidas del gobierno en el campo agrícola.

En el seno del movimiento comunal y sindical existen también, aunque con un desarrollo irregular, experiencias que impulsan el desenvolvimiento de organizaciones de nuevo cuño.

No obstante y en términos generales, las perspectivas de desarrollo del movimiento popular a corto plazo son poco halagüeñas. A pesar de los años de crisis y el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, el movimiento popular no ha logrado constituirse como sujeto político, con participación real en la institucionalidad vigente y por ahora, esta situación no parece modificarse. Por el contrario, la escasa independencia ideológica y organizativa de aquel respecto de los partidos políticos tradicionales y los lineamientos gubernamentales, le restan identidad propia, restringen sus horizontes y lo hacen propenso a plegarse a los planteamientos de otros grupos sociales. En estas

condiciones, las probabilidades de que el movimiento popular se convierta en un agente de transformación societal son todavía lejanas.

Ante esta situación la disyuntiva no consiste, sin embargo, en cruzarse de brazos. Por el contrario, las tareas que enfrenta el movimiento popular son múltiples y urgentes. En primer lugar, debe salir de la situación defensiva e inmediatista en que se encuentra, para enfrentar, en términos globales y políticos, la dinámica que intereses ajenos a los de los sectores populares están imponiendo a la sociedad y al Estado costarricense. En este sentido, parece indispensable la constitución de frentes que aglutinen los intereses de los diversos sectores en torno de la formulación y defensa de propuestas alternativas. La dispersión y la total sectorialización de las luchas, el rompimiento de los acuerdos y la pugna por intereses particulares, poco favorecen el desarrollo y la consolidación de un movimiento popular que ocupe un lugar relevante en el escenario político nacional. Estas tareas tienen como requisito el fortalecimiento de la autonomía y la consolidación interna de las organizaciones populares. Sólo así parece posible que el movimiento popular pase de la posición de retaguardia en que se ha movido a la conducción frontal de las luchas por el mejoramiento en las condiciones de vida material y espiritual de los sectores populares.

Crisis y reorganizacion del Estado costarricense: reconstitucion o destruccion del Estado social

Ludwig Güendell

La crisis económica y las políticas de estabilización que han sido aplicadas en los últimos seis años, sobre todo en el período presidencial de Luis A. Monge han provocado importantes modificaciones en el Estado costarricense, tanto en lo referente a la gestión de la economía, como en el tratamiento del conflicto social.

Lógicamente ello ha implicado que las políticas sociales o aparato de bienestar hayan sido el centro de las políticas y propuestas de reestructuración que se han aplicado durante los gobiernos que han abarcado tal período. Más aún: es posible arriesgar la afirmación de que en algunas de las instituciones de Bienestar Social y Políticas o Regulaciones Laborales (política de salarios, políticas de precios de la canasta de reproducción, políticas hacia las organizaciones corporativas de los trabajadores) es donde se ha logrado con mayor éxito imponer dichas medidas correctivas.

El impacto de la crisis económica

La crisis económica, ha tenido un efecto contradictorio, por un lado detuvo el crecimiento o expansión que venían sufriendo las políticas sociales y, en general, el Estado Social en los últimos treinta años, principalmente en la década de los setenta, y por otro lado, al deteriorar las condiciones de vida de amplias capas de la población trabajadora, ha profundizado los procesos de tematización de "lo social", lo que ha obligado al Estado a intervenir con mucho más frecuencia en búsqueda del mantenimiento de la lealtad o reconocimiento de las masas. Pero además, y esto es de central importancia para comprender el sentido de las propuestas de normalización económica y social que van a postularse en dicho período, le otorgó viabilidad a la crítica que venían planteando amplios sectores de nuestra clase dominante, la cual argumentaba, resumidamente, que el Estado Benefactor había llegado ya a su límite

estructural, y, por consiguiente, que la tendencia de incrementar el gasto estatal orientado a "la cuestión social" que venía presentándose atentaba contra la rentabilidad del capital. Dicha crítica la realizaban tanto los sectores de esta clase social que tradicionalmente se habían opuesto a la ampliación del Estado como la burguesía industrial cuya producción se encontraba asociada al Mercado Común Centroamericano.

Hay que recordar, en este sentido, que la ampliación de las políticas sociales que se presentó en los años setenta, fundamentalmente con la aprobación de la universalización de los Seguros Sociales y del Fondo de Asignación Familiar –que tuvo un carácter estratégico en la medida que le permitió insuflar renovados recursos al resto de instituciones y políticas de bienestar social y, por tanto, mantener y ampliar una serie de servicios que venían a satisfacer las crecientes demandas que planteaban las comunidades, con lo cual posibilitó ensanchar el ámbito político al Partido Liberación Nacional y consolidar su relación con las masas– no sólo fue de las acciones estatales más cuestionadas por parte de amplios sectores de la burguesía costarricense sino que incluso constituyeron una de las principales razones para que se presentaran importantes fisuras en el bloque hegemónico de poder. Concretamente se presentó una profunda ruptura entre la burguesía industrial que se había desarrollado a la sombra del Mercomún y que mantenía fuertes lazos con el capital transnacional y sectores de la burguesía y pequeños y medianos empresarios asociados al mercado nacional y a la expansión de las actividades estatales, junto a sectores políticos y sindicales de ideología socialdemócrata.

¿En qué sentido es que adquiere viabilidad política la crítica del Estado Benefactor? En este período se presentarán serios desajustes financieros en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el IMAS, las universidades, etc., provocados por la extensión de los servicios y por desórdenes administrativos –política del derroche– ocasionados a raíz de la misma irracionalidad que adquiere la gestión pública. Irracionalidad que puede explicarse por la "politización" de que han sido objeto estas instituciones en virtud de la generación de clientelismos políticos y la profundización de las luchas intra e interpartidaria que se presentará a causa de la intensificación del conflicto en el seno del bloque en el poder, la ampliación del ámbito político del Partido Liberación Nacional y el aumento de los reclamos de los sectores populares. En este sentido la crisis podría caracterizarse esencialmente como una crisis de racionalidad provocada por el desplazamiento del conflicto hacia el sistema político.

Estos desequilibrios no van a poder ser resueltos sólo por medio de ajustes actuariales ni de la búsqueda de otras fuentes de financiamiento como ocurría en el pasado, toda vez que el Estado enfrentaba ya un serio déficit fiscal y, principalmente, dificultades para obtener recursos sin que ello provocara la fuerte oposición del sector empresarial. Hecho

que todos sabemos se ha visto agravado con iguales dificultades para obtener fondos del ahorro externo, las cuales fueron cruciales para financiar la expansión de la política social.

Quizás el ejemplo más representativo de lo anterior se encuentra en la Caja Costarricense de Seguro Social, Institución que constituye, sin lugar a dudas, el bastión más importante de la política social costarricense. Esta hacia finales de los años setenta comienza a sufrir un serio déficit en sus finanzas a raíz de, en primer término, la deuda que venía acumulando el Estado y, en segundo término la universalización de los Seguros Sociales que la obliga a hacerse cargo de todos los hospitales del país que antes pertenecían a la Junta de Protección Social. Hecho que se verá agravado por la agudización del proceso inflacionario causado por la devaluación y flotación del colón en 1980. Obviamente dichos factores se constituyeron en un verdadero obstáculo que en ese momento no podía ser resuelto sólo con un incremento de la cuota obrero-patronal, sino que prácticamente obligaba a buscar nuevas salidas o respuestas, sobre todo si se tomaba en cuenta que el modelo médico vigente había desarrollado una medicina de muy alto costo. Algunas de estas salidas van a ser muy radicales y plantearán la privatización de las actividades estratégicas de dicha institución, otras por el contrario, van a conciliar el incremento de los ingresos con un proceso de negociación orientado a reestructurar el seguro social.

Es decir, la crisis que comienzan a vivir estas instituciones y en general el Estado social costarricense, asumió en este período de crisis económica un carácter estructural, hecho que propiciará la emergencia de soluciones o salidas igualmente estructurales, algunas de las cuales, tal y como señalamos antes, irán dirigidas a plantear la restricción máxima del aparato de bienestar costarricense y, por consiguiente, un tratamiento distinto del conflicto social. En efecto, en este período, como todos conocemos, la crítica al Estado Benefactor adquiere coherencia y sistematicidad en las concepciones neoliberales y en la doctrina política neoconservadora, lo que permitirá a los sectores de la burguesía que se oponían a la expansión de la política social y a los que históricamente se habían mostrado disconformes con el intervencionismo estatal, configurar una propuesta económica y política alternativa al planteamiento socialdemócrata-keynesiano que había predominado hasta ese momento.

El impacto de las políticas de estabilización

En lo que toca al impacto que han tenido las políticas de estabilización económica que se han aplicado en este tiempo sobre la política social es necesario realizar una diferenciación entre el período de la Administración Carazo y las dos Administraciones liberacionistas.

En lo que respecta a la Administración Carazo, en la cual no se va a profundizar por cuanto no es el objeto de esta exposición, basta con decir que, como todos sabemos, en ella se intentará aplicar un programa ortodoxo de estabilización económica en medio de profundas contradicciones en el equipo económico y, en general en el seno del Estado, como resultado de la crisis de dirección que vive este último, cuya consecuencia será la profundización de la crisis económica. Esto propinará un rudo golpe a las instituciones encargadas de los programas sociales en la medida en que, como ya se ha señalado, afectará negativamente sus presupuestos y acrecentará las demandas sociales. No obstante, valga destacar que a pesar de la profundización de la crisis y de la hegemonía que parece alcanzar el planteamiento neoliberal en algunas de las principales dependencias gubernamentales, durante este gobierno las instituciones de bienestar y asistencia social y otras regulaciones laborales no sólo se van a mantener incólumes sino que en algunas de ellas, como en la Caja por ejemplo, se va a intentar impulsar una serie de medidas de carácter estabilizador orientadas más que a desmantelar sus programas a adecuarlos a las nuevas condiciones económicas y sociales, lo cual tendrá como efectos negativos el deterioro en la calidad de los servicios. Hay que recordar en tal sentido, la reforma administrativa impulsada por en ese entonces la Oficina de Planificación Económica y el intento del caracismo y algunos sectores del calderonismo de darle el carácter de partido de masas a la Unidad Socialcristiana por medio del planteamiento de la promoción humana, que constituía una estrategia política para pelear el liderato de las masas al PLN, con un concepto que si bien le otorgaba vigencia al Estado Benefactor tenía un carácter no paternalista. En otras palabras, se planteaba ya en ese entonces la participación de la comunidad como un mecanismo que posibilitaba mantener los servicios y abaratar los costos.

Con la Administración Monge Alvarez se va a presentar un cambio notorio a nivel de la política económico-social. Se impulsará un programa de estabilización económica que efectivamente va a alcanzar en poco tiempo reestablecer la estabilidad en algunas de las principales variables macroeconómicas y, principalmente, se ensayará un tipo de gestión pública orientada a mantener un cierto equilibrio de las distintas fuerzas sociales, buscando con ello atenuar la crisis de dirección que todavía vive el Estado costarricense.

Esta estabilidad relativa va a constituirse en un marco o contexto político-económico que otorgará viabilidad a la configuración de una estrategia administrativa financiera, algunos de cuyos elementos habían sido esbozados en la Administración Carazo, orientada a reestructurar las instituciones de bienestar y asistencia social de un modo tal que mantenga vigencia el Estado Benefactor. Estrategia que va a estar cruzada por la tensión existente entre los beneficiarios de las políticas sociales, quienes protestarán por el deterioro en la calidad de los servi-

cios y lucharán por su ampliación y los sectores que plantean el desmantelamiento de las políticas de bienestar.

Tres factores han propiciado esta situación de estabilidad relativa. En primer término, la recuperación de la hegemonía de parte de los sectores productivos ante el fracaso del proyecto neoliberal-ortodoxo que impulsó la anterior administración, como lo ha apuntado E. Rivera,[1] lo cual ha posibilitado la aplicación de un programa de estabilización heterodoxo. En segundo término, las características del sistema político costarricense que posibilitan a los sectores populares mantener presencia en el seno del Estado costarricense, y por consiguiente, en la política económico-social. Y, en último término, el reestablecimiento del flujo de recursos externos, principalmente la ayuda que ha venido otorgando los Estados Unidos en virtud del papel estratégico que cumple Costa Rica para sus intereses geopolíticos en la región.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que el fantasma de la propuesta radical que plantea el desmantelamiento de la política social haya desaparecido, ya que, por un lado hay que recordar que si bien el proyecto neoliberal ortodoxo perdió legitimidad durante estos cuatro años a raíz de lo ocurrido en la Administración Carazo, esta opción mantiene vigencia en virtud de la limitación estructural del Estado Social Costarricense, y de la presión de los organismos financieros y agencias internacionales como el FMI, el Banco Mundial, AID, etc. Sin embargo esto no debe ser visto tampoco de manera absoluta, por cuanto hay que considerar otros elementos como la pretensión de algunos sectores dentro del Partido Unidad de convertirlo en un partido de masas y, por consiguiente, de la necesidad que tienen de otorgarle materialidad a la relación con éstas y las tendencias que en tal sentido vienen consolidándose en el Partido Liberación Nacional. Hechos que mediatizarán cualquier intento de desmantelamiento del Estado Social.

Por otro lado se advierte dentro de los sectores productivos diferencias significativas en cuanto al enfoque con el que es abordada la problemática de la estabilización y reactivación de la economía. En efecto, si bien se percibe que hay consenso en aceptar la necesidad de que el Estado continúe interviniendo en la economía, aunque ello sea sólo de manera restringida, se deja entrever también diferencias en torno a la naturaleza de esta intervención y a la orientación que esta debe mantener. Se pueden ubicar pues dos posiciones, la que sostienen los sectores de burguesía vinculados con el capital transnacional cuyo planteamiento consiste en impulsar la reducción del aparato de bienestar y consecuentemente la reorientación del gasto invertido en "lo social" hacia las actividades estatales que tienen como objetivo crear un sector de exportación, principalmente de productos no tradicionales. Dentro de sus propuestas este sector plantea entre otras cosas que los fondos de dichas

1. Véase: Eugenio Rivera, *El Fondo Monetario Internacional y Costa Rica, 1978-1982*, DEI, San José, 1982.

instituciones pasen a la caja única del Estado, se limite y racionalice el aparato de bienestar, y se amplíe el sector público dedicado a propiciar la política de reactivación, así como se reduzcan los impuestos, a saber: impuesto sobre la renta, impuestos a los dividendos excesivos, impuestos a las ganancias del capital, impuestos a la emisión de títulos u obligaciones, reinversión de utilidades de empresas exportadoras, el impuesto a la importación de maquinaria y otros más. La otra propuesta plantea que si bien es necesario reestructurar el sector público y otorgarle una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus programas, estos en lo fundamental deben mantenerse por cuanto el gasto estatal es uno de los principales dinamizadores de la demanda interna. Además argumentan a favor de democratizar la economía dando una mayor participación a los pequeños y medianos productores y desarrollando formas asociativas de producción. Esta propuesta se ha venido conformando a partir de los intereses de la burguesía asociada al mercado nacional y de los planteamientos políticos de algunos dirigentes del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad, así como de las luchas que han venido desarrollando determinadas organizaciones de campesinos y la misma burocracia estatal.

Ahora bien, un breve repaso de lo que ha acontecido durante el período de Luis A. Monge y Oscar Arias en dos de las principales instituciones de bienestar y asistencia social, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Dirección que administra el Fondo de Asignaciones Familiares (DECAP), permite afirmar que hasta el momento la segunda propuesta es la que se ha logrado imponer dentro de la política social, lo cual no significa que las otras no se encuentren presentes en las políticas que han desarrollado ambas instituciones.

En lo que respecta al Fondo de Asignaciones Familiares, es necesario tener presente las siguientes dos cuestiones: en primer término que dicho fondo prácticamente es el que nutre de recursos al resto de instituciones del sector centralizado y descentralizado. Y, en segundo término, que se financia gracias a un impuesto a las planillas y a un porcentaje del impuesto de ventas. Esta última característica le permite obviar el trámite de aprobación de presupuesto que tienen que pasar las demás instituciones, situación que le ha ayudado a esquivar parcialmente los intentos de recorte presupuestario y por tanto mantener la provisión pública de los servicios que prestan las instituciones que se benefician de sus dineros. No obstante, ello no quiere decir que no se hayan producido intentos de disminuir este fondo social. Desde la Administración Carazo se ha intentado cerrar los comedores escolares, sin embargo la presión de las trabajadoras que laboran en ellos (cocineras, empleados administrativos, etc.), quienes se han lanzado a las calles en más de una ocasión (dos en la Administración Carazo, dos en la Administración Monge, una en la Administración de O. Arias) ha impedido que dicha medida se haya hecho efectiva. Lo mismo ha

ocurrido con los trabajadores de los programas del Patronato Nacional de la Infancia que son financiados por Asignaciones Familiares, sus programas se han visto en serio peligro de cerrarse pero gracias a la fuerte lucha que han presentado no ha sido posible que ello ocurra.

Una de las razones que explican gran parte de los recortes que se han presentado en esta institución es que al constituir éste un fondo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no existir una estrategia coherente de desarrollo social, generalmente se hace uso discrecional de él, para darle materialidad a algunas políticas orientadas a resolver temporalmente focos de tensión social, problemas financieros en otras instituciones o financiar nuevas políticas, como por ejemplo la política de vivienda del actual gobierno.

Así por ejemplo, durante la Administración Carazo se utilizaron recursos para solucionar el conflicto que provocó la huelga general que protagonizó la FETRAL en Limón, igualmente se utilizaron doscientos millones de colones para cancelar parte de la deuda que había contraído el Estado con la Caja cuando esta última se encontraba en una angustiosa situación financiera. Durante la Administración Monge, se utilizaron estos fondos para impulsar el plan de compensación social que diseñó con la finalidad de palear los efectos de las políticas de estabilización económica, así como reorientaron parte de esos dineros hacia la financiación de programas socioproductivos, que van a constituir el eje de la estrategia de distribución de fondos de dicha administración. La presente administración, por otra parte, al verse imposibilitada de dar materialidad a su proyecto de política de vivienda reorientó el 33% de dicho fondo a engrozar el Banco Hipotecario de Vivienda, lo cual desfinanció a una serie de programas que llevaban a cabo otras instituciones como el Ministerio de Salud, Comedores Escolares, etc. No obstante la resolución de tal problema, que generó la protesta de los trabajadores que se han visto afectados, es mantener los programas aun cuando los gastos de operación se hayan restringido al máximo y localizar nuevos recursos que posibiliten continuar con el desarrollo de éstos.

Pero también esta política social ha tenido que enfrentar recortes como resultado de la acción de los grupos políticos que propugnan a favor de la contracción del gasto social. Se ha utilizado el "superavit" obtenido en virtud del aumento en el monto total de la planilla que ha resultado de los incrementos salariales para pagar el servicio de la deuda. Se trató de eliminar el financiamiento que este fondo obtenía del impuesto sobre las ventas que ascendía a un 37,5%. No obstante, la reacción que ello generó tanto de parte del Ministerio de Trabajo como de las instituciones y sectores sociales beneficiarios, obligó al gobierno a negociar y reestablecer parte de estos recursos al reotorgársele el 20% del impuesto al consumo, lo cual de todos modos significó una merma en sus ingresos de un 17,5%, que lógicamente afectó negativamente los programas sociales que dicho fondo respalda. Además el Ministerio de

Hacienda, ha obligado a las instituciones beneficiarias, a hacer un uso más racional de los escuálidos recursos con que han contado, entregando con muchos meses de atraso los dineros que recauda para éste (el fondo). También se trasladó en el último año del Gobierno de Luis A. Monge el fondo a la caja única, sin embargo, tiempo después volvió a ser transferido al Ministerio de Trabajo mediante una norma presupuestaria que presentó subrepticiamente el Diputado de la Unidad Socialcristiana Don Oscar Aguilar Bulgarelli, a finales de dicha administración. Hecho que evidencia la fuerte oposición que existe en algunos sectores en traspasar los recursos que se destinan para "la cuestión" social a la caja única del Estado.

Por otra parte, en lo referente a la prestación de servicios propiamente ha sido prioridad el financiamiento de grupos socioproductivos, y el desarrollo de programas orientados a otorgar participación de los beneficiarios en la ejecución de las políticas. Por ejemplo, el traspaso de comedores escolares a los patronatos, programas de autoconstrucción de vivienda, etc.

En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, se logró reestablecer el equilibrio entre ingresos y gastos a través de la aplicación de un programa de estabilización financiera que comprendía una política de racionalización del gasto y de incremento de los ingresos. Lo primero se logró a través de una serie de medidas tendientes a hacer un uso más eficiente (racional) de los recursos con los que contaba la institución y a reducir una serie de beneficios de los que disfrutaban los trabajadores del Seguro Social.

Por otra parte, se llevó a cabo una modificación de recursos de la ley constitutiva, en la cual se impidió las transferencias entre los tres regímenes, se obligó a las instituciones estatales cancelar a tiempo su cuota como patrones y, como parte de la negociación del aumento de la cuota obrero-patronal, se les otorgó representación en la Junta Directiva a empresarios y trabajadores.

Tales medidas si bien, como se ha señalado antes, consiguieron equilibrar la situación financiera del Seguro Social, provocaron un deterioro en las prestaciones médicas. Esto aun cuando no provocó una fuerte reacción en los asegurados sí motivó protestas dentro del sector de profesionales en medicina y en las comunidades que se vieron más efectadas, obligando a que la Junta Directiva echara marcha atrás en algunas de estas medidas y se esforzara por mejorar el servicio. Por ejemplo esto queda claramente evidenciado con el decreto que reformó la ley de emergencia permitiéndole a la institución descongelar plazas y la decisión de la Junta Directiva de mantener en funcionamiento la Maternidad Carit ante la presión de los pobladores de los Barrios del Sur.

Todo el proceso de estabilización financiera de la Caja ha culminado con la formación de un superávit en los últimos dos años y la amplia-

ción restringida de los servicios mediante convenios con organizaciones coorporativas como la Federación de Estudiantes Universitarios, organizaciones de pequeños y medianos campesinos, etc.

Además se ha impulsado un proceso de reestructuración del modelo de prestaciones médicas, dirigido a dar énfasis en el desarrollo de la medicina preventiva, sin descuidar la aplicación de políticas en el campo de la medicina curativa.

En síntesis, durante este período, a pesar de la estabilización económica y de los programas de ajuste estructural en el sector público, la política social que se ha impulsado no ha desembocado ni pareciera hacerlo en el futuro cercano en el desmantelamiento de las instituciones de bienestar y asistencia social ni de sus programas. Asimismo puede constatarse que, aun cuando no es posible hablar de un movimiento popular agresivo cuyas protestas se enmarcan dentro de una estrategia coherente de defensa de sus intereses, sí se detecta una importante resistencia a las políticas que afectan la prestación de los servicios. Hecho que incluso ha obligado al Gobierno a retroceder en algunas de las políticas estabilizadoras.

Dirección de los cambios estructurales en el sector público

Ahora bien, si se deja de lado el análisis del proceso de configuración de la política de estabilización y su impacto en la política social y se dirige la atención a las tendencias y cambios estructurales que se han producido en los últimos seis años, se puede concluir que es posible visualizar una estrategia de cambio claramente orientada a reconstituir el Estado social más que a destruirlo. Con ello se quiere decir que los mecanismos que ha logrado construir dicho Estado para canalizar los reclamos explícitos y no manifiestos o latentes de las clases subalternas así como las funciones que ha asumido en la economía mantienen vigencia pero en el marco de una reorganización profunda de esta última y el reacomodo de las fuerzas sociales. Esta estrategia de cambio no puede entenderse como el resultado solamente del predominio de una propuesta de la burguesía, por cuanto es caer en una visión voluntarista que no da cuenta del papel que tienen los sectores populares y principalmente de los mecanismos existentes en el sistema político para que los distintos sectores puedan ver representados sus intereses. Es decir, ésta constituye el resultado del predominio coyuntural que ha alcanzado en el seno del equipo de gobierno, principalmente en el de Monge Alvarez, el planteamiento de la reactivación de la demanda interna, de la acción que el Estado necesariamente ha tenido que dar como respuesta a los efectos sociales de la crisis, de la lucha o resistencia que han presentado bajo diversos mecanismos los sectores afectados, tanto los beneficiarios de los servicios como los trabajadores de las instituciones estatales que los prestan y del origen del financiamiento de

las más importantes instituciones de bienestar social y de las características de la política social.

En lo referente a los dos últimos aspectos es indispensable destacar lo siguiente: en primer término, en lo que respecta al origen del financiamiento, el hecho de que las instituciones más importantes desde el punto de vista del servicio que prestan como de su cobertura (por ejemplo la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje) recauden sus fondos de tributos o impuestos a las planillas y los salarios y, por consiguiente, se encuentren eximidas del trámite de aprobación de sus presupuestos al que están sometidas las instituciones pertenecientes al sector centralizado, les ha otorgado una protección relativa ante los serios intentos de los opositores al Estado Benefactor de limitar o contraer los programas sociales. De ahí la importancia estratégica que tiene para éstas la centralización de los ingresos del fisco en una caja única. En segundo término, en lo atinente a las características de las políticas sociales, hay que resaltar cuatro elementos que vienen a constituirse en un verdadero obstáculo para los propósitos desmanteladores:

a) Las políticas sociales se han ido configurando a partir de una relación muy compleja con el Partido Liberación Nacional. La ampliación del ámbito político de este partido ha devenido en el establecimiento de una relación de materialidad con las masas que quiere incorporar, lo cual ha generado el desarrollo de clientelismos políticos y formas de cooptación social que pasan necesariamente por la procuración de las necesidades más apremiantes de ellas.

b) El desarrollo y ampliación del Estado social ha generado una burocracia estatal con intereses propios, cuyo sustento se encuentra precisamente en la vigencia de este último, y

c) una relación simbiótica con capitales privados. Un ejemplo de esta relación de dependencia que se ha construido entre el Estado Social y formas de capital privado se encuentra en el caso de los productores de leche, los cuales ante la dificultad de colocar sus excedentes no sólo obligaron al gobierno a emitir un decreto en el que obliga a los programas que financia el Fondo de Asignaciones Familiares a comprar dichos excedentes sino también la irracionalidad llega a tal punto que se opusieron a que el gobierno accediera a recibir una ayuda de la AID por $400 millones de colones en leche en polvo.

d) El Estado y la política social han construido un modo de vida, el cual ha aumentado significativamente las expectativas de salud, vivienda, educación y recreación. Constreñir éste constituye para el Estado la posibilidad de provocar una profunda crisis de legitimación y motivación en el sentido que Habermas lo ha apuntado para el caso europeo.

Ahora bien, volviendo a las políticas de estabilización y reconstitución del Estado social, se puede resumir la estrategia de reestructuración a la que han sido sometidas las instituciones de bienestar del aparato estatal costarricense, en las medidas que a continuación van a ser expuestas:

a) Reforma administrativa, que comprende:

    1. Una política de racionalización del gasto orientada a hacer un uso más racional de los recursos físicos y monetarios.
    2. Reestructuración de las formas de prestación de los servicios. Por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social se ha puesto en marcha ya el Modelo Inglés, el cual se basa en el desarrollo de una medicina que combina la atención a la enfermedad con formas de aplicación de la medicina de carácter preventiva.
    3. Monetización e incorporación de mecanismos de mercado en la gestión pública con el fin de alcanzar una mayor productividad del trabajador público. Se plantea, en este sentido, remunerar al trabajador según sus capacidades y rendimiento y establecer estímulos y formas de organización del servicio que obliguen a desarrollar un espíritu competitivo.

b) Privatización de parte de los servicios y/o actividades administrativas. Esto se propone en dos direcciones: en primer término, a través de la participación de las masas en las fases de ejecución de la política, y, en segundo término, mediante la privatización y posterior cooperativización de partes del proceso de producción de los servicios sociales.

Como se puede observar, esta estrategia no tiene el sentido negativo que es posible encontrar en el planteamiento neoliberal-ortodoxo dirigido a sustituir simplemente las funciones del Estado por la "capacidad auto-reguladora que se le asigna al mercado", ni en la reestructuración que propone el ofertismo. Más bien, al plantearse una reorganización de la función de legitimación del Estado abre posibilidades para que las masas puedan asumir un papel más activo y de ser simples receptáculos pasen a constituirse en participantes de un proceso.

Si bien dicha reestructuración supone una disminución del Estado, no es cierto que el Estatismo esté asociado a formas más democráticas, por el contrario, como plantea Portantiero,[2] la desestatización de algunos servicios y su desplazamiento hacia formas de producción más societales que posibiliten la participación de las clases subordinadas y la creación de formas asociativas pueden resultar en un proceso de profundización de la democracia.

2. Carlos Pontantiero, "La democratización del Estado", *Revista Pensamiento Iberoamericano*, No. 5a., enero-junio 1982, pp. 99-126.

En este sentido la izquierda no puede recaer en el viejo error de interpretar cualquier política orientada a democratizar la vida política y económica del capitalismo como una simple manipulación de la burguesía. Es necesario otorgarles el estatudo que tienen algunos de los cambios que se han propuesto y más que desecharlos como una maniobra de la burguesía para dar una salida a la crisis, es indispensable que el movimiento popular promueva sus propias propuestas de tal manera que pueda reorientar una reestructuración que parece inevitable en beneficio de sus intereses. Constituye, sin duda alguna, un contrasentido entrar a defender un tipo de gestión pública que ya ha encontrado su límite estructural, lo cual no significa que hay que asumir el proyecto de la burguesía sino más bien ello implica prefigurar una propuesta que sea verdaderamente alternativa a la de la burguesía intervencionista y, desde luego, a la de la burguesía transnacionalizada pero que sea viable en el marco de la actual situación política y económica.

II PARTE

LA DEUDA EXTERNA

La deuda externa: pagar o vivir

José Merino del Río

La deuda externa, por la magnitud de su monto y por su trascendencia para la vida de los países deudores y acreedores, se ha convertido en un problema de carácter eminentemente político; entendiendo la política desde el punto de vista de la formulación marxista: "economía concentrada", es decir, cuando las contradicciones en el campo económico no pueden resolverse en el marco de la lógica de funcionamiento de los mecanismos económicos, se abre la alternativa política, como única vía para el enfrentamiento y la solución de esas contradicciones.

En los últimos años se produjo una explosión de fórmulas alternativas, planteamientos teóricos sobre el problema de la deuda externa que giran alrededor de dos tesis centrales: la tesis de "crecer pagando", con diversas variantes matemáticas, pero que incluso en los casos más benignos es una tesis que la vida está indicando que no permite el crecimiento ni el desarrollo, y que es pagar para que crezcan las economías de los países acreedores, teniendo en cuenta que todos los países deudores de América Latina y del Tercer Mundo, sin excepción, se han convertido en países exportadores netos de capital; o la tesis de no pagar, de la moratoria unilateral de los pagos del servicio de la deuda (intereses más amortización), por considerar que económicamente la deuda es impagable, políticamente es irracional y moralmente es inaceptable. En todo este arco de propuestas, se ha creado indudablemente una preocupación que es común y generalizada: el problema de la deuda externa podría ocasionar un colapso financiero de consecuencias políticas y sociales imprevisibles. Es en torno a este problema donde más cruda y dramáticamente se reflejan las contradicciones del sistema capitalista mundial: los polos de prosperidad, lujo y despilfarro en los centros imperialistas (Estados Unidos, Japón, Europa Occidental), alimentan su insolente riqueza sobre la base de unos intereses de la deuda que hace crecer, en el otro polo, la miseria de los tugurios, favelas, chabolas, villas miserias, cantegriles, callampas.

La tesis radical de *no pagar*, ha sido vista en Costa Rica, dada la correlación de fuerzas políticas en presencia, como una tesis "demagógica y subversiva". Incluso en sectores de intelectualidad progresista ha hecho estragos el planteamiento pragmático estrecho, un realismo entre comillas, que considera que al no pago sobrevendría el caos y la ruina, y que, de una u otra manera, no hace sino repetir concepciones de fatalismo político, geográfico e histórico, tan en boga en un pasado reciente. Afortunadamente, la decisión del gigante latinoamericano, Brasil, de declarar una moratoria unilateral, está haciendo entender a mucha gente, honrada pero a menudo excesivamente tímida y miope, que la bandera del no pago no era un estandarte del "iluminado" Fidel Castro, sino una necesidad científica y apremiante, que hunde sus raíces en la lacerante situación social y económica de nuestro Continente y del Tercer Mundo.

Por supuesto el movimiento popular debe tener un doble enfoque del problema de la deuda externa. Si nosotros hacemos un enfoque de acuerdo a la actual coyuntura que está viviendo el país y a las posibilidades reales de darle una u otra salida al problema de la deuda externa, nosotros tenemos que analizar cuál es la correlación de fuerzas sociales y políticas que hay en el país, cuáles son las fuerzas de clase que hoy actúan en Costa Rica y las posibilidades reales de que las diversas alternativas económicas, políticas, sociales de esas fuerzas se abran paso, y a partir de ahí tenemos que adoptar una postura que, por un lado, tiene que ser realista ante este problema de la deuda externa y por otra parte, tiene que ser una postura con perspectiva de futuro, con horizonte histórico que nos vincule al porvenir de América Latina.

La postura realista indica que efectivamente no se pueden rechazar *ad portas* las soluciones intermedias que se presenten para enfrentar el problema de la deuda. Soluciones intermedias, porque no son efectivamente soluciones radicales y definitivas al problema, y donde quizá lo más importante está no tanto en la propuesta de si nos pueden dar 25 años de plazo, 7 de gracia o cualquier otra fórmula de este tipo, sino en la manifestación de un estado de conciencia, que obliga al gobierno de un país a admitir que el problema de la deuda externa por su monto, por sus efectos devastadores sobre la economía nacional, sobre las condiciones de vida cotidianas de cada uno de los costarricenses, se ha convertido probablemente en el problema clave de nuestro país.

En ese sentido, la actitud política de un gobierno que plantea ya el problema de la renegociación de la deuda externa como un problema clave para el futuro de Costa Rica, podemos interpretarla como un hecho positivo en tanto que responde a una presión mundial, a un estado de desarrollo de una conciencia mundial, fundamentalmente de América Latina, de los países del Tercer Mundo, que obliga a los gobiernos a empezar a mirar de cara a la realidad. Es una victoria también del movimiento popular que ha levantado desde hace años, esta fundamen-

tal reivindicación. Por otro lado, nosotros, fundamentalmente los sectores que representamos intereses populares, intereses sociales que están en contradicción antagónica con esas potencias o con esas instituciones financieras que nos exigen pagar la deuda, no podemos quedarnos solamente en la visión que ofrece o se desprende de la actual coyuntura, a partir de la actual correlación de fuerzas, sino que estamos obligados a presentar la perspectiva y luchar por ella: el futuro de este problema tanto para Costa Rica como para el resto de países de América Latina y del Tercer Mundo. Perspectiva que no puede ser utopía, sino que debe ser una visión de futuro que apunta inevitablemente, sin que eso sea una visión fatalista o de un optimismo irracional, a que el camino de solución al problema de la deuda tendrá que ir por esa vía: la vía que concluirá en el no pago, en la imposibilidad, en el reconocimiento del no pago de la deuda externa.

Por supuesto lanzar hoy esa consigna, enfrenta varias oposiciones. Enfrenta, en primer lugar, la oposición de nuestra clase dominante que considera que la consigna del no pago, es simplemente estar haciendo subversión y demagogia. Es decir, que las clases dominantes consideran que Costa Rica está inserta en un sistema económico, financiero internacional, que tiene unas reglas, que no podemos salir de ese sistema ni ignorar la presencia de esas reglas sin someter al país al naufragio, al caos, a la ruina.

También existe, desde algunos sectores populares, la tesis de que esa consigna no corresponde a las posibilidades reales, y desde una visión posibilista estrecha consideran que efectivamente tiene también rasgos demagógicos lanzar la tesis de que la deuda externa es impagable.

Pero, desde el punto de vista de la perspectiva histórica y científica, de cómo va a desenvolverse la confrontación internacional, de qué repercusión va a tener esa confrontación internacional en las relaciones del Tercer Mundo con el imperialismo, en la solución de otro tipo de contradicciones que existen hoy en el mundo contemporáneo, cómo va a repercutir esa confrontación en nuestra realidad nacional, es muy probable que la tesis que se vaya abriendo paso, lenta quizá pero inexorablemente, es la tesis de la imposibilidad del pago de la deuda externa.

Esto lo ve claramente un político tan avezado como Henry Kissinger, que llama al imperialismo a trasladarse del campo de los análisis puramente económicos al campo de las decisiones políticas, y donde avisa a los propios banqueros de su país que de sostener una tesis tradicional sin romper la lógica tradicional del funcionamiento del sistema económico imperialista mundial, a ese sistema le aguarda un problema muy serio, parecido a tener una bomba de relojería en sus cimientos. De esa magnitud se puede considerar el problema de la deuda externa.

¿Por qué es el problema clave? Porque efectivamente alrededor del problema de la deuda externa se configuran dos concepciones antagóni-

cas del modelo de país que se quiere y se puede construir en Costa Rica, que se quiere y se puede construir en los países dependientes de América Latina y del Tercer Mundo, del tipo de relaciones económicas y políticas que pueden y deben construirse entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado y explotado.

La tesis de pagar la deuda externa, en cualquiera de sus variantes, incluso en la variante más favorable para los países del Tercer Mundo, alargando más los plazos, alargando más los períodos de gracia, bajando los intereses, reduciendo el porcentaje de las exportaciones que se destinan para el pago de la deuda externa, etc. en sus variantes más benignas es la tesis de acentuar la dependencia del Tercer Mundo, pero no la dependencia tradicional, sino la dependencia en un punto de viraje del sistema capitalista mundial; en un punto de viraje donde los fenómenos de transnacionalización de la economía internacional, donde los fenómenos de agudización de la división internacional del trabajo, del intercambio desigual, de los mecanismos financieros abusivos y explotadores, de los mecanismos comerciales proteccionistas le dan a países del Tercer Mundo y ahí está ubicada también Costa Rica, el papel de enclaves neocoloniales exportadores. Ya no es el problema de que dentro de nuestra estructura económica nacional, existan islotes que nosotros hemos llamado enclaves, que juegan un papel importante y en algunos períodos hasta determinante, pero que en todo caso, recordaban pero no ponían en duda que Costa Rica seguía siendo un país soberano, un país independiente, con severas limitaciones a esa soberanía y a esa independencia, pero en todo caso donde se reconocía que el hecho de liberación de nuestro estado de colonia no fue un hecho ficticio, y que la formación del Estado nacional costarricense tampoco fue un hecho ficticio, sino que fue un proceso largo y doloroso que le dio una característica nacional a Costa Rica.

Ahora se trata de convertir al país, según esa tesis, en un enclave de exportación, en un apéndice de las transnacionales dirigidas por el FMI y otros institutos financieros internacionales. Y convertir a una gran parte de América Latina y del Tercer Mundo también en un enclave de ese tipo.

O ese modelo del FMI y de las transnacionales o el modelo de reconstrucción de países que puedan efectivamente iniciar un impulso de reactivación económica que les abra la vía del desarrollo, que les abra la vía de poder establecer no solamente condiciones de democracia y de justicia social más elevadas, sino también condiciones de nuevas formas de relación con las potencias desarrolladas: no hay otras alternativas que pagar la deuda y transnacionalizar a Costa Rica, neocolonizarla, o renegociación patriótica, moratoria que abra un camino de reconstrucción nacional, donde vayan de la mano la soberanía, el desarrollo y el levantamiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Dos modelos que se enfrentan en casi todos los países de América Latina. Si uno ve la realidad uruguaya hoy a pesar de la apertura democrática, o Argentina, Brasil, Colombia, el debate que hay en esos países a nosotros nos es muy familiar. Son los mismos problemas en esencia, con manifestaciones distintas de acuerdo a las características concretas de cada uno de ellos. Pero en todo caso, es un desafío que tiene elementos tan comunes, que nos indica que el problema de la deuda externa no se puede enfrentar encerrados en las actuales fronteras nacionales. Nada podemos hacer aislados.

El problema de la deuda externa tiene que tener una dimensión latinoamericana y después una dimensión tercermundista, mundial, pero para empezar una dimensión latinoamericana. Ya se está creando conciencia sobre esa realidad en América Latina. Hay países que se adelantan a otros. Desde la tesis digamos más radical, desde el punto de vista que va a la raíz del problema, de Fidel Castro (ahora levantada por el Brasil), hasta tesis menos radicales, pero muy avanzadas en el contexto latinoamericano como la de Alan García en el Perú, fijando el porcentaje del 10% máximo de las exportaciones para hacerle frente a la deuda externa, hasta otras tesis, donde también el gobierno de Costa Rica se integra, que plantean la necesidad de enfrentar el problema de la deuda externa, de que no se puede continuar con los mecanismos tradicionales, con los que se venía enfrentando el problema de la negociación o renegociación de la deuda externa. Claro que esa posición del Gobierno de Costa Rica tiene lectura contradictoria, porque efectivamente frente a ese giro positivo, podríamos considerarlo así, está la contraparte muy negativa de decirle a la banca transnacional y al Fondo Monetario Internacional que nos dé ese período de gracia y ese plazo para el pago de la deuda, bajo la condición de que se compromete a fondo a cambiar la estructura económica tradicional del país, y de colocarnos en este momento de giro con lo que fue Costa Rica hasta mediados de la década de los setenta.

Es decir, que el problema de la deuda necesariamente tiene un enfoque que no puede ser lineal, tiene un enfoque que obliga a ubicarse en un nudo de contradicciones para saber en qué dirección pueden empujar los sectores sociales que consideran que frente a la alternativa de país que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional, que frente a ese modelo de país, hay otra posibilidad, hay otras alternativas. O el dinero de la deuda para rendirle tributo al Fondo Monetario y a la Banca transnacional o el dinero de la deuda para rendirle tributo a las necesidades sociales y económicas del pueblo costarricense, al desarrollo interno del país, a levantar las condiciones de trabajo y los niveles de vida y a demostrar que levantar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo, no es hacer demagogia ni plantear un imposible económico, sino que es una vía que tiene una profunda racionalidad económica y que tiene alternativa posible de construirse y desarrollarse, pero que es una racionalidad económica que choca con intereses clasis-

tas, oligárquicos e imperialistas muy fuertes, choca con la actual conformación de nuestro régimen social y del régimen económico internacional del capitalismo.

En resumen, no se puede pagar la deuda desde el punto de vista económico y hay muchos estudios serios que así lo demuestran. Políticamente significa ir hacia tensiones sociales muy agudas, que podrán resolverse o bajo una óptica transformadora y revolucionaria o bajo una óptica profundamente regresiva, que no solamente implica costo social y económico, sino posiblemente también el agotamiento del régimen político democrático costarricense y su sustitución por formas autoritarias y fascistas.

El problema de la deuda no puede ser un enfoque sólo nacional. Hay que presionar, trabajar, por abrir la conciencia de que se trata de un problema latinoamericano y que hay que ir hacia una concertación latinoamericana del problema de la deuda externa. La solución del problema de la deuda externa, por sí sola, tampoco resuelve el problema de la dependencia y el subdesarrollo del Tercer Mundo. Hay que ir hacia la necesidad de vincular el problema de la deuda externa con la conformación del nuevo orden económico internacional. Ese nuevo orden económico internacional, entre otras cosas, además del cambio radical de relaciones entre las potencias desarrolladas y el mundo subdesarrollado implica ir hacia la integración económica de América Latina. El problema de la deuda externa tiene solución. Tiene solución visto desde un enfoque mundial. El problema de la deuda externa tiene solución si se vincula al problema del desarme. Si los países del Tercer Mundo y las fuerzas democráticas progresistas y humanistas del mundo desarrollado comprenden, como lo ha señalado Fidel Castro, que con destinar un 10% de los gastos que se dedican a armamentos a solucionar el problema de la deuda externa, es un problema que se puede arreglar inmediatamente. ¿Por qué nosotros vamos a considerar que esa es una posición utópica? ¿Acaso no son hoy los dos problemas centrales no solamente de nuestro país, sino de la humanidad, el problema de la paz y el problema del subdesarrollo? ¿Y acaso no está íntimamente vinculada la necesidad del desarme a las necesidades del desarrollo y de la paz?

Claro que estas ideas no prosperan como debieran en nuestra actual situación, por el bajo estado de conciencia que existe hoy en nuestro país acerca de esos problemas, por las dificultades ideológicas objetivas que hoy existen para que amplios sectores de nuestra sociedad puedan salirse del enfoque que venden el imperialismo y la oligarquía sobre estos problemas de la deuda, del subdesarrollo, del armamentismo, etc., pero son las ideas embrionarias que están predispuestas a transformarse algún día en la única vía de salida tanto para el problema de la deuda externa como para los grandes desafíos que enfrenta la humanidad.

Moralmente, ¿estamos obligados a pagar? Yo creo que el hecho de que un país pequeño y empobrecido como Costa Rica se haya converti-

do ya en un país exportador neto de capital, indica que desde hace tiempo empezamos nosotros a trasladar al exterior las inversiones originales que el capitalismo extranjero pudo hacer en Costa Rica. Es inmoral el pago de la deuda, porque no se puede seguir imponiendo a nuestro pueblo sacrificios, porque no se puede hipotecar temerariamente el futuro de un país; es, como dijo Fidel Castro, "como el caso de un niño cuyo padre adquirió un préstamo para jugárselo a la ruleta, lo perdió todo, y después al niño de cinco años le quieren cobrar la deuda del padre. Eso es inmoral". Claro que para los que han hecho del robo y del servilismo instituciones revestidas de la mayor respetabilidad, lo inmoral es no pagar, hay que condenar a las masas trabajadoras al hambre, el desempleo, a la incultura y a las enfermedades, hay que atar al país a una mayor y empobrecedora dependencia, hay que arrodillarse ante el FMI y la sabiduría de los neoliberales, pero hay que pagar; tal es la lógica de quienes son precisamente responsables de haber enviciado al país en el círculo infernal del endeudamiento, y de haber usado una buena parte de los préstamos en el enriquecimiento ilícito, el robo, la malversación.

La deuda externa es impagable. No es una afirmación "ideológica", se puede demostrar matemáticamente. Dejemos hablar a Fidel Castro, como modesto homenaje al visionario estadista que con su prédica clara e infatigable transformó el problema de la deuda externa en bandera de lucha de pueblos y gobiernos de América Latina y del Tercer Mundo.

"Se puede demostrar matemáticamente que es impagable. El problema no consiste ya en el monto de la deuda, sino en los intereses que se están pagando por ella. Parto de cuatro hipótesis y en cada una de ellas del supuesto de que la deuda no crezca.

Helas aquí:

1. Que se concediesen diez años de gracia para pagar el capital; que en ese período se continúen pagando los intereses y después se concedan diez años para amortizarla con un interés no mayor del 10%. Bien: América Latina debería pagar 400.000 millones en los próximos diez años, y otros 558.000 millones en los diez años subsiguientes. En 20 años América Latina habría transferido a los acreedores 958.000 millones de dólares, casi un trillón norteamericano o un billón español . . . No es concebible.

2. Que se aplicase la fórmula de pagar como máximo, cada año, 20% del valor de las exportaciones y los intereses no rebasen 10%. Las exportaciones del conjunto de América Latina se aproximan ya a los 100.000 millones. En ese caso habríamos pagado 400.000 millones de dólares en veinte años y al final tendríamos una deuda de un billón 161.850 millones de dólares; es decir, habríamos pagado 400.000 millones y nuestra deuda sería el triple de la que hoy es.

3. Que se concediesen diez años de gracia, incluidos los intereses; un período ulterior de diez años para amortizar y que los intereses no rebasaran en ningún año el 10%. Eso indudablemente significaría un alivio de diez años. Habría que pagar en veinte años un billón 447.310 millones de dólares.
4. Que se redujesen los intereses al 6%, se concediesen diez años de gracia, incluidos los intereses, y un período ulterior de diez años para pagar. Esta sería, sin duda, de las cuatro, la fórmula más benigna. De todas formas habría que pagar en 20 años 857.471 millones de dólares.

He puesto cuatro hipótesis, en todas ellas he supuesto que la deuda no creciera, que los intereses nunca rebasarían el 10% y en todas ellas se demuestra que la deuda y sus intereses son impagables".[1]

1. Fidel Castro, Reportaje concedido al diario Excelsior de México, publicado el 28 de marzo de 1985.

Los riesgos de la deuda externa o ¿Cual es el proyecto economico en marcha?

Guillermo Zúñiga Ch.

Introducción

Existe una tendencia muy generalizada por parte de los especialistas, a ver el problema de la deuda externa en sí mismo. Se discute sobre las posibilidades de los países para hacer frente a los pagos, si se debe amortizar los intereses y el principal, o solo una parte de ellos; si el perfil de la deuda ha mejorado o empeorado, si las condiciones de amortización son mejores o peores, si el servicio de la deuda ha crecido más que las exportaciones y otras cosas por el estilo. Se podría hacer una larga enumeración de temáticas, o bien se podría construir una larga lista de indicadores que permitieran abordar el tema de la deuda externa.

No quiero restarle méritos a este tipo de esfuerzos; de hecho son muy valiosos y hasta necesarios. Sin embargo, me interesa tratar este asunto de la deuda externa ligado a aspectos más fundamentales que permitan caracterizar el desenvolvimiento económico del país y al mismo tiempo, posibiliten dar una visión de los nuevos rumbos a los que se orienta nuestra sociedad.

El tema de la deuda externa no está aislado de otros fenómenos; por el contrario, está íntimamente ligado con un conjunto de políticas económicas (y a veces siento que a otro tipo de políticas, entre ellas la política exterior del país), que están marcando sustantivamente el desarrollo de Costa Rica.

Cuando el presidente de la República, el Dr. Oscar Arias, estuvo en las Naciones Unidas el año pasado dijo que "era muy importante en estos asuntos de las deudas que extendamos la mirada más allá de la banca", como conclusión a una argumentación que previamente había realizado en el sentido de que "se nos ha obligado a mirar el mundo bajo el prisma de los problemas que la banca internacional privada contribuyó a crear".

Me parece que una declaración de esta naturaleza, viniendo del señor Presidente de la República, marca un cambio importante en la

forma como este país ha venido encarando el tema de la deuda externa. No se había escuchado una declaración oficial tan clara antes de ese momento, donde se hiciera co-responsable de las condiciones de deterioro generalizado de la economía de nuestros países, a la banca privada internacional.

Si el Gobierno de la República es consecuente con el planteamiento hecho por el Presidente, necesariamente debe plantear un esquema de negociación mucho más agresivo, mucho más nacionalista y con menos condicionamientos en términos de política económica, que lo que ha venido ocurriendo. Bajo estas condiciones se abre un espacio muy interesante de entendimiento entre los distintos grupos sociales, frente a objetivos comunes, que podría redundar en la búsqueda de salidas a los problemas económicos actuales, muy distintas a las que se han impulsado hasta el momento.

Y es que el Presidente tiene razón. Este es un caso típico de responsabilidad compartida, donde tanto peca el que comete el pecado, como el que permitió que se cometiera. En consecuencia, la política económica no debiera ser solo del signo que se está siguiendo.

El origen de la deuda externa

Normalmente se nos ha dicho que el problema de la deuda externa se debe a que despilfarramos mucho, que tenemos "gustos de champaña y bolsillos de agua dulce", que somos un país poco disciplinado, poco trabajador; que a nuestro pueblo solo le gusta "el vacilón". En fin, la deuda existe por nuestra irresponsabilidad.

Inclusive muchos políticos de nuestro país, de manera irresponsable, se encargan de decir que la culpa del problema de la deuda externa la tiene Rodrigo Carazo, como si fuera únicamente el resultado de una mala política económica, que efectivamente en esa administración se dio.

Definitivamente no solo ese gobierno, sino que los demás, tienen una altísima responsabilidad en este asunto y algún día eso habrá que aclararlo. Pero existen una serie de condiciones generales que tiene nuestra economía, como las tiene la economía mexicana, o la guatemalteca, o la colombiana, que nos hacen estar hoy altamente endeudados. La forma particular de crear la riqueza, las vinculaciones específicas con el mercado internacional, así como una serie de transformaciones que se han presentado a nivel mundial, hacen que nuestros países estén endeudados.

Veamos. Cuando se presentó el segundo "schock petrolero" en 1977-78 eso provocó una gran caída en la producción de los países centrales. Frente a ello, se generó una liberación de dinero en aquellos países. Se sabe que una economía requiere cierta masa de dinero para funcionar armónicamente; en el momento en que la producción de esta

economía decae, se libera una gran cantidad de capital-dinero que necesita ser reutilizado de alguna manera. Como el negocio de los bancos es prestar y ya no lo pueden hacer internamente, los banqueros simplemente vuelcan sus ojos hacia nuestros países. Nos empezamos a convertir en un excelente mercado financiero y los préstamos vienen con gran facilidad.

Esa misma crisis que se presentó en los países centrales, expresada en un fenómeno de recesión y por las condiciones altamente monopólicas de esos países, hizo que como mecanismos para enfrentar la caída en sus tasas de ganancia, los precios de los artículos que ellos nos venden subieran. Sucede que en las relaciones de comercio internacional de nuestros países, los mecanismos de intercambio no están basados en un mercado tan competitivo, como algunos colegas liberales quieren hacerlo pensar. Todo lo contrario, ésos países sí tienen la capacidad de aumentar los precios de sus productos, con la lógica consecuencia de que nuestros países necesitan más divisas para mantener el nivel de compras externas.

Además, al haber ese fenómeno de contracción económica, de la demanda de esos países por nuestros productos de exportación, éstos se ven disminuidos en su volumen y en su precio. Esto desde luego disminuye la disponibilidad de divisas internamente. De modo que la recesión en los países centrales produce dos fenómenos simultáneos: aumento de los precios de los artículos de los países industrializados y caída de los precios de nuestras exportaciones.

Lógicamente, bajo estas condiciones, los requerimientos de divisas, de capital-dinero, para poder mantener nuestro aparato productivo funcionando, se hacen cada vez mayores, lo cual nos convierte en un excelente mercado para recibir préstamos. Es decir, nos suben los precios de los productos que importamos, caen los precios de nuestros productos de exportación, se hace necesaria una gran cantidad de divisas para poder enfrentar un comercio exterior generalizado y, aparte de eso, hay un exceso de liquidez a nivel internacional que está urgida de colocarse bajo forma de préstamos. El cuadro está cerrado. Inclusive, mucho de ese exceso de liquidez de que estoy hablando, ese exceso de capital-dinero, tienen que ver con los mismos dólares de los países vendedores de petróleo que no fueron absorbidos por esos países, sino que simplemente se reciclaron a los centros financieros de Europa y los Estados Unidos y están ahí haciendo "presa"; buscando a ver en cuál país se localizan.

Vemos, pues, cómo elementos estructurales de la economía costarricense nos hacen demandantes insaciables de divisas. Me estoy refiriendo a aspectos como el tipo de bienes que exportamos, la dependencia de insumos y bienes de capital importados, el escaso ahorro interno para financiar la inversión debido a lo bajo del ingreso y lo mal distribuido que se encuentra, el tipo de vinculación a los circuitos

comerciales/financieros internacionales y al carácter altamente expugnable de nuestra economía. Todos estos aspectos acusan una debilidad crónica de nuestra estructura económica, que en última instancia se relacionan con una particular división internacional del trabajo a nivel internacional, donde nuestros países han asumido su rol, con muy poca posibilidad de incidir de manera individual, en esa estructuración mundial.

Un último aspecto que conviene mencionar es el siguiente. La filosofía popular acierta cuando dice que "capital que no crece, perece". Esa es la dinámica que tiene una economía capitalista como la nuestra. Y dígase lo que se diga, todos los países pobres somos un excelente mercado para las ventas de los productos de los países industrializados. Y si nosotros no tenemos con qué pagar, pues simplemente nos prestan para que compremos. En otras palabras, por más pequeño que resulte un mercado como el nuestro, los empresarios de los países industrializados siempre preferirán vender, aunque sea poco, a tener guardada la mercadería en sus bodegas. La mercancía que no se vende no se realiza de nueva cuenta en dinero; si esto ocurre, se puede interrumpir el nuevo ciclo de acumulación pues la posibilidad de reinvertir se suspende. Por ello es que en última instancia, no existe "venta pequeña": la obligación es vender.

Por todas las razones anteriormente expuestas, siempre he sostenido que detrás del fenómeno de nuestra deuda externa, se esconde la capacidad que tienen los países centrales de exportar sus crisis. ¿Cómo? Mandándonos los préstamos, incrementando sus créditos, incrementando sus precios, financiándonos para que podamos comprarles.

Esa es la historia. Por eso tiene razón el Presidente cuando dice que hay que hacer co-responsable a esta gente de los desaciertos y descalabros que el mundo está viviendo. Esa es una línea de argumentación correcta y fundamental.

La propuesta costarricense

Hasta donde se conoce la propuesta que ha presentado el Gobierno está orientada a aumentar los plazos para la amortización (se habla de solicitar hasta 25 años), a aumentar los períodos de gracia y tratar de bajar las tasas de interés. Nadie puede estar en contra de esa propuesta. Se trata de asumir una conducta de buen pagador. Es simplemente decir: miren señores de la banca internacional, permítannos crecer, permítannos desarrollar nuestro país, y una vez que nos desarrollemos y crezcamos, con mucho gusto empezamos a ver cómo les pagamos; mientras tanto, le vamos a ir haciendo frente a esta deuda pagando parte de los intereses.

Algunos han insinuado que el país no debiera pagar del todo. Otros argumentan para reforzar la idea anterior, que Fidel Castro ha demos-

trado que el pago de la deuda externa rebasa los límites de la voluntad de los pueblos y se ubica en el terreno de lo que numéricamente es imposible de cumplir. No falta quién opine que Costa Rica debiera seguir los pasos de Alan García y definir un monto de pago que esté asociado, por medio de un porcentaje fijo, al total de las exportaciones del país.

Cualesquiera de estas propuestas resultan muy atractivas, son deseables e inclusive pueden resultar moralmente válidas. Sin embargo, en esta materia como en muchas otras se impone el realismo político; a veces lo perfecto resulta enemigo de lo bueno. El mismo Fidel Castro, a pesar de su proclama, ha corrido a buscar un acuerdo con los bancos acreedores y se mantiene al día en sus obligaciones.

Por otra parte, Costa Rica ha venido haciendo sin mucha bulla, algo parecido a lo que ha propuesto Perú. Si al pago de la deuda se le resta los ingresos de capital, el pago neto anual comparado con el monto de exportaciones, viene a representar un porcentaje bastante similar al peruano.

México mismo representa una fuente de aprendizaje útil, en el tanto que en su última renegociación logró ligar el monto del pago de su servicio de la deuda con el precio del petróleo, su principal producto de exportación. Desde luego que México, al igual que Brasil, por el volumen de deuda que manejan, ya han dejado de ser deudores de esos bancos, para convertirse en "socios" de los mismos y su condición es bastante distinta a la nuestra.

En todo caso, hay que tener claro que cuando se habla de pagar la deuda, una cosa es pagar el principal y otra es pagar los intereses. La deuda externa, pienso con honestidad, nunca se va a pagar y no debemos preocuparnos de eso. A los bancos lo que les interesa es mantener su negocio activo; a nosotros nos interesa transformarnos de exportadores netos de capitales que somos hoy, a importadores netos de capitales.

Adicionalmente, los bancos deben tener claro que ellos deben asumir parte de las pérdidas de este negocio, cosa que, inclusive, ya ha empezado a ocurrir al cotizarse algunos títulos de la deuda costarricense al 40% del valor facial en los mercados internacionales. En otras palabras, si tuviéramos los recursos suficientes, podríamos comprar toda la deuda en cerca de la mitad de su valor. ¡Y eso lo saben los bancos!

Pero no se trata de eso; simplemente lo que nos debe interesar es "mantener viva la cuenta". De ahí que, con los pies en la tierra, asumir la vía costarricense de la propuesta peruana, o lo que he llamado la "conducta de buen pagador", es una posición correcta y merece todo el apoyo. El país no puede, en forma unilateral, declarar una insolvencia y dificultosamente, podría declarar la moratoria.

De hacerlo aisladamente, se correría el riesgo de sufrir el cierre de los mercados internacionales, la suspensión del ingreso de los flujos dinerarios, se expondría a ver embargadas las exportaciones y, en general, podría experimentar un aislamiento del contexto internacional.

Hacia la renegociación conjunta

Otra óptica se plantearía si en forma organizada, los países deudores deciden actuar en conjunto y comprometerse a actuar dentro de una estrategia común en materia de pago de intereses, condiciones, pagos del principal y otros alcances relacionados.

Hasta el momento el país ha insistido en, y ha aceptado, la negociación individual; esto creo que le resta fortaleza. El país debe utilizar todo los foros para respaldar sus negociaciones y debe atender solidariamente con otros deudores, cualquier iniciativa conjunta de defensa de los intereses nacionales frente a la voracidad de los entes financieros internacionales.

Esa voluntad política no se nota; o por lo menos, si existe, no aflora con claridad, con lo que, sencillamente, se le están facilitando las cosas a los intereses extranjeros.

No se debe olvidar que los bancos internacionales tienen un gran orquestador, que se llama Fondo Monetario Internacional. El FMI es una especie de auditor de esos bancos; cuando los gobiernos pactan las condiciones de los convenios con el Fondo y se establecen las garantías mínimas de que va a haber cumplimiento, las puertas de los bancos se abren, los países reciben todo el financiamiento que quieran y se posibilita todo tipo de renegociación que se desee.

Hay un artículo muy interesante que escribieron la señora Silvia Charpantier conjuntamente con el Dr. Eduardo Lizano que se llama "La condicionalidad cruzada", cuya lectura recomiendo.[1] La condicionalidad cruzada es precisamente el tema que estoy comentando. Esto opera más o menos así: se debe llegar a un arreglo con el Fondo Monetario, hay que arreglarse con el Banco Mundial, hay que arreglarse con los bancos y además con la AID. Una vez que se logró todo esto, se pactan las condiciones de renegociación, se pacta la política económica que se seguirá y nos vuelven a dar préstamos.

Siempre me ha parecido curioso que si aquellos que nos han inducido al endeudamiento, aquellos que son co-responsables de nuestra deuda, se unen para que negociemos, ¿por qué nuestros países siguen asistiendo en forma individual a las negociaciones? Y este es el aislamiento peligroso que Costa Rica ha seguido en materia de negociación.

1. Véase Lizano E. y Charpantier S.; "La condicionalidad cruzada", en: *Desde el Banco Central*, Serie Comentarios sobre Asuntos Económicos No. 60, Banco Central de Costa Rica, 1986, pp. 140-154.

Por ello es muy importante tratar de ligar las distintas opciones de los diferentes países y, en la medida de lo posible, hacer un "Club de Deudores", así como existe un "Club de Acreedores". Pero esto debe ser real; no como ha ocurrido hasta la fecha en que no se ha pasado de buenos discursos y pocas intenciones, como ocurrió en el Acuerdo de Cartagena, donde todos firmaron la declaración, pero a la hora de negociar, cada país fue por aparte. Si se hace un "Club de Deudores", que sea realmente un espacio en el que los países se comprometan a interrelacionar sus acciones, a compartir opciones, a discutir experiencias y a actuar en conjunto.

Este es un punto que me parece importante, pues creo que el país anda equivocado cuando pretende enfrentar el tema de la deuda en forma independiente. Porque ni somos "supermanes de la negociación", ni por más fronteras conflictivas o "calientes" que tengamos (lo cual creo que es un factor favorable que el país necesariamente utiliza en sus negociaciones), nos van a dar un trato especial. El problema no es único y más bien, por su naturaleza generalizada, se debe enfrentar de manera conjunta.

Los cambios en el modelo de desarrollo

Mencionaba más atrás que parte de los acuerdos a los que se llegaba con el FMI y que posibilitaban entrar en arreglos para el pago de la deuda, tenía que ver con el tipo de política económica que el país se comprometía a seguir.

En otras palabras, el país asume una estrategia interna que le permite hacer frente al pago de esa deuda. Y es aquí donde, sin duda, se debe tener más cuidado y el análisis de la deuda externa asume otra dimensión.

Más aún, es cierto que los organismos internacionales condicionan altamente el carácter de nuestro desarrollo futuro; pero no es menos cierto que existen grupos internos interesados porque las cosas marchen por el camino que aquellos promueven como pauta general, e inclusive, a veces estos sectores nacionales con intereses de grupo, se escudan detrás de esos organismos para argumentar que lo que ellos internamente impulsan corresponde a imposiciones externas. Se debe ser muy cuidadoso con estos "lobos con piel de oveja" y es preciso calibrar cada propuesta para entender los verdaderos alcances que ellas tienen. En todo caso, este no es momento para tratar el asunto y habrá que esperar alguna investigación en el futuro para establecer la bondad de la afirmación. Por el momento, permítaseme recordar cómo, cada cierto tiempo, se argumenta frente a los compatriotas que si tal cosa no se hace, entonces no se acuerda con el FMI y si esto sucede, pues tendremos problemas, como si no existieran sectores interesados en que tales acciones se tomen. En otras oportunidades he dicho que así como cuando éramos niños nos asustaban con "el coco", hoy nos sacan al FMI cual "diablo

colorado" para asustarnos, política que ha dado muy buenos frutos a algunos sectores en el pasado.

A partir de la década de los ochenta, este país empezó a transformarse como resultado, precisamente, de la crisis económica. He sostenido en otras oportunidades que el detonante principal de ella fue la devaluación, lo cual no quiere decir que haya sido la causa. Por el contrario, la devaluación es el mecanismo a través del cual se expresan una serie de contradicciones en el modelo de desarrollo que hasta ese momento el país había impulsado.

Desde ese momento, este país empieza a ser otra cosa. Es decir, la Costa Rica que nosotros conocíamos y en la que vivimos en los sesentas y en los setentas, esa Costa Rica se acabó. Vamos hacia una nueva Costa Rica, caracterizada por un esfuerzo principal que están haciendo los gobiernos para orientar nuestra economía hacia la exportación de productos no tradicionales, a mercados no tradicionales, sin descuidar los productos tradicionales; por vincular nuestra economía a los circuitos financieros internacionales; por desarrollar internamente un sector financiero muy dinámico con características de gran especulador y a veces, de alto riesgo, y por establecer una articulación de nuestra economía con una estrategia más global que se está impulsando para la región, llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe o Plan Reagan.

Todo esto, ¿con qué intención? Orientado precisamente a generar las divisas suficientes para poder hacer frente al pago de las deudas que hemos contraído. Es decir, la preocupación principal en este momento es ver cómo le hacemos frente al pago de la deuda. Y para esto, se está organizando toda una estrategia de política económica caracterizada por esos cuatro rasgos que mencioné.

Por curiosidad histórica y por el enorme paralelismo que existe entre los fenómenos, conviene recordar que allá por los años sesenta la Alianza para el Progreso desarrolló el Mercado Común Centroamericano y con él emerge un nuevo grupo social, el cual acumula los privilegios de la época. En los ochenta aparece la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, se desarrolla una economía de exportación y desde luego un nuevo grupo económico es el que recibe los privilegios. Muy posiblemente, a principios del próximo siglo los americanos idearán un nuevo programa, que permitirá a algún sector aprovechar los privilegios creados. Lo que no sería nada raro, es que en todos los casos hayan sido los mismos los que se beneficiaran con esas políticas.

Sin embargo, conviene regresar al punto medular que venía tratando. Para obtener esos objetivos globales de política económica, ¿qué está pasando internamente? ¿quién está cargando con el costo de esta estrategia? ¿en qué consisten las medidas específicas que se están tomando? Existe un listado de acciones que se han aplicado en una gran cantidad de países que también se han expresado en Costa Rica. Es una

receta: la receta neoliberal; la receta del FMI que a la vez es totalmente congruente con el planteamiento del Banco Mundial.

Muy rápidamente sintetizo:[2] liberalización de la economía, privatización de la economía, reducción de los salarios reales, contracción del mercado interno, disminución de la participación estatal en la economía, una reforma tributaria que disminuya los gravámenes al capital, sobre todo al capital orientado hacia las exportaciones y al extranjero, un robustecimiento al sector financiero, la disminución y eventual eliminación de las restricciones a las importaciones, el pago de la deuda externa, la atracción de la inversión extranjera y la vinculación cada vez mayor a los circuitos financieros internacionales.

Y, ¿cuáles son los resultados de una estrategia de este tipo? Fundamentalmente, disminuir las condiciones de reproducción plena de la población. La mejor manera de sintetizar esta idea es diciendo que cada vez se hace más difícil vivir; cada día los servicios de salud son más deficientes, los servicios de educación, los servicios que, en general, el Estado presta a la población trabajadora son más deficientes; los salarios están cayendo; los bienes y servicios cada vez se encarecen más. Y lo más grave es que todo este sacrificio se está haciendo para impulsar la creación de un sector exportador muy dinámico, pero que a la vez, de mantenerse las tendencias principales que se están dando ligadas al recetario neoliberal, se va a constituir en un sector exportador, concentrador de riqueza, muy vinculado a la inversión extranjera, muy dependiente de los bancos internacionales y muy aislado del resto de la economía. Esta última característica es de consecuencias alarmantes, que no será posible repartir los beneficios del desarrollo entre toda la población, ni desarrollar armónicamente todos los sectores económicos.

Voy a plantear por primera vez en público una cosa que desde hace tiempo he venido pensando e inclusive he comentado de manera breve en círculos privados muy reducidos. Es una tesis que he venido madurando y si bien requiere de mayor investigación, lo cierto es que en lo fundamental es correcta. Se puede sintetizar diciendo que de mantenerse las tendencias fundamentales de nuestro desarrollo dentro de la línea que he reseñado –la receta neoliberal–, lo que estamos construyendo en nuestra Costa Rica es un modelo que caracterizo como oligárquico de nuevo cuño, con resultados a futuro muy peligrosos. ¿Por qué lo llamo modelo neo-oligárquico?

Sin pretender desarrollar una tesis detallada sobre el particular, sí conviene reseñar, aunque brevemente, los rasgos más sobresalientes del modelo oligárquico que en el pasado se presentó tanto en América

2. Para un tratamiento más detallado de este tema véase Zúñiga G., "El carácter de las políticas del FMI", en: *Estrategias para la superación de la crisis económica dominicana*, Primer Congreso Nacional de Economistas, Editora de Colores S.A., Santo Domingo, República Dominicana, 1986, pp. 45-73.

Latina como en Costa Rica, que hoy empiezan a aparecer aunque con vestuario distinto.

Conviene recordar que el mismo Rodrigo Facio en su famoso "Estudio sobre la Economía Costarricense",[3] ya había utilizado ese término para caracterizar las relaciones de producción que se generaron en torno a la articulación entre la exportación de café, la inversión extranjera, la formación de compañías exportadoras e importadoras y las formas de gobierno particulares que se dan desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX.

El estudio de otros autores[4] permite plantear que el régimen oligárquico se caracteriza por poseer una economía primaria exportadora, íntimamente vinculada a la presencia de la inversión extranjera, en muchos casos bajo la forma de enclave, con escaso desarrollo del mercado interno, débil crecimiento del sector industrial, con grandes procesos de concentración de la propiedad agraria bajo la forma de latifundios. Se trata de una economía en que el excedente se generaba a partir de la renta de la tierra y se realizaba mayoritariamente en el exterior, a cambio de lo cual los países importaban una gran cantidad de mercancías de consumo final. El capital extranjero mantenía su presencia, no solo a través de la inversión directa mencionada, sino por medio de préstamos que otorgaban a los países. Los estados desarrollaron grandes obras de infraestructura para coadyuvar ese proceso de desarrollo.

En otras palabras, producto de la división internacional del trabajo, estas economías asumen un "rol" de "subdesarrollo capitalista" dentro del desarrollo mundial, caracterizado en la forma antes esbozada, con lo cual este tipo de modelo también ha sido llamado "forma reaccionaria de desarrollo capitalista".

La constatación más seria y preocupante para los actuales momentos, se orienta a la precisión del carácter anti-democrático del Estado Oligárquico, lo cual debe venir a representar una clarinada en tanto no queremos regresar en el desarrollo político que el país ha alcanzado. De manera que si estás políticas neoliberales se aplican de manera indiscriminada, y sin factores compensatorios o atenuantes, serios riesgos correrá la nación.

En la actualidad, el mayor impulso en materia de política económica se está dando al sector exportador: se le exoneran los impuestos,

3. Facio R., "Estudio sobre economía costarricense", en: *Obras de Rodrigo Facio,* Tomo I, Editorial Costa Rica, San José, 1972.
4. Véase Cuevas, A., *El desarrollo del capitalismo en América Latina,* Ed. Siglo XXI, Primera edición, México, 1977; Ianni O., *La formación del Estado populista en América Latina,* Editorial Era, México, Primera edición 1975; Bambirra, V., *El capitalismo dependiente latinoamericano,* Ed. Siglo XXI, México, Segunda edición, 1975; Ceceña, J., *México en la órbita imperial,* Ediciones el Caballito, México, Primera edición 1970.

aunque ello signifique poner nuevos gravámenes[5] a otros grupos, se le han otorgado certificados de abono tributario, ciertificados de incremento de exportaciones, excenciones de impuesto de la renta, se le da un contrato de exportaciones.

Asimismo, se ha impulsado el desarrollo de un dinámico sector financiero orientado, entre otras cosas, a promover las exportaciones; se constata una contracción de los salarios pagados internamente. Y, lo que es más grave y preocupante, se ha dado un gran aislamiento entre lo que es el polo dinámico de la economía-valga decir, el sector exportador y el resto de la economía. Inclusive, existen algunos sectores industriales de este país que están viendo amenazado su crecimiento futuro, sus procesos de acumulación privados, en razón de la baja de los aranceles puesto que es una política que va a permitir la importación de una gran cantidad de bienes. Desde luego, aquellos sectores que sí están generando los dólares, sí tendrán acceso a esas formas de consumo más sofisticadas; los demás, simplemente observarán.

Ni se diga del enorme atractivo que se ha tratado de dar a la inversión extranjera y a la presencia de ella en forma cada vez más abultada en los parques industriales y en las zonas francas, asumiendo la forma de moderno enclave económico.

Por todo lo anterior, me parece que ese cuadro que se dibuja arriba, aunado a las propuestas de los sectores neoliberales que permiten perfilar nuestro rumbo, nos faculta para hablar que peligrosamente nos orientamos hacia la conformación de un modelo oligárquico de nuevo cuño o neoligarquía, si no se establecen los correctivos a tiempo y se toman decisiones oportunas. No se trata de establecer diferencias de tipo semántico, sino de inducir a caracterizaciones teóricas que permitan entender qué está pasando en el país.

Lamentables olvidos

He de insistir en que la aplicación ortodoxa de estas políticas, de corte neoliberal, con soporte en las posiciones del FMI, de la AID, del Banco Mundial y sectores minoritarios pero económicamente importantes de este país, nos lleva al terreno peligroso de caer en una especie de modelo conservador, que he caracterizado anteriormente como neo-oligárquico.

En el gobierno actual existen una gran cantidad de sectores que están luchando en contra de esa tendencia; distintos grupos nacionales y democráticos del país han lanzado la voz de alerta; la ciudadanía en general no puede estar de acuerdo con este modelo; el Presidente Arias

5. Me refiero al Paquete Tributario presentado recientemente a la Asamblea Legislativa y a las declaraciones del mismo Ministro Naranjo, quien ha dicho que parte de los requerimientos fiscales de hoy, se originan en las excensiones dadas a los exportadores.

tiene clara la situación y es razonable pensar que no va a permitir que un accidente histórico de esta naturaleza se repita.

También hay grupos en el gobierno y en la llamada "oposición" que promueven este esquema y sueñan con convertirnos en una segunda versión, aumentada y corregida con el auxilio de los organismos financieros precitados, de la "Banana Republic ".

Esto es precisamente lo que está en juego hoy en el país; esta es la confrontación principal que se vive, la cual nos enfrenta a algunos con los neoliberales en el terreno teórico metodológico. Estos últimos, por sus concepciones, son partidarios del modelo ortodoxo en toda su plenitud y aunque algunos de ellos se presenten como los "revolucionarios de finales de siglo",[6] en realidad lo que lograrían es regresarnos al siglo pasado. Lo grave es que se han "colado" dentro de la Social Democracia criolla, amparados a un "pragmatismo" que a veces dicen profesar.

Frente a toda esta situación ¿cómo debemos encarar el tema de la deuda externa?, ¿qué opciones se presentan?

Estamos de acuerdo con el gobierno en que se debe asumir la conducta de buen pagador; es más, es claro que se debe negociar y hacerle frente a la deuda, en el tanto eso no atente contra el desarrollo económico. La posición de partida de negociación del gobierno es, en lo fundamental, acertada.

En lo que no estamos de acuerdo con el gobierno es en obligar a nuestra población a realizar sacrificios tan grandes, como los que se están haciendo, con el pretexto de que se debe pagar la deuda. En otras palabras, se está planteando si es posible impulsar patrones de crecimiento económico distintos, que permitan que al mismo tiempo que nos comportamos como buenos pagadores, los costos de este manejo económico se repartan de manera distinta. Frente a esa problemática, con entusiasmo hay que plantear que eso es posible. Y aquí no queda otra opción que mencionar de nuevo las ideas del Presidente.

Hay un tema que cada vez se está relegando a lugares más alejados dentro de la agenda de discusión en este país. Es algo que tiene que ver con un aspecto que inclusive está contemplado en el primer convenio que se firmó con el Banco Mundial en esta década (SAL I): me refiero a la democratización económica y a la reforma agraria.[7]

Es más, me consta que hubo una comisión en las filas del "arismo", que en la época de campaña trabajó de manera bastante seria procurando una propuesta instrumental para implementar la democratización

6. Véase Rodríguez, M., en entrevista en *Rumbo Centroamericano*, Año III, No. 126, del 27 de marzo al 2 de abril de 1987, pp. 5-6.
7. *La Gaceta* No. 76, Alcance No. 7, del 23 de abril de 1985.

económica es decir, hacer real aquello que debemos tener cada vez más propietarios y menos proletarios.[8]

Un concepto más acabado sobre la democracia económica, nos permite plantear que ella significa el acceso más amplio de todos los sectores sociales a la propiedad de los medios de producción y al trabajo, en particular de aquellos grupos que hasta el presente han sido postergados, de tal manera que se garantice una participación plena en el proceso de desarrollo.

Lo anterior es la conclusión de una convicción que establece que la supervivencia de la democracia política costarricense depende, en gran medida, de un modelo de desarrollo que al mismo tiempo que se fundamenta en el respeto de la iniciativa privada, exija la democratización de la propiedad. Es decir, se debe transformar cada vez a más compatriotas en propietarios del capital.

Debe estar fresco en la memoria que este fue un tema de campaña. Y este es un aspecto que lamentablemente se está dejando por fuera. Porque perfectamente nosotros podemos hacer todo el esfuerzo exportador que se está haciendo, y al mismo tiempo garantizar que no sea en beneficio de unos pocos señores. No es justo que esos beneficios se concentren.

Si el país está haciendo un enorme sacrificio en distintos frentes para impulsar las exportaciones, pero al mismo tiempo permite que la mayoría de los costarricenses tengan acceso a la propiedad y a los beneficios de ese desarrollo, es obvio que no va a ser necesario deprimir el mercado interno, no va a haber concentración de ingresos, no va a ser necesario bajar salarios, no va a haber desintegración intersectorial y una gran cantidad de personas van a garantizarse una vida decorosa.

Sin embargo, lograr esto implica retomar el tema, incorporarlo en la estrategia de crecimiento, en el nuevo Programa de Ajuste Estructural con el Banco Mundial.[9] Y no olvidar que existen compromisos de campaña. Sigo pensando que el Presidente es un hombre de palabra, por lo que creo que los sectores interesados, deben impulsar con fuerza este tipo de aspiraciones.

Otras de las propuestas que desafortunadamente se han ido olvidando o bien han ido perdiendo fuerza, es la que realizó el Presidente, en el sentido de convocar a los distintos sectores del país a un gran diálogo nacional que condujera a una "concertación social". Esta es una inicia-

8. Expresión usada por el Presidente Arias en múltiples ocasiones. "Sin duda es más estable y más justa una democracia de muchos propietarios, que de muchos proletarios", Arias, O., *Nuevos rumbos para el desarrollo costarricense*, Educa, San José, Primera edición, 1979, p. 143. Sobre la necesidad de profundizar la democracia política y dar acceso a la propiedad de los medios de producción, véase Arias, *op. cit.*, en especial Cap. IV, pp. 139-145.
9. No obstante, muy posiblemente el cumplir con este punto, no es "condición" para que el Banco Mundial haga los desembolsos.

tiva que debe contar con el apoyo de todos los ciudadanos; los vientos que corren, los cambios que se avecinan, el trasfondo de la situación bélica de la región, obligan a la conciliación de intereses entre los distintos grupos sociales. Así como hace 40 años la sociedad costarricense acordó un "pacto social", hoy se hace necesario reeditar esa acción.

Concertar significa pactar, acordar un negocio, traer a identidad de fines y propósitos cosas diversas o intenciones diferentes, es decir, escuchar las distintas opiniones y llegar a un arreglo. Por ello, este es un excelente momento y una gran oportunidad para plantear rectificaciones a las propuestas en boga, para replantear temas como el de la democracia económica, para discutir sobre el modelo de desarrollo que queremos.

Espero que este asunto de la concertación social no sea un cuento; sino una convicción. El Presidente insiste siempre en que se hagan los diálogos nacionales más amplios. Creo que hay que tomarle la palabra. Si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, en la de menos no se presentarán otras; si los que andamos pensando en que se debe impulsar otro tipo de propuesta, no insistimos en ello, nadie lo va a hacer y podemos perder la oportunidad para ayudar a reorientar el país. No vaya a ser que en un futuro sea demasiado tarde.

El tema de la "concertación social" se debe retrotraer a la discusión cuanto antes; se le debe tomar la palabra al Presidente. Porque si no, lo que va a ocurrir es que nos van a venir a pedir "concertación social" una vez que los tecnócratas hayan hecho los arreglos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y los demás organismos financieros, para impulsar el esquema conservador. Y en estas condiciones no se puede hablar de "concertación", sino de "imposición". Y esto es algo más serio que un simple juego de palabras.

Creo que hay espacios abiertos para poder decirle al gobierno sobre qué aspectos estamos de acuerdo. Costa Rica sigue siendo una sociedad abierta, pero desgraciadamente existen una gran cantidad de sectores en el país, los mayoritarios, que siguen muy desorganizados, por lo que en este momento no existe un nivel de respuesta coherente, armónico y permanente, frente a la arremetida conservadora.

En conclusión

Al amparo de las negociaciones sobre la deuda externa y con los organismos financieros internacionales, un sector que me luce reducido dentro de la sociedad costarricense, ha ido imponiendo las "reglas del nuevo juego". Esta propuesta cuenta con el apoyo, en lo interno, de pequeños grupos de los dos partidos políticos mayoritarios y, en lo externo, de la Administración Reagan.

Si bien es cierto que una creciente deuda externa, obliga a estar recibiendo grandes cantidades de recursos externos que traen imposicio-

nes, con lo cual se disminuyen los grados de libertad en el manejo de la política económica, no es menos cierto que grupos internos interesados han ido perfilando una Costa Rica que se orienta a gran velocidad hacia la consolidación de un régimen que he llamado neoligárquico, si no se toman las medidas de naturaleza compensatoria a tiempo.

Han reaparecido como elementos centrales del patrón de desarrollo, actores tradicionales de la antigua oligarquía, a saber: el capital financiero especulativo en manos privadas, los grupos exportadores-importadores y el capital extranjero, bajo la forma de préstamos o bien, como inversión directa. El peso específico que estos grupos han ido asumiendo en la toma de decisiones es realmente preocupante; la forma como han repartido su influencia en los dos partidos políticos más grandes es también motivo de enorme preocupación.

Frente a esta situación, existen recuerdos de compromisos de campaña y propuestas recientes, que vienen a representar atenuantes a la corriente básica: construcción de 80.000 viviendas, creación de 25.000 empleos por año, democracia económica y concertación social. La administración Arias apenas se inicia y es necesario darle tiempo para ver los resultados reales y para que concrete sus promesas. Eso sería de gran provecho para la mayoría de la población y le acarrearía un gran respaldo al gobierno. Pero poder materializar un programa compensador y de orientación distinta, obliga a la presencia organizada de sectores, que desgraciadamente hoy brillan por su ausencia.

Soy optimista y creo que "todas las cartas no están echadas"; sin embargo, el compromiso debe ser asumido con decisión por todos. Si no se implementan correctivos drásticos, aunque sean políticas que tendenciosamente hoy llaman "populistas", nos corremos el riesgo de marchar por el camino de la indiferencia, el desgano, el descuido ciudadano y, en casos extremos, la desesperación, cuyas consecuencias son incalculables.

III PARTE

LA CRISIS CENTROAMERICANA

Presencia del pasado y el presente sin futuro en Centroamerica

Edelberto Torres-Rivas

Este no es un título apropiado para una charla, pero he querido enmarcar así un conjunto de preocupaciones que me gustaría proponer, con ocasión de esta convocatoria tan atinada. El CEPAS ha tenido el mérito de proponer la realización de una discusión pública sobre la situación actual y el futuro de Costa Rica y Centroamérica. Esto es un testimonio de responsabilidad intelectual y política de una doble manera. Por un lado, porque se produce en un momento en que los intelectuales progresistas están aislados y arriando banderas que otros ya levantaron con orgullo. Por el otro, porque rescata la dimensión regional que oficialmente tiende a olvidarse y a quedarse en el planteo localista de los problemas. Bienvenida, entonces, la iniciativa del CEPAS.

La primera observación que quiero hacer, es de naturaleza muy general y bastante evidente y se refiere a la llamada 'derechización' de la cultura de occidente. La crisis económica ha planteado, cuando está próximo a finalizar el milenio, una profunda crisis de identidad de la cultura de la modernidad capitalista. Los partidos y las ideologías obreras retroceden sin necesidad del violento acoso fascista. La atracción de las ideas revolucionarias en Europa y en América Latina cede frente a cautas propuestas de libre realización política, en este continente o frente a propuestas estabilizadoras de signo conservador. El mercado se volvió contra sí mismo y aún no se perciben las fuerzas ideológicas y sociales capaces de ponerle orden.

Este desconcierto en el occidente industrial y democrático tiene una contrapartida en otro tipo de perplejidad: la del mundo socialista, próximo a celebrar sus setenta años, que descubre en el límite del milenio su casi irrecuperable atraso tecnológico y las profundas limitaciones de la vida civil y social. El socialismo no ha podido profundizar sus ras-

(Versión modificada de la conferencia dictada en CEPAS, los días 18,19, 20 de febrero de 1987).

gos democráticos en tanto que tampoco ha podido evitar su textura autoritaria. Los esfuerzos actuales de Gorbachov son el testimonio último de estos aspectos negativos.

Hay dimensiones hoy día que afectan por igual al socialismo y al capitalismo. Una de ellos, por ejemplo es la de la deuda externa, que pareciera ser un síntoma de las relaciones financieras del capitalismo y que alcanza a numerosas sociedades socialistas. La ola conservadora también llega a estas últimas culturas, favorecidas por una caparazón de moralismo oficial, que las absorbe sin dificultad.

Pero de ésto, lo que nos interesa para Centroamérica es el deslizamiento a posiciones conservadoras de todo el espectro político. En la última campaña electoral de Costa Rica, la izquierda inauguró un lenguaje pseudosocial-demócrata y Liberación Nacional –expresión afortunada de un centro político– utilizó una verborrea liberal. Los términos ideológicos claves más utilizados en el debate político se alteraron y muchos de ellos se volvieron tabú. Se ha dejado de hablar de socialismo y de revolución pese a tener cerca a Nicaragua. Hay retrocesos y descomposición en las fuerzas de izquierda y al enfrentar este deslizamiento conservador, vigoroso, tienden a adoptar posiciones que hasta ayer combatían. Hasta en las ciencias sociales se renuncia a posiciones críticas, como si el subdesarrollo y la dependencia hubieran desaparecido . . . o atenuado sus efectos. La moderación se apodera de mentes y actitudes y lo que queda es un gesto que Kristol llama, con euforia, neoconservador. Con orgullo este autor reclama para una posición conservadora un nuevo vigor intelectual que trasmite vida a la ortodoxia burguesa. (Kristol, 1986, pág. 13). Y declara caducos, pasados de moda, los grandes temas, los movimientos sociales, las ortodoxias de la izquierda Todo esto nos influye y nos condiciona de mil maneras, porque experimentamos, en efecto, una pérdida de identidad que se manifiesta, por ejemplo, cuando nos proponemos buscar salidas alternativas a la actual crisis, cuando intentamos definir el futuro. Simplemente cuando nos interrogamos sobre el sitio donde estamos, si es punto de partida o si ya sólo es la estación de llegada.

Suponemos que este conjunto de fenómenos, de ninguna manera aislados entre sí, no están definidos a partir de una percepción subjetiva, de una deficiencia intelectual de carácter personal. Más bien afirmamos que se trata de efectos perceptibles de una profunda transformación del orden burgués, democrático e industrial, que va alterando el papel de la política y de los partidos tradicionales que ella conformó; del papel del Estado y de sus relaciones con los grupos económicos y con las organizaciones sociales, todas ellas en crisis. De las relaciones entre los estados-nacionales y de las tradicionales formas de cooperación y competencia. Hay intentos de redefinir los objetivos de la educación y la cultura en una óptica neoliberal y una voracidad por privatizarlo todo, etc.

En segundo lugar, no es fácil resumir este contexto general en el que la crisis centroamericana puede ser analizada. Pero como estamos condicionados como nunca por lo que sucede en el exterior, debemos hacer un esfuerzo por entender la dialéctica infernal del mercado internacional, de la política de las grandes potencias, de los movimientos culturales que nos han influido (como modas, como temas), tarde o temprano. Un prestigioso líder alemán, Willy Brandt, predijo hace algún tiempo que el mundo occidental había sido inevitablemente un mundo socialdemócrata. Por ésto entendía un avance del progreso social experimentado en todas las sociedades occidentales. En sus mejores momentos, este siglo fue social y democrático en el sentido que nunca antes tan gran número de personas han disfrutado de una amplísima red de oportunidades para prosperar. El crecimiento económico y la igualdad tuvieron como eje al Estado. El siglo XX es el siglo del Estado social, del poder que se preocupa por el bienestar de la mayoría y se protege con instituciones parlamentarias y elecciones. Fue socialdemócrata desde que los éxitos del movimiento obrero organizado en los principales países capitalistas europeos convirtieron en líderes políticos exitosos a sus mejores representantes. Desde 1914 la socialdemocracia es la aspiración a una articulación posible entre democracia política y progreso social. Sus resultados han llegado hasta nuestros días y hasta nuestros ambientes, pero aquí han sido incapaces todavía de volver exitosa esa articulación.

La condición socialdemócrata no llegó hasta nosotros. Subdesarrollo y estado social son situaciones casi contradictorias. Se aproximó en la experiencia costarricense y se alejó en el resto de países, que además, han sido mal administrados. Cierto o no que este siglo haya sido un largo período social-demócrata —en los términos dichos—, lo cierto es que frente a esa constatación se ha alzado la predicción reciente de otro alemán, Dahrendorf, que proclama como solución eminente de la crisis una salida liberal, normalizando la vida hasta situarla próxima a los orígenes del contrato social. Es entonces Rousseau y no Hobbes el que inspira este retorno a un futuro liberal. "Cuando mayor sea el número de individuos cuyas posibilidades de vida aumente —dice Dahrendorf— más liberal es una sociedad" (1983,29). La misión de la política es conseguir la felicidad, término este que ya quedó fuera de uso, porque en su lugar aparece como más mundano: el concepto económico de bienestar. El bienestar no puede ser para todos pues las gentes se han hecho vagas y perezosas, en parte criadas por el biberón del Estado. Se necesita una nueva época, plenamente liberal, en la que los salarios reales no se muevan y el crecimiento venga por el lado de la oferta, es decir, reducción de impuestos, fomento de los beneficios empresariales, etc. El Estado debe ser una instancia subsidiaria y retener solamente el monopolio de la fuerza . . .!

Las predicciones socialdemócrata o liberal casi no nos conciernen. Aquí lo que está en cuestión es el problema de la sobrevivencia como

sociedades, como Estados nacionales. Hay quienes creen que debemos desentendernos de cuanto pasa en el exterior y dada la fatalidad geopolítica, vincularnos exclusivamente con los Estados Unidos. Queramos o no, estamos en su *primer círculo de influencia,* lo que se llama una zona *natural* de control. La 'amistad' con una gran potencia ha demostrado ser una relación colonial. Por ello, hay quienes creen que es mejor diversificar la dependencia, abriéndose a relaciones múltiples en un equilibrio de influencias neutralizadas recíprocamente. Esto tiene que ver con el tema de ¿quién nos servirá de motor de arrastre en la postcrisis?

Y esto nos permite introducir un nuevo elemento de discusión. El problema de la crisis económica que ya ha ocasionado perjuicios muy profundos a la sociedad centroamericana y que por ello, plantea serios interrogantes acerca de cómo podrá ser reorganizada una economía dependiente cuando los estímulos tradicionales han desaparecido o se han debilitado.

Bien sabemos que algunas de las crisis del sistema, en el pasado, fueron violentos reacomodos para seguir poco después, hacia adelante. Fue como la enfermedad que anuncia desarreglos estructurales, los que una vez superados devuelven vigor al funcionamiento del capitalismo. De todas las crisis hasta hoy habidas, el capitalismo no se debilitó nunca. Sirvieron para refuncionalizar a niveles superiores la vida del sistema. De ahí que el carácter cíclico de estos fenómenos siempre provocara la esperanza inmediata del retorno a la prosperidad. Nuestras oligarquías reposaron en sus haciendas esperando que el precio del café devolviera la bonanza a la sociedad.

Ahora las cosas han cambiado y especialmente para el destino de la periferia. La pugna intercapitalista es de otra naturaleza frente a las diferencias con la periferia y el asunto de la deuda externa por ejemplo, preocupa menos a Japón y a la Comunidad Europea que la competencia comercial, los saldos favorables de aquel país en su comercio exterior, la devaluación del dólar o las barreras protectoras de las grandes economías. La tercera revolución industrial que introdujeron los 'chips' aumenta la brecha entre el 'centro' y la 'periferia' y la dinámica de las relaciones entre ellos. Se descomponen ambos términos y unos países abandonan lentamente sus antiguas ubicaciones. El sentido profundo que ésto tiene para los centroamericanos es que está planteado para el futuro inmediato nuevas formas de inserción o aún la deserción misma del sistema internacional. Es un "delinking" discriminatorio que por de pronto ya tiene dimensión perceptible: el lento final de las tradicionales formas de participación primario-exportadoras de Centroamérica en el mercado mundial, las que se iniciaron hace casi un siglo, empezaron a variar.

El desarrollo de la crisis ha ido estableciendo nuevas pautas de 'inserción' dependiente pero profundamente discriminatorias para las

economías menos desarrolladas, con mercados débiles, con agriculturas que ya no admiten más 'modernización'.

La crisis económica hubiera bastado por sí misma con sus brutales efectos internos para desnudar las impudicias de nuestro subdesarrollo. Aún si la recuperación estuviera a la vista, estos seis o siete años de crisis económica han sido harto suficientes para exhibir los insalvables rezagos en aspectos tan vitales como la alimentación popular, la protección a la salud, la atención a la educación y, por supuesto, al problema grave de la vivienda. La heterogeneidad social se ha simplificado, a contrapelo de las explicaciones en boga. El crecimiento económico provocó una activa diversificación social: nuevos estratos de ingreso, una variación de amplios límites para los grupos medios, movilidad ascendente por lo menos en la copia servil de algunos estilos de consumo, etc. Pero la crisis ha vuelto más profunda la brecha en los niveles de ingreso, de productividad, de formas de vida, simplificando en muchos aspectos la estructura social.

En la evolución de la economía centroamericana, hay diferencias internas y por ello el dato regional es aproximado. En 1986 el ingreso por habitante volvió a ser negativo, por lo que la pérdida acumulada desde 1978-79 ha llegado a ser del 26%, siendo así el octavo año en que esto sucede, lo que no tiene parangón con ningún momento de la historia centroamericana. Por lo menos en este siglo, en el que algún intento de llevar cuentas nacionales fue hecho y permite establecer algún recuerdo comparativo.

Las pérdidas experimentadas en el producto per cápita (y correspondientemente, con el ingreso) reducen el funcionamiento de la economía regional a sus índices de 1960, que fue uno de los momentos de mayor crecimiento. Comparativamente ello expresa un retroceso histórico de una magnitud de catástrofe, pues necesitaríamos lo que resta del siglo, con un crecimiento superior al 8%, para reponer los niveles que habíamos alcanzado ya. La catástrofe tiene sobre todo una dimensión social y política. Lo primero, porque afecta de manera profundamente diferencial a los estratos de ingreso.

Se diría que existe una correlación negativa e inversamente proporcional en lo que se recibe del ingreso per cápita anual y los estratos sociales, de tal suerte que la concentración de la riqueza y la pobreza no han sido aumentadas visiblemente.

Desde el punto de vista político la situación debería obligar a una revisión a fondo de todo cuanto han significado las políticas económicas aplicadas por el Estado desde hace ocho años. Ninguna de esas medidas, coyunturales o no, han tenido éxito. Ninguno de los planes de ajuste estructural han sido *completados* o finalizados. El éxito del ajuste es inmovilizar la economía para ponerla en condiciones de enfrentar, de nuevo, sus compromisos externos. Los efectos recesivos eran previsi-

bles a condición de poner de pie a una economía determinada frente a sus desequilibrios externos.

Lo anterior es más significativo aún por cuanto entre 1985-86 se produjeron situaciones internacionales que permitirían disminuir los efectos tradicionales de la crisis y, por lo tanto, poder experimentar alguna recuperación en el crecimiento del producto interno. En efecto, el precio del petróleo disminuyó en los mercados internacionales, mejorando la situación de la balanza de pagos. Además, los precios del café, banano y azúcar aumentaron (erráticamente), produciendo no sólo ingresos adicionales sino mejorando los términos de intercambio, tan adversos en todo este tiempo.

Las otras sociedades de América Latina experimentaron mejorías apreciables. Los informes de la CEPAL en estos meses, reiteran este fenómeno preocupante. La recuperación –provisional, coyuntural, aleatoria– alcanzó a casi todas las sociedades latinoamericanas. Centroamérica, con una leve mejoría para Costa Rica, no experimentó en 1986 sino un crecimiento del 0.3% en el Producto Interno Bruto (el resto de América Latina fue de 3.4%), lo cual es un lamentable estancamiento. El Salvador sufrió los peores efectos, en tanto Guatemala y Nicaragua permenecían literalmente estancadas. (CEPAL, 1986, págs. 3-5).

En la experiencia de este último país cuentan sin duda numerosos factores externos y únicos. En el nivel de los gastos del Estado, la guerra no es sino el más brutal y evidente de los factores a los que la economía tiene que pagar un tributo permanente. En el plano de la dependencia de un país atrasado, el *embargo,* efectivo desde 1981, es el tributo que se le debe históricamente a la nación imperial de la cual se es 'periferia'. No sabemos cuál es la razón por la que los efectos sociales, políticos y económicos del embargo norteamericano a Nicaragua no se mencionan con más frecuencia. ¿Por qué no se pueden cuantificar? El bloqueo económico de los Estados Unidos en los organismos financieros internacionales, más algunos créditos de países europeos ofrecidos y luego cancelados por presiones norteamericanas, suman 169.8 millones de dólares. (*Newsweek,* 1987). Es poca cosa frente a los efectos producidos por el embargo a todos los repuestos de la inmensa dotación en fábricas, automóiles, servicios técnicos y hasta los más nimios utensilios caseros, que durante decenas de años fueron suplidos por empresas norteamericanas.

El envejecimiento de la infraestructura es rápido y la obsolencia causa desórdenes inestimables y además, irrecuperables. Ese es el precio más caro –vale decir, el de la dependencia– porque interrumpe los niveles de vida de la clase media aún antes que se practique política expropiatoria alguna o la inflación y otros efectos, disminuyan el ingreso.

No hay sociedad dependiente hoy día que sea capaz de soportar sin desórdenes internos un bloqueo total y sistemático (que incluye medicinas, implementos médicos de uso y destino civil) por parte de su antigua metrópoli, a menos que tenga los recursos –y las oportunidades– para suplirse en otros mercados. La actividad de los 'contras' refuerza el precio que la economía debe pagar a la política, en este caso a su continuación por otros medios: la guerra.

Pero volvamos a lo que es la crisis económica general. Persiste la pregunta clave: ¿Por qué las sociedades centroamericanas no han podido reaccionar favorablemente, aunque sólo sea en la coyuntura que se planteó en 1986? ¿Es que la economía norteamericana, o la de Europa o el conjunto de países capitalistas, ya no son la locomotora de arrastre para nuestras economías?

Empecemos por responder a esta última pregunta. El efecto profundo del desorden económico internacional, primero, y el conjunto de políticas aplicadas por las naciones más industrializadas para superar nacionalmente la crisis, después, han introducido profundos desajustes en lo que se ha llamado la tradicional división internacional del trabajo. Los arreglos entre Estados Unidos y Japón, por un lado, entre Estados Unidos y la Comunidad Europea por otro y entre los Siete Grandes, finalmente, son arreglos desde la cúpula de los países más desarrollados del mundo para resolver problemas básicos de comercio exterior, moneda, créditos y tecnología y seguridad. En esos arreglos los países de la periferia no solamente no son tomados en cuenta sino que muchas de las medidas aplicadas les han resultado perjudiciales, en los hechos, a los países exportadores de materias primas.

Lo anterior contrasta con la ausencia de concertación, mínima, inicial, entre los países menos desarrollados. O entre los países de América Latina y el Caribe. No ha habido posibilidad alguna de establecer un plan de acción destinado a superar la crisis que nos afecta con vistas al año 2.000. Esto ha demostrado que los países más desarrollados enfrentan problemas que pueden resolver más fácilmente en forma aislada, desentendiéndose del mercado mundial a la manera como lo venían haciendo antes. Esto tiene que ver con lo que algunos especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts llaman el "fin del ciclo de la integración económica mundial" iniciado en la postguerra. El manejo de la economía internacional se ha vuelto más difícil y el desentenderse de una acción global tiene efectos en el llamado "arrastre" que estamos esperando por parte de las naciones más desarrolladas.

Según la experiencia histórica en Centroamérica (y en América Latina), el crecimiento económico ha descansado básicamente en dos fuerzas dinámicas fundamentales (Gonzalo Martner 1987, pág. 18): a) la demanda extra-regional, es decir, las exportaciones internacionales y b) la demanda interna de los grupos sociales de altos ingresos, que es tanto como referirse a los efectos de la alta concentración de la riqueza

y del ingreso, que determina y condiciona cierta capacidad dinámica de las burguesías oligarquizadas de la región. La importancia de la demanda externa y de la transferencia de recursos externos a las economías nacionales periféricas ha cambiado totalmente. En Centroamérica, estos recursos externos se ausentan al parecer definitivamente. La crisis política ha contribuido a reforzar esta tendencia por lo demás identificable en otros países llenos de estabilidad.

La consecuencia básica de todo ello es que no es posible esperar que la recuperación económica de los países centrales, el mejoramiento de la economía norteamericana o formulado en términos aún más imprecisos, el restablecimiento de la dinámica del mercado internacional, puedan convertirse (de nuevo) en el motor de arrastre, en la locomotora que encabeza un trayecto al final del cual se encuentran, en ese movimiento trasmitido desde adelante, las sociedades del tipo de las de Centroamérica. Tampoco, *a contrario sensu,* se está proponiendo buscar la autosuficiencia nacional o subregional. Simplemente que el diagnóstico de las tendencias del cambio internacional sugieren un cauto pesimismo, ya que *todos* los países latinoamericanos emergen con un grado mayor de vulnerabilidad externa. Y esto no es sólo el resultado de la deuda (externa) sino sobre todo de los profundos cambios técnológico-productivos.

En relación a la primera pregunta acerca de la capacidad de la sociedad centroamericana para responder de manera razonablemente positiva al desafío de la crisis, los resultados experimentados en los últimos años son desesperanzadores. Todo esto puede ser adjudicado a la extrema vulnerabilidad regional, a su debilidad intrínseca. Queremos pensar también que *ideológicamente* estas sociedades han quedado malparadas por la introducción de una cadena de falsos problemas. De dicotomías que el pensamiento de la derecha, a la ofensiva, ha introducido como verdades fuera de toda sospecha. Así frente al supuesto fracaso del "modelo" (sic) de sustitución de importaciones habría que privilegiar el nuevo patrón de "exportar a como dé lugar". En relación al papel del Estado, la ofensiva neoliberal ha tratado de exhibir los malos resultados del Estado como empresario para 'devolver' a la empresa privada iniciativas que *naturalmente* le corresponden. Se enfrenta así el papel regulador del Estado con el que realiza, en otro nivel, el mercado.

Nuestra opinión es que se trata de enfrentamientos teóricos sin piso histórico. Hay todavía un margen de importaciones que pueden sustituirse con producción nacional; está lejos de haberse agotado el límite de capacidad endógena, pese a las dificultades creadas por la crisis. Y esto es perfectamente compatible con la búsqueda de nuevos rubros de exportación y de nuevos mercados. Pero menos sentido tiene la reiterada demanda de 'achicar' el Estado, para referirse –casi exclusivamente– a una demanda fondo-monetarista de terminar con el déficit fiscal, léase liquidar los proyectos sociales, en la medida en que éstos

constituyen una revalorización estatal de la fuerza de trabajo. El déficit fiscal puede originarse en los crecientes gastos militares. ¿Por qué no 'achicar' al Estado en su dimensión militar/represiva?

No obstante todo lo anterior, creemos que las dificultades que las sociedades centroamericanas exhibieron en momentos diversos de los años pasados para sacar provecho de coyunturas de crecimiento, se deben básicamente a la existencia de una profunda crisis política. La crisis es política –como lo hemos definido en numerosas oportunidades– porque cuando quedó planteada y luego, en sus desarrollos posteriores, constituyó un desafío fundamental al orden político, a los recursos tradicionales con los que el control y el orden se alcanzaban y porque en esa medida alteró las relaciones entre dominantes y dominados, colocando el tema del poder (el control del poder) como núcleo conflictivo. Se trata, en consecuencia, de una crisis política profunda por cuanto se desarrolló como una lucha armada por el poder y con la utilización de recursos de fueza y de violencia, especialmente por parte del Estado, se alteraron las formas tradicionales de subordinación política. Las subvierten en su sentido castizo.

Pero lo que en el inicio se veía de esa manera, en los últimos años ha ido cambiando de faz, en el sentido que ha habido desarrollos internos que alteraron el sentido inicial de la crisis. El más importante de esos desarrollos es la caída del régimen de Somoza y el triunfo sandinista, que significó el desbaratamiento de un Estado y de algunas de las estructuras más vulnerables del sistema de dominación. Las menos vulnerables, articuladas como en pocos casos a la economía y a la política norteamericanas, se mantienen, lo cual origina una crisis política de un significado nuevo para Nicaragua. Lo que está en crisis en Nicaragua es el sistema de dominación que tenía como uno de sus ejes al imperialismo norteamericano; es, en consecuencia, una crisis de la dominación norteamericana en Centroamérica, que en el caso de Nicaragua adquiere mayor densidad. La presencia de las bandas mercenarias llamadas 'contras' constituye, de hecho, la continuación de la dominación somocista que es resistida por las nuevas fuerzas políticas que encabezan o representan los sandinistas.

En la experiencia de Nicaragua la solución de la crisis provocada por la lucha popular contra la dictadura ha dado paso a otro tipo de crisis, creada por el proceso de cambio que es resistido en el interior por fuerzas civiles, pacíficas y fuerzas armadas patrocinadas por los Estados Unidos. Esto ha dificultado la creación de un sistema político definido a través de la integración institucional de las fuerzas sociales que apoyan la revolución. De hecho se viven situaciones de ambigüedad entre la democracia parlamentaria y el pluralismo político, por un lado, y la incorporación directa de las masas en la gestión de los asuntos del Estado.

Otros desarrollos también han sido importantes, aunque sean de signo contrario. La revolución salvadoreña ha resultado afectada de mil maneras por el triunfo sandinista. Nada más opuesto a la lógica de la historia que la 'teoría del dominó'. Ocurre justamente lo contrario. Un proceso de cambio revolucionario exitoso modifica de tal manera la correlación interna e internacional de fuerzas políticas, que vuelve por lo menos más prolongado en el tiempo, más cruento en vidas y más difícil técnicamente, el triunfo popular. El resultado ha sido intentos de largo aliento externo para estabilizar gobiernos civiles v controlar militar y políticamente los procesos de cambio. El Salvador ha cumplido con el ritual mínimo en esa dirección: asamblea constituyente, nueva Constitución, elección presidencial, nueva asamblea legislativa y junto a ello, intensos esfuerzos por profesionalizar y modernizar al Ejército, colocándolo al frente de responsabilidades inherentes a su función estatal. La historia de cómo conviven en una mutua destrucción un movimiento popular de vigorosas raíces internas con un gobierno civil, que se mantiene por el amplio respaldo del exterior, hace de El Salvador una experiencia ya reiterada en otros trópicos lejanos. Lo de este país tiene que ser visto, tal como se sugirió líneas arriba, como parte de la crisis de la dominación internacional en una zona geopolítica de tradicional control norteamericano.

Lo que vuelve paradójica la experiencia salvadoreña no es el fenómeno del enfrentamiento de fuerzas populares con un gobierno respaldado por los Estados Unidos, que por lo demás correspondería a una cierta tradición centroamericana, sino la feroz oposición que un sector empresarial realiza frente a un gobierno que, en primera instancia, está defendiendo los intereses de tal sector. Lo llamamos 'empresarial' porque así se autocalifican localmente. Es un conjunto abigarrado de propietarios de diversos tamaños de empresas agrícolas, comerciales e industriales que han logrado una gran unidad y sobre todo un grado relativamente alto de representación política. La sociedad civil salvadoreña al fortalecerse, ha producido una fuerza anti-estatal descomedida e insensata. El gobierno de Napoleón Duarte no llega ni siquiera al *status* de gobierno reformista, pero administra con dificultades una crisis de la que todos son responsables. ¿Cómo no contar con el apoyo crítico de las clases propietarias, responsables históricas de la llamada subversión?

La naturaleza de la crisis política en Guatemala fue distinta en sus orígenes y en su posterior desarrollo. Viene de más lejos y tiene un sentido más profundo por la existencia de una población indígena mayoritaria. En Guatemala no sólo se jugaron los problemas de la democracia y del bienestar social sino también de la discriminación racial y de una brutal injusticia histórica. La crisis guatemalteca incorporó entre sus elementos más explosivos la demanda indígena étnico-nacional, que operacionalizada significa el reconocimiento de líneas de explotación, subordinación y diferenciación social de base étnica. Lo que a su

vez puede conducir a la exigencia de autonomía cultural y política, teniendo como base identidades lingüísticas. Y así, a plantear el problema de la manera más radical pero más atrasada: Guatemala es una sociedad indígena y corresponde organizarla según los valores básicos de tal cultura.

Obviamente no fue el problema indígena el detonante de la crisis, que empezó literalmente, con la caída de Arbenz en 1954. Pero en 1979 fue evidente que la movilización popular era movilización campesino-indígena. Y a partir de ese momento las fuerzas 'del orden' encabezadas por los militares pero con inteligente asesoría civil y el apoyo de fuerzas sociales internas, decidieron practicar otro tipo de política. La contrainsurgencia puso la táctica de violencia brutal para castigar a los 'alzados'. Una política de desarrollo ha ido estableciendo la estrategia de combinar el mal trato con la solución de problemas más fundamentales. Lo trágico de Guatemala es que esta política no ha podido ser aplicada, entre otras razones, porque la crisis económica no ha dado margen para ello y porque el desarrollo de este país requiere una masiva asistencia económica norteamericana. Y ella tampoco ha podido obtenerse. Quedan como resultado de la contrainsurgencia de los años 80-82, casi 400 aldeas parcial o totalmente destruidas, 30.000 muertos, 60.000 refugiados en México y un número indeterminado de desplazados internos.

Curiosamente en los tres países mencionados hubo elecciones. Después de realizadas comprobamos que la democracia no es un tipo de sociedad solamente. Empieza por ser un tipo de sistema político. También aprendimos que en la transferencia de la soberanía al pueblo, que está en la esencia de la democracia, hay mil estratagemas para debilitar esa transferencia. Una de ellas son las elecciones. Las elecciones son parte del proceso de construcción de un sistema político democrático, pero requiere de condiciones adicionales. En momentos de guerra no hay espacio político reconocido. Se hace en la marcha mientras dura el proceso electoral. Pese a todo, las hubo y ellas constituyen fenómenos que no pueden desconocerse.

En El Salvador, el dilema en 1982 era el negociar con reformas, como lo querían ciertas fuerzas internas e internacionales; esa fue la propuesta del Frente Farabundo Martí, que tuvo su expresión más importante en el apoyo franco-mexicano a esa propuesta. Negociar era la demanda. El problema de la negociación fue objeto de un debate muy importante en el Senado norteamericano. Había que negociar, pero frente a esta propuesta de negociación, surgió la propuesta del Departamento de Estado. Fue el Departamento de Estado el que propuso elecciones con guerra en el momento en que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos era partidario de la negociación en cierta manera. Ganó la apuesta de elecciones con guerra. Y este tipo de elecciones son elecciones que han sido calificadas por autores norteamericanos como elecciones demostrativas o de vitrina.

Así que los procesos electorales en El Salvador fueron precipitados para mejorar la imagen interna del país con el objeto de poder apresurar los créditos de guerra. Está ya documentado cómo 24 horas después de las elecciones para la Asamblea Constituyente de El Salvador, estos créditos fueron dados por el gobierno norteamericano; o sea, hubo elecciones para acrecentar la guerra. Ese tipo de elecciones no producen democracia. Aumentaron el conflicto salvadoreño.

Las elecciones de Guatemala no tuvieron ese carácter. Sin duda, estas elecciones no pueden ser calificadas como elecciones "demostrativas". Tampoco apresuraron la guerra. Se pudieron hacer justamente porque el conflicto político armado había disminuido y porque el tipo de desgaste que el gobierno militar había tenido enfrentando al sector privado por la crisis, a la iglesia, al movimiento sindical, etc., lo obligó a organizar una retirada cuidadosa, estratégica, ordenada. Y cuando un ejército se retira de manera ordenada, no se retira porque ha perdido, como sucedió en Argentina, sino como parte de una estrategia contrainsurgente exitosa. Las elecciones de Guatemala tienen que ser entendidas en el marco de esta propuesta general.

Las de Nicaragua tienen que ser entendidas de una manera distinta. Fueron procesos electorales como en los otros dos países, para elegir una constituyente y elección presidencial. Yo diría que si la historia no miente, ninguna revolución ha hecho elecciones porque la revolución es un acto legitimador constituyente y por lo tanto, la legitimidad del triunfo de una revolución es suficiente por lo menos, durante un buen período de tiempo.

Las elecciones de Nicaragua se hicieron en buena medida porque la legitimidad revolucionaria puede *reforzarse* si se apoya en una consulta electoral, y probablemente este es el aporte que Nicaragua hace a la teoría de la legitimidad post-revolucionaria. Si hay elecciones mejor y las elecciones reflejaron no exactamente lo que la teoría política clásica diría: elegir gobernantes, sino para eso que Gramsci decía: las elecciones sirven sobre todo para medir la influencia de determinadas corrientes ideológicas y políticas en el seno de un conflicto en donde la clase obrera tiene que pasar gradualmente a ser hegemónica. O sea, la elección, según Gramsci, viene a ser una especie de termómetro de la influencia de determinada orientación política. Yo pienso que ese sentido gramsciano pudieron tener las elecciones en Nicaragua, que fueron desde el punto de vista de la técnica electoral iguales a las de El Salvador o a las de Guatemala. Iguales en el sentido de que hubo una ley electoral *ad-hoc* creada para ese proceso; Tribunales Electorales nuevos; una reorganización de las listas electorales; un empadronamiento general como el que hubo en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. De manera que desde el punto de vista técnico se parecieron mucho.

Los observadores del Parlamento europeo por un lado, la delegación de The Latin American Studies Association, por otro, y algunas otras instituciones calificaron a las elecciones de Nicaragua, como elecciones libres en el sentido de que las personas tuvieron como en Guatemala y El Salvador, posibilidad de elegir en el marco de una opción relativamente limitada.

El resumen que pueda hacerse de esta situación cruzada por crisis económica, guerra, intentos de democratización sin futuro, fortalecimiento de fuerzas conservadoras interna e internacionalmente, desconcierto entre la intelectualidad de izquierda, etc., es que vivimos una actualidad compleja, dramática y enfrentamos un horizonte esta vez difícil de preveer. La historia es la recreación del pasado hecha por algún contemporáneo. Se tiene la impresión, al hablar de estas cosas, que ciertamente la historia es presente que se analiza, es la problematización actual del pasado. Somos, inevitablemente, prisioneros del presente, condición que en una época de crisis tiende a acentuarse. De ahí la necesidad de formular alternativas y de buscar nuevos caminos. Tal es el sentido profundo de una crisis: la búsqueda de respuestas rastreando la historia, de la misma manera que los interrogantes del futuro puedan quedar vinculados, a esa búsqueda.

Como lo hemos dicho, no se trata de hacer futurología, sino de precisar algunas posibilidades de cambio, en base a factores que consideramos objetivos, sin olvidar que la imposibilidad de un proyecto sólo depende de nuestra voluntad y que ninguna acción humana puede dejar de tener una dimensión utópica. Renunciar a la lucha por lo imposible es aceptar la derrota de antemano.

Para finalizar esta presentación, que espero haya sido útil para ustedes, quisiera hacer referencia a tres opciones distintas que he encontrado en la abundante literatura sobre la crisis centroamericana. Ellas se mueven, como podrá verse, dentro de parámetros extremos. El máximo de objetividad conduce al cinismo, al realismo de la derrota. El máximo de utopía conduce al sueño paralizador. Juzguen ustedes dónde ubicar estas respuestas que no son las únicas ni las mejores, pero que son, sin duda alguna, muestras eminentes de lo que pueden ser las opciones para Centroamérica.

1. James N. Rosenau ha escrito un artículo en el que analiza las posibles adaptaciones nacionales de Centroamérica y las opciones en la década de los ochenta (Rosenau, 82). Intenta utilizar una teoría para explorar los dilemas en relación a la autonomía relativa y la coherencia interna de pequeños estados como los de Centroamérica. Dice Rosenau que todo Estado soberano y como actor internacional, se ve enfrentado a adaptarse a circunstancias cambiantes si quiere mantenerse como una unidad cohesionada y unitaria. La 'adaptación nacional', es entonces el proceso a través del cual las fluctuaciones de las estructuras del Estado no alteran su esencialidad, dentro de límites aceptables

por los miembros de ese Estado. La sobrevivencia del Estado nacional no es un problema teórico, sino que tiene que ser tratada como una cuestión empírica.

Se trata de un modelo que introduce 61 variables y posibilidades de mayor decisión interna o de mayor-menor influencia externa. La construcción de una matriz (cluster analysis) con la variabilidad de la información produce diversas formas de adaptación nacional que van desde la inmovilidad hasta las adaptaciones con cambios radicales. En ese movimiento, los pequeños estados pueden desaparecer como tales, quedar sujetos a controles externos, entrar en procesos lentos de desintegración, o salir lentamente de la turbulencia manteniendo su integridad. Se trata de un ejercicio teórico y estadístico que no saca conclusiones acerca del futuro de Centroamérica, pero que sugiere un abanico de posibilidades según se produzca el comportamiento de las élites militares, de las fuerzas guerrilleras, de los empresarios, del Estado. La sabiduría unificada de tales actores, en un sentido de salvación nacional, es lo único que puede evitar que alguno o varios de los países de la región fallen en su proceso de 'adaptación' y se pierdan como estados nacionales viables.

2. Richard S. Newfarmer (Blackman et al. *The Economics of strife,* 1985) es uno de los muchos autores que reconocen que sólo una masiva ayuda externa –en este caso norteamericana– puede ayudar a resolver el doloroso período post-crisis en Centroamérica. Para ello es necesario cambiar el sentido de la asistencia actual. Reconoce que ese país ha contribuido con más de 3 billones de dólares en ayuda a Centroamérica entre 1980-85, justamente cuando el PIB per cápita empezó a caer y cuando se estancaron las economías nacionales de la región. ¿Qué pasa, entonces? Reconoce que aparte de esta ayuda, entre un tercio y la mitad de las exportaciones de la región van al mercado norteamericano y una proporción relativamente mayor sale de este a los mercados de la región. Más de tres cuartos de la inversión extranjera directa y de la deuda privada corresponden a corporaciones norteamericanas. Se trata de una relación asimétrica, pues el comercio entre la región y Estados Unidos apenas representa el 2% del total de éste. Por eso lo que haga la economía norteamericana, dice Newfarmer, tiene un efecto extraordinario, multiplicado, en las pequeñas y débiles economías de Centroamérica.

Indica, por ejemplo, cómo una recuperación del crecimiento económico de los Estados Undios equivalente a un 5% del PIB, puede significar que crezcan las exportaciones regionales y se obtengan ingresos de cerca del 6,5%, cuatro veces más de lo que se ha logrado hasta ahora en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Así, afirma, una política macroeconómica profunda en los Estados Unidos combinada con un programa de ayuda bien diseñado, puede hacer la mayor contribución hoy día para la recuperación económica. Analiza varias posibilidades

y reconoce que este tipo de ayuda es inseparable de reformas sociales y cambios estructurales en Centroamérica, para alcanzar una nueva estabilidad. Es un ¡ayúdate que nosotros ayudaremos! dicho por alguien qu ve con simpatía los cambios posibles en la región.

3. Finalmente, en la literatura y nuestras discusiones de los últimos años ha estado presente una propuesta de cambio regional, incluyendo el Caribe, cuyo expositor más conspicuo aunque no el único es Xabier Gorostiaga, aquí presente. Xabier se plantea el principio de una estrategia autónoma para la región, que parte del reconocimiento de sus grandes diferencias, pero la posibilidad de coincidir en un nuevo modelo económico y político que esté organizado con la lógica de las clases dominadas. La *lógica del desarrollo* siempre es una *lógica de clase.* Tenemos que pensar en 'la lógica de las mayorías'. Sólo así, por ejemplo, tiene sentido la política cepalina de satisfacer las necesidades básicas. Sólo las mayorías puden definirlas. Pero además, ésto está vinculado a otro principio: las transformaciones políticas y económicas no pueden ser realizadas para la mayoría a menos que sean dirigidas por la mayoría.

La incorporación de las mayorías al proceso político genera enormes energías y grandes riesgos. Uno de ellos es el de tratar de presentar el consumo de la clase media como el modelo para toda la sociedad. Gorostiaga (Irvin, Gorostiaga, 1985, pág. 31) proclama que las transformaciones sociales tienen que hacerse en el marco de una *civilización de la austeridad.* La propuesta alternativa incluye, por supuesto una visión plural y diversa de la política, el desligamiento de cualquier compromiso militar con las grandes potencias y el reconocimiento de que hay una condición geopolítica que no podemos olvidar.

Hay muchas cosas para pensar. Y aún muchas más por hacer.

BIBLIOGRAFIA

Kristol, Irving, *Reflexiones de un Neoconservador,* GEL, Buenos Aires, 1986.

Dahrendorf, Ralf, *Las oportunidades de la Crisis, reflexiones sobre el futuro del liberalismo,* Unión Editorial S.A. Madrid. 1983.

CEPAL, *Balance Preliminar de la Economía Latinoamericana en 1986.* Notas No. 438/439. 1986.

Newsweek, Nicaragua: an Economy in trouble, Edición del 22 de junio, 1987. No. 25. 1987.

Martner, Gonzalo, *La situación internacional: perspectiva hacia finales del siglo,* doc. a mimeógrafo, a publicarse en *Polémica.* 1987.

Eural, *Crisis y Regulación Estatal: dilema de política en América Latina y Europa,* GEL, Buenos Aires. 1986.

Irvin, George and Gorostiaga, Xabier, ed., *Towards an Alternative for Central America and the Caribbean,* George Allen & Unwin, London. 1985.

Feinberg, E. Richard, *Central America, International Dimension of the Crisis,* Holmes & Meier Publishers, Inc., New York. 1983.

Blackman, Leogrande and Sharpe, ed., *Confronting Revolution: security through Diplomacy in Central America,* Pantheon Books, *New York.* 1986.

De cara al desafio centroamericano: la politica exterior de Costa Rica en 1986

Carlos Sojo Obando

Desde los albores de la década, los cambios experimentados en el espectro político centroamericano han acentuado las tendencias predominantes en la definición de la política exterior costarricense. La presencia de Costa Rica en el más inmediato ámbito de la influencia de los Estados Unidos ha dejado, históricamente, poco margen para la construcción de una política exterior autónoma, fundada en los intereses de seguridad del país y en el respeto y la convivencia con regímenes políticos diversos. Esta situación se ha agravado con el advenimiento de la era reaganeana, antecedido por la victoria del movimiento insurreccional sandinista, que marcó el inicio de una nueva etapa del intervencionismo norteamericano en Centroamérica.

Estas circunstancias señalan los límites para la formulación de la política exterior costarricense: por un lado, aquellos que tienen su origen en la estrategia de reconquista hegemónica de los Estados Unidos y, por el otro, aquellos que nacen de la necesidad de preservación de la estabilidad económica, política y social del país. Generalmente en el análisis de la política exterior costarricense, se ha tendido a interpretar como "externos" los intereses que motivan el intervencionismo norteamericano en Centroamérica, contraponiéndolos a los "internos" que se expresan en la preservación de la paz social y la estabilidad política costarricense. Esta separación, empero, deja de lado una precisión de importancia cardinal.

En efecto, el conflicto centroamericano se ha constituido en un punto descollante de la confrontación política mundial, razón por la cual, en el interior de la sociedad costarricense existen sectores sociales que actúan como soportes internos de la estrategia norteamericana, mientras que fuera de ella, en el seno de las comunidades políticas de otros países de América Latina, Europa Occidental e incluso de los Estados Unidos, surgen movimientos por la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos centroamericanos, en contra de la injerencia y la agresión externa; se trata, en suma, de movimientos que luchan

por el respeto a la soberanía de los países del área. De este modo, la política exterior expresa no sólo las tensiones entre los grupos sociales internos, sino también las que se manifiestan en el sistema político internacional. No está por demás señalar, que lo que entenderemos en adelante por política exterior remite de manera exclusiva a la dinámica que se establece entre los gobiernos costarricenses, propiamente la Administración de Oscar Arias, con los distintos sectores sociales nacionales y con algunos actores extranacionales, dinámica que tiene como resultado la adopción de distintas posturas ante ese complejo de tensiones y contradicciones que es el conflicto centroamericano.

La estabilidad y la convivencia frente al intervencionismo fueron, durante el período de Monge, extremos opuestos del movimiento pendular de una política exterior, ciertamente contemporánea con el auge del reaganismo y, por ello, sumergida en un pantano de exigencias difícilmente solventables de acuerdo a los intereses internos.

Los resultados reflejan con claridad esa contradicción: una proclama de neutralidad, acompañada de una permanente confrontación diplomática con Nicaragua, funcional para los intereses hegemónicos norteamericanos, y de cierta indiferencia por parte del gobierno frente a los movimientos de la contra en el suelo costarricense.

Monge, de acuerdo con el precepto constitucional, fue substituido en mayo de 1986 por un nuevo presidente liberacionista que intenta convertir la política exterior, particularmente aquella dirigida hacia el conflicto centroamericano, en una de sus preocupaciones centrales. En medio de una situación que amenaza con la prolongación del actual conflicto ístmico, cuyas secuelas económicas y sociales se vuelven cada vez más dramáticas para las sociedades centroamericanas, la Administración de Oscar Arias busca enfrentar con nuevos contenidos la contradicción existente entre una política norteamericana que lleva implícita la regionalización del conflicto militar y la pretensión de mantener a Costa Rica al margen de los horrores de la guerra, conservando su paz interna y su estabilidad económica y política.

En las páginas siguientes pretendemos identificar, en primer lugar, los rasgos generales de la política centroamericana de la Administración Arias durante sus primeros diez meses de gestión: en segundo lugar, analizar los resultados más significativos de esta política, tanto en el plano interno como en el internacional, para finalmente, valorar las posibles formas de evolución de la política exterior costarricense, en el contexto del proceso de cambio social por el que transita esta sociedad.

¿Cuáles son los ejes sobre los que se articula la política de la Administración Arias hacia Centroamérica?

La política centroamericana de la Administración Arias, en los diez primeros meses de su gestión, ha estado articulada en dos ejes: uno

pasivo, definido por los contenidos que son retomados del pasado mongista y que expresan el carácter contradictorio de la política costarricense hacia Centroamérica y su conflicto; el otro, *activo*, que resume las nuevas formulaciones de la Administración Arias, cuyo propósito es, a grandes rasgos, el de conciliar las contradicciones que se generan al tratar de mantener una política de neutralidad, y al mismo tiempo apoyar o simplemente aceptar los intereses estratégicos de los Estados Unidos en Centroamérica.

El eje pasivo

Los contenidos básicos del eje pasivo, pueden ser resumidos de la siguiente forma: en primer instancia la preservación de la política de neutralidad, fundada en una valoración positiva de su eficacia para la defensa interna. Pero como Arias, al igual que Monge, no se preocupa por llevar a la neutralidad más allá del límite de los conflictos militares entre estados, su vigencia se mantiene dentro de estrechos marcos. Sin embargo, la preservación de esa forma de neutralidad resulta significativa, pues en ella se refleja además, cierto interés de la Administración Arias por fomentar una aplicación más ortodoxa de dicha política.

En segunda instancia, al igual que en el período anterior, la política centroamericana del Gobierno de Arias se funda en la conceptualización del conflicto centroamericano y particularmente del problema de Nicaragua, como resultado directo de la lucha geopolítica mundial, planteamiento que resulta concordante con los supuestos del Gobierno norteamericano sobre la crisis regional. En otras palabras se procura colocar en un lugar secundario las causas estructurales de los procesos de cambio social. Esta percepción acerca del carácter de las fuentes de la crisis regional indica, por otra parte, la adopción de un principio de política exterior bastante utilizado en la anterior administración que aquí denominaremos "pragmatismo geopolítico". En efecto, se adopta una política pro-norteamericana ante la crisis regional debido a la convicción de que en medio de las dificultades económicas del país y frente al prolongamiento indefinido de la guerra en Centroamérica, la condición de "aliado" de los Estados Unidos, deseada o no, es vital para la preservación de la estabilidad política y social del país.

El eje activo

Sin embargo aún cuando el Gobierno actual no desconoce la presencia de los límites que se impusieron para la formulación y ejecusión de la política exterior costarricense entre 1982 y 1986, sí desarrolla una serie de medidas en política exterior que buscan conciliar la contradicción existente entre la preocupación por mantener a Costa Rica lejos de la guerra, y la adhesión a las formulaciones estratégicas de los Estados Unidos para la región. Esta actitud conciliadora, origina lo que he-

mos llamado el "eje activo" de la política de Costa Rica hacia el conflicto regional, cuyas expresiones más significativas son las siguientes: en primer término, la oposición explícita del Gobierno actual a la imposición de soluciones militares para la crisis regional. Las características más sobresalientes de esta postura son el rechazo a la ayuda económica de Washington a la contrarrevolución nicaragüense, la colocación de mayores obstáculos para las actividades de la "contra" en territorio costarricense y, como recientemente ha sido revelado por los coletazos del escándalo Irán-contras, la negativa gubernamental ante las presiones del Gobierno estadounidense para que se permitiera el uso del territorio costarricense en acciones militares contra el Gobierno de Managua. Las implicaciones contrahegemónicas de esta postura no pueden ser subestimadas, no obstante, pareciera ser que ese carácter fuertemente contrario a algunas de las tesis y propuestas norteamericanas para el conflicto de Centroamérica, se intenta compensarlo por medio de una ofensiva en el ámbito político diplomático, mucho más consistente que en la anterior Administración.

En efecto, como contrapartida de su "antimilitarismo", la Administración Arias intenta promover fórmulas para la creación en el ambiente político regional de lo que el canciller Madrigal ha denominado "una amigable presión política" hacia Nicaragua, nación que es concebida como la causa de los problemas políticos de Centroamérica. Las propuestas concretas que en este sentido ha dirigido la Administración del Presidente Arias han sido la llamada "alianza democrática latinoamericana"[1] y, más recientemente, la propuesta para una "paz firme y duradera en Centroamérica", que sin duda tiene como antecedente inmediato el fallido intento del 8 de mayo de 1986, destinado a promover un cronograma de cambios políticos para Centroamérica.

Sobre la base de estas formulaciones, además de buscar salidas nuevas a la dicotomía que plantean las exigencias de paz y alineamiento, la Administración Arias podría buscar la consolidación de una especie de "hegemonía de segundo grado" que consiste, según Heinz Sonntag,[2] en la posibilidad que tienen algunos estados, situados en posición de

1. No deja de llamar la atención que a pesar del clima aperturista que en ocasiones tiende a predominar en el manejo de los asuntos externos por parte del Gobierno actual, algunas de las iniciativas tienen un antecedente directo en fórmulas impulsadas durante la etapa "volista" de la Administración Monge, momento en el que los planteamientos conservadores dominaban el panorama político en torno al papel de Costa Rica en el conflicto regional. La propuesta para una Alianza Democrática Latinoamericana es sin duda descendiente del Foro pro Paz y Democracia que impulsó Volio en los primeros meses del Gobierno anterior. Lo importante de estas propuestas, no obstante es que si bien es cierto entre 1982 y 1983 no indicaban la existencia de un planteamiento alternativo al de Washington, actualmente una propuesta eminentemente política sí puede resultar incómoda para la Administración Reagan.
2. Sonntag, Heinz R., "El Estado, la seguridad y la paz en América Latina", en: *El Estado, la seguridad y la paz en el Salvador y América Latina*, CINAS, Cuaderno de Divulgación No. 1, México 1986, p. 16.

subordinación en el sistema interestatal, de disminuir "el margen de limitación de su soberanía y (aumentar) su facultad de garantizar la paz y la seguridad externas de sus sociedades". Esta hegemonía tendría dos propósitos fundamentales: primero, separarse de la imagen de "país involucrado" en el conflicto, que iniciativas como la de Contadora han contribuido a forjar, poniéndose del lado –y no sumándose– de quienes formulan alternativas para la solución de la crisis regional; segundo, limar las asperezas que se han producido en las relaciones con América Latina y Europa Occidental, como resultado de la política centroamericana de Costa Rica, mostrando al mundo que Costa Rica tiene también independencia de criterio ante la crisis regional y posiblemente allanando el camino para una cooperación económica más estrecha que permitiera solventar las eventuales reacciones de Washington.

Es preciso señalar, no obstante, que en la medida en que no se modifican sustancialmente los ligámenes de subordinación internacional del país,[3] los acontecimientos recientes han mostrado que existe una correlación inversa entre la posibilidad de contar con el respaldo político de la Casa Blanca y, simultáneamente, pretender cierta hegemonía en Centroamérica, que transformara de manera sustantiva la imagen de "servilismo" que predominó en el período de Monge. Este choque de expectativas constituye un marco posible para las discrepancias que, en el corto y mediano plazo, pudieran presentarse entre Estados Unidos y Costa Rica.

Pero, más allá de las intenciones implícitas o explícitas de la política exterior costarricense en los primeros meses de la Administración Arias, cabe preguntarse, ¿cuáles han sido los resultados hasta ahora obtenidos?

Los resultados

Volviendo la mirada a los años del Gobierno de Monge, parece evidente que el resultado más significativo de la política centroamericana del actual Gobierno, en sus primeros meses de gestión, ha sido la superación de buena parte de las contradicciones con los sectores conservadores locales.

En efecto, en contraste con el interregno que pareció dominar el manejo de las relaciones exteriores de Costa Rica en algunos momentos del período de 1982 a 1986, Arias y su Canciller han llevado la voz cantante sobre los asuntos de política internacional, logrando el respaldo no sólo de los distintos ámbitos del aparato gubernamental, sino también de los sectores más conservadores de la sociedad civil.

3. A pesar de algunos esfuerzos gubernamentales dirigidos a la "diversificación de la dependencia", los Estados Unidos tanto en el aspecto financiero como en el comercial, siguen siendo el principal soporte de la economía costarricense.

Es posible afirmar que el *quid* del apoyo de los conservadores locales y de los grupos empresariales y políticos moderados, hacia las acciones internacionales del Gobierno actual, estriba en la unidad de criterios alrededor de la preservación de un ambiente pacífico en el plano interno que propicie mayores niveles de inversión desde el exterior. Del mismo modo, pareciera existir una suerte de acuerdo general sobre la necesidad de evitar la expansión indefinida, territorial y temporal, de la guerra centroamericana. Sin embargo, por paradójico que parezca, las razones que hacen posible este acuerdo general son las que, al mismo tiempo, provocan su vulnerabilidad.

El cálculo económico sin duda se coloca por delante en la línea de intereses de los sectores conservadores, por esta razón, mientras la política exterior no se convierta en un factor de desestímulo para el ingreso de capitales norteamericanos, públicos o privados, la Administración Arias podría contar con un espacio relativamente amplio para el desarrollo de sus objetivos internacionales. No obstante, en el momento en que determinado rumbo en política exterior, arroje como resultado algún tipo de sanción económica por parte de Estados Unidos por ejemplo, muy posiblemente se empezarían a erosionar las bases del acuerdo interno provocando una serie de demandas y exigencias al Ejecutivo por parte de las bases políticas conservadoras y, con probabilidad, mostrando que lo que se presenta como un sólido bloque gubernamental –al menos en materias internacionales– no lo es tanto. La política hacia Nicaragua, que en momentos parece encaminarse firmemente hacia la normalización en las relaciones bilaterales, junto con el llamado "Plan de Paz", constituyen los puntos críticos en el inestable equilibrio de fuerzas dentro y fuera del Gobierno en torno a los asuntos centroamericanos. La ruptura de ese acuerdo, es muy probable, vendrá por una de esas dos vías.

Otro de los resultados que produce la política exterior de la actual Administración, es el de oponer obstáculos cada vez más infranqueables para los intentos de presentar formulaciones alternativas a las oficiales, fundadas en una amplia movilización popular en torno a la necesidad de preservar la paz y la neutralidad de Costa Rica. Esta situación puede ser el resultado, justo es reconocerlo, de las dificultades que objetivamente existen para oponer criterios novedosos a las formulaciones gubernamentales[4] y, también, a algunos contenidos de la política nicaragüense hacia Costa Rica que, al margen de otras consideraciones, no favorecen la distensión. No sopesar los alcances políticos de las diferencias de regímenes gubernamentales entre los distintos países componentes de la región, pareciera ser, por el momento, una de las principales limitaciones de la acción diplomática de Nicaragua hacia Costa Rica; ciertas

4. Básicamente nos referimos a los mismos problemas de tipo ideológico y estratégico que impiden la construcción de un proyecto social-global alternativo, fundado en los intereses de los sectores populares.

actitudes no sólo se han mostrado como agudizadoras del antisandinismo interno, sino también como obstáculos para quienes pretenden solidarizarse con los procesos de transformación social que buscan el bienestar de las mayorías. Los términos en que se formuló la acusación del Gobierno de Managua contra el de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, puede ser un ejemplo de esta equivocada valoración de las condiciones políticas específicas de cada país centroamericano, sin embargo, el efecto negativo sobre las relaciones bilaterales parece ser más bien el resultado de la "histeria nacionalista" desatada por los grupos conservadores del país ante la demanda de Nicaragua.[5]

Puede ser resultado también, de la promoción del consenso conservador, que acusa toda oposición al discurso oficial de prosandinista y antipatriótica, dificultando el trabajo de quienes luchan por metas tan nacionales como la neutralidad y la paz. La limitación de espacios para la discrepancia en torno a asuntos de política centroamericana, incluye también cierta tendencia hacia la institucionalización de la lucha por la paz, descargando el concepto de toda referencia a situaciones concretas y colocándolo como un "valor" más de la democracia costarricense. En todo caso, este último aspecto podría valorarse como un avance positivo, si se toma en consideración que en el pasado reciente, la incitación a la violencia y las arengas guerreristas, fueron contenidos importantes en el prontuario de los conservadores dentro y fuera del Gobierno.

Un tercer resultado tiene que ver con la existencia de fuertes discrepancias entre el Gobierno costarricense y los Grupos de Contadora y de Apoyo, en torno al tipo de solución para la crisis centroamericana, que dominó buena parte del período inicial de la Administración Arias. La desconfianza de estos países latinoamericanos en torno a la política centroamericana del Gobierno costarricense, se originaba en el hecho de que todo el planteamiento costarricense en torno a Centroamérica partía del desconocimiento de la progresión del proceso político nicaragüense, y sus propuestas a diferencia de las plasmadas en el intento mediador de Contadora, eran a menudo transparentes intervenciones en los asuntos internos de ese país. La mediación latinoamericana en Centroamérica, parte del reconocimiento de la legitimidad de los gobiernos centroamericanos, incluido Nicaragua. Para el Gobierno costarricense, por el contrario, mientras los demás países centroamericanos han cruzado los umbrales de la democracia, Nicaragua permanece a la sombra del totalitarismo.

A pesar de esas discrepancias, el planteamiento oficial costarricense y las opciones apoyadas por América Latina son coincidentes en el

5. Un análisis más detallado de las implicaciones internas de la acusación contra el Gobierno de Costa Rica se encuentra en CEPAS, *Costa Rica: balance de la situación*, No. 17, agosto-setiembre de 1986, pp. 3-11.

rechazo de toda solución de tipo militar para la crisis regional. Es precisamente este elemento –colocar el acento en la necesidad de soluciones de carácter político para la crisis centroamericana– lo que no ha favorecido mucho las relaciones entre San José y Washington, pues para la Administración Reagan la búsqueda de soluciones negociadas simplemente posterga la posibilidad de dejar resuelto el problema de Nicaragua. Sin embargo, no sería exacto derivar de lo anterior una situación de congelamiento de las relaciones entre ambos países, por dos razones principales. En primer lugar, porque posiblemente los estrategas derechistas más radicales de la política norteamericana suponen que, aunque se rechacen las opciones militares, la agresividad y el intervencionismo del discurso oficial costarricense contra Nicaragua, aunque no lo comprometen con eventuales acciones militares, contribuyen a justificarlas. En este sentido, los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado estarían interesados en demostrar que las iniciativas de negociación política no dan resultado en Nicaragua, por lo que la presión militar (directa o por medio de los contras) sigue siendo necesaria.

En segundo lugar, porque en el momento en que la Administración Arias desarrolla con mayor vigor su propuesta de pacificación para la región, el ejecutivo norteamericano se encuentra en medio de la crisis política más importante desde 1981. Esta situación sin duda le ha abierto a la Administración Arias un espacio para la negociación con Washington que no existió durante el período de Monge y que, por otra parte, se ha visto fortalecido con el profundo respaldo de la oposición demócrata de los Estados Unidos para los planteamientos diplomáticos costarricenses. El IRANGATE y la mayoría Demócrata en el Capitolio han sido los principales aliados de la política centroamericana del Gobierno costarricense en los primeros meses de 1987.

Ambos elementos, sumados a una agresiva gestión diplomática, han convertido al plan de paz costarricense en una alternativa real para la opción militar promovida por Washington y los grupos más conservadores centroamericanos. Esta situación ha sido reconocida por los países de Contadora y Apoyo que han mostrado su complacencia ante la propuesta costarricense. Del mismo modo, ésta ha sido recibida con agrado en varias naciones de Europa Occidental. A ojo de pájaro todo parece indicar que, en buena parte por el influjo de la crisis en Washington, la política exterior costarricense pasó del fondo del alineamiento al camino que conduce a la cima del antintervencionismo. Pero, ¿qué se puede esperar para el futuro inmediato? ¿Cuánto más podrá sostenerse una política exterior que propone procedimientos para la solución de la crisis de la región, distintos de los que promueve la Casa Blanca?

El futuro inmediato

Una correcta valoración de las posibilidades y los alcances de la política exterior costarricense debe necesariamente enmarcarse dentro

de los condicionamientos que impone el rumbo tomado por la sociedad en su conjunto.

En un horizonte de rearticulación de la economía al mercado internacional, de transformaciones internas que amenazan con modificar sustancialmente la forma y funciones del Estado costarricense, predominantes desde la década de los cincuenta, en la política exterior se presentan, ineludiblemente, todos los síntomas de la tonalidad neoliberal y neoconservadora.

En primer lugar, la existencia de un consenso básico[6] alrededor de los asuntos centroamericanos entre el Gobierno, los partidos políticos dominantes y los sectores empresariales, no permite la confrontación real con los grupos sociales que sostienen posiciones alternativas o simplemente discrepantes. Resulta trágicamente irrisorio que el único requisito para "hacer nacionales" las propuestas del Gobierno, sea el diálogo con Rafael Angel Calderón, principal dirigente del Partido Unidad Social Cristiana. En estas circunstancias, no sólo está en juego la paz de Centroamérica, sino también la posibilidad de un diálogo nacional alrededor de los asuntos que atañen al país en su conjunto. El sistema político costarricense parece volverse cada vez menos permeable a la confrontación política real.

En segundo lugar, sería equivocado suponer que, por mero voluntarismo gubernamental, la política hacia Centroamérica pueda, en el corto plazo, derivar hacia formas alternativas: apoyo incondicional a la iniciativa de Contadora, establecimiento del diálogo bilateral para la solución de las diferencias y los incidentes con el Gobierno de Managua y el reconocimiento a la ilegalidad del intervencionismo norteamericano en la región. La propuesta global neoconservadora es consustancial con las posiciones que, en materias internacionales, han adoptado los últimos gobiernos liberacionistas. En este marco, el pragmatismo geopolítico, es decir el apego mayor o menor a las políticas de Washington, no es solamente una forma de conformismo fatalista, se trata de la derivación lógica, más aún vital, de las transformaciones que afronta la sociedad costarricense.

Durante los dos últimos gobiernos del Partido Liberación Nacional, dos factores se han mantenido en permanente tensión, en relación con el manejo de los asuntos centroamericanos. Por un lado los límites que impone la política norteamericana hacia la región y, por otro, la intensidad de los intereses de seguridad nacional, ambos factores estrecha-

6. El hecho de que exista un "consenso básico" entre los sectores dominantes nacionales en torno a las materias que tienen que ver con Centroamérica y su conflicto, no debe interpretarse como la ausencia de contradicciones entre estos sectores.

mente vinculados con la intención gubernamental[7] por ampliar o mantener los límites en beneficio de una u otra dirección. Este marco de análisis general, facilita la comprensión de situaciones como las siguientes: Monge desarrolló su política centroamericana en el período de ascenso y gloria del reaganismo, lo cual le dejó un espacio sumamente limitado para ensayar formas alternativas de enfrentamiento de las relaciones con Centroamérica. Pese a ello, Monge pudo desarrollar políticas de contensión como la neutralidad, aunque de todas formas no pareció mostrar una determinación sólida por despegarse las ventosas de la coacción económica.

Para Arias el panorama se mostró sumamente favorable después del segundo semestre de su gestión. En efecto, los primeros seis meses se caracterizaron por una constante procesión de funcionarios norteamericanos de distintos rangos y niveles de influencia que coreaban un retorno al pasado mongista. Luego, los efectos del IRANGATE abrirían nuevas posibilidades para el mandatario costarricense. Aunque el escándalo de Washington no haya acabado con la influencia del reaganismo en el rumbo y contenido de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, por lo menos le ha restado credibilidad y ha limitado su impacto sobre algunos gobiernos como el costarricense, que han aprovechado la ocasión para desarrollar una política exterior más activa. La actitud costarricense no debe ser despreciada, o valorada a la ligera como simple manipulación de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Su importancia radica en el hecho de que efectivamente muestra una disposición en favor de soluciones pacíficas para los problemas de la región.

Pese a lo anterior, aún es pronto para suponer que los gobernantes costarricenses hayan adoptado una solución de convivencia con el actual régimen político nicaragüense, pues más allá de las diferencias en cuanto a los procedimientos, el acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica en torno a la reversibilidad del proceso de cambio social en Nicaragua, refleja la vigencia del principio básico de la intervención norteamericana en el Tercer Mundo: no es suficiente con "detener la amenaza comunista", hay que hacerla retroceder. Como lo ha declarado ante el mundo, con la utilización de medios de presión política, la Administración Arias intenta afrontar la eventual consolidación de "un régimen de ideología marxista totalitaria en nuestras fronteras".[8]

7. Sería incorrecto considerar esta "intención gubernamental" al margen de las posibilidades que establece el juego político interno. En todo caso, la experiencia reciente autoriza afirmar que en buena medida las intenciones propias del Presidente (que influyen en la selección de sus colaboradores ministeriales) siguen siendo significativas en el resultado y la orientación de la política exterior costarricense.
8. Discurso del Presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de setiembre de 1986.

La conclusión que se deriva de estos elementos es la siguiente: mientras en Costa Rica se siga impulsando un modelo de sociedad que no sólo mantiene los ligámenes actuales de subordinación internacional sino que los profundiza, (sería equivocado suponer que las consecuencias de ello sólo se expresan en el ámbito económico), es improbable que los contenidos de la política exterior costarricense vayan a ser sustancialmente modificados.[9] Decimos sustancialmente modificados, puesto que, como se señaló la evidencia indica cambios en la posición respecto de las soluciones de carácter militar, cambios que tienen expresión en la agresiva diplomacia de la Administración Arias (a pesar de que Monge nunca optó por soluciones militares, tampoco se opuso explícitamente a ellas), pero en esencia se sigue pensando en la posibilidad de instaurar un "régimen democrático" en Nicaragua como la solución ineludible de la crisis centroamericana.

El problema es que, en la medida en que todo el planteamiento radica en la exigencia de una democratización de la región, pero dejando de lado cualquier valoración sobre los contenidos materiales y la vigencia real de la democracia en todos los ámbitos de la vida social, se están legitimando las razones que impulsan el proyecto de recuperación hegemónica de los Estados Unidos sobre Centroamérica.

El problema no parece ser, entonces, la necesidad real de consolidar y profundizar la democracia en todos los países del área, sino más bien, la de evitar que los Estados Unidos se enfrenten unos pocos miles de kilómetros de Washington, con un sistema social que cuestiona su dominio. La democratización que favorece los Estados Unidos (que sin duda es la misma que favorece el Gobierno costarricense), no parece contemplar la posibilidad de un desafío a su dominio, según manifiesta el científico social norteamericano John Peeler.[10] Como resultado de su política centroamericana actual, Arias podría consolidar su hegemonía secundaria en Centroamérica (siempre y cuando Honduras, El Salvador y Guatemala asuman las implicaciones que podrían derivarse del apoyo a las tesis costarricenses); pero a la larga, ello no haría más que mostrar los profundos condicionamientos de la soberanía nacional.

Al paso que marchan los acontecimientos, Costa Rica llegará al año 2000 convertida en una sociedad ultra conservadora, con un pronorteamericanismo extremo y, posiblemente menos democrática. Su política exterior permanecerá plegada, a veces más a veces menos, al mandato de

9. En este sentido, la reacción de los conservadores locales podría impedir la realización de un proyecto de autonomización de la política exterior del país, impulsado desde el Poder Ejecutivo. Por supuesto si fuera posible suponer tal actitud de parte del Gobierno actual, lo que a estas alturas no parece ser tan evidente.

10. Peller, John A., "La democracia, la convivencia y la política Centroamericana de los Estados Unidos", en: *Relaciones Internacionales*, No. 14, Primer Trimestre de 1986. Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional, Heredia, pp. 37-42.

los jefes de la Casa Blanca. Por ello, mientras la sociedad costarricense no corrija el rumbo actual de sus transformaciones, es sumamente improbable que los objetivos de la política exterior se modifiquen en aras de los intereses de las mayorías y del respeto y la convivencia con los demás gobiernos y naciones. Los procedimientos que se avalen en materias internacionales, podrán verse modificados, en parte por la influencia de la coyuntura internacional y, como se ha dicho, por la disposición de los gobiernos por ampliar o simplemente aceptar la dimensión de sus ámbitos de autonomía.

Un cambio de los objetivos de la política exterior costarricense, no obstante, solo podrá producirse en la medida en que se desarrollen nuevas estrategias para enfrentar los problemas que hoy en día son comunes a la mayor parte de países de América Latina y del Tercer Mundo en general. Las estrategias para hacer frente al problema de la deuda externa, al deterioro relativo y constante de los precios de nuestros productos de exportación en el mercado mundial, al desarrollo de nuevas actividades productivas de exportación y de consumo interno, todo ello en pos de un mejoramiento real de las condiciones de vida y de trabajo de los grupos mayoritarios, forman parte de un proceso global —nacional e internacional— de redefinición de nuestra subordinación a los centros directores del sistema político y económico mundial.

Coyunturalmente y en el corto plazo, favorecer propuestas políticas frente a las amenazas militares que se ciernen sobre el istmo centroamericano, parece ser una actitud positiva. Pero, en adelante, las propuestas individualistas deberán abandonarse en procura de un fortalecimiento del proceso colectivo que busca la autonomía —política y económica— y la preservación de la soberanía nacional en la toma de decisiones que afectan los intereses de las mayorías populares de América Latina.

El último disparo de un fusil en Centroamérica seguirá siendo una ilusión lejana, mientras los habitantes del Istmo no nos percatemos de que la cosecha de la paz sólo puede recogerse si colocamos en su sitio las semillas del respeto por cada forma de sociedad y de Gobierno que la soberanía popular señale. Entretanto, el futuro sólo seguirá siendo propicio para la intransigencia y la intervención.

Centroamerica 1987: Hipotesis para un debate

Xabier Gorostiaga

Intentaré presentar un conjunto de hipótesis de trabajo que sirvan para iniciar después el debate. Me parece que eso es lo que ha pretendido CEPAS con esta reunión. Hoy son extraordinariamente importantes este tipo de eventos en Centroamérica. Además, estoy muy de acuerdo en que Costa Rica en todas las crisis centroamericanas ha jugado un papel importante. Recuerdo otra crisis que me tocó vivir muy de cerca, con el Canal de Panamá en los setenta, en la que Costa Rica jugó un papel central. Recuerdo que por primera vez los cientistas sociales centroamericanos nos reunimos en La Catalina en el 74 en torno a la crisis del Canal de Panamá y años después con la problemática de los últimos años de Somoza y el inicio de la insurrección sandinista.

Hoy está en juego la neutralidad histórica de Costa Rica, el papel de Costa Rica en la solución del conflicto regional y la búsqueda de la paz. Costa Rica está hoy en el corazón de la crisis centroamericana y es parte de ella. El futuro de Centroamérica se juega también aquí.

Primera hipótesis

Voy a intentar presentar cuáles serían las tendencias naturales de evolución de la región si no se crea la voluntad política de encontrar una salida negociada. ¿Cómo se podría visualizar Centroamérica entre el año 90 y 92? Creo que hay factores internacionales que nos superan y envuelven como lo ha dicho E. Torres Rivas: *Estamos envueltos en una crisis internacional que se está jugando en la periferia del sistema.* Debido al acumulamiento del armamento nuclear, las grandes potencias no compiten entre sí frontalmente, si no que compiten al margen del sistema en los Pequeños Países de la Periferia (PPP)

Les recomiendo el libro que la CRIES acaba de publicar con Siglo XXI: "La Transición Difícil. La autodeterminación de los pequeños países periféricos". Se analiza la emergencia de los PPP con las deman-

das básicas de "pan, techo, trabajo y dignidad (autodeterminación y soberanía). Demandas que afectan al Sistema de consumo, acumulación y al orden jurídico internacional que no ofrece espacio para esta emergencia que representa más de un tercio de la población mundial. Este fenómeno internacional que nos rodea y del cual no podemos prescindir. Más aún, del cual somos un *test* determinante. Determinante porque nosotros no somos solo un pequeño país periférico, sino que estamos en el patio trasero, en el área de hegemonía exclusiva de Estados Unidos.

Segunda hipótesis

Centroamérica, sobre todo en el caso de Nicaragua, se ha convertido en el *test de credibilidad* de *la recuperación de la hegemonía global norteamericana*, tantas veces repetido por el presidente Reagan, incluso en el discurso sobre el Estado de La Unión, en abril de 1985.

No podemos prescindir, estamos envueltos en ese panorama y en ese proyecto de "globalismo unilateral" de la Administración Reagan. Para Centroamérica esa Doctrina Reagan se manifiesta en una *estrategia de contención* en El Salvador y Guatemala, de *reconquista* (rollback) en Nicaragua y de *sometimiento* en Honduras y Costa Rica. Este es el *carácter de la Guerra de Baja Intensidad* que domina sobre la región.

Tercera hipótesis

Si siguen las tendencias de la crisis regional, si no se crea una voluntad política suficiente a nivel regional, ¿cómo se visualiza Centroamérica para 1992? Es indudable que la crisis se prolonga, se expande y sobre todo, se profundiza la pobreza. Una pobreza que en 1980, según la CEPAL, afectaba al 67% de la población viviendo bajo niveles de la pobreza y 42% bajo niveles de la miseria. Centroamérica ha retrocedido 20 años en términos económicos.

Hoy se puede decir que dos tercios de la población centroamericana están viviendo a niveles de la pobreza. Si no hay solución a la crisis, si no se logra la paz, esta pobreza se profundizará dramáticamente, polarizando aún más internamente a cada país, a los países entre sí, provocando una *vietnamización* del conflicto o quizá una situación aún peor, una *libanización* donde la paz se haga imposible.

En un estudio que hicimos PACCA-CRIES en la Universidad de Stanford en agosto del 86 con un grupo de econometristas, con los datos que nos daban la CEPAL y el BID y el modelo de proyecciones utilizado por el Banco Mundial y el Informe Kissinger, se concluía que si siguen las tendencias actuales, para 1992 no habrá ningún país de Centroamérica que haya logrado crecimiento económico por cabeza.[1]

1. PACCA: "Alternative Future for Central America", Washington. 1987.

No sólo se profundiza la pobreza, sino que se polarizan dramáticamente nuestras sociedades. Acabo de venir de El Salvador. Veo esta polarización que se refleja en las *dos naciones políticas, econômicas, culturales* en que se están dividiendo nuestros pueblos. Esta polarización avanza y el problema de Centroamérica no es ya un conflicto tipo Vietnam. Considero que es peor. Es un *proceso de libanización permanente,* de polarización de la región de tal forma que cuando se quiera solucionar el problema y se dé la voluntad política, será imposible hacer nada, como es hoy el caso de Líbano.

Cuarta hipótesis

Por otro lado, se está dando un profundo cansancio y agotamiento en buena parte de nuestra sociedad centroamericana. Hay un anhelo de paz creciente en Centroamérica. Es un anhelo de paz producto del agotamiento en cierta forma. Un sufrimiento profundo producto del incremento de la pobreza, por la guerra, por la tensión, por la represión que ha permeado nuestras sociedades. Este cansancio se percibe a nivel de Centroamérica, pero no podemos homogeneizarlo. Estoy seguro que en Costa Rica no tiene ese dramatismo, pero lo tiene en el resto de Centroamérica. Está también provocando un cansancio internacional en torno a Centroamérica que se ejemplificaría en la última reunión de Guatemala con la Comunidad Económica Europea. No vienen todos los cancilleres, no se llega a nada nuevo, no dan ninguna ayuda sustancial. Su excusa es clara: por culpa de ustedes, centroamericanos, que no se ponen de acuerdo. Hay cansancio.

Este cansancio se nota dentro del Congreso norteamericano. He estado en el último mes y medio con varios congresistas que han pasado por Nicaragua. Todos mantienen que no puede seguir la ayuda a Centroamérica a los niveles de $1.400 millones de los últimos años, por el problema de déficit, por el problema de la mayoría demócrata que considera un fracaso la política actual de Reagan. Una fuerte reducción económica de fondos norteamericanos hacia Centroamérica es muy probable y afectará especialmente a El Salvador, Costa Rica y Honduras. Estos tres países se han convertido después de Israel, sobre todo El Salvador, en los tres países más subsidiados del mundo por cabeza. Ese subsidio parece que se va a reducir.

Si esta polarización de la pobreza, la división ideológica-cultural, la polarización regional continúa, se *va a prolongar esta Guerra de Baja Intensidad,* esta guerra de desgaste de sociedades como la salvadoreña o la nicaragüense que gastan más del 50% del presupuesto en gastos militares. Esta guerra de desgaste, esta Guerra de Baja Intensidad va a dar el carácter y va a ser la lógica dominante de nuestros pueblos en los próximos 5-6 años. Esta Guerra de Baja Intensidad, además de profundizar el cansancio, profundiza el miedo, paraliza las sociedades y a la

gente que ha tenido algún intento o alguna voluntad política de hacer algo.

Quinta hipótesis

Por otro lado, al no querer que estalle un conflicto regional que puede tener repercusiones internacionales en una era atómica, nuestras economías van a quedar totalmente transformadas de economías de "repúblicas bananeras" en "economías de la AID o de CAME", o economías subsidiadas por las remesas familiares de todos los millones de centroamericanos fuera de la región.

Vengo de El Salvador. La UCA acaba de terminar un estudio y el monto de las remesas familiares en 1986 a El Salvador puede andar entre 700 a 900 millones de dólares según una encuesta de 1.500 salvadoreños en Estados Unidos y 1.500 en El Salvador. Es decir, el pobre trabajador que tiene que ir a Estados Unidos, muchas veces en forma ilegal, es el que está manteniendo a flote una economía que ya no tiene base interna.[2]

Sexta hipótesis

En líneas más o menos gruesas ese es el futuro de nuestra región. Como bien decía Manuel Rojas, la crisis está provocando profundas transformaciones, incluso en Costa Rica. *Costa Rica se está centroamericanizando en un sentido perverso.* Cada vez más esta crisis regional, este miedo va a ir penetrando y polarizando a la sociedad de Costa Rica que había sido en este sentido una típica excepción en Centroamérica.

Esta esquemática visión pretende provocar el debate. No tenemos bolita de cristal, pero esas parece que son las tendencias naturales de la crisis actual.

Sétima hipótesis

Si no somos claros en definir cuál es el carácter de la crisis, no vamos a poder corregir esas tendencias. Creo que en dos elementos de la crisis estamos todos de acuerdo.

1. La *crisis tiene unas causas económicas,* el modelo económico centroamericano con la tradicional "economía de postre": (café, azúcar, banano, cacao) no tiene mucho futuro. Los nuevos productos de agroexportación de los cincuenta, como el algodón, tampoco tienen futuro. La carne que parecía un producto con gran futuro, cada

2. La Voz de América mencionó este estudio a mediados de marzo 87, señalando que la cifra pudiera ser cercana a 1.300 millones de dolares en 1986. ¿Por qué mencionan la variable más alta de las alternativas? ¿Para justificar la expulsión de los salvadoreños ilegales o para justificar su probable reducción de fondos a ese país?

vez tiene menor demanda internacional debido al exceso de carne en Europa y Estados Unidos.

¿A dónde vamos? ¿Qué viabilidad económica tenemos con esta estructura productiva tradicional agroexportadora? Cada uno está intentando encontrar una solución individual, aumentando la competitividad y destruyendo la escasa integración regional que colapsa de $1.300 millones a mediados de los setenta a menos de $400 de comercio intra-regional. La estrategia de "sálvese quien pueda, como pueda" nos está hundiendo en forma acelerada.

2. La otra causal de la crisis en que coincidimos sin grandes dificultades es la *causal política*. Centroamérica conoció un crecimiento económico gigante, el mayor del mundo entre 1950-78. La región se modernizó económicamente, pero las estructuras políticas y económicas permanecieron inmutables hasta 1979. La región de mayor crecimiento económico del mundo, más que Japón y Brasil, sólo equiparable al de Hong Kong y Singapur, tuvo la peor distribución del ingreso del mundo, con regímenes militares-dictatoriales que permitieron que el crecimiento se concentrase en el 5% más alto (oligarquía-agroexportadora), dejando un 67% de la población bajo niveles de pobreza y un 42% bajo niveles de miseria en 1980 según el conocido estudio de la CEPAL. Hoy en 1987 la situación es peor y más de 2/3 de la población están subsistiendo bajo niveles de pobreza.

Sólo Costa Rica fue una excepción. Los trabajos que se presentaron ayer indican que la concentración del ingreso, el aumento de la pobreza y la polarización política están desgraciadamente afectando también al país que se consideró una excepción en la crisis.

Creo que con matices obviamente, estamos todos de acuerdo en estas tesis básicas. Tenemos que resolver el problema económico, tenemos que resolver el problema de la democracia, de la distribución, de la justicia, de la libertad, de acuerdo. ¿La problemática económica y política deben ser resueltas conjuntamente y a nivel regional? ¿Existen salidas individuales a la crisis? Este sería el tema de debate.

3. Hay un tercer elemento en el que claramente no hay acuerdo y que mágicamente desaparece de la problemática. Por ejemplo, en el documento de la semana pasada *Una Hora para la Paz*. El gran ausente es Estados Unidos.

Esta región, además del problema económico y del problema político, tiene que resolver el *problema geopolítico*, la relación nacional y regional con Estados Unidos. El carácter de la crisis no quedaría bien definido sin este elemento constitutivo.

Tenemos un sujeto dominante históricamente en Centroamérica, la región más invadida del mundo, la región preservada para la hegemo-

nía norteamericana, su patio trasero. En un momento de cambio en la correlación de fuerzas internacionales, en profunda crisis de la hegemonía y legitimidad norteamericana, están en juego también las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica. Y mágicamente, a este problema centroamericano se lo hace desaparecer en muchas de las propuestas de paz. Mientras el problema norteamericano y las nuevas relaciones de Estados Unidos y Centroamérica no se incluyan como problema a resolver, no habrá solución a la crisis regional. El futuro de Centroamérica, su desarrollo, la democracia y la paz se juegan más en este tercer aspecto que en los dos anteriores.

Aquí entra incluso en juego la definición de neutralidad. Aquí entra en juego la posibilidad de una zona desmilitarizada, una zona de paz, con una clara definición genuina de no alineamiento y de relaciones multipolares superando la confrontación bipolar en la que se nos quiere encerrar.

Si estos son los tres polos de la crisis, no podemos evitarlos. Hay que enfrentarse a los tres y no escamotear a ninguno de ellos. Enfrentarse regionalmente al modelo económico en desgaste. Hace falta reconstruir un nuevo modelo regional. Enfrentarse a la distribución del ingreso, a la construcción de la democracia y participación de las mayorías. Enfrentamos a una nueva relación con Estados Unidos, en un mundo cada vez más multipolar y en una América Latina que requiere la integración económica y política de Centroamérica y El Caribe, dentro de un nuevo bolivarianismo que una al continente para superar la peor crisis de su historia.

No puede haber democracia sin autodeterminación, se dice en Nicaragua. No puede haber autodeterminación sin democracia mantiene Costa Rica. Hay que enfrentar la realidad como es y no podemos escamotear ninguna de las dos vertientes de esta encrucijada dialéctica. La realidad se revela ante cualquier intento de simplificación o escamoteo.

Octava hipótesis

Cuatro polos que consideramos fundamentales, deben resolverse para superar la crisis centroamericana:

a) El primer polo, el polo dominante es el militar. Por tanto, si no hay una desmilitarización de la región, si no hay una propuesta de paz efectiva, los otros aspectos (democracia, desarrollo, seguridad) seguramente no van a tener salida.

No se ve una solución militar ni a corto ni a largo plazo. La contra, desde la perspectiva nicaragüense, no es enemigo militar. La contra no es el problema. Posiblemente la contra ya no reciba más dinero y estratégicamente está liquidada. Entonces, la nueva estrategia es de

ver cómo se legitima la forma de que gran parte de la contra regrese pacíficamente.

Nicaragua tiene que ser extraordinariamente flexible, magnánima y cumplir su compromiso de una amnistía real. Nicaragua tiene decretada una amnistía que en el último año ha sido aceptada por unos 3.000 con apoyo de ACNUR. Es importante que la gente que deje la lucha armada, sea recibida en Nicaragua con plenos derechos ciudadanos y ayuda económica para restablecerse. Los contras somocistas de la ex-Guardia Nacional necesitarán apoyo humanitario internacional para reubicarse en diversas naciones del mundo. ACNUR debería cumplir con apoyo mundial este papel humanitario, fundamental para la paz en Centroamérica. Tenemos que luchar todos por eso. Mientras siga la agresión contra Nicaragua, este país va a tener toda la razón del mundo de decir, nosotros en plena guerra, no podemos tener las libertades civiles normales.

Ningún país del mundo lo ha podido hacer. Estados Unidos cerró, durante la guerra civil, un gran número de periódicos. En la Segunda Guerra Mundial metió a 150 mil japoneses en campos de concentración. ¡Se olvida esa historia y se usa un injusto doble parámetro!. En tiempos de guerra, la democracia queda sitiada por la misma guerra y Nicaragua está viviendo hoy una democracia restringida. ¿La culpa es de Nicaragua o es producto de una situación de agresión? Mientras no se resuelva este problema de la lógica militar por definición excluyente, la lógica democrática va a ser restringida. En Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, también en la militarizada Honduras. Ustedes conocen Costa Rica.

b) El polo dominante es el factor militar, pero el factor determinante consideramos es el factor económico. No vemos ninguna salida económica a mediano plazo, si no hay un proyecto económico centroamericano común, con una especie de Plan Marshall internacional para Centroamérica, que tenga como un eje el que la misma deuda externa que ahoga nuestras economías pueda servir como un Fondo de Reconstrucción Centroamericano. Tenemos la ventaja de que la deuda centroamericana es mayoritariamente bilateral-multilateral (75%), a diferencia de la deuda latinoamericana que es privada con la banca comercial y sólo un 25% con carácter bi-multilateral. La deuda cambia por países, en Centroamérica, pero el promedio es 75% multilateral-bilateral y 25% privada.

La propuesta de que la deuda sirva para crear un Fondo de Reconstrucción, donde los países centroamericanos paguen la deuda para reconstruir la integración, abrir nuevos mercados, rehacer los balances financieros y consolidar el peso centroamericano como moneda regional. Estas y otras propuestas trabajadas en diversos estudios de la CRIES sólo se pueden conseguir con un proyecto regional centroamericano.

c) El tercer polo que consideramos importante es a nivel político. En Centroamérica, debido a la vieja estructura del poder oligárquico, a la crisis económica y a la lógica militar dominante, se están viviendo democracias restringidas. Ese fenómeno no ha sido típico de Costa Rica, pero creo que puede llegar a impactar también a Costa Rica. Aquí tenemos un fenómeno que me parece extraordinariamente importante.

En noviembre 86 estuve en Atlanta con Daniel Oduber, Sergio Ramírez y otros ocho mandatarios latinoamericanos, entre ellos Alfonsín, Cerezo y los ex-presidentes norteamericanos Ford y Carter. Dos paradigmas diferentes de democracia se revelaron con claridad: un paradigma norteamericano de democracia liberal que asume un capitalismo desarrollado y unas sociedades civiles establecidas y consolidadas. Nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas en América Latina y menos en Centroamérica. Posiblemente no las vamos a tener nunca. ¿Estamos por tanto, condenados a no ser países democráticos? En Centroamérica sólo ha conocido la democracia Costa Rica después de profundas transformaciones en 1948.

En el resto de Centroamérica esas transformaciones estructurales no se dieron. El querer construir la democracia por un simple proceso electoral, sin condiciones objetivas para el desarrollo de la participación, igualdad y diversidad es un fraude en sí mismo, aunque no haya fraude electoral. Más aún. El querer imponer una democracia liberal basada en un capitalismo desarrollado en PPP sub-desarrollados, sin sociedades civiles establecidas puede convertir a estos procesos electorales en legitimadores-encubridores de dictaduras. Imponer en un acto lo que requiere procesos de construcción de las condiciones objetivas para la democracia, es al menos una farsa antidemocrática. Farsa que afecta negativamente en la conciencia de las mayorías la legitimidad y valoración que requiere la democracia.

Lo central es iniciar la construcción de procesos democráticos en países por ejemplo, como Nicaragua, con 45 años de una dictadura, una guerra insurreccional y ahora cinco años de guerra de agresión. Las elecciones tienen un diverso carácter, según las condiciones estructurales e históricas de cada país. Las elecciones son necesarias, pero insuficientes. *Lo importante son los procesos de creación de la participación, igualdad y el respeto por la diversidad,* que se chequean periódicamente en procesos electorales de creciente representatividad.

d) El polo, sin embargo, que consideramos más complicado es el aspecto cultural-ideológico. Tenemos introyectada una visión de la democracia que no responde a nuestras estructuras ni historia. Una visión y paradigma de democracia se nos ha impuesto, casi como otra pauta de consumo, y no como procesos institucionales para resolver las demandas básicas de la gran mayoría de nuestros pueblos: "pan, techo, trabajo y dignidad".

El debate cultural dentro de Centroamérica debe de aumentar fuertemente, al mismo tiempo que el conflicto militar disminuya. El poder crear estas condiciones de plataformas democráticas en que se analice el carácter de la crisis y alternativas es el gran papel de los intelectuales y de los centros de investigación. En el fondo es crear las condiciones para la paz.

El año pasado en un trabajo conjunto que apareció en ENVIO (Enero-Febrero 86): "Centroamérica 1979-1985", resumíamos las tendencias del 79 al 85 en estos cuatro factores: el factor militar es el dominante; el factor determinante a largo plazo va a ser el factor económico; el factor internacional va a ser un condicionante de cómo resolvemos la crisis (Contadora, la Comunidad Económica Europea, qué suceda después del "Contragate" en Estados Unidos). Sin embargo, el factor político-ideológico va a ser el factor decisivo: qué proyecto de sociedad se gane el corazón y la mente de la mayoría del pueblo centroamericano determinará el futuro de la región, en esta crisis, encrucijada histórica, que nos ha tocado padecer como un privilegio generacional envidiable.

Estamos enfrentados, como intelectuales, a uno de los retos más grandes. En el campo ideológico se va a jugar en gran manera el futuro de Centroamérica. No es sólo en el pan, techo y trabajo, sino la dignidad, es decir, en la lucha por la razón de ser para el futuro.

Novena hipótesis

Por otro lado, el proyecto norteamericano hacia Centroamérica comienza a entrar en una fuerte crisis en los últimos meses, después del escándalo del "Irán-Contragate". El "Contragate" refleja una crisis profunda en Estados Unidos, quizá más profunda que el Watergate, porque no sólo afecta la credibilidad de la presidencia, sino que descubre y destapa más que el Watergate toda una infraestructura subterránea de operaciones internacionales ilegales, económicas y políticas, que quedaban fuera del control del Congreso y de la misma presidencia. Esto ha creado una crisis de legitimidad en los Estados Unidos que puede ser enormemente profunda. Posiblemente no va a haber un "impichment" como a Nixon, porque es muy costoso para el poder norteamericano tener que prescindir de un presidente y renovar de nuevo la presidencia y su credibilidad. Sin embargo, fácilmente se va a dar una nueva correlación de fuerzas en este año y medio hasta las elecciones, extraordinariamente importante para el futuro de Centroamérica. Por otro lado se intenta reconstruir la política reaganiana hacia Centroamérica como si no hubiese sucedido nada.[3]

3. Discurso de George Shultz ante la asociación de abogados (American Bar Association), 12/02/87. Nueva Orleans, Usis, American Embasy. Nicaragua (11/03/87).

Es en este momento de vacío político y de credibilidad donde las sociedades civiles centroamericanas y la norteamericana tienen una posibilidad de un diálogo directo. Si nosotros no conseguimos establecer una relación nueva con la sociedad civil norteamericana, no veo cómo el problema centroamericano pueda resolverse a fondo. Es demasiada irresponsabilidad civil y democrática pasar la solución de una crisis tan profunda a los gobiernos o a Contadora. Es responsabilidad de las sociedades civiles en Estados Unidos y en Centroamérica el evitar la polarización de pueblos que van a tener que convivir conjuntamente. Centroamérica no puede enviar a Estados Unidos a Europa, ni ellos nos pueden enviar a nosotros a la Patagonia. Vamos a tener que convivir, pero tenemos que convivir a finales del siglo XX en una era atómica donde sólo bajo un derecho internacional que vigile la relación entre grandes y pequeños, diferentes en poder pero iguales jurídicamente, se podrá lograr la paz. Esto no lo van a conseguir los poderes establecidos, sino que debe ser un trabajo de las sociedades civiles. La paz es el pre-requisito para profundizar la democracia y posibilitar el desarrollo.

El estar padeciendo una situación de agresión, crea a veces visiones paranoicas que se deben contrastar, saliendo un poco afuera y viendo lo que se percibe en otros países. Percibimos, viviendo en Nicaragua, que la Administración Reagan no va a ceder ni a permitir la consolidación de la revolución sandinista en su administración. Tampoco los demócratas que no tienen todavía una alternativa seria para la región. Sin embargo, existe una corriente ascendente en Estados Unidos que estaría dispuesta a buscar una convivencia con el sandinismo. Ese acomodo con el sandinismo bajaría la polarización centroamericana y daría posibilidades a que propuestas como la del fin de semana en la declaración de San José tengan más vigencia.

El trabajo con la sociedad civil norteamericana es fundamental para la paz, democracia y desarrollo, tanto en Centroamérica como en el propio Estados Unidos.

Este trabajo entre sociedades civiles no es fácil, por faltar el concepto de igualdad. La sociedad norteamericana tiene una presunción hegemónica sobre Centroamérica muy marcada por la historia de dominación. Incluso en sectores liberales anti-reaganianos se pretende cooptar a Contadora. Es decir, Contadora en vez de ser percibida como una propuesta antagónica, como lo manifestó el National Security Council en el famoso documento del 30 de octubre de 1984 en que declaró la necesidad de bloquear a Contadora, se percibe como un instrumento manejable para Estados Unidos. Hay una corriente dentro del partido demócrata que mantiene que Contadora es un instrumento útil para Estados Unidos, que se ha perdido por la ideologización de la Administración Reagan. Es necesario cooptar Contadora dentro de los intereses norteamericanos como parte de la "alternativa liberal".

Nos enfrentamos a un gran reto latinoamericano de mantener *Contadora como un instrumento bolivariano* y no permitir que Contadora se convierta en un instrumento del nuevo monroísmo. Mantener la legitimidad y la identidad latinoamericana de Contadora es un papel fundamental para Costa Rica como para Nicaragua. En Centroamérica posiblemente el país que más peso va a tener en esta decisión va a ser Costa Rica. Dentro de Costa Rica el estudiar Contadora, las posibilidades de Contadora en esta crisis regional e internacional es importante. No se puede ver una solución latinoamericana como un peligro o una amenaza para Costa Rica, sino todo lo contrario.

Décima hipótesis

La coyuntura de 1987 es crucial. La "Contra" ha dejado de ser un peligro estratégico para el sandinismo, aunque perdure como amenaza económica con sabotajes y terrorismo. Políticamente está dividida y el sector civil tarde o temprano se incorporará a la lucha civil democrática. Si Estados Unidos deja de intervenir y de amenazar con maniobras y construcción de bases militares en los países vecinos, es posible por no decir seguro que se abra un gran debate político dentro de Nicaragua. Esto es factible. Parecería que hoy en Nicaragua se están dando las condiciones internas para que la institucionalización democrática se consolide si cesa la agresión. Es muy importante que desde Costa Rica se apoye esa posición, pero que no se fuerce ni se intente chantajear porque cualquier cosa que se quiera forzar desde afuera es contraproducente. Dentro de la cultura sandinista, como elemento de su historia e identidad, la presión no produce flexibilidad, sino rigidez. La relación franca y dialogante, sin prepotencia, tiene posibilidades de grandes acomodos, sobre todo si se da un margen de reciprocidad y simultaneidad. Para ello es fundamental establecer relaciones claras sin *fenómenos de satanización.* Esta es la herencia reaganiana que estamos padeciendo en Centroamérica. Aquí está satanizado todo. Destapar esos mitos, romper esas imágenes, permitir que los pueblos se relacionen con mucho más libertad y franqueza, poder invitar a estos foros a sandinistas que presenten su posición en Costa Rica como lo hicieron ayer los miembros de UNO, José Dávila, media hora en el programa "Frente a Frente" e inmediatamente después Alfonso Robelo y Pedro Joaquín Chamorro con otra hora en la televisión. Esa parcialidad informativa no ayuda a la paz. Ni ayuda a la distensión que Nicaragua lleve a Costa Rica ante la Corte Internacional de La Haya, metiendo en el mismo paquete a Honduras y a Costa Rica, que tienen dos relaciones conflictivas en la utilización de su territorio contra Nicaragua muy distintas. Creo que se podía haber manejado esa situación con más habilidad, creando condiciones diplomáticas más favorables al diálogo.

Es una obligación de los intelectuales centroamericanos dedicados a crear condiciones para la paz, trabajar en ambos lados de la frontera

por evitar la polarización y fomentar la *desatanización* que la política reaganiana ha incrustado en las relaciones regionales.

Onceava hipótesis

Mi última reflexión sobre el documento "Una Hora para la Paz". Estimo que este documento es aceptable para Nicaragua. No se conoce todavía la reacción oficial, pero me atrevería a considerar que Nicaragua no tendrá seria dificultad de aceptación de este documento. Sin embargo, considero que hay tres limitaciones:

Primero, en relación con la amnistía. La amnistía existe en Nicaragua. Lo que se necesita es que la amnistía sea cada vez más afectiva, por ejemplo, con la participación de ACNUR y financiamiento internacional para reubicar económica y socialmente a los desalzados de la contra. También para iniciar las condiciones que permitan a los miembros del FDN que no desean regresar a Nicaragua ubicarse en Estados Unidos, Canadá, Europa y países de Contadora. No es posible la paz en Centroamérica con grupos armados financiados por Estados Unidos en las fronteras de Nicaragua.

Segundo, cuando se habla del cese al fuego no se trata sólo que cese el fuego entre la contra y los sandinistas, sino que cese el fuego con Estados Unidos. La contra no tiene ninguna vigencia política ni base social como para poder sobrevivir por cuenta propia. La tuvo en el 83 y en el 84 por errores graves de la Reforma Agraria, de la política económica y cultural con campesinos e indígenas. Por eso se han dado serias rectificaciones en la Reforma Agraria y en el proceso de autonomía en la Costa Atlántica. Estados Unidos tiene una presencia militar atosigante en torno a Nicaragua. Además está violando en forma continua los tratados del Canal de Panamá, haciendo que el Comando Sur sea el eje directivo de todas las operaciones militares en Centroamérica, lo cual viola la letra y el espíritu de un tema central en los tratados del Canal de Panamá.

Entonces, mientras no se desmilitarice la presencia norteamericana en Centroamérica, no veo que pueda haber un real cese al fuego. La necesidad de verificación del desarme debe ser una exigencia centroamericana hacia Estados Unidos y no lo contrario, como se nos quiere hacer creer en la propaganda ideologizada que nos envuelve.

Tercer aspecto es sobre la democratización. En el punto tercero se dice: "A los 60 días a partir de la firma de este documento, deberá existir completa libertad para la televisión, la radio y la prensa". Daniel Ortega en la Asamblea General de las Naciones Unidas garantizó ante el mundo que si se firma un acta de paz con Estados Unidos se abren todas las libertades democráticas en Nicaragua. Peleemos para que esto sea así y se creen las condiciones reales para las libertades democráticas. Pero que haya una auténtica seguridad de paz para Nicaragua. No olvi-

demos tampoco que estos compromisos son para todos los países de Centroamérica. No se alcanzará en 60 días, pero se puede iniciar el proceso en esa dirección.

Finalmente recordemos el "no uso del territorio para agredir a otros estados". Hay que resolver el problema de las bases de la contra en El Salvador, en Ilopango, en Costa Rica que el "Contragate" ha destapado. Pero sobre todo las de Estados Unidos con nueve bases militares en Honduras y la capacidad de que en menos de veinticuatro horas Nicaragua tenga implementados varios de los planes que el War College tiene montados para intervenir en Nicaragua. Eso está escrito y publicado. Entonces, tiene que haber un acta de paz con apoyo y verificación internacional. Nicaragua por su parte tiene que dar un compromiso total y aceptar verificación "in situ" para demostrar que no se está dando la transferencia de armas hacia El Salvador. Eso lo ha prometido Nicaragua y ha prometido aceptar la desmilitarización y verificación internacional en las dos fronteras con Costa Rica y Nicaragua. Lamentablemente no se avanzó en las propuestas con Costa Rica que podrían haber sido un *test* de buena voluntad. Creo que allí tenemos áreas para avanzar en forma concreta restaurando la confianza y la voluntad política sin aceptar polarizaciones artificiales.

Lo mismo en la propuesta séptima sobre la reducción del armamento. Me parece que se estudie la propuesta conjunta de Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, también existe la propuesta de desarme de Nicaragua en la reunión de Esquipulas. Propuesta de un desarme profundo, simultáneo y recíproco para todos los países de Centroamérica. Este conjunto de propuestas, en gran manera coincidentes deben estudiarse en el marco de Contadora.

Ese tipo de actitudes –estoy poniendo ejemplos– son los que nos permitirían evitar las tendencias dramáticas que se acumulan para 1992 y con las que inicié mi presentación. Creo que el año 87 es un año crucial. Considero que el papel de la Costa Rica histórica de 1948 con su identidad de neutralidad y democracia, manteniendo la autodeterminación centroamericana, es determinante para conseguir la paz en Centroamérica, base de la democracia, desarrollo y seguridad regional.

La proclama de neutralidad y la propuesta de paz

Hugo Alfonso Muñoz Q.

Antecedentes de la neutralidad

En 1982, al iniciar el Gobierno el Presidente Monge, Costa Rica vivía una crisis económica en el plano interno y enfrentaba el conflicto centroamericano en el orden externo. Ante el problema de Nicaragua, el Canciller de entonces, Lic. Fernando Volio, propuso una participación activa de Costa Rica, por medio de lo que se denominó "Foro pro paz y democracia".[1]

Un grupo de abogados, desde 1981, habíamos comenzado a estudiar la posibilidad de que Costa Rica declarara la neutralidad permanente. El Lic. Néstor Mourelo llevó la iniciativa al Dr. Enrique Van Browne, al Lic. Bernardo Baruch y al suscrito que comenzamos a preparar las ideas sobre la neutralidad para proponérselas al Lic. Volio, que se mencionaba como futuro Canciller. El Lic. Volio nos recibió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y, posteriormente, una vez designado Canciller, aunque todavía no había asumido el cargo, nos volvió a conceder audiencia, esta vez, en el denominado "Balcón Verde". En ambas oportunidades, nos manifestó que estudiaría nuestra propuesta.[2] Por otra parte Don Luis Alberto Monge como candidato a la Presidencia de la República había afirmado el deseo de que Costa Rica permaneciera neutral frente al conflicto de América Central.

La idea "Foro pro paz y democracia" sufrió un duro golpe con la aparición del grupo Contadora. A Costa Rica se le marginó de ese grupo y pasó a ser en consecuencia, parte del conflicto.

El 1o. de mayo de 1983, en su mensaje constitucional a la Asamblea Legislativa el Presidente Don Luis Alberto Monge expresó su voluntad

1. *La Nación*, 5 de octubre de 1982, "Declaración de los Cancilleres", p. 16A.
2. En el Congreso Mundial de Derechos Humanos, celebrado en Alajuela, se dedicó un Seminario al tema de la Neutralidad. Participamos en esa oportunidad, el grupo que originalmente había iniciado los estudios del tema y se unió el profesor chileno, Raúl Arévalo. El seminario se celebró entre los días 6 a 12 de diciembre de 1982.

de declarar la neutralidad permanente de Costa Rica, frente al conflicto bélico de la región. Muy poca repercusión tuvo la idea del Presidente Monge, no obstante su importancia política: *un editorial* del periódico "La Nación" y algunos artículos en contra de la neutralidad. No se adquirió, en aquel momento, clara conciencia de la idea de la neutralidad.[3]

La propuesta pasó a la Procuraduría General de la República y se encargó un estudio a una Comisión que presidía el Lic. Manuel Freer Jiménez. Este estudio tuvo la virtud de demostrar que la proclama de neutralidad resultaba compatible con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.[4] El 15 de setiembre de 1983 se publicó un texto provisional denominado "Estatuto de Neutralidad, activa, autónoma, calificada, permanente y desarmada". Se definió en ese documento esas características que habían aparecido en el estudio de la Procuraduría General de la República.[5]

Una Comisión integrada por los licenciados Mourelo, Freer, Van Browne, y el autor de este artículo, en ese entonces Procurador General de la República, bajo la coordinación del Ministro de Justicia de entonces, Lic. Carlos José Gutiérrez, se encargó de redactar la proclama de neutralidad. El texto fue preparado por esa Comisión a finales de octubre, y se mejoró en aspectos formales por el Lic. Gonzalo Facio, a quien se le consultó sobre esa proclama. El Presidente Monge realizó en acto solemne la Proclama de Neutralidad el 17 de noviembre de 1983.

Importancia y características de la neutralidad

La importancia y características de la neutralidad solo pueden apreciarse en su correcta dimensión dentro del contexto histórico en que se formuló: crisis interna y externa económicas y crisis bélica en la región. La presión para que Costa Rica participara activamente en el conflicto se sentía fuertemente; determinados grupos incitaban a ello. El Presidente Monge, por una parte, dependía de la ayuda económica extranjera para sacar adelante al país; pero por otra, tenía la responsabilidad histórica de impedir, a toda costa, que nuestro país se involucrara en el conflicto bélico. La neutralidad fue un importante freno, un dique que impidió una participación activa en el conflicto, como deseaban fuerzas externas e internas. No sólo se debe analizar la neutralidad como un importante paso en la consolidación de nuestra política exterior de búsqueda de paz, sino como la política que evitó la sangre de costarri-

3. Particularmente algunos profesores de Derecho Internacional, el profesor Lic. Bernd Niehaus, Ex-canciller de la República, se opuso a la neutralidad. *La Nación*, 22 de setiembre de 1983.
4. Estudio de la Procuraduría General de la República, sin fecha.
5. La Neutralidad de Costa Rica, comunicado del Presidente a la República, 15-9-83.

censes en un conflicto que no nos concernía directamente. La neutralidad, además, interpretó una actitud muy costarricense, arraigada en la idiosincrasia pacifista de nuestro pueblo.

Las características de la neutralidad adquirieron en su oportunidad trascendencia decisiva y mantienen aún hoy su importancia, sobre todo al robustecerse con la Propuesta de Paz del Presidente Arias que en gran medida desarrolla y consolida la neutralidad del Presidente Monge.

Brevemente, vamos a tratar de señalar las características de la neutralidad y relacionarlas con la propuesta de paz:

1. La neutralidad de Costa Rica se diferencia, esencialmente, de la neutralidad Suiza, que sigue el esquema clásico, adoptado desde el Congreso de Viena de 1815. Ese modelo se concibió en un período de la historia donde hacer la guerra era un acto lícito, base del derecho internacional. El derecho a hacer la guerra "por una buena razón, por una mala razón o sin razón alguna", como lo señaló el tratadista Hall, constituía un concepto clave del Derecho Internacional.[6] A raíz de la Primera Guerra Mundial, la situación comienza a cambiar: el Pacto de la Liga de las Naciones introdujo, por primera vez, limitaciones parciales al derecho de los Estados a "recurrir a la guerra", y en el Tratado de París de 1928, las partes condenaron "el recurso de la guerra para la solución de las controversias internacionales" y renunciaron a ella "como instrumento de política nacional, en sus futuras relaciones".[7] Sin embargo, no fue sino hasta la adopción de la Carta de San Francisco en 1945 que la Carta en forma universal estableció en su artículo 2, párrafo 4 que: "Los miembros de la Organización en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza . . .". Aparece, así, el sistema de seguridad colectiva, que contiene tres elementos fundamentales: a) la reglamentación y eventualmente la prohibición del recurso al empleo de la fuerza como medio para resolver los conflictos internacionales; b) la limitación de los medios de fuerza, es decir la reducción y el control de armas; c) la represión de los abusos del empleo de la fuerza, es decir, la represión de la guerra por una acción común contra el agresor .[8]

Particularmente interesan dos principios: uno, la renuncia al uso de la fuerza; y, dos, la represión por los abusos del empleo de la fuerza. En cuanto al primer aspecto, el mismo tratadista Rousseau señala: "Hasta 1919 el recurso a la guerra era un procedimiento lícito en derecho internacional. A partir del Pacto de la Sociedad de las Naciones, el derecho positivo se orientó hacia la prohibición del recurso de la fuerza".[9] El segundo aspecto, la represión por los abusos del empleo de la fuerza, se

6. Estudio del Lic. Manuel Freer, Procuraduría General de la República, inédito.
7. Ibid.
8. Charles Rousseau, *El Derecho de los Conflictos Armados*, Editions A. Pedone, 1983, París, p. 527.
9. Rousseau, *Ibid.*, p. 528.

refiere a las medidas tomadas por los terceros estados en favor de las víctimas de una agresión y contra el agresor. Finalmente, el aspecto b) de las características del sistema de seguridad colectiva es el relativo al desarme, que Costa Rica cumple con creces al suprimir el ejército desde 1948.

De lo expuesto hasta aquí conviene señalar que la neutralidad de Costa Rica constituye una nueva modalidad de neutralidad. La Carta de las Naciones Unidas tiene un sistema de seguridad colectiva que, necesariamente, obliga a transformar aquel concepto que concebía la guerra como un hecho legítimo; y no un ilícito internacional, repudiado y sancionado en las Cartas que rigen las relaciones entre los Estados, como se considera hoy en día.

2. De lo anterior, surge la segunda característica de la neutralidad de Costa Rica: no armada. Intimamente unido al concepto de neutralidad calificada o diferenciada, es decir, dentro de la Carta de Naciones Unidas, aparece la neutralidad no armada. Cuando el derecho a hacer la guerra era lícito, necesariamente armarse para la defensa resultaba ser el imperativo de los Estados. Hoy en día, al Estado agresor se le imponen sanciones, muchas veces no tan eficaces, pero al fin y al cabo sanciones. La paz y la seguridad constituyen objetivos comunes de todos los estados y de los organismos internacionales. El desarme, al menos, en tanto reducción y control, forma parte de la obligación internacional de los estados miembros, como apareció en el artículo 8 del Pacto de la Sociedad de Naciones, al reconocer los miembros de la Sociedad la necesidad de reducir el armamento nacional "al mínimo compatible con la seguridad nacional y con la ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común". No sólo el texto redujo el armamento al mínimo compatible con la seguridad nacional, sino también con la necesidad de ejecutar y cumplir las obligaciones impuestas por la acción común. El concepto de seguridad colectiva frente al agresor se advierte con claridad.

Contrariamente a lo ocurrido al final de la primera guerra mundial, el problema del desarme únicamente aparece en 1945 como preocupación de las potencias victoriosas en el sentido de lograr un acuerdo para desarmar a las naciones responsables de la guerra. Como consecuencia de lo anterior no se encuentra otra alusión en la Carta de las Naciones Unidas, salvo aquella, consagrada en el artículo 11, que encarga a la Asamblea General "de estudiar . . . los principios que regulan el desarme y la reglamentación de armamentos" y dirigir con esa finalidad recomendaciones a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad.[10]

Se ha hecho referencia especial a las características de la seguridad colectiva, por cuanto la neutralidad de Costa Rica debe verse ubicada

10. Rousseau, *Ibid.*, p. 559.

dentro de ese marco jurídico político internacional. No solo la neutralidad costarricense responde a los fines y a la naturaleza de la seguridad colectiva prevista en la Carta, sino también a los objetivos fundamentales previstos en ella. Es una neutralidad moderna, dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Como lo advierte el profesor Gros Espiell: "Para aclarar el tema, y como paso previo a muchas y necesarias precisiones, se requiere comprender que el instituto de la neutralidad no tiene un sentido y un contenido igual en el Derecho Internacional Clásico, en el que la guerra era, en principio, lícita y constituía una manifestación normal de soberanía del Estado que después del Pacto de la Sociedad de Naciones (1919) y del Pacto Briand-Kellog (1928), que condenó el recurso de la guerra para la solución de las controversias internacionales y se fundó en la 'renuncia a la guerra como instrumento de política internacional' y, en especial, en el Derecho Internacional Contemporáneo, luego de que la Carta de las Naciones Unidas proscribió radicalmente el uso de la fuerza, salvo los casos exceptuados de manera expresa (Arts. 2.4; 42-50 y 51)".[11]

La Propuesta de Paz del Presidente Arias también armoniza con la Carta de las Naciones Unidas y con el carácter desarmado del país, de conformidad con nuestra Constitución y con la neutralidad costarricense.

Pero es en lo relativo a los deberes de la neutralidad y su naturaleza activa, que la propuesta de paz armoniza y fortalece aquella.

3. Deberes de la neutralidad y la propuesta de paz. El día en que el Presidente Monge proclamó la neutralidad definió en su discurso los deberes que contraía el Estado costarricense, a partir de ese momento: "Fiel a su secular vocación de paz, Costa Rica asume soberanamente ante la comunidad de naciones los deberes inherentes a su nueva condición de Estado perpetuamente neutral. Nos comprometemos a no iniciar ninguna guerra; a no hacer uso de la fuerza, incluyendo cualquier amenaza o represalia militar; a no participar en una guerra entre terceros Estados; a defender recursos materiales, jurídicos, políticos y morales posibles; y a practicar una política exterior de neutralidad a fin de no involucrarnos real o aparentemente en ningún conflicto bélico. Más aún, nos comprometemos a extender nuestros deberes de Estado perpetuamente neutral a los conflictos armados dentro de los Estados". Y agrega el Presidente de la República de entonces: "Nos comprometemos, igualmente, a todos los esfuerzos posibles para impedir que el territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo y las aguas jurisdiccionales, sea utilizado como base de operaciones por las partes comprometidas en una guerra; a abstenernos de toda hostilidad y de todo apoyo a las partes en conflicto: a no dejar pasar el transporte de tropas, municiones o columnas de abastecimiento por nuestro territorio; a no

11. Héctor Gros Espiell, *La neutralidad de Costa Rica*, Editorial Juricentro, 1986, p. 60.

tolerar el mantenimiento o establecimiento de instalaciones inalámbricas no públicas destinadas a la comunicación con los beligerantes; a impedir la formación de cuerpos combatientes y la apertura de oficinas de leva y a internar lejos del teatro de la guerra, a los combatientes que se pasen al territorio nacional; a seguir una política de absoluta equidad a fin de fortalecer la confianza de los beligerantes en el mantenimiento de nuestra neutralidad".[12]

Se pueden sintetizar los deberes de la neutralidad, de la siguiente manera:

a) Prohibición de hostilidades contra un beligerante.
b) Prohibición de suministro de tropas.
c) Prohibición de ceder derechos de soberanía del Estado neutral a un beligerante.
d) Deber de mantener la integridad del territorio del Estado neutral.

Han de impedirse especialmente acciones de guerra, el paso de tropas; columnas con municiones o suministros, cesión de territorio neutral como base de operaciones, el establecimiento de puestos de leva o reclutamiento; el mantenimiento de estaciones de radio, sobrevuelos . . . .[13]

Tanto la doctrina, como el Presidente Monge, al hacer la Proclama definieron estos aspectos fundamentales como deberes de Costa Rica. En la propuesta de paz el Presidente Arias reafirmará estos conceptos, como se verá más adelante.

4. La neutralidad y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Al iniciar el estudio sobre un Estatuto de Neutralidad, el grupo que hizo las primeras propuestas señaló ocho puntos importantes, que conviene recordar someramente. 1. La tradición antimilitarista costarricense y la supresión del ejército otorgan autoridad moral para intentar la neutralidad; 2. La neutralidad implica deberes, pero no impide el derecho de defender ideas e ideales democráticos; 3. La participación mediadora y humanitaria de Costa Rica en los conflictos; 4. El carácter permanente de la neutralidad, su aplicación a Estados y su origen convencional, así como el deber de abstención y de imparcialidad; 5. El fortalecimiento de los derechos humanos y el mantenimiento de libertad de expresión, con la neutralidad; 6. La neutralidad daría fuerza moral que compensaría la situación de indefensión de Costa

12. Luis Alberto Monge, *Memoria del Primer Congreso Mundial de Derechos Humanos,* Volumen I, "La Neutralidad Perpetua de Costa Rica", Imprenta Nacional, 1984, pp. 68-69.
13. Alfred Verdross, *La neutralidad perpetua de Austria,* pp. 41-42.

Rica, al carecer de ejército; 7. La neutralidad no es incompatible con una activa participación en los foros y organismos internacionales.[14]

Sin embargo, en dos aspectos fundamentales la propuesta del grupo inicial de estudio evolucionó: en cuanto a la incompatibilidad con alianzas militares y en lo relativo al origen consensual del Estatuto. En lo relativo al origen consensual de la neutralidad se tomó en cuenta los múltiples casos de neutralidad que tienen origen en un tratado internacional (Austria 1955; Suiza, 1815; Laos, 1962; etc.).[15] Sin embargo, el origen consensual del Estatuto de la neutralidad se varió por una proclama y, de esa manera, se decidió que su origen era unilateral (neutralidad autónoma), con consecuencias jurídicas y no un estatuto derivado de un tratado.

En cuanto a la propuesta en el sentido de que la neutralidad resulta incompatible con alianzas militares, conviene precisar algunos aspectos: a) en primer término, se planteó como idea general, que recogía la doctrina relativa a la neutralidad; b) en segundo término al aplicarse este principio al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se estimó que este tratado no presentaba las características de una alianza militar en sentido clásico, sino que consistía en un mecanismo de legítima defensa colectiva y de seguridad regional que armoniza con la Carta de las Naciones Unidas. Como bien lo advierte el doctor Gros Espiell: "Aplicando este concepto al Tratado de Río, es necesario comprender que este Tratado no es un tratado de alianza en sentido tradicional, sino, tan sólo, una regulación jurídica de la legítima defensa colectiva y de la seguridad regional por medio de un sistema coordinado y accesorio al de las Naciones Unidas (Artículos 51, 52, 53, y 54 de la Carta de las Naciones Unidas y artículo 5 del Tratado de Río). Pese a sus errores y peligros y a su obvio e interesado sentido político, no establece un sistema de alianza militar automática que pueda conducir ineludiblemente a los Estados partes a la guerra, en el supuesto de los artículos 3, 6 y 7, ya que para adoptar las medidas del artículo 8, que pueden llegar al empleo de la fuerza armada, se requiere una decisión del Organo de Consulta adoptada por el voto de los dos tercios de los Estados signatarios que hayan ratificado el tratado (artículo 17). Estas decisiones son obligatorias, pero: "ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento" (artículo 20".[16]

Es evidente que el TIAR ha de ser analizado e interpretado dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, donde el empleo de la fuerza es facultativo para los Estados signatarios. Un Estado neutral

14. Carta del 12 de abril de 1983, dirigida por los licenciados Néstor Mourelo, Bernardo Baruch, Enrique Van Browne y Hugo Alfonso Muñoz al Presidente de la República Luis Alberto Monge, publicada en *Memoria del Primer Congreso Mundial de Derechos Humanos, ibid*, supra nota No. 12, pp. 53-55.
15. Héctor Gros Espiell, supra nota 11, p. 44.
16. *Ibid*., p. 51.

como el costarricense, que además carece de ejército, no podrá ni deberá participar en sanciones que lo obliguen a emplear la fuerza, de conformidad con el artículo 20.

Es interesante advertir que, aun políticos y profesores de derecho internacional enemigos de la neutralidad, como el Lic. Gonzalo Facio, consideran compatible aquella con el TIAR, al afirmar: "En la forma en que quedó finalmente redactada la Proclama de Neutralidad, quedaron a salvo nuestros deberes y derechos como miembros del TIAR, que repito, fue el objeto de la revisión que hice del proyecto original del Estatuto. Hice hincapié en que dentro de las obligaciones que el TIAR impone a sus miembros, no está la de mantener Fuerzas Armadas, ni la de organizar y emplear tales fuerzas en caso de agresión a un tercer Estado. Pese a su proclamada neutralidad, Costa Rica estaría obligada a aplicar todas las medidas contra un Estado agresor que sean aprobadas por el Organo de Consulta del TIAR, con una sóla excepción: el empleo de la Fuerza Armada. Porque esa medida que puede adoptar el Organo de Consulta, expresamente se estipuló como optativa, nunca como obligatoria".[17]

La neutralidad activa y la propuesta de paz

En forma clara, la proclama de neutralidad señala el carácter activo de Costa Rica en el plano ideológico, para acciones humanitarias y mediadoras, en contraposición con el deber de abstenerse en el plano militar. La propuesta de paz desarrolla esos principios, fortaleciéndolos en algunos aspectos:

a) En el plano ideológico, tanto la Proclama de Neutralidad, como la Propuesta de Paz, coinciden. La Proclama establecía que la neutralidad no significa imparcialidad en el plano ideológico y como consecuencia, Costa Rica reafirma su fe en la concepción política y social que ha compartido y comparte con la democracia occidental. La Propuesta de Paz indica: "A partir de la firma de este documento, deberá iniciarse un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los Derechos Humanos, la soberanía de la integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social", y luego agrega: "Creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse elecciones libres, pluralistas y honestas . . .".[18] Existe un paralelismo entre la Proclama de Neutralidad, activa en el plano ideológico, y la Propuesta de Paz que pretende la

17. Gonzalo Facio, *La confrontación este oeste en la crisis centroamericana*, Asociación Libro Libre, 1985, San José, Costa Rica, pp. 60-61.
18. Propuesta de Paz, *La Nación*, lunes 16 de febrero de 1987, Documento, p. 16A.

instalación de procesos democráticos, el respeto a los Derechos Humanos, justicia social, y la libre determinación de los pueblos.

b) En la Propuesta de Paz se repiten los deberes de la neutralidad, proclamados por el Presidente Monge en su discurso del 17 de noviembre de 1983. En efecto, la Propuesta de Paz establece: "Los cinco países que suscriben este documento reiteran su compromiso de "impedir el uso del propio territorio y no prestar ni permitir apoyo militar y logístico a personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países de Centroamérica". En el mismo sentido, la Propuesta de Paz, en el punto 5, afirma: "Suspensión de la ayuda militar . . . Estas peticiones se harán en cumplimiento de lo establecido en el "Documento de objetivos" en cuanto a 'Eliminar el tráfico de armas, intrarregional o proveniente de fuera de la región, destinado a personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países centroamericanos'".

c) La neutralidad no armada costarricense encuentra eco en la Propuesta de Paz del Presidente Arias. Se afirmó que dentro de las características de la Carta de Naciones Unidas, la seguridad colectiva exigía el desarme como instrumento de paz y seguridad internacionales; la neutralidad de Costa Rica se ubica dentro del contexto internacional y regional de seguridad colectiva. Con ese mismo espíritu, la Propuesta de Paz señala: "7. Reducción del armamento. En el plazo de 60 días, contados a partir de la firma de este documento, los Gobiernos de los cinco Estados centroamericanos iniciarán negociaciones sobre control y reducción del inventario actual de armamentos y sobre el número de efectivos en armas". La Propuesta va más allá: crea un mecanismo de supervisión nacional e internacional para vigilar el cumplimiento de sus acuerdos.

Queda claro de lo expuesto que no solo la Propuesta de Paz armoniza con la Neutralidad en cuanto a su contenido y objetivo, sino que la fortalece en su aspecto activo.

Hacia una nueva política exterior

Al fundarse la Segunda República y suprimir el ejército, Figueres enfrenta una situación difícil, como él mismo lo define en su libro *El Espíritu del 48:* "El Dilema Angustioso. No podíamos dejar abandonados a los luchadores por la libertad, a aquellos que, solidarizándose con nuestra causa, nos habían prestado sus armas. No podíamos cerrarles las puertas de nuestra nación, aunque conociéramos sus designios revolucionarios, contra otros gobiernos despóticos del área. Yo estaba plenamente consciente de que, a pesar de mi condición de gobernante, me convertía en cómplice de acciones subversivas contra gobiernos tiranos. Sí, me acuso. Yo era cómplice y además compañero. ¿y qué? Yo

sé cumplir mi palabra. Además simpatizo con la libertad de todos los pueblos".[19]

Evidentemente, Costa Rica enfrentaba un dilema: por una parte, suprimía el ejército en una manifestación de pacifismo y proyección histórica de desarme unilateral e invocaba el Tratado de Asistencia Recíproca contra Nicaragua; y por la otra, compromisos adquiridos por el grupo revolucionario obligaban a iniciar desde Costa Rica acciones contra las dictaduras. Una carta del Presidente de la Alianza del Caribe del 24 de agosto de 1948, liberaba *momentáneamente* a Figueres de sus compromisos con los miembros de esa organización. La carta decía: "En mi condición de Jefe Supremo Liberador del Caribe, comprendiendo la difícil situación porque, en estos momentos atraviesa Costa Rica, de común con otros compañeros de lucha, hemos decidido relevarlo del compromiso adquirido por usted, a nombre de Costa Rica, en diciembre último. En la esperanza de que, superada la crisis momentánea, pueda, si a bien lo tiene, darnos alguna colaboración, lo saluda, Juan Rodríguez García".[20]

En 1955, Costa Rica invoca de nuevo el TIAR, ante la invasión a su territorio desde Nicaragua. En 1965, el Gobierno de Francisco Orlich, en aplicación del TIAR, envía algunos guardias civiles a República Dominicana.

A partir de 1970, los gobiernos de Figueres y Oduber, por medio del Canciller Facio, desarrollan la política que se puede resumir en los siguientes puntos: "la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, el pluralismo ideológico, la universidalidad de las relaciones diplomáticas y la defensa de los derechos y libertades fundamentales".[21]

El apoyo que el Gobierno Carazo, con respaldo popular, dio a los Sandinistas y su participación activa en la caída de la Dictadura Somocista quebraron el principio de no intervención que guiaba la política exterior de Costa Rica. A partir de 1982 se comienza a gestar una nueva política exterior, orientada por la neutralidad y la búsqueda de la paz, como se ha expuesto a lo largo de este artículo.

19. José Figueres, *El Espíritu del 48*, Editorial Costa Rica, 1987, p. 318.
20. *Ibid.*, p.p. 319-320.
21. Gonzalo Facio, *Nuestra voz en el mundo*, Imprenta Trejos, San José, 1977, pp. 7 y 15.

IV PARTE

LA ALTERNATIVA

¿Cual puede ser la alternativa?

Carlos Campos

La crisis de la izquierda, al no mostrar –dada su autodenominación de vanguardia– el camino a seguir por el pueblo, ha venido a dejar "desamparado" al movimiento popular, expuesto bajo sus propios recursos a encontrar las salidas a los serios problemas que enfrenta.

Vivimos un momento de transición en el que nuevas fuerzas buscan su acomodo y cuota de poder. Es sin duda, un momento muy difícil, de sobrevivencia, del que finalmente como por ley natural sólo los más capaces sobrevivirán.

La "orfandad" que vive el movimiento popular no significa su muerte o aniquilamiento, significa que ahora estamos en las calles de la lucha de clases, reconociendo un nuevo ambiente y determinando cuáles pueden ser los elementos (humanos, productivos, económicos y sociales) que adoptemos para establecer un nuevo orden social, político y económico.

La inevitabilidad de la vanguardia y que ésta necesariamente estuviera en manos de la izquierda, vino a mediatizar el carácter creativo y dinámico, de búsqueda de poder, del movimiento popular. Hoy sin esa vanguardia, paradójicamente detrás, sirviendo de lastre, el movimiento popular hace sus propios esfuerzos por encontrar sus soluciones a la gama de problemas que vive.

Podemos decir que se trabaja por solucionar los problemas, pero fundamentalmente por encontrar una identidad propia. Una personalidad nueva que, sin olvidar las enseñanzas del pasado, nos permita vivir el futuro. Esto significa, en las actuales circunstancias, que el pueblo debe plantearse seriamente el problema del poder, de su representación legítima. Aclaro que aquí no tienen nada que ver las elecciones, hablo del poder real.

La base de la dominación política y económica en Costa Rica se sustenta, como en ningún otro país, en la plena dominación ideológica.

Dominación que alcanza niveles superiores, cuando se mezcla con los intereses del gran capital transnacional. Cuando un pueblo es arrancado de sus raíces y sus valores culturales, se transforma en un pueblo esclavo. Nosotros somos esclavos, y de la peor condición; tenemos la libertad de expresión para decir que no lo somos.

La colonización española sentó las bases para que el capital extranjero viniera, posteriormente, a terminar de arrancar y doblegar el valor de nuestros antepasados, la defensa de su identidad, de su cultura, de su raza.

Entonces, la base del camino a seguir está sustentada en la búsqueda de nuestra identidad como pueblo, como clase, para así darle respuesta a un problema que trasciende lo nacional y se ubica en un contexto regional, latinoamericano, mundial. Las herramientas fundamentales son establecer nuestra propia ideología y el control del poder. Creo que sobre esto estaríamos en principio de acuerdo, sin embargo, ¿cómo hacerlo? No se trata de inventar cosas nuevas, pues simplemente el mismo mal nos da el remedio.

La intromisión de la izquierda en el movimiento popular, estableció un concepto absoluto de lucha, que mediatizó la capacidad ofensiva del mismo. Hablamos del término "contra". Las grandes movilizaciones y los esfuerzos organizativos se hicieron "contra . . . ".

El problema es que este concepto provoca luchas muy específicas, que se transforman en luchas reivindicativas prescindiendo de su significado político; desestabilizando momentáneamente el control ideológico, político, económico y social de la burguesía, alertándola sobre sus puntos débiles, para que pueda corregir y fortalecer aún más su dominio.

Es fundamental abandonar este concepto defensivo y establecer uno de construcción, de futuro: hay que dejar de "luchar contra" y "luchar por".

Esta variación de conceptos permite, antes de estar arengando desde la acera, echarse a la calle a escuchar y a entender, dejar participar y decidir a los que realmente van a hacer los cambios. Cuando esto se da, se establece un nivel de compromiso, porque si algo les queda a los ticos es *palabra*. Ese valor de honorabilidad en nuestro pueblo aún persiste, hay que rescatarlo.

Como se ve hablamos de construir desde abajo, no desde arriba. La experiencia me ha enseñado que la lucha social no tiene plazos predeterminados, y que sólo se avanza cuando el pueblo confía plenamente —porque entiende— en los objetivos de lucha.

El poder no es un partido, un nombre, o un líder; en nuestro caso es el pueblo organizado, movilizado, pero con amplia y segura participación en la toma de decisiones.

Me parece necesario acordar que nadie debe venir a asumir la tarea de la lucha del pueblo; él mismo debe tomar esa responsabilidad histórica, para así preservar los logros que se obtengan. Si queremos una patria soberana dueña de su propio destino, debe estar sustentada permanentemente en el poder del pueblo.

Siguiendo en lo del mal y el remedio, debo decir que, en medio de la crisis, los sectores económicamente poderosos de este país van definiendo claramente los problemas por los que hay que luchar. Su anhelo de mantener el nivel de privilegio al que han estado acostumbrados, los ha llevado a comprometer nuestra patria con los organismos financieros internacionales a tal punto, que ahora es fácilmente perceptible lo que antes era oscuro: la polarización social es más evidente y la injusticia más tangible. El derecho a una vida digna producto de nuestro trabajo, y el derecho al trabajo, son temas que prenden rápidamente en el pueblo, aún hasta en los sectores que hace poco servían de colchón social.

Aún así la burguesía en este país tiene la posibilidad de confundir, mediante una propaganda abrumadora y sistemática, a nuestro pueblo. De manera impresionante, los problemas de carácter internacional que tienen que ver con la injusta relación entre países pobres y desarrollados, tratan de justificarse como un simple problema de este-oeste.

La crisis centroamericana se reduce a un problema, ya no de los sandinistas, sino de la existencia del nica. Todo esto por una razón sencilla. La crisis de que hablamos, es de carácter internacional; por eso los distintos pueblos del mundo sufren en mayor o menor manera los embates de la crisis. En la medida en que estos pueblos aunen esfuerzos, se enfrentará y superará en mejores condiciones la crisis.

La división y alejamiento entre los pueblos es indispensable para la preservación de la injusticia.

Luchar por enlazar estos pueblos es tarea de primer orden, pero no sobre consignas trilladas, aburridas, sino sobre cosas naturales, corrientes, inatacables. Hablamos de relaciones de intercambio cultural, tecnológico, comercial, de avances en salud, etc.; sin olvidar que esto debe llevar al fortalecimiento de los niveles de organización popular en cada país.

Sólo cuando sepamos interpretar los alcances de los compromisos adquiridos por nuestros gobiernos en la entrega de la patria a los organismos financieros internacionales, y lo que eso significa para nuestro pueblo, desde su práctica y nivel de entendimiento, podremos comenzar a levantar un nuevo proyecto. No pensemos que el pueblo es tonto o que es difícil que entienda la actual situación y que dé las respuestas que ya se necesitan. Tratemos de hablar para que se nos entienda, y cuando esto se dé, veamos cuál es el nivel de compromiso que se adquiere. No podemos aunque queramos precipitar una situación

que no está madura. Pero si queremos ver algo distinto en Costa Rica tenemos bastante trabajo en buscar el terreno apropiado, conocer qué se puede cultivar, sembrar y esperar con confianza y fe su cosecha.

Las transnacionales y sectores económicamente poderosos no son gigantes invensibles. Un pueblo con conocimiento y fe de su futuro es capaz de derribarlos, y para eso debemos dejar de estar fundamentalmente "en contra" de ellos y pasar a luchar "por" el futuro de nuestros pueblos.

Nuestro país requiere, entonces, de hablar menos y hacer más, de olvidar la presunción de que existen algunos iluminados al frente de una masa ignorante. Este momento exige de la más amplia oportunidad del pueblo a buscar su sendero. Una historia rica en experiencias de lucha nos acompaña. Una crisis que nos obliga a ser más astutos para poder vivir nos da el ánimo. Una burguesía deseosa de seguir viviendo de nuestra miseria nos da el coraje. Hoy todo tico tiene mucho que decir.

En las actuales circunstancias, los que se pelean por su representación, sin dejar opción al derecho de opinión del pueblo, están condenados al fracaso.

Nuestro pueblo es feliz debatiendo, toma posición, pelea públicamente, necesita soluciones pero no conoce los instrumentos para lograrlas. Por eso digo que hay que pasar de la acera a la calle. Dejar de pretender ser líder, transformarse en pueblo y marchar con él, por la defensa de su legítimos derechos.

Por qué se lucha y quién lucha, es algo que no se ha permitido establecer en Costa Rica. Quiero decir, es una discusión que en el pueblo no se ha dado. No es llegar después de hoy, casa por casa a preguntar esto a cada familia; es crear los mecanismos de comunicación, con un criterio de libertad, que permita expresar y entender a lo que el pueblo aspira.

Hoy a surgido un tipo de organización independiente, que viene sosteniendo luchas muy importantes con un nivel de movilización y presencia que la perfila como alternativa en distintos sectores. Su independencia no cuestiona sus posiciones de clase. Distintos sectores políticos han intentado integrarla a sus filas, pero no lo han logrado; casualmente las experiencias anteriores permiten establecer que en los actuales momentos, a veces es mejor estar solo que mal acompañado.

Estos grupos independientes proliferan y se fortalecen, por lo que creo que esa identidad necesaria conlleva un sello de independencia; al costarricense le gusta tener lo suyo.

El respeto, la honestidad, la confianza, la capacidad real de movilización y lucha desde posiciones clasistas y patrióticas que mantengan, van a permitir configurar un vasto movimiento popular. Para mí esa es la alternativa.

En algunos momentos se ha planteado la necesidad de estructurar un nuevo partido como nueva alternativa. Considero que es prematuro en la medida en que el pueblo debe de avanzar más en sus nuevas experiencias de lucha; además, no es seguro desde ahora garantizar que ese sea el tipo de organización necesaria. En este país faltan aún muchas cosas por pasar, puesto que la crisis cada vez se profundiza más, generando nuevas circunstancias.

UN NUEVO PROYECTO SOCIALDEMOCRATA

Ennio Rodríguez Céspedes

Existe una hipótesis simplista sobre el desarrollo nacional que tuvo alguna popularidad en los años setenta pero que hoy ha caído en el descrédito. Sin embargo, en vista de que alguno de los ponentes la ha expuesto con gran entusiasmo amerita algunos comentarios.

Parte de una hipótesis mecánica de que el responsable de todos los males en este país es el imperialismo y que internamente este se expresa sin ninguna mediatización en contra de los intereses populares. La historia se reduce a una descripción de cómo en las distintas etapas los intereses imperiales moldearon los acontecimientos.

Lógicamente, la respuesta política no puede ser otra que una lucha antiimperialista. Una vez vencido el enemigo, como este era el responsable de todos los males, el desarrollo nacional puede asumir la forma deseada de acuerdo con los intereses populares según los interpreta un determinado Partido. Pasan entonces a listar el inventario de ilusiones que se podrán alcanzar una vez rotos los cordones castrantes de la dependencia.

Este planteamiento simplista, útil quizás para la agitación política es muy peligroso pues no desentraña las particularidades del desarrollo nacional. Excepto por una gran causa, la historia está indeterminada y por lo tanto carente de un esquema que permita actuar sobre ella de manera constructiva.

En contraste, el análisis debe partir de las particularidades más sobresalientes de la historia reciente de nuestro país, dentro de un esquema interpretativo que permita orientar algunos comentarios sobre los retos que el futuro nos depara.

Costa Rica vivió en los treinta años anteriores a la crisis en la que estamos inmersos, la "pax liberacionista". La transformación que sufrió la sociedad bien puede caracterizarse de revolucionaria por la profundidad del cambio social. En realidad puede apreciarse como una

de las revoluciones sociales más profundas del Continente y la única que ha traído consigo un fortalecimiento de los derechos humanos.

Los indicadores del desarrollo nacional son sorprendentes en cualquiera de los campos en que se mire. Pasamos de tener el 60% de los maestros, en los años cincuenta, que no habían concluido la escuela primaria, a una situación en la que la gran mayoría es graduada universitaria o de las escuelas normales. Prácticamente desapareció el analfabetismo de los niños en edad escolar. En el campo de la salud un solo indicador revela el gran salto: la mortalidad infantil pasó de 110 niños por cada mil nacidos vivos a 16 niños durante el mismo período. Para contrastar, en América Latina solo el 30% de la población rural tiene acceso a la energía eléctrica, mientras que en Costa Rica el 60% de la gente del campo disfruta de este servicio y el 95% de los que viven en las ciudades. Se podría continuar citando indicadores en campos como telefonía, caminos rurales, agua potable, letrinas, etc. En el terreno político nuestro país emerge como la democracia más fuerte de América Latina y con el sistema de sufragio más puro.

Estas particularidades surgieron en un contexto donde –si se revisan las cifras de la CEPAL– el crecimiento de la economía costarricense en 30 años fue el más exitoso de América Latina con tasas de crecimiento de alrededor de 7% en términos reales. Esa fue la base material que hizo posible todo este desarrollo institucional y de servicios.

Esto ha tenido consecuencias y causas políticas. No vivimos en un país con una crisis secular de más de 20 años, como los hay en el Continente. Si Costa Rica tuvo un mejor desarrollo económico, político y social, incluso que países con una base material más rica, debe hurgarse dentro de ese proceso histórico para determinar cuál fue su racionalidad.

Si nos remontamos a los años cuarenta se pueden notar los elementos que vinieron a perfilar un verdadero proyecto político. Los escritos del Partido Social Demócrata, la reforma social del calderonismo, el análisis del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, la base sindical de la Rerum Novarum, el movimiento del Dr. Vargas de Liberia y otros más, coincidían en un diagnóstico crítico de la realidad que los circundaba, pero sobre todo coincidían en un nuevo modelo de Estado, con una cantidad de nuevas funciones que permitieran conducir el desarrollo nacional, desarrollar y consolidar las instituciones de solidaridad social, fortalecer la democracia y crearle oportunidades a los grupos medios emergentes.

Sin entrar en mayores análisis, la Revolución del 48 permitió que estas nuevas ideas asumieran el mando en circunstancias en que pudieron ejercer un gran poder. El conflicto armado le permitió al Movimiento de Liberación Nacional triunfar y construir los consensos

sociales en torno a un nuevo proyecto. Antes del triunfo la sociedad estaba polarizada y en conflicto ante la reforma social. Los trabajadores organizados por el Partido Comunista fueron derrotados militarmente y los grupos conservadores que adversaban la reforma social fueron derrotados políticamente. Se generó así el espacio para un proyecto asentado en los grupos medios.

El inventario de ilusiones, expresado en el Ideario Nacional, fijó las metas para el cambio social. La concepción en cuanto a la intervención del Estado, el desarrollo de las instituciones y el fortalecimiento de nuevos grupos sociales fueron los vehículos de ese cambio. Una evaluación de este proyecto político a partir de los datos con que se inicia este artículo debe concluir que en gran parte este se ha llevado a la práctica, que respondió certeramente a una realidad política y permitió su transformación.

También es cierto que en la medida en que las ilusiones se han hecho realidad y que han surgido nuevos problemas y desafíos, algunos como resabios del período anterior, se hace necesaria la fijación de nuevos nortes para el desarrollo nacional y de nuevas concepciones en cuanto al Estado, la economía y la sociedad. Pero más que nada se hace necesario que estas nuevas ideas tengan un gran respaldo popular, se hace necesario que existan consensos en torno a estas nuevas ideas. En síntesis, se requiere un nuevo proyecto político.

Decía Rodrigo Facio que la reforma social de los cuarenta tenía pies de barro, que la base económica del país no tenía la fuerza suficiente para sustentarla. Hoy día podemos de nuevo afirmar que el gran desarrollo de las instituciones de solidaridad social y el avance democrático tienen pies de barro.

Sin una base material adecuada estos desarrollos se ven amenazados por las posibilidades de un retroceso paulatino o incluso de uno drástico.

Los motores del crecimiento económico en las décadas pasadas fueron la diversificación de las exportaciones, la sustitución de importaciones en el marco del Mercado Común Centroamericano y la producción agrícola para el mercado interno. Las altas tasas de crecimiento fueron el resultado de una concepción de la intervención en el comercio exterior y del apoyo a la producción por una multiplicidad de instituciones y mecanismos, que incluyen desde crédito hasta caminos, comunicaciones, precios de sustentación, etc. Se encontró un equilibrio adecuado entre la iniciativa individual y el apoyo y orientación estatal.

Sabemos que estos motores de crecimiento no pueden continuar jugando este papel. Las exportaciones tradicionales están seriamente amenazadas, el Mercado Común no podrá servir como base de crecimiento, por lo menos en el período previsible y el mercado interno no puede servir de base continuada de crecimiento. Esto significa que las

instituciones, programas y políticas desarrolladas para apoyar un esquema de crecimiento sobre esas bases deben ser revisados.

Los planteamientos conservadores siempre plantean que la raíz de los problemas reside en el excesivo intervencionismo del Estado, de modo que hoy, al igual que en el 48, plantean retrotraer la acción estatal de la actividad económica. Coinciden en el diagnóstico de que las formas de intervención ya no surten los efectos deseados y por el contrario incluso pueden retardar el crecimiento económico, pero sus planteamientos hacia el futuro, en realidad miran al pasado. Plantean que el Estado y el control democrático sobre éste no asuman las responsabilidades de conducir el desarrollo nacional y las necesidades de solidaridad social. Por el contrario, proponen que sea el empresario individual, sin más perspectiva que la de sus propios intereses y disciplinado por las fuerzas de la competencia, el que determine la dirección del desarrollo y la satisfacción de necesidades sociales.

Deben plantearse nuevos horizontes para la estructura productiva y entonces deducir la acción complementaria del interés público y la iniciativa individual. Pueden pensarse, como esquemas alternativos, una nueva especialización en el comercio internacional sobre la base de una mayor competitividad vía menores costos en la mano de obra y en los recursos naturales, o puede intentarse construir nuevas ventajas comparativas sobre la base de mano de obra más calificada que eleven al máximo el valor agregado nacional.

El esquema conservador es precisamente una especialización sobre la base de mano de obra barata. No toma en cuenta que la dirección del cambio técnico en la microelectrónica permite automatizar crecientemente las tareas sencillas y repetitivas. Las actividades antes intensivas en el uso de la mano de obra, como el caso de los textiles y las líneas de ensamblaje, hoy gracias a los robots, regresan a los países de salarios altos. Los países que se especialicen en este tipo de actividades se encontrarán compitiendo entre sí por empleos cada vez más escasos.

Un esquema alternativo requiere desarrollar un modelo intervencionista en el que se fijen las prioridades nacionales en cuanto a la especialización de la estructura productiva y se diseñen los programas y las políticas. En particular es necesario desarrollar una estrategia de desarrollo tecnológico para poder construir nuevas ventajas comparativas. Se vuelve necesario imitar los patrones de los países asiáticos y trabajar en torno a un proyecto productivo nacional en donde no hay conflicto entre el Estado y el sector privado, sino que los linderos son cada vez más difusos.

Las instituciones que apoyan el desarrollo económico necesitan una profunda revisión. En momentos en que la brecha tecnológica entre los países desarrollados y los demás se ensancha a pasos agigantados, por las posibilidades de las revoluciones microelectrónicas y biotecnológicas, se

debe partir de una respuesta a la pregunta sobre cuál es el desarrollo institucional necesario para dar el salto tecnológico. En ninguno de los países industrializados se ha dejado el desarrollo de la microelectrónica y el de la biotecnología a las fuerzas del mercado. Por el contrario, deben revisarse las formas de intervención que han desarrollado estos países y combatir el divorcio que actualmente existe en el país entre la capacidad científica y tecnológica nacional y la estructura productiva. Para citar un ejemplo, la industria de los semiconductores se ha desarrollado en los Estados Unidos bajo el alero de la protección estatal por considerarse estratégica. No desarrollar un programa de largo plazo en estos campos significa que Costa Rica no podrá darle un sustento material a su gran desarrollo político y social.

Costa Rica se ha caracterizado por un proceso de gran movilidad social que le ha dado gran fuerza al sistema político. Estas posibilidades de movilidad social se han fundado por un lado en el rápido crecimiento económico y por lo tanto, del empleo. Es necesario retornar a fórmulas de rápido crecimiento. Pero otro aspecto que ha permitido la movilidad y que ha fortalecido la sociedad ha sido la posibilidad de acceso a la propiedad y a la educación.

Durante veinte de los treinta años de la "pax liberacionista" hubo una frontera agrícola en expansión que permitía un proceso de colonización espontánea. Así gran parte del crecimiento del empleo agrícola y del aumento de la producción de ese sector se originaban en la incorporación de nuevas tierras al desarrollo nacional. Esta colonización a su vez permitía el surgimiento de nuevos propietarios y contribuía a la presión por una mejor remuneración en las tareas agrícolas.

En la década de los setenta y posteriormente, la política agraria puede verse precisamente como un intento de simular esta colonización espontánea en los asentamientos campesinos, con gran éxito en algunos casos, pero sin la debida prioridad y apoyo financiero a las instituciones que tienen a cargo el desarrollo rural la mayoría del tiempo. También se han encontrado fórmulas para preservar la pequeña propiedad y fomentar las cooperativas en cultivos como el café.

Una prioridad hacia el futuro debe ser el diseñar los mecanismos que posibiliten la movilidad social, en particular, el acceso a la propiedad. Esto significa fortalecer la democracia económica. Tanto en el campo como en la ciudad debe estimularse la constitución de empresas de capital abierto; desarrollos como el solidarismo pueden servir para avanzar hacia formas de cogestión y participación obrera en las ganancias y en los riesgos; los programas de asentamientos campesinos deberán programarse adecuadamente y no esperar a que estallen los conflictos agrarios para luego atenderlos. De lo que se trata es de asegurarse que existan suficientes vehículos de acceso a la propiedad y de movilidad social que no dependan exclusivamente de las reivindicaciones salariales. Estas últimas cuando ocupan un lugar preponderante en la sociedad

llevan a polarizaciones que poco contribuyen al desarrollo nacional en el largo plazo.

El modelo político electoral se encuentra agotado. Es incapaz de asumir las reformas profundas que la sociedad requiere. El sistema es conservador y excesivamente orientado al corto plazo. Tenemos un sistema presidencialista en donde el presidente tiene escaso poder político. Hemos creado el mayor sinsentido de la teoría política: un presidente apolítico. La no reelección y la separación del presidente del partido que lo llevó al poder deja al sistema sin mecanismo para que prive una visión de largo plazo.

La reelección y el mayor peso de las estructuras partidarias como el elemento multiclasista de apoyo a la labor presidencial son requisitos necesarios para acometer reformas que no tendrán efectos positivos en el corto plazo. Además la actual estructura deja al presidente inerme frente a los grupos de presión y la prensa, pues el partido desaparece como instrumento que le genere los consensos sociales y amortigüe los posibles conflictos. Es más, el día de la toma de posesión el presidente pierde poder político, pues las fuerzas en el partido, el Congreso y los municipios deben empezar a considerar al posible sucesor.

Debemos acometer una reforma política que nos permita avanzar hacia una democracia moderna de partidos. Las posibilidades de liderazgo nacional requieren del apoyo de estructuras partidarias para generar consenso en torno a planteamientos en todos los sectores de la vida política. Pero también el partido se vuelve en un garante de los principios ideológicos y de las visiones programáticas de largo plazo que trascienden al líder de turno.

El modelo participativo también debe fortalecerse como elemento central de la democracia y para que pueda asumir funciones importantes para el desarrollo nacional. La descentralización del Estado demanda un fortalecimiento de la democracia participativa, pues de lo contrario, avances en la descentralización también pueden significar un fortalecimiento de señores feudales, cuya arbitrariedad puede ser mayor que la del funcionario capitalino.

Costa Rica ha sido bastante fértil en el desarrollo de organizaciones. Estas se han organizado sobre todo como grupos de presión frente al Estado. Es necesario profundizar estos modelos participativos y avanzar hacia labores más constructivas. De otra forma no podrán acometerse tareas como la protección ecológica, la seguridad ciudadana, la defensa del individuo frente a las instituciones estatales o del sector privado, etc.

La profundidad de estas reformas al aparato productivo, al sistema político y a otros aspectos vitales del desarrollo nacional no mencionados en este artículo, demandan la construcción de nuevos consensos nacionales. Las restricciones al desarrollo que surgen por la condiciona-

lidad externa que la actual crisis ha engendrado y el fortalecimiento de grupos conservadores nacionales amenazan con orientar la transformación estructural en direcciones contrarias a la filosofía que ha predominado en este país en los últimos cuarenta años. El reconocimiento de la solidaridad social y de la responsabilidad política de conducir el desarrollo nacional amenazan con ser trocados por esquemas darwinianos de sobrevivencia del más apto. Ante esta amenaza la necesidad de construir un nuevo proyecto político nacional no puede ser más perentoria.

Un proyecto con bienestar y justicia social

Oscar Madrigal

Tanto el modelo que se impuso en 1962, el de sustitución de importaciones, como el que se pretende imponer 20 años después, en 1982, han sido impuestos por fuerzas foráneas, por las agencias financieras internacionales, por el capitalismo internacional.

En 1962 a este país se le dijo que debía proteger su mercado, que debía desarrollar su industria y que en función de esa industrialización debía levantarse un alto proteccionismo. Ese proteccionismo condujo a constantes desbalances, déficits en las balanzas comerciales; precisamente porque la sustitución de importaciones no fue tal, sino que se sustituyó la importación de artículos elaborados por importación de materias primas.

La crisis mundial del capitalismo, que se presentó a finales de la década del 80, prácticamente quebró esto. Pero los esfuerzos que tuvo que hacer nuestro pueblo para lograr este proceso de pseudo-industrialización, dando enormes y gigantescos exoneraciones a las compañías, sobre todo a las multinacionales, produciendo un elevado endeudamiento externo para montar una infraestructura en relación a esta pseudo-industria, fueron en vano y resulta que 20 años después, esas mismas fuerzas nos dicen que ese modelo ya es ineficiente, que ese modelo ya está quebrado, que ese modelo ya no sirve. Y entonces ahora, esas mismas fuerzas que obligaron a este país a ingresar en ese modelo de desarrollo económico, pretenden imponerle otro modelo y con ello nuevos esfuerzos a nuestro pueblo, ahora en función de desarrollar las exportaciones para producir las divisas necesarias que nos permitan pagar la enorme deuda externa que sus imposiciones generaron.

En el 62 el patrón era proteccionista; ahora es anti-proteccionista. Porque ahora Costa Rica tiene que insertarse en la economía internacional. Mientras las grandes potencias capitalistas, mientras los Estados Unidos protegen cada vez más su mercado, mientras la Comunidad Económica Europea protege cada vez más su mercado, lo cuida, e

impide la competencia de otras potencias, resulta que a nosotros nos quieren imponer un modelo que desproteja y entregue nuestros mercados al capital foráneo, al capital extranjero.

Causa risa, pero es así. Ustedes han leído la noticia de que Estados Unidos ha acusado a Italia ante la Corte Internacional de La Haya por medidas comerciales que Italia adoptó para cuidar su mercado.

La privatización de la economía, la privatización de los servicios, la privatización de las empresas estatales son características también de este modelo de desarrollo. Oscar Arias ha dicho el 13 de julio de 1986: "Ha llegado la hora en que es necesario reorientar las acciones del Estado. Debemos procurar que algunos servicios que hoy brinda el Estado, pasen a la iniciativa privada". Es decir, el Estado también tiende a perder y a adquirir únicamente un papel muy secundario, muy complementario dentro de esta nueva política que a muy grandes rasgos, por supuesto, denuncio ahora.

La reducción del gasto público, por supuesto, según ha dicho Lizano Faith, el Presidente del Banco Central, no debe afectar lo que él llama la rentabilidad de la empresa privada. Es decir, hay que disminuir los impuestos a las empresas privadas, para aumentarlos a lo que él llama el consumo. Es decir, impuestos indirectos, impuestos sobre las clases populares para disminuir los impuestos a las multinacionales.

En este sentido, la maquila se convierte evidentemente en uno de los principales rubros de este modelo, porque efectivamente, la maquila es, según palabras de Oscar Arias: vender nuestro mejor recurso, que es el recurso humano. Entonces, Costa Rica tiene que dedicarse a vender su mejor recurso, su fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo barata, una fuerza de trabajo bien calificada, etc.

Esto, lógicamente ha producido y viene produciendo en Costa Rica, un empobrecimiento y una concentración de la riqueza social.

Creo también que es necesario entender que este modelo de desarrollo económico tiene, quiérase o no, su incidencia en el plano de la super-estructura política, en una limitación lógica y necesaria de los derechos democráticos en nuestro país. Cito el ejemplo de la libertad sindical, que en Costa Rica prácticamente ha dejado de existir y nos vemos constreñidos exclusivamente, en algunos casos, a la firma de algunas convenciones colectivas que ya están siendo objetadas en el sector público.

El derecho de expresión, el derecho de manifestación, el derecho de huelga son aspectos también que en Costa Rica, en el proceso de desarrollo de este modelo, en lugar de ampliarse y de ser este un país más democrático, han venido muy a menos; en consecuencia se desarrolla un estado policial, un estado cada vez más represivo.

Me parece importante señalar la pérdida en los derechos civiles. Hace poco se acaba de legalizar por parte de la Corte Suprema de Justicia la escucha de las conversaciones telefónicas. Se generaliza la tortura aplicada por los entes policíacos. La pérdida de los derechos humanos en el campo económico, en el campo social, en el campo civil, en el campo político, con este modelo, conducen necesariamente a lo anterior.

Es un modelo que se desarrolla en sus aspectos esenciales. Creemos que puede haber discrepancias, diferencias, acentuaciones o no en determinados aspectos, eso es necesario tenerlo en cuenta; pero lo fundamental, en nuestra opinión, es entender que en esencia se desarrolla un modelo económico. Que esencialmente hay una política económica. Que la esencia no son las contradicciones, la esencia del desarrollo no es la ambivalencia, la ambigüedad, sino que hay una política que de una u otra manera se abre curso en nuestro país.

Estos modelos son impuestos y han sido impuestos antes del 62 como ahora, por el capitalismo, por el imperialismo, por las agencias financieras y nuestras clases dominantes se han sometido evidentemente a estas orientaciones.

¿Qué es lo que genera este modelo? No genera independencia. Genera dependencia lógicamente, y sumisión al capital foráneo e impiden, en nuestra opinión, un verdadero desarrollo.

En este sentido, creo que tanto el Partido Liberación Nacional, como el partido Unidad Social Cristiana, han encontrado verdadera comunidad de intereses, en sus aspectos fundamentales.

¿Son viables estos modelos para Costa Rica? Me parece que no. Me parece que desarrollar las exportaciones a mercados totalmente protegidos como los Estados Unidos y Europa es imposible. Que nosotros pretendamos seguir exportando azúcar a los Estados Unidos o pretender, que mientras a nosotros nos impiden sembrar maíz, tengamos que importar maíz con el PL480 u otros mecanismos, está fuera de un posible desarrollo. ¿Es posible liquidar las subvenciones al pequeño productor agrícola de nuestro país mientras los Estados Unidos dedican más de 35 mil millones de dólares a subsidiar su producción y la Comunidad Económica Europea más de 13 mil millones de dólares? O sea, mientras ellos realizan una política económica, obligan y condenan a nuestros pueblos precisamente a hacer lo contrario y nos obligan supuestamente a desarrollar un modelo para competir en las condiciones que el capitalismo en estos momentos necesita, o sea aplicando cada vez mayores medidas proteccionistas. Me parece que la viabilidad de un proyecto como el que se pretende, como el que desarrolla en este momento el gobierno es y conduce a un empobrecimiento y una pérdida cada vez mayor de nuestra soberanía y nuestra independencia.

¿Qué es lo que nosotros creemos que debe ser lo primero en nuestro país? Número uno: desplegar nosotros efectivamente una estrategia de desarrollo nacional que asegure la independencia de nuestro país. Eso es lo primero. Recuperar la independencia y nuestra independencia económica, política; nuestra soberanía. Nosotros no podemos seguir, evidentemente, caminando a los vaivenes que nos dicten los organismos internacionales. No podemos desarrollarnos conforme a nuestros intereses, a los intereses reales basados en nuestros propios recursos, tanto naturales como humanos, si no logramos nuestra independencia.

Entonces, nuestro proyecto político, nuestra alternativa tiene que ser un proyecto ejecutado por los sectores más patrióticos de nuestro pueblo, que asegure una estrategia de desarrollo independiente. En ese sentido es lógico y necesario la recuperación de la soberanía y del patriotismo en Costa Rica. Esos sectores patriotas tienen que ser, en nuestra opinión, encontrados en otros grupos sociales; diferentes de los que ahora detentan el poder: los obreros, los campesinos, la pequeña burguesía, las llamadas capas medias e incluso parte de nuestra burguesía mediana que está siendo afectada por el desarrollo de ese modelo. Es difícil encontrar en los que han dirigido nuestro país ahora, fuerzas políticas fundamentales para poder enfrentar un desarrollo independiente.

Me parece que el proyecto político, tiene que tener como objetivo central el bienestar y la justicia social. Si vamos a producir tiene que ser para el enriquecimiento nacional y popular y empezar también, en consecuencia, por una redistribución de la riqueza en nuestro país.

Se trata también, creo, de un proyecto que tiene que ser desde esa perspectiva, un proyecto que toque las estructuras principales de la sociedad costarricense, y en esa circunstancia, espero que a nadie asuste la palabra, tiene que ser un proyecto revolucionario. Es decir, no puede ser un proyecto reformista, porque tiene que atacar problemas de la estructura productiva de nuestro país por la raíz. Eso quiere decir revolucionario: atacar los problemas por la raíz, por los aspectos más fundamentales.

Tiene que ser necesariamente un proyecto democrático, que asegure la aplicación, la ampliación de las libertades democráticas, de los derechos humanos fundamentales, económicos, sociales, civiles y políticos; esos sectores, he mencionado, tienen que tener un papel protagónico y no secundario en el desarrollo de este impulso social.

Me parece que el proyecto político o la alternativa tiene que basarse en un gobierno realmente popular, con un régimen político que asegure el desarrollo de estas libertades y el desarrollo económico del país.

Este régimen político tiene que asentarse sobre la más amplia organización de nuestro pueblo, sobre la participación decisiva de las organi-

zaciones en los órganos de poder, a nivel comunal, a nivel fabril, a nivel agrícola, a nivel municipal y en los órganos de dirección nacional, en las instituciones autónomas, etc., y no como un miembro más de las directivas institucionales como algunos dicen. Es necesario poner representantes en el Consejo Nacional de la Producción, representantes de las organizaciones populares, jugando un papel principal y no secundario. Me parece que el régimen político de nuestra alternativa tiene que garantizar la ampliación de la libertad de reunión, de asociación, de culto, de expresión del pensamiento. Tiene que asentarse este régimen político en un sistema electoral evidentemente directo, universal, secreto, que garantice la representación en los órganos de gobierno y ese régimen político tiene que ser democrático, no puede ser de otra manera. No creemos nosotros que otras formas, que no sean las democráticas, pueden asegurarle a este país la participación de nuestro pueblo, que es lo que se necesita para regir los destinos de la economía y de la sociedad en general.

Me parece que la alternativa que nosotros establecemos debe garantizar que las formas de propiedad deben coexistir y desarrollarse. Debe establecer la reivindicación de la forma estatal de propiedad, tenemos que recuperar la capacidad y la eficiencia del Estado para el desarrollo de ramas importantes de la producción nacional y no como está ocurriendo ahora, que es prácticamente el desmantelamiento de toda esta rama de producción estatal, basada en la tesis de ineficiencia o de corrupción, que afectivamente las ha habido.

Pero es necesario que nosotros reivindiquemos, que mientras nuestro país no tenga efectivamente un área de propiedad estatal, es sumamente difícil asegurar su desarrollo económico independiente. La forma cooperativista de producción hay que desarrollarla, de manera acelerada, en Costa Rica. Pero no la cooperativización que nos quiere dar ahora Oscar Arias cuando dice: las lavanderías del Hospital Max Peralta de Cartago, tómenlas las cooperativas de los trabajadores. No. Una cooperativización que efectivamente asegure la propiedad y el desarrollo económico de nuestro país. Esa cooperativización creemos nosotros es importante que se establezca y que se diga que debe ser absolutamente voluntaria de los productores.

La propiedad privada, la pequeña propiedad privada, la producción pequeña privada, tiene que ser garantizada en una nueva alternativa. Tanto la artesanal, la individual, etc. La producción de la propiedad capitalista en una nueva alternativa tiene que ser garantizada también, porque la mediana y la pequeña producción capitalistas pueden coexistir y pueden desarrollarse en una alternativa popular, en una alternativa de las fuerzas populares de nuestro país. Y la propiedad mixta, es decir, la estatal y la privada. Creo también que debe garantizarse la transformación del Estado de Costa Rica. Es evidente que el Estado tiene que mejorar su funcionamiento, tienen que utilizarse mejor sus recursos

y tienen que cambiarse las prioridades de este Estado. Su objetivo principal tiene que ser la búsqueda del bienestar y la defensa de los intereses populares, de ese Estado.

El Estado tiene que ser además la principal palanca de desarrollo de una alternativa popular. En ese sentido es necesario reorganizar este Estado, institucionalmente, para evitar duplicidades en el funcionamiento, como ocurre con Salud, Educación, el Sistema Bancario, etc. En la transformación del Estado los entes que clarifiquen y desarrollen la economía tienen que tener un papel preponderante.

Sobre la producción nacional nosotros creemos que el crecimiento económico tiene que partir de asignarle un carácter estratégico al desarrollo de nuestra agricultura. No podemos desarmar y desaparecer nuestra agricultura en función de un pseudo o de un potencial proceso de industrialización.

La agricultura es el sector estratégico, por lo menos en una primera etapa, que nos puede asegurar una industrialización. Evidentemente, el proceso de acumulación capitalista estará en el agro y va a estar en el agro y también porque este país tiene tradiciones agrícolas que no podemos cambiar de la noche a la mañana. No podemos obligar a nuestro campesino que ha sembrado maíz toda su vida a sembrar cardamono, o coco o sembrar piña o macadamia. Tenemos tradiciones agrícolas que es necesario entender y respetar, pero aquí ahora se pretende que el campesino de un día para otro se ponga a sembrar cardamono para exportar.

Me parece que la agroindustria debe ser también incrementada. La producción agropecuaria en nuestro país tiene que empezar por una redistribución de la tierra. Debe ser eliminado el latifundio, debe ser entregada la tierra gratuitamente a los campesinos, debe expropiarse la tierra. Nosotros creemos que hay que pagar las expropiaciones. Debe diversificarse la agricultura. Debe subvencionarse esa agricultura. Lo están haciendo los países capitalistas altamente desarrollados. Nosotros debemos subvencionar, deben darse créditos, etc. Deben nacionalizarse las empresas exportadoras, especialmente las de artículos tradicionales como las de café, la producción de alcohol, la producción y la exportación de carne. Es necesario crear nuevas empresas que busquen nuevas fuentes, nuevos lugares donde exportar. La industrialización debe ser dirigida en nuestra opinión principalmente a la agroindustria y a la extracción de nuestros recursos naturales.

La industria manufacturera es un problema grave, porque nosotros heredaríamos en este tipo de circunstancias, una industria manufacturera que realmente es sucursal de las grandes empresas. Pero tenemos que ver cómo ponerla a producir, para que esa industria sirva a los intereses populares. Hay que empezar precisamente apoyándonos en la producción de industrias que utilicen cada vez menos materia prima extranjera, como lo son alimentos, bebidas, tabaco, madera, etc.

Pero esa industria también tiene que ponerse al servicio, en primer lugar, del desarrollo estratégico, económico, de nuestro país. Creo que es necesario desarrollar una industria básica que este país no tiene, una industria de productos intermedios que asegure a la industria de productos terminados; pero esta industria básica tiene que asentarse en la extracción de nuestras riquezas naturales.

Cito un caso, el cemento. Puede servir aquí para desarrollar la industria de la construcción, pero están a punto de entregarle la planta de cemento en Guanacaste a una compañía extranjera. Eso es increíble. Difícil de entender.

El atún, una riqueza gigantesca, se la acabamos de entregar también a los barcos norteamericanos por $60 la tonelada, cuando esa tonelada vale en los Estados Unidos ya enlatada $10 mil. Uno dice, ¿y el patriotismo, dónde está? Aquí hay riquezas suficientes para desarrollar y asegurar todo ese desarrollo económico, en función de una política de bienestar social: congelación de precios, aumentos generales de salarios, planes de vivienda, sistema de salud, educación gratuita, ampliación de la atención al niño y a la madre, amparo a los ancianos, igualdad de la mujer, defensa del ambiente, etc.; porque Costa Rica tiene recursos suficientes para asegurarle a su pueblo, efectivamente, un mayor bienestar que el que actualmente éste tiene.

Una alternativa democratica para Costa Rica

Víctor Hugo Acuña Ortega

I. A primera vista sentarse a reflexionar sobre la interrogante cuál es la alternativa para Costa Rica, puede parecer pretencioso y vano: pretencioso, puesto que la magnitud y la gravedad de nuestros problemas disuelven las fórmulas mágicas y las consignas simplistas, incluso antes de su mera invocación; vano porque sectores influyentes del país están empeñados, hace mucho tiempo, en dictar en el terreno de la práctica y en el de las ideas lo que estiman es la alternativa. Su empeño se alimenta de la marejada conservadora que ha prevalecido en la presente década en el mundo capitalista y de la crisis profunda que atraviesa actualmente la perspectiva socialista como proyecto y como realidad, de la que son testigos el declive del marxismo y de los partidos comunistas en Occidente y las brisas de reforma que han empezado a soplar en Oriente. Vivimos tiempos sombríos en los que la ideología capitalista ha redorado sus viejos blasones individualistas detrás de los cuales se puede adivinar el conocido darwinismo social decimonónico y un nuevo tipo de antihumanismo. En verdad, al discurso neoconservador le resulta totalmente ajena la máxima de los antiguos: "el ser humano es la medida de todas las cosas". Y sin embargo, el imperativo de buscar una alternativa nunca ha sido tan urgente como ahora en nuestro país, puesto que la que pretende ser "la alternativa", la que se presenta como la única posible, podría enrumbar nuestra nación hacia una ruptura suicida con lo que de su pasado tiene más vigencia, permanencia y trascendencia.

II. Ciertamente que es apremiante intentar romper el cerco ideológico neoconservador en el que ha sido encapsulada la vida social y política nacional. Pocos hubieran podido pronosticar que el pensamiento y el programa de un grupúsculo de empresarios e intelectuales costarricenses formado en 1958, en los albores de la era liberacionista, se convertiría casi tres décadas después en la matriz ideológica de la mayor parte de los sectores políticos dominantes y en el catecismo

recitado en coro por todos los medios de comunicación social. Así, los mecanismos de regulación estatal de las relaciones económicas y sociales se han convertido en el satán, respònsable de todos los males actuales de Costa Rica; incluso la etapa de desarrollo histórico que el país vivió en las últimas tres o cuatro décadas ha llegado a ser casi estigmatizada. Según el nuevo credo vigente, individualista y antiestatista, la época del estado benefactor es una fase nefasta de nuestra historia que solo merece ser enterrada y abandonada al olvido. La lectura de nuestro pasado reciente ha sufrido una inversión total y aquello que tradicionalmente fue visto como conquistas y avances, hoy se mira como lastre o rémora del desarrollo nacional: la ANFE le ganó la partida al grupo de Rodrigo Facio. En el presente el Partido Liberación Nacional rebosa de candidatos a la presidencia pero padece una notoria carestía de pensadores. Hoy los ideólogos sólo se encuentran en los pasillos del periódico "La Nación" y entre los amigos, verdaderos o falsos, de Calderón Fournier.

III. Desgraciadamente no queda más remedio que aceptar que el discurso de la reforma social se ha desgastado y no goza de mucha fama en la Costa Rica de la década de los ochenta. La socialdemocracia costarricense no tiene mucho que ofrecer a nuestro pueblo, salvo la promesa de las ochenta mil viviendas que, evidentemente, representa una feliz ocurrencia y un seductor recurso electoral, pero que aparece aislada y desarticulada de un proyecto global y de largo plazo de desarrollo social y económico, congruente con los intereses nacionales y populares. La distancia que puede existir entre la llamada generación de recambio del liberacionismo, especie de cónclave de jóvenes profesionales de la política, ambiciosos, pragmáticos y poco interesados y enterados de doctrinas y filosofías, y el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, es la que media entre invención y simple gestión de los asuntos corrientes, entre la política como ética y la política como profesión. Si hubiera alguna duda en esta comparación fácil sería disipada dando una hojeada a algunos de los escritos de Rodrigo Facio y tomando al azar cualquier texto de cualquiera de estos nóveles políticos. La debilidad del pensamiento de la actual socialdemocracia costarricense se evidencia en la circunstancia de que se ha convertido en el ala moderada de la hueste neoliberal, en el mejor de los casos, o en su fracción embozada, en el peor de los casos. La crisis de la década de 1980 provocó la desintegración del discurso del cambio social de la socialdemocracia costarricense. Hoy no es fácil reclutar defensores convencidos y convincentes del estado intervencionista. En suma, el Partido Liberación Nacional mira hacia el año 2000 sin proyecto y sin alternativa propios; la simple administración y la mera adaptación a lo existente, antes que la imaginación, las resistencias y las rupturas, parecen ser las vías preferidas del "camino del futuro".

IV. En consecuencia con su errático devenir, la izquierda costarricense se ha precipitado a recoger las viejas banderas que el liberacionismo ha arriado, creyendo que el oficio de restaurador de ideales desgastados pueda ser un remedio para sus crónicas dolencias. Pero el problema es que esa izquierda también ha entrado en un acelerado proceso de descomposición en la resaca de la crisis. La credibilidad de sus discursos y de sus prácticas se encuentra seriamente socavada. Además, su mismo proyecto, predominantemente tributario de un marxismo religioso y de un modelo de organización social y estatal que no disfruta de mucho prestigio dentro de amplios sectores de los trabajadores costarricenses, no parece estar a la altura de las crudas exigencias del tiempo presente. En la situación actual se requiere algo más que arreglos y alianzas de corto plazo, en los que cavilan los más moderados y en los que ya naufragaron los más decadentes ideológicamente y los menos responsables con los principios y la dignidad; o hueras consignas, consistentes con doctrinas raídas pero sin pie firme en la realidad, a las que suelen recurrir los más radicales. Hay que admitir pues, que tampoco desde la izquierda existe una propuesta alternativa frente al evangelio neoliberal y neoconservador.

V. Es difícil ignorar la seriedad de los problemas de la economía costarricense: las dificultades que atraviesa el mercado mundial de nuestros tradicionales productos de exportación; los límites y debilidades de nuestro desarrollo industrial; el pesado fardo que representa la deuda externa y los cuellos de botella y las contradicciones del Estado costarricense. De igual manera, el empobrecimiento y la redistribución regresiva del ingreso que en estos años hemos sufrido se revelan tanto en las estadísticas como en las condiciones concretas de existencia de la mayor parte de la población. No obstante, en nuestra opinión, todos esos problemas adquieren una mayor gravedad por la ausencia de un proyecto o una propuesta alternativa al programa puesto en marcha por los sectores dominantes, que en los recientes análisis de coyuntura del CEPAS ha sido caracterizado como un "cambio conservador". Efectivamente, no es que la sociedad costarricense haya entrado en un estado de letargo o de decadencia, con posterioridad a la crisis de 1980. Por el contrario, el desarrollo de la crisis ha venido acompañado de una serie de medidas impuestas desde el exterior, pero consentidas y promovidas por estrechos intereses internos, que apuntan a la recolonización de nuestra nación y a la "desdemocratización" de nuestra vida política y social. La llamada "economía de exportaciones", que algunos saludan como nuestro puesto de salvación, si llegara a plasmarse sólo tendría como resultado el convertirnos en un vulnerable e ínfimo apéndice de la economía norteamericana. El denominado saneamiento del gasto público y la anunciada privatización de la economía no son más que la búsqueda del desmantelamiento del contenido social del pacto democrático costarricense, imperante en las últimas décadas. Finalmente

quienes se regocijan de la consolidación del bipartidismo en Costa Rica no hacen más que congratularse por la restricción de las opciones políticas en la vida nacional. En consecuencia, el "cambio conservador" no es más que un proceso en movimiento que pretende posponer de manera duradera los urgentes cambios sociales que nuestro país necesita. El proyecto neoconservador no es solamente un programa contrarrevolucionario sino que es también una propuesta antirreformista y antidemocrática y, en consecuencia, su efectiva realización representaría una fractura en relación con tendencias básicas del desarrollo del Estado y la sociedad costarricense presentes al menos desde la época del presidente Alfredo González Flores.

VI. Este nuevo discurso hegemónico ha logrado imponer en la opinión pública, con una cierta eficacia, una serie de falsas disyuntivas: totalitarismo/democracia; estatismo/eficiencia económica; producción/redistribución. La dictadura es lo único que se puede oponer al tipo de democracia existente, no una forma superior de convivencia social en libertad. Frente al actual estado intervencionista no puede existir una nueva forma de relación entre estado y economía que no sea la fórmula liberal. Se insiste sin cesar en el incremento de la producción pero se condena o se difiere cualquier intento de redistribución del producto social. No es tarea fácil encontrar una ruta alternativa a ese discurso maniqueo que resulte convincente, coherente, realista y genuinamente novedoso, puesto que ya no es posible resucitar las fórmulas socialestatistas del pasado, ni mucho menos continuar reincidiendo en un marxismo de catacumbas. No obstante, a pesar de tantos obstáculos es imprescindible reivindicar la transformación de nuestra sociedad y partir al descubrimiento de la alternativa ideológica y política que le sea adecuada.

VII. Antes de penetrar en este terreno convendría reconocer que en este momento la sociedad y el pueblo costarricense parecen mostrarse refractarios a las perspectivas del cambio social. Ni qué decir que los términos de socialismo y revolución espantan a una inmensa mayoría de las conciencias. Quizás habría que asumir con realismo que hoy nuestro pueblo vive una profunda crisis de horizontes y que su identidad social y su sentido de solidaridad se hallan seriamente disminuidos. En estos tiempos imperan valores individualistas, cortoplacistas y en general antiutópicos. Fenómenos como la corrupción, el arribismo social y político, el oportunismo, una cierta frivolidad generalizada, el fundamentalismo religioso, el anticomunismo y el rechazo hacia la experiencia social y política nicaragüense podrían interpretarse como indicios de la crisis de la conciencia popular y de la pérdida de objetivos comunes y de largo alcance que afecta al conjunto de nuestra nación. Tales fenómenos podrían atribuirse al bombardeo ideológico que padecemos, pero la verdad es que en la actualidad grandes sectores de la población viven en el conformismo, la apatía y la desesperanza. En todo

caso, es bastante evidente que la mayoría de la sociedad costarricense ha sido empujada por la crisis más bien hacia la derecha que hacia la izquierda. No deja de ser significativo que el Partido Unidad Social Cristiana se haya consolidada en esta década de crisis. En suma, los sectores populares se encuentran bastante desarmados ideológica y políticamente, mientras que los grupos dominantes se muestran desafiantes y plenos de confianza en su propuesta.

VIII. Precisamente porque la conciencia popular y nacional languidece en el pesimismo no es en modo alguno inútil reflexionar sobre una eventual alternativa. Empero, para que tal reflexión ofrezca alguna utilidad debe ser consciente de sus inevitables limitaciones. En primer lugar sería erróneo desconocer que Costa Rica no es una isla, ni es tampoco el lugar escogido por los dioses para inventar la fórmula que al fin redima a la humanidad de todos sus males. Por ejemplo, si en América Central se desencadenara una guerra generalizada nuestro desarrollo histórico sufriría, irremediablemente, una fractura por mucho tiempo irreparable. De igual manera, aunque Costa Rica encuentre fórmulas de compromiso de carácter provisorio a su delicado problema de la deuda externa, el desenlace final de este espinoso asunto probablemente ocurrirá a escala internacional. Asimismo, la definición y la realización de un nuevo proyecto de desarrollo para nuestro país dependen mucho de la evolución que siga América Latina, del agotamiento de la oleada neoconservadora en los países capitalistas desarrollados, de eventuales cambios que puedan sobrevenir en los países de socialismo realmente existente y de una renovación del pensamiento democrático y socialista a nivel mundial. Así como la Costa Rica de las décadas pasadas solo es comprensible a la luz de las tendencias económicas, políticas e ideológicas que prevalecieron internacionalmente en aquel período, de manera análoga, lo que en el futuro podamos hacer dependerá en parte de que en los grandes países capitalistas, en el subcontinente latinoamericano y, por supuesto, en el mundo socialista se descubran los medios que concilien el socialismo con la democracia política. En suma, ni todos los factores presentes están al alcance de nuestras decisiones, ni tampoco todos los factores de un nuevo proyecto están en el presente. La alternativa solo podrá encarnarse en la acción de un movimiento social y político, movimiento que, evidentemente, hoy no existe.

IX. Aunque parezca tautológico lo más urgente es tratar de promover el surgimiento del mismo movimiento y de su proyecto; del proyecto puesto que es necesario atacar en forma diferente los problemas actuales; del movimiento porque sin una fuerza capaz de sostener y promover eficazmente los nuevos puntos de vista estos vegetarán en el inasible mundo de las ideas; de ambos, del proyecto y del movimiento, porque solo creciendo simultáneamente podrán madurar. Semejantes

tareas imponen, como primer requisito, una renovación de la vida intelectual y cultural y una modificación de las prácticas políticas y sociales en nuestro país.

X. Tanto el movimiento popular como los partidos políticos (nos referimos no solo a la izquierda sino también al Partido Liberación Nacional e incluso a aquellos sectores hoy no organizados partidariamente) requieren un renacimiento ideológico: un debate de las viejas ideas, un estudio y reflexión de las nuevas, una percepción más amplia y más universal de la política y lo político, y, finalmente, una evaluación crítica de nuestro desarrollo histórico y, en particular, de la trayectoria de nuestro sistema democrático y de nuestro régimen de reformas sociales y económicas. Es necesario, pues, elevar la cultura política de nuestro pueblo y el nivel de formación de sus dirigencias sociales y políticas. Tal florecimiento exige a su vez una gran tolerancia, una disponibilidad para el diálogo y la negociación, mucho espíritu crítico y una adhesión sincera a los auténticos valores democráticos. Las socialdemócratas consecuentes tendrían que ponerse a pensar si su fórmula de cambio institucional sin reformas estructurales sigue siendo eficaz para nuestro país. De manera similar, la izquierda costarricense tendría que dejar de diferir el inevitable reto de confrontar su marxismo-leninismo con nuestra época y con nuestra realidad. Todos tendríamos que fijar de nuevo nuestra posición frente a la cuestión de la democracia en Costa Rica. Unos para preguntarse si democracia no podría ser algo más que el libre régimen de sufragio, y otros para revisar si la democracia costarricense no sería algo más que un simple engaño que el pueblo padece a manos de las clases dominantes. En fin, todos tendríamos que tomarnos más en serio la prédica del pluralismo político e ideológico. El pluralismo costarricense tan proclive al anticomunismo recalcitrante, absoluto y anatematizador, manifiestamente, deja mucho que desear como pluralismo. Mientras las distintas expresiones ideológicas no se muestren dispuestas a dialogar para enfrentar el "cambio conservador" este seguirá su marcha victoriosa. Semejante renovación intelectual supone una ruptura con el anti-intelectualismo y el activismo de corto alcance tan característico de nuestras organizaciones y formaciones políticas populares y con el pragmatismo estrecho y el doble discurso tan frecuente en ciertos sectores progresistas que en recintos discretos sueñan con utopías y en plazas públicas y frente a las cámaras de televisión discurren en pura prosa politiquera.

XI. Difícilmente podría ocurrir ese renacimiento de nuestra cultura política si no se encuentran las vías para romper con el actual monopolio ideológico de los medios de comunicación. Fs curioso constatar como el PLN se ha acomodado a vivir bajo la dictadura intelectual del diario "La Nación" y que desde hace mucho tiempo no se ha tomado en serio la tarea de democratizar la libertad de expresión en Costa Rica. Tampoco los sectores de izquierda han logrado

traspasar esa muralla principalmente porque sus órganos de prensa están concebidos solo para expresar el punto de vista partidario a la propia y exclusiva clientela partidaria. El problema de la democratización y de la ampliación de la comunicación social en Costa Rica tiene una incuestionable dimensión financiera sumamente difícil de resolver. Pero tiene una dimensión política que si se enfrentara tal vez haga menos ardua la búsqueda de la solución de carácter económico. En efecto, si se pudiera hacer converger una serie de fuerzas sociales y políticas comprometidas con el pluralismo y la extensión de la libertad de expresión quizás se lograría allegar los fondos necesarios para acometer tan ambiciosa empresa. Además, no hay que excluir la posibilidad de emitir una legislación que, siendo garante de la libertad de emisión y difusión del pensamiento, ponga algún coto a los excesos del monopolio actualmente vigente.

XII. Igualmente indispensable se presenta la tarea de democratizar la estructura y el funcionamiento de las organizaciones populares. Habría que ver si sectores del PLN estarían dispuestos a luchar contra la arraigada práctica de su partido de manipular a las agrupaciones populares mediante prácticas clientelistas. O en todo caso, convendría desarrollar una lucha de las organizaciones populares para que conquisten su autonomía frente al estado-partido liberacionista. Por otro lado, habría que ver si los partidos de izquierda están dispuestos a abandonar su concepción leninista de la organización y la práctica correlativa de servirse de las organizaciones populares como correa de transmisión de la prédica y la acción partidarias. En suma, es absolutamente urgente inventar instrumentos y procedimientos que favorezcan la participación y la libre discusión en el seno de las organizaciones populares existentes. Del mismo modo, hay que desplegar un áspero combate contra la patronal y contra el Estado a fin de que la autonomía, el pluralismo asociativo y la libre organización de los trabajadores adquieran plena vigencia en todos los centros de trabajo y, en particular, en el sector privado de la economía. El solidarismo es un desafío que se debe enfrentar no necesariamente demandando su destrucción, sino exigiendo igual derecho a existir y a desarrollarse para otras formas asociativas de los trabajadores. La igualdad de oportunidades para todas las formas asociativas y la libertad de organización son derechos que aún tienen que conquistar los trabajadores costarricenses. En síntesis, amplios sectores de la sociedad costarricense necesitan una auténtica democratización y una rápida multiplicación de los órganos de defensa y expresión de sus respectivos intereses y un notorio incremento de su capacidad de negociación frente al Estado y frente a los grupos empresariales.

XIII. No obstante, no solo la sociedad civil está urgida de una democratización. También el Estado y la vida política necesitan más democracia. Todo el sistema electoral demanda reformas

profundas. Hay que combatir el bipartidismo y para tal efecto hace falta una reforma al sistema de financiamiento de la campaña electoral. Igualmente, se debe luchar contra las restricciones legales que continúan pesando sobre los partidos de orientación socialista y popular. Sería muy positivo potenciar la democracia y el poder locales y facilitar el surgimiento de organizaciones políticas que canalicen ese tipo de intereses lo que sería posible si se disociaran las elecciones nacionales de los comicios municipales. Finalmente, se debe lograr la reforma del sistema de elección de diputados por cociente y subcociente a nivel provincial puesto que obstaculiza la llegada al Parlamento de fuerzas políticas minoritarias. En conclusión, se podría promover una serie de luchas democráticas orientadas a lograr una serie de reformas en nuestro sistema electoral.

XIV. El pueblo costarricense no puede renunciar a su patrimonio histórico de reformas sociales y económicas. Es innegable que se requiere profundizar en el diagnóstico crítico, desde la perspectiva de los intereses nacionales y populares no desde la óptica neoconservadora, de lo que ha sido el Estado intervencionista costarricense. No se puede desconocer que sufre problemas de ineficiencia, burocratismo y corrupción. Pero hay que tratar de demostrar que la única alternativa no puede ser su desmembramiento o su privatización. Por ejemplo, sería posible hallar mecanismos de control y de participación de las organizaciones sociales y locales en instituciones como el Seguro Social. En general, es posible inventar nuevas modalidades de relación entre el Estado y la vida económica y social más eficientes y, sobre todo, más democráticas. Pero, de todos modos, será necesario someter a una revisión crítica el viejo supuesto comunista y socialdemócrata que identifica estatización o nacionalización con progreso social y económico.

XV. La realización y la vigencia de cualquier reforma institucional estructural depende de la presencia y las fuerzas de un movimiento popular democrático e independiente. Para que un movimiento popular con tales características pueda surgir no bastan una mayor democracia y una mayor participación ya que también hace falta una mayor amplitud de miras. El movimiento popular debe ensanchar el horizonte de sus reivindicaciones y el abanico de sus tareas; tendría que ocuparse de asuntos que tradicionalmente ha dejado en manos de los partidos y del gobierno (por ejemplo, la política internacional) o que ha considerado con descuido como las luchas por aspectos de la vida cotidiana de la mayoría de la población y las reivindicaciones específicas de sujetos sociales como los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos y las entidades regionales. El combate del movimiento popular costarricense debería orientarse hacia la democratización de todas las esferas y niveles de la vida social, tanto los materiales como los espirituales y culturales, tanto los públicos como los privados, tanto los que se refieren a las

relaciones en la producción como los que atañen al modo de vida y al modo de consumo. Por ejemplo, la contaminación cultural de la que son responsables principales los medios de comunicación y, en especial, la televisión, debiera ocupar su lugar en las preocupaciones de las organizaciones populares no solo por la salud mental de nuestros niños y jóvenes sino también por fidelidad a nuestra manera de ser. En fin, la preservación de nuestra identidad nacional y de nuestro patrimonio histórico-cultural tendrían que estar presentes en la agenda de trabajo de nuestras organizaciones populares. Igual consideración merece la protección de nuestros recursos naturales y de nuestro ecosistema frente a la acción depredatoria del capital criollo o extranjero y de las mismas políticas estatales. Existen múltiples aspectos alienantes y opresivos de nuestra vida cotidiana y formas específicas de sujeción y explotación como las que caracterizan la situación de la mujer que no pueden ser ignoradas por un movimiento social que aspire a canalizar los intereses del mayor número posible de sujetos sociales, susceptibles de conformar las fuerzas de la transformación social de nuestro país. Por tales razones, hay una gran lucha que dar contra el corporatismo, el espíritu de casta, el privilegio gremial y la falta de solidaridad frente a las necesidades y derechos legítimos de otros grupos sociales. Precisamente, una de las mayores debilidades del movimiento popular costarricense es su fragmentación y dispersión. Más allá del interés particular se requiere encontrar el interés general, el universal que envuelva a la totalidad de los sectores dominados de nuestro país.

XVI. La cuestión internacional está vinculada evidentemente, con el problema de la deuda externa y con la pérdida de autonomía en la formulación de nuestras políticas económicas y sociales que ha traído aparejada; además está marcada por el problema de la guerra y la paz en América Central. Bastaría decir que hay que luchar por la paz y contra el FMI y la banca internacional, pero esto no es suficiente. No se puede luchar por la paz si simultáneamente no se hacen esfuerzos en favor de que el pueblo costarricense reduzca su animadversión hacia la Revolución Sandinista y en general, hacia los movimientos de liberación de América Central. Mientras esto no se realice corremos el riesgo de que sectores importantes de nuestro pueblo terminen viendo con naturalidad y complacencia la acción intervencionista que los Estados Unidos ejercen en Nicaragua y en toda la región centroamericana. Por otro lado, hay que mantener una presión constante sobre el gobierno costarricense para que en algún momento llegue a aceptar la Revolución Sandinista como un hecho irreversible. Solo cuando Costa Rica reconozca al Estado Sandinista como una realidad legítimamente existente, se podrá asegurar una relación respetuosa y provechosa para ambos estados y naciones y se limitará consistentemente la presión norteamericana que nos quiere como peones y cómplices de su política imperial en nuestra región. Claro está que no será con *slogans* y frases

clisé que se podrá influir en la conciencia de nuestro pueblo y en las acciones de nuestro gobierno. Reflexiones análogas corresponden al problema de la deuda externa. No basta con gritar que no hay que pagar. Se necesita promover una reflexión y un debate en profundidad que involucre a los sectores más diversos a fin de establecer las vías más adecuadas a los intereses nacionales y populares para enfrentar el fardo de la deuda y sus secuelas. Es posible utilizar mecanismos democráticos para analizar ese problema del mismo modo que es posible encontrarle soluciones de carácter democrático.

XVII. Un movimiento popular que aporta no solo la fuerza de su movilización sino el poder de convencimiento y convocatoria de sus propuestas y alternativas es lo que necesitamos para afrontar el problema de la reactivación económica de nuestro país. Esta pasa por una modificación profunda de sus estructuras y por la adopción de un estilo de desarrollo centrado en la defensa de los intereses nacionales, en el incremento de la productividad de todos los factores de la producción y no en la ventaja comparativa de una mano de obra barata y desorganizada, y en la satisfacción de las necesidades concretas de la población. No podemos aceptar que se nos imponga un modelo de crecimiento económico basado en nuestra capitulación como nación independiente y como estado soberano, en el empobrecimiento de nuestra población y en la ciega y suicida adaptación a las demandas impuestas por la actual división internacional del trabajo y por el miope apetito de conquistar algún lugar en el mercado norteamericano con productos que no hacen más que repetir el viejo círculo vicioso del modelo agroexportador. Inventar un estilo de desarrollo alternativo a la llamada "economía de exportaciones" es una de las tareas más solemnes que esperan al pueblo y a la nación costarricenses.

XVIII. En conclusión solo desarrollando una vocación hegemónica, solo descubriendo los universales de lo democrático, lo nacional y lo popular, nuestro pueblo y nuestra nación podrán enfrentar la ofensiva del "cambio conservador" y podrán sentar las bases ideológicas y políticas para emprender la senda que nos lleve a refundar la sociedad costarricense sobre nuevos cimientos democráticos en el plano económico, social y político. Un largo combate nos espera hasta hallar los medios adecuados para superar el régimen capitalista en Costa Rica y para llevar nuestro régimen político democrático a un nivel superior de organización y funcionamiento. ¿Cuál es la alternativa? Esa que descubriremos cuando todos nos atrevamos a tomar la palabra y cuando todos osemos comprometernos a comprender las voces convergentes y a respetar el discurso divergente, no solo el del compañero, sino, sobre todo, el del adversario.

V PARTE

LA INVESTIGACION Y LA EDUCACION POPULAR

PUNTOS DE REFLEXION A LA LUZ DE UNA EXPERIENCIA

Luis Arosena Pildain

Introducción

Confieso que, cuando recibí, de parte de unos buenos amigos a los que no me es posible negarme, la invitación para participar en una reflexión que alcanza niveles nacionales y regionales, tuve la impresión, como cuando niño caminaba metidos mis pequeños piececitos en los enormes zapatones de mi padre, de que el tema era demasiado amplio para mi limitado conocimiento de lo que trasciende la barriada donde he enterrado los últimos once años de mi vida.

Confiado en la rica complementación que, sin duda, los compañeros de "viaje" han de aportar y, pensando en el relativo valor que pueda tener una vida entera compartiendo con los sectores populares, siempre plena de desafíos e interrogantes, me he atrevido a desnudar –con el ánimo de poder compartirlas– un pequeño rosario de reflexiones que a lo largo de horas, días y noches, de años, han ido incrustándose en lo más profundo de mi mente.

Chacarita, en su descarnada panorámica, puede ser un pequeño y modesto laboratorio; abierto y lleno de impresionantes contradicciones . . . no siempre asumidas, en la conciencia, por el hombre común y corriente, por el hombre de la calle.

Me apresuro a consignar dos preavisos: a) no pretendo presentar a mi barrio como un esquema donde se ajusten, a cabalidad, todos los sectores populares del país, y menos de la región. b) con Tomás de Aquino soy consciente de que "la realidad supera al concepto". La realidad es más rica, sin duda alguna, y compleja que mi reflexión.

La cruda realidad de Chacarita provoca fuertes interrogantes al hombre sensible. En nuestra realidad descubre, al desnudo, los efectos desvastadores de una sociedad incongruente . . . organizada desde los intereses, siempre inconfesos, de unas élites privilegiadas.

Los sectores populares –las gentes de mi barrio– en general, a pesar de vivir sin paredes y con las cloacas al descubierto, no encuentran

fácil descubrir el porqué de su realidad– situación. . . contrastante con otras realidades geográficamente cercanas. Se ha habituado a aceptar pasivamente, con cierto fatalismo trascendente, la ubicación injusta que el sistema le ha asignado. Roto, despedazado mejor, el espejo crítico, por la fuerza alienadora de los mecanismos manipuladores del sistema, y maquillados de comparsas para el gran espectáculo de la vida, encuentran insalvables obstáculos –dentro del sistema– para reconocer en la vida real.

Expertos sociólogos y pedagogos "populares" ayudarán a bucear en las profundas –abismales para muchos– raíces de la inhumanidad, como fruto del egoísmo e insolidaridad, de los sectores beneficiados en este modelo de sociedad capitalista y liberal, signo inconfundible del anticristo en el hoy de la historia.

Prefacio

Desecho consecuente de una sociedad capitalista, explotadora y clasista, sin acceso a los medios de producción material y carente de poder en el mercado de la producción y consumo de los bienes del espíritu, controlados por las minorías acaparadoras de privilegios, la comunidad chacariteña se debate, al borde de la rendición incondicional, en la fuerte tentación de entregarse pasivamente a la dominación inmisericorde de las minorías dueñas del poder.

La comunidad ha sido despojada –de hecho nunca pudo ejercerlo– del inalienable derecho a tomar las decisiones que afectan a su presente o futuro, en el orden personal o colectivo. Su capacidad de decisión se ha reducido a la mínima expresión. Este hecho, fácil de constatar, nos obliga a jugar un papel, siempre secundario, cuando no de marionetas mecánicas, manipuladas, sutilmente de ordinario, por el hábil maniobrero de turno.

Las decisiones, que nos afectan, se toman desde otros intereses, otras realidades y experiencias, desde otras culturas, al margen de nuestras vidas y realidad. Nuestro "mundo", resaca de inhumanidad, es aprovechado, desde fuera, para abonar la insaciable ambición de los epulones de hoy. Son ellos, los que, valiéndose de intelectuales, profesionales, simples técnicos o arribistas del pueblo-comprados en su dignidad por un plato de lentejas, toman las decisiones que afectan nuestras vidas . . . con el ánimo de asegurar sus crecientes intereses, soporte necesario para escalar en la jerarquía de los privilegios.

¿Para cuando se habrá hecho realidad el que nuestro pueblo –escaso hoy de conciencia– tome sus propias decisiones, quebrando el viejo sistema de dominadores y dominados? Las ciencias sociales, los profesionales convertidos a la fuerza popular, y el pueblo, soberano de su libertad, tienen mucho que aportar.

Nuestros barrios son un desafío a las ciencias sociales. Estas, un reto a los sectores populares. Ambos, unidos en fidelidad honesta, una esperanza.

Reseña panorámica

Hasta hace pocas décadas, Puntarenas –pequeña aldea convertida en "pujante" puerto marítimo gracias a su situación geográfica estratégica– era el único centro conocido –visitas obligadas por exigencias comerciales, religiosas, salud, etc.– por las mayorías desperdigadas en la pampa guanacasteca y litorales del Pacífico.

La confirmación de Puntarenas como puerto del Pacífico, la nueva estructura agropecuaria guanacasteca y los cantos de sirenas que, desde los centros urbanos, prometedores de un futuro mejor, seducían al indefenso hombre del campo, provocaron, a partir de la mitad del siglo presente, el "boom" Puntarenas. Se inició una gran explosión social que generó el Puntarenas de hoy, lleno de contradicciones y frustraciones.

Asfixiados por la estrechez de una lengüeta de arena, a mediados de la década de los sesenta, se inicia la expansión hacia el este. Van surgiendo, como producto de una serie de luchas populares, distintas barriadas de signo tugurial. Organizadas sus gentes al inicio, pronto se sumergen en la anarquía, producto de los mecanismos del poder, de la falta de liderazgo definido y de rasgos antropológicos típicos de la individualidad.

Fue así cómo, a través de distintas luchas e intereses, se fue conformando lo que hoy conocemos como la gran Chacarita, archipiélago de barriadas habitadas por treinta y cinco mil habitantes.

Implicancias políticas

A finales de la década de los sesenta se marca un hito en el nivel de luchas populares. Por motivaciones puramente económicas, carencia de vivienda propia y falta de capacidad para responder, por la mucha demanda, al creciente precio de los alquileres, se inicia la lucha reivindicativa por el derecho a unos pocos metros de tierra y, más tarde, fuertes escaramuzas, con los entes públicos, en demanda de servicios elementales.

El ascenso vertiginoso del movimiento popular y la fuerte presión del mismo sobre la administración pública, provocaron represión y, con ello, se va descubriendo una dimensión política . . . prontamente abortada por la sutileza del sistema –dueño de mecanismos congelantes y alienadores–, a más de los infantilismos increíbles en que fueron cayendo, una y otra vez, los dirigentes de turno . . . en un intento de capitalizar la fuerza popular, con consignas y luchas emanadas, no tanto del sentir popular, cuanto de intereses claramente partidistas.

Al movimiento popular chacariteño, potencial embrión de espléndidas realidades, por una u otra causa –más o menos conscientes los unos y los otros– se le sometió a una terapia abortiva, sumiendo a las masas, entrañadas en experiencias de lucha y conscientes de su fuerza, en un estado de pasivismo descompresionado del cual, todavía, no han sido capaces de emerger.

Las masas, hoy, vegetan sin objetivos propios y definidos. Las espectativas, otrora fundamentadas en su capacidad de lucha-fuerza, han ido desapareciendo paulatinamente, dando paso a la influencia individual, del pseudo líder que busca quedarse con las mayores migajas que caen de la mesa del poderoso de turno. Ello ha favorecido el surgimiento de una mentalidad de mendicidad y oportunismo.

Las organizaciones populares-oficiales, promovidas hasta la atomización por los entes de poder, cobijan a multitud de "buscadores" de resquicios que intentan trepar –siquiera a los escalones más bajos– por la estructura que se muestra un tanto accesible en los momentos fuertes de las distintas campañas políticas.

Afectado de forma inmisericorde por la crisis, el pueblo, soporta, no sé hasta cuando el atraso progresivo de sus condiciones de vida. Como diría, no hace muchos días, un estibador del muelle: "nosotros no estamos en vía de desarrollo, sino que nos llevan hacia el subdesarrollo más caótico". Golpeados por increíbles índices de desocupación y alienados en el encanto del consumismo, sienten, cada vez con mayor fuerza, la fácil tentación de "agacharse", en un intento de supervivencia individualista aunque sea al duro precio de hipotecar no solamente el ser libre, sino, incluso, el ser hombre.

La masiva y martilleante –¿orquestada?– presión ideológica, desde todos los ángulos y medios, ha ido creando, en muchos, la conciencia fatalista de que "nada se puede hacer". Incluso, no escasean los que aceptan, con sentimiento de culpabilidad el que "estamos como estamos porque somos vagos, no queremos trabajar . . . y lo que nos ganamos . . . somos buenos para gastarlo en vicios".

Son pocos, muy pocos, los que se atreven a exteriorizar su rebelión, producto de una conciencia crítica, ante la injusticia. Y menos, muchos menos, los que muestran creatividad y coraje para enfrentar, desde su realidad, una tarea dignificadora por la liberación del pueblo.

Es la mujer, doblemente explotada por ser pueblo y ser mujer en una cultura pro-machista, la que muestra mayores índices de rebeldía y decisión un tanto emotiva y voluntarista, por lanzarse al riesgo liberador.

El papel de los intelectuales

En nuestros barrios no viven profesionales, de alguna manera, intelectuales. Los pocos que, por esfuerzo individual, han ido surgiendo

espontáneamente, a medida que iban alcanzando metas del sistema, se han ido desclasando y han buscado, en la emigración a otros barrios, el divorcio práctico con su ombligo social.

Aquellos, foráneos, que en forma esporádica o más constante, casi siempre por motivos laborales o políticos, han compartido parte de nuestras vidas, lo han hecho desde fuera y con una mentalidad muy definida: reforzando el sistema. Tradicionalmente han sido servidores, más o menos fieles, de lo establecido. Todas las ideas que han ido presentando y todas las decisiones elaboradas y planeadas desde fuera, han sido no solo tangenciales a la realidad vital, cuanto reafirmadoras del proyecto concreto de sociedad que proclama, construye y defiende el sistema.

No han faltado, en forma muy esporádica, algunos que han mostrado cierta sensibilidad social y "buenas intenciones", pero se han frustrado al descubrir su incapacidad de dar respuestas efectivas fuera del estrecho margen que les marca "la estructura" de poder. Impotentes, sin poder radical de decisión, han caído en la más cómoda instalación.

Conscientes del aforismo de que "quien paga la música manda en el baile" constatamos las grandes dificultades que se le presentan al profesional para lanzarse, incondicional, e involucrarse en cualquier intento de vivificar el movimiento popular entre nosotros. El precio, sin duda, es duro y difícil de pagar si no se tienen, además de un soporte ideológico claro y sin hipotecas, un deseo supremo, innegociable, de vivir coherentemente de acuerdo a las ideas, es decir, de ser libre.

Los educadores

Aunque detectamos que la mayoría de los maestros y profesores residen fuera de nuestras barriadas, son ellos, los que en mayor número y tiempo, por lo menos las horas laborales, han convivido con nosotros.

Somos conscientes de la calidad de "formación" que han recibido. Han sido formados en, por y para el sistema. En muchos de ellos se detecta, sin mucho esfuerzo, una alarmante carencia crítica frente al modelo de hombre y de sociedad que deberíamos ayudar a construir.

Tampoco ignoramos los estrechos parámetros que, en forma asfixiante, presenta el conjunto de programas, intentando conducir a educadores y educandos hacia el arquetipo de hombre y sociedad que el sistema preconiza. Salirse del contexto establecido, supone provocar fuertes sospechas de heterodoxia política o doctrinal . . . con las consabidas represalias de todos conocidas.

Estamos seguros de que el "mundo de la educación oficial" no solamente no ha contribuido al establecimiento de un nuevo modo de ser y estar –hombre y sociedad– sino que ha sido uno de los más

formidables soporíferos que ha contribuido a adormecer la conciencia, hoy alienada, de nuestras gentes.

¿A contraluz?

Es fácil que tras la visión de esta panorámica se nos pueda tachar de pesimismo. Es cierto. Quizá no es el autor el pesimista, sino la realidad tiene ese signo.

Pienso en las fotos clásicas: una bella foto, plena de colorido, y un negativo oscuro, un tanto tétrico. En la foto de la vida, los sectores populares juegan el papel de negativos. Por eso son tan oscuros y tan tétricos. No es culpable el fotógrafo sino, simplemente, el negativo ocupa el lugar que se le ha asignado. Así pasa con esta exposición. He procurado ser un fotógrafo fiel. El pesimismo, creo, no está en mí . . . sino en la misma realidad.

Ciertamente que no es toda la realidad. Existen esperanzadoras excepciones que no han sido consignadas. ¡Por supuesto! Apenas hemos intentado presentar, a vuelamáquina, la regla. Las excepciones, que las hay, insisto, no vendrían sino a confirmar la regla: "que los sectores populares no pasan de ser el negativo –potencialmente transformable en foto– de la sociedad que estamos viviendo".

Puntos finales de reflexión para todos

Son muchos los temas que podríamos exponer a la reflexión. Son muchas las horas de cavilaciones, meditaciones, discusiones y estudios que, individual o colectivamente, hemos barajado en estos últimos años. Vamos a limitarnos a exponer unos cuantos puntos que consideramos básicos.

Frente a la realidad injusta, no cabe la neutralidad

La neutralidad, teórica o práctica –envuelta no pocas veces en ropaje de sofrosine– no deja de ser muchas veces, el narcótico que los pusilánimes utilizan para encubrir su falta de coraje o, el deseo, callado en aras del pudor, de continuar "sirviendo a dos señores" . . . olvidándose de que sigue siendo válida la máxima evangélica sobre su imposibilidad.

El pueblo necesita ser descubierto

No siempre ha sido fácil coincidir en la ubicación del pueblo. Para muchos, no pasa de ser un sujeto con carencias. Pocas veces se le descubre como sujeto de derechos y valores. ¿Será por eso que nos cuesta tanto reconocer al pueblo y su cultura como protagonistas incuestionables del cambio? Es difícil, sin esta convicción, asumir su proyecto de

dignificación y libertad, aportando, sin ceder a la fácil tentación de dominación.

Construir un nuevo hombre y una nueva sociedad es tarea de "restos"

Los arranques generosos, a golpe de sensibilidad, no siempre ideológicamente fundamentados, son casi siempre, prenda de infidelidad ante las muchas dificultades que van surgiendo en el difícil peregrinaje.

Protegidos por el orden establecido y la seguridad de sus privilegios, los beneficiados del sistema y los acaparadores de "migajas", no parecen ser sujetos muy aptos para correr riesgos. Una nueva sociedad, un nuevo pueblo, un nuevo orden, una nueva educación, un nuevo hombre . . . sólo puede ser buscado por el hombre con hambre y sed de justicia, del hombre de buena voluntad . . . Y estos, son tan pocos . . .

La opción por el proyecto popular exige convicciones radicales

Ante la dificultad de encarnar, en seriedad, una opción "efectiva y de por vida", y conscientes de los desafíos y dificultades que presenta a la fidelidad, se hace necesario vivir existencialmente, una serie de convicciones profundas a la luz de una conciencia no negociable.

Para unos, surgirá de sus convicciones políticas. Para otros, de sus arraigadas convicciones cristianas, fundamentadas en las radicales exigencias del evangelio.

Abrirse a la opción popular es cerrarse a todas las demás

Acostumbrados al rol que, como profesionales, gozamos al interior de una sociedad clasista, sufriremos en carne propia, no sólo la excomunión a la que seremos sometidos por los que compartieron el mismo rol o clase social, sino el halago o la represión de quienes, con cuotas de poder en el sistema, buscarán, sutil o brutalmente, reinsertarnos o destruirnos.

Educar es aportar un contenido concientizador y creativo en libertad desde la vida

No basta "estar" en el pueblo. Hay que clarificar el cómo y el para qué.

Educadores han pasado por nuestros barrios que se han limitado a concientizar, dejando un sabor a hiel cocinada en impotencia. Otros, recetarios, a dar respuestas morales a la injusta realidad, salvando del "pecado ideológico", a pequeños restos de la nueva Israel . . .

Leemos en Puebla (1.029): "Ejercer la función crítica propia de la verdadera educación, procurando regenerar permanentemente desde el ángulo de la educación, las pautas culturales y las normas de interacción social que posibiliten la creación de una nueva sociedad, verdaderamente participativa y fraterna, es decir, educación para la justicia". Y sigue el número siguiente: "Convertir al educando en sujeto, no sólo de su propio desarrollo, sino también al servicio del desarrollo de los demás, de la comunidad: educación para el servicio".

Educarse en el pueblo y con el pueblo, desde su cultura

Hacerse pueblo no siempre es fácil. Valorizar en respeto y asumir su cultura, con sus limitaciones, puede ser, a veces, hasta heroico.

Embarcarse, desde sus valores y debilidades, en un incierto viaje, en busca de "una nueva sociedad" puede ser catalogado, por algunos, como demencia quijotesca. Escondidos resentimientos no superados, para otros. De cualquier forma, para los "prudentes y equilibrados" no deja de ser una temeridad.

El precio

Perderemos, sin duda, el *status* cómodo y privilegiado que gozamos, por ser parte de la más o menos pequeña burguesía, dentro del sistema.

En la medida en que vayamos involucrándonos en el proyecto popular, iremos sintiendo que nuestras relaciones sociales, laborales, familiares, etc., se irán resintiendo y, sin género alguno de duda, la inseguridad y cierta sensación de soledad, se presentarán indefectiblemente

La nueva sociedad, cercenadora de privilegios injustos y escandalosos, de alguna forma, afectará nuestro propio nivel de vida. Claro que, en compensación gratificante, empezaremos a gustar del mayor de los privilegios; la libertad.

Perderemos niveles de dirigencia. Es el proyecto, así sea sólamente intuido por muchos, del pueblo. El es el divo de la gran obra dramática. Jugaremos un papel importante sí, pero al servicio de un pueblo que ¡por fin!, recaba el derecho a ejercer sus recursos y capacidades.

Conclusión

La realidad angustiante es un reto.

Para el pueblo . . . conminándole a su despertar en confianza y responsabilidad.

Para los educadores e intelectuales convocándolos a servir ayudando en una auténtica educación popular . . . al servicio de los intereses del pueblo.

A todos, respetando los valores del pueblo y sus capacidades, en metanoya, desde un existencial y sentido "mea culpa".

a insertarnos en el pueblo y su cultura.
a insertarnos en sus reflexiones y justas luchas.
a construir, en comunión, un nuevo hombre y una nueva sociedad.

A modo de epílogo

Recuerdo que, de esto hace ya bastante tiempo, me vi obligado a enviar una colaboración-artículo a una revista europea. Como parte del artículo, exponía –al estilo de la revista– una anécdota personal.

La anécdota en cuestión, desearía que fuese, hoy interpretada en clave de parábola, literalmente dice así: "Durante muchos años he compartido mi vida con campesinos sudamericanos. Hombres incontaminados que, a su paso por la vida, van dejando una estela de respeto y de bondad.

Tierra de hombres amables, sin doblez, y de mujeres que celan las flores. Gentes que, todavía, besan con el corazón. Tierra con sabor a virgen fecunda. Tierra de nadie. Tierra de todos.

Las noches en su selva tropical son de embrujo. El cielo cansado parece querer acostarse sobre las copas de las opulentas ceibas. Croan los sapos panzones. Aúllan siniestros los huidizos coyotes y ruge profundo el tigre en su territorio . . . espantando la serenidad de la noche.

Horas agridulces donde se entrelazan el celar vigilante y miedoso con el éxtasis contemplativo de lo primigenio, en estado natural, sin plásticas envolturas ni sofisticadas pinceladas.

Aquella noche novembrina aparecía distinta. Se escuchaba, casi ensordecedor, el inusual silencio. La vida, siempre exuberante hasta la lujuria, contenía su rítmico latido. Hasta el viejo reloj de pared, péndulo exasperante, se había detenido, solidario, con el silencio . . . cacique, sin rival, de la noche.

Sonó la puerta de mi choza. Suavemente. Con la suavidad del postrer beso de despedida al familiar fallecido. Sentí que algo seco y duro atoraba mi respiración. Me sentí inquieto –siempre he temido las llamadas suaves o muy fuertes– hasta que abrí cautelosamente la puerta. De las sombras fue surgiendo el rostro desencajado y crispado de Gustavo Puricá, conocido como "La Jennifer". (La Jennifer había sido noticia de prensa pocos meses antes, por ser el primer homosexual del país que había pasado por el quirófano para "un cambio de sexo").

"Entre Gustavo y siéntese", le invité ya tranquilizado.

"Gracias" me respondió, sentándose con afeminada delicadeza.

“Me quiero suicidar, Don Luis, ¡ayúdeme! –vomitó incontenible–. Soy un desgraciado. Nada tengo que hacer en la vida. Me niegan hasta el derecho de ser persona”.

Me miró . . . midiendo mi reacción. Tenía gesto desesperado. Le sonreí como lo he visto hacer a los abuelos. Sentí que sus músculos se distensionaban.

Habló horas y más horas . . . hasta el amanecer. Vació toda la frustración acumulada en años de silencios solitarios y temerosos. Me habló de su seguridad abortada por un padre alcohólico. Del siquiatra, del amigo, del dirigente religioso buscados en horas difíciles . . . para hundirlo más y más. De su larga experiencia de indiferencias, burlas y desprecios.

“Tatica Dios sabe que lo que le he contado es cierto” . . . terminó, bajando los ojos avergonzado, jadeante. “Entre todos ellos acabaron conmigo. Ellos me hicieron leña. Ellos . . . son los culpables de lo que soy”.

Hasta aquí, la primera parte de la anécdota.

Comentario: parafraseando el versículo bíblico (Marcos 4,9), diremos con Jesús, el Maestro: “El que quiera entender . . . que entienda”.

La educacion popular en la experiencia del CENAP

Pedro Soto

Queremos compartir la forma en que hemos asumido las tareas de investigación y educación popular en nuestra experiencia de apoyo a grupos y asociaciones populares de lucha por vivienda. Este proyecto se inició en julio de 1986 y forma parte del programa de educación del CENAP que cuenta además, con un proyecto educativo orientado hacia organizaciones de pequeños productores, ubicadas –fundamentalmente– en la zona norte del país.

A partir de julio de 1986, en el CENAP decidimos priorizar nuestro trabajo con estas organizaciones, partiendo de tres consideraciones básicas. La primera es de orden operativo y tiene que ver con la necesidad de dar mayor continuidad y profundidad a las relaciones que establecemos con las agrupaciones populares, ya que consideramos que las prácticas de educación popular no deben convertirse en eventos aislados del quehacer diario de las organizaciones y, por lo tanto, muchas veces desligados de sus principales problemas y necesidades.

La segunda consideración se relaciona con la magnitud del problema y las alternativas oficiales de solución. De todos es conocido, que el problema de la vivienda se ha agravado durante los últimos años, hasta llegar a afectar, según estadísticas oficiales, a cerca de 35.000 familias del área metropolitana y de las principales concentraciones de Puntarenas y Limón. Obviamente, esta estimación no toma en cuenta los problemas de vivienda causados por el aumento de los alquileres, las casas en mal estado y el incremento anual del déficit que se produce por concepto de nuevas uniones o matrimonios. Estudios realizados por el INVU han situado el déficit en 132.000 unidades y la deficiencia –casas en mal estado o con poco espacio para el número de personas que las habitan– en 165 mil. Tenemos entonces que el déficit y la deficiencia afectan a casi 200.000 familias.

La dimención del problema, plasmada con claridad en la finca Los Cuadros, Los Guido, San Pedro de Pavas, en la comunidad Juanito Mora

de Puntarenas, en los Diques y en la finca "Paraíso Industrial" en la provincia de Cartago, contrasta con las acciones emprendidas por el gobierno. Así, mientras el IMAS prácticamente paralizó sus proyectos de construcción por problemas de financiamiento, en la ley de creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, se estipula que la capacidad de pago de los demandantes de vivienda, continuará siendo el principal discriminante para la asignación de préstamos y características de las viviendas.

Por otra parte, el monto de los subsidios que este banco otorgará parecen limitados para la ejecución de proyectos integrales de solución a la problemática.

Finalmente, sobre este punto, habría que agregar que los apoyos esperados por el gobierno –principalmente una "donación" de la AID por $50 millones, no se han concretado todavía y que la pugna de tendencias en el PLN y los intereses particulares de las empresas constructoras, ponen más obstáculos en el desarrollo de soluciones verdaderas para los sectores más empobrecidos de la población.

El tercer supuesto que nos permite priorizar nuestro trabajo con los movimientos de lucha por vivienda, lo extraemos de las características que los mismos asumen.

Hemos visto que la gente que participa en estos comités, se ha planteado la lucha por vivienda como un primer momento de un proceso más amplio y general, a través del cual busca crear mejores condiciones de vida para sus afiliados. Hay en la experiencia de estos grupos y en las preocupaciones cotidianas de sus afiliados, una búsqueda constante de respuestas a problemas relacionados con la producción, el empleo y los ingresos, la salud, la educación y la recreación. En este sentido, la lucha por la vivienda puede verse como una lucha por la reconstitución de la vida cotidiana de los vecinos o pobladores y en esa medida, se convierte en un importante espacio para la ejecución de proyectos de educación popular con carácter integral, tanto desde el punto de vista de los sectores que participan (mujeres y hombres, adultos, jóvenes y niños) como por las dimensiones que debe cubrir: ya he mencionado la posibilidad de desarrollar proyectos que responden a las necesidades de producción, ingresos, salud, educación y recreación asociados a la construcción de viviendas y de nuevas comunidades.

Objetivo del proyecto

Teniendo los anteriores supuestos como referentes para nuestro trabajo, el objetivo general del proyecto es apoyar el intercambio de ideas, experiencias e informaciones para que los grupos eleven su capacidad de elaboración y ejecución de alternativas a sus principales problemas y necesidades, paralelamente a que se busca descubrir –colectivamente– concepciones y prácticas organizativas participativas y demo-

cráticas. Buscamos que con nuestro apoyo y participación en procesos organizativos específicos, se desarrollen la investigación colectiva, la reconstrucción y la dinamización de la práctica de los grupos populares, mediante experiencias que conjuguen la acción, la capacitación, la producción de los materiales necesarios para fortalecer su identidad y autonomía.

Los resultados de este trabajo, deben medirse con acuerdo a la implementación de proyectos concretos, que modifiquen la existencia material y espiritual de los sectores populares, con los que estamos trabajando.

Fases de la experiencia

Dado nuestro objetivo general, hemos establecido relaciones permanentes con agrupaciones ubicadas en Tres Ríos, Heredia, San José y Puntarenas. Con la participación de sus líderes y afiliados, diseñamos espacios de trabajo e investigación sobre su propia experiencia, para analizarla y formular nuevas alternativas de acción.

Este trabajo implica una serie de actividades de diverso orden y nivel, entre las que podríamos señalar las entrevistas colectivas, la recolección de autobiografías y testimonios, la recolección y análisis de documentos producidos por las propias organizaciones, la participación activa de nosotros en reuniones de los comités, en sus comisiones de trabajo, en las asambleas generales y en los espacios cotidianos de la vida comunal.

Este proceso, que no está ajeno a situaciones imprevistas como la suspensión de reuniones, de conflictos internos en las organizaciones, de contra-propuestas de las instituciones que modifican las perspectivas que los grupos se han fijado, cuenta con varios momentos que aunque se confunden en su desarrollo, se podrían esquematizar de la siguiente manera:

Primero realizamos un trabajo de identificación y análisis de la práctica organizativa desarrollada por el grupo. Se pretende lograr que los líderes y afiliados con los que trabajamos, reconozcan críticamente –entre otras cosas–, la situación particular de sus compañeros, la estructura organizativa que han adoptado, los objetivos que se han planteado, las fuentes de conflicto, las estrategias de lucha, la relación que han establecido con agentes externos como los partidos políticos, la iglesia, las instituciones y con nosotros mismos.

Luego, también es importante que los grupos puedan identificar el carácter de las propuestas que les han presentado para la solución de su problemática, tanto las propuestas de las instituciones como las que ellos mismos han elaborado, poniéndole especial atención al problema de los componentes de esas propuestas, como los tipos de vivienda, los

materiales y sistemas de construcción, las áreas comunales, el financiamiento, los diseños de sitio de las nuevas comunidades, las características que las propuestas dan a la relación que se debe establecer entre el Estado y la organización, etc.

Recuperados estos elementos a través de los instrumentos que mencioné anteriormente, se establecen espacios de análisis que permiten ubicar los principales problemas que, tanto en la práctica organizativa como en la dimensión de las propuestas para la solución del problema, presenta la experiencia desarrollada por el grupo.

Hecha esa identificación de problemas y su análisis, se pasan a definir nuevas alternativas de trabajo, nuevos planes que tomen en cuenta desde el cómo organizarse mejor, hasta el problema de cómo financiar los proyectos y qué estrategia de lucha desarrollar para lograr que los proyectos, puedan llevarse adelante y ejecutarse.

Es importante anotar que este proceso se caracteriza por la definición colectiva de los logros y problemas, de las necesidades de conocimiento e información de las formas de satisfacer esas necesidades y de creación de nuevos lineamientos de trabajo. Así la investigación no es una tarea ajena, sino condición necesaria para el desarrollo de los trabajos de las organizaciones.

Para complementar y ampliar el impacto de estos proyectos, nos hemos preocupado por favorecer la formación de líderes de las propias organizaciones, que se conviertan en garantía de multiplicación del trabajo que se está desarrollando y no permitan que se reproduzcan relaciones de dependencia entre los grupos y cualquier tipo de agente externo a la organización.

Pensamos, en la formación de líderes con características democráticas, que realmente expresen a los afiliados de los grupos, que faciliten el surgimiento de nuevos líderes y que entiendan la organización popular como un espacio de trabajo, como un espacio de participación y de creación de alternativas.

También nos parece importante, la tarea de recoger estas experiencias para trasmitir y socializar lo que hoy están haciendo y pensando los sectores populares que se han agrupado en los distintos comités de lucha por vivienda.

Nos parece importante para que otras comunidades y sectores sociales aprendan de los heroísmos e historias particulares de estas agrupaciones y también porque documentan la experiencia organizativa de los sectores populares de nuestro país. Ejemplos de este nivel de trabajo lo constituyen la Agenda Aportes para una memoria popular, el cuaderno popular "Historia, luchas y esperanzas", "Construyendo una nueva comunidad" y un libro con testimonios de mujeres próximo a editarse.

Para profundizar y mejorar el trabajo que estamos realizando, hemos visto la necesidad de mejorar el conocimiento obtenido sobre las características de los sectores populares. Por lo general, el conocimiento que poseemos sobre el pueblo costarricense, es vago y muchas veces enfatiza en su carácter de objeto de explotación o de agente altamente ideologizado. Nosotros pensamos que es importante abrir una nueva posibilidad y preocuparnos por conocer las características particulares del pueblo costarricense, expresadas en el espacio de su vida cotidiana y en los momentos de su participación organizada por la resolución de los principales problemas y necesidades.

Es necesario determinar por ejemplo sus formas de actuación; el origen y las características de su conocimiento, de sus valores; las formas y espacios en que se transmiten estos conocimientos y valores; la forma en que recrea las ideologías dominantes, la manera en que desarrolla las prácticas de resistencia y las prácticas de cambio.

Consideramos que si las prácticas de educación popular permiten avanzar en ese conocimiento y en ese mismo proceso, se establece una mutua relación de conocimiento, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros; podríamos estar avanzando en la perspectiva de convertir estos trabajos en verdaderos espacios de diálogo, de análisis, de elaboración de propuestas específicas y de transformación social que permitan el desarrollo de nuevas formas de poder pensar y de actuar de una manera alternativa.

CIENTIFICOS Y ORGANIZACIONES: LA UNIDAD INDISPENSABLE

Ronald Campos

En mi condición de miembro de la Dirección de la CTCR quiero dar las gracias a CEPAS por la gentil invitación a participar en este importante Coloquio. Antes que nada, quisiera aclarar que estoy aquí, no porque sea un científico social, sino porque en mi actividad cotidiana, me encuentro todos los días con los distintos obstáculos que presenta una sociedad como la nuestra, a las organizaciones y clases populares, para impedirnos conocer nuestra propia realidad y poder adquirir conciencia de la urgencia de provocar un cambio profundo tanto en nuestras relaciones sociales como en las relaciones de producción, que nos permita edificar una nueva Costa Rica.

De manera que estoy aquí, fundamentalmente y quizá, por una casualidad. El año pasado para el Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR fuimos invitados varios compañeros –entre ellos mi amigo Carlos Campos– a una mesa redonda sobre el papel de las Ciencias Sociales en relación con las organizaciones populares y de ahí el compañero Manuel Rojas me invitó a venir aquí a estar un rato con ustedes e intercambiar ideas.

Un poco recapitulando sobre lo que se planteaba en aquella ocasión en la Universidad, decíamos que el problema fundamental de la Universidad, (y en este caso, de las ciencias sociales y del trabajo de los científicos sociales), estaba en si la Universidad ¿era o no del pueblo?, si la Universidad ¿estaba ligada o no al pueblo?

En aquella ocasión decíamos que había una serie de características del trabajo del científico social que nos parecían de gran importancia pero que era necesario modificar algunos criterios y comportamientos, no solamente del científico social, sino de las propias organizaciones populares, para que, entonces, pudiera encontrarse un punto común entre ambos factores que permitieran el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las luchas del pueblo.

En ese sentido creemos firmemente que hay una serie de disciplinas y de ciencias que investigan, (y lo hacen muy bien), pero en función de intereses un tanto alejados de los propios intereses de las organizaciones populares. Así, por ejemplo, ¿Por qué la Psicología no nos ayuda a investigar y a aclarar a las organizaciones populares sobre los métodos y formas a través de los cuales se realiza la manipulación de masas en nuestro país, para brindarnos un diagnóstico científico que nos indique cómo está pensando el pueblo en cada coyuntura?

La historia, por ejemplo, debería de ayudarnos a rescatar el pasado de las organizaciones populares que, en este país, prácticamente se desconoce. Quienes saben algo al respecto son sólo algunos círculos que tienen facilidad de estudio, que tienen instrumentos necesarios o métodos adecuados para poder concretar algunas investigaciones.

Ahora, meditando un poco sobre la investigación social y la educación popular en la coyuntura actual, tenemos que decir con claridad y a pesar de las limitaciones que tenemos sobre esta materia, que observamos una gran dispersión en la investigación social, una dispersión que se manifiesta en tres niveles distintos:

1. Dispersión a nivel institucional. Proliferan los organismos de investigación social en el país y estamos convencidos que entre ellos mismos no se dan eficientes niveles de coordinación de tal manera que se pueda evitar la duplicidad y al mismo tiempo se puedan complementar las investigaciones. Hasta la fecha, nosotros tenemos entendido, hay más de 30 organismos de investigación social no gubernamentales en el país y, efectivamente, podríamos comprobar que hay duplicidad de esfuerzos a pesar de la escasez de recursos.

2. La dispersión también la podemos encontrar reflejada en la inexistencia de proyectos de investigación multidisciplinarios que le permitan a las organizaciones populares contar con una visión mucho más general y al mismo tiempo concreta y completa, de la situación del país y su impacto sobre los distintos grupos sociales. Es decir, creemos que la descoordinación y la dispersión se pueden reflejar perfectamente en una compartimentación del estudio. Es decir, no hay (o hay escasez) de estudios multidisciplinarios, que nos digan a nosotros cuál es el estado psicológico de las masas, sociológico, socioeconómico, etc.

3. Podríamos decir también que esta situación se da fundamentalmente porque la investigación social no responde a temas centrales. No se ha creado un consenso de los propios investigadores acerca de los problemas medulares y centrales de la situación nacional y regional, que sea objeto de un esfuerzo común de investigación y de una política común de investigación.

Pese a los esfuerzos enormes que se hacen por descubrir aspectos muy importantes de los distintos grupos sociales que operan en el país, podríamos también afirmar que la investigación social, en muchas ocasiones –casi en la mayoría–, corresponde a situaciones coyunturales en un afán de darle respuesta a las organizaciones populares acerca de los problemas que tienen planteados en determinado momento. Estas investigaciones, se producen a posteriori con lo que el aprovechamiento de los resultados de la investigación es mucho más reducido.

En el caso de las organizaciones sindicales carecemos de una eficiente colaboración y coordinación con los distintos grupos u organismos de investigadores sociales que operan en nuestra patria.

Existe una enorme cantidad de investigaciones, por ejemplo, sobre los grupos que dominan y gobiernan nuestro país, sobre las capas medias, sobre la pequeña burguesía, sobre estos grupos dominantes y tradicionales, pero nosotros reclamamos, en este caso, la necesidad de investigar la situación de la clase obrera en Costa Rica para completar el espectro social investigado. Por ejemplo, ¿Cuáles son los cambios cuantitativos que se dan de manera global y sectorial en la clase obrera en el país? ¿Ha evolucionado enormemente o no? ¿Cuáles son las ramas de la economía en que se están desarrollando nuevos sectores de la clase obrera? e inclusive ¿Cuál es la situación material del obrero costarricense? Que se investiguen los cambios cualitativos, que se nos demuestre no solamente que hay 50 mil obreros textileros, sino que también nos digan ¿cómo piensa ese obrero textilero? ¿Ese obrero textilero cree o no en la organización popular? O es un obrero con una mentalidad de dependencia absoluta de organismos externos, o incluso, del propio patrono.

¿Por qué este tema? Porque partimos de la tesis de que la actual situación nacional y regional hace necesaria una mayor participación de la clase obrera en la vida política costarricense, no solo para sumar un nuevo sector a las luchas planteadas, sino por la profundidad y calidad de los cambios que pueden promover al frente de las luchas populares.

En fin, a pesar del enorme esfuerzo que se nota en organismos no gubernamentales que han proliferado en los últimos tiempos, lo cierto en que el esfuerzo sigue siendo disperso, sigue correspondiendo a temas no centrales sino más bien coyunturales, y no se producen investigaciones desde un ángulo o punto de vista multidisciplinario, sino más bien parcial.

Esto repercute en la educación popular, especialmente porque no nos permite conocer correctamente la realidad sobre la que trabajamos. Una primera consideración sobre la educación popular, que debemos señalar, es que analizamos la educación popular como un fenómeno relativamente reciente en Costa Rica que se desarrolla en gran medida como producto de la influencia de los procesos de otros países centroamericanos que han evolucionado enormemente en este campo.

Estamos hablando de la educación popular como una disciplina de las ciencias sociales; no entendiendo educación como lo que tradicionalmente se ha entendido, o sea, aquella educación a la cual teóricamente todo el mundo tiene acceso, que es la enseñanza gratuita, etc.

Creemos que los centros que están impulsando la educación popular han dado enormes aportes, especialmente estos centros no gubernamentales, pero se encuentran en una etapa embrionaria y enfrentan tres obstáculos principales para su desarrollo:

1. Tienen dificultades para ajustar las técnicas y los métodos de enseñanza a las condiciones nacionales. La concepción de la educación popular, en gran medida, es producto de la influencia de los acontecimientos y experiencias en otras naciones lo que provoca problemas de ajuste de las técnicas y métodos a las condiciones nacionales.

Por ejemplo, algunos grupos u organismos de este tipo dan talleres dirigidos a campesinos y estos talleres se formulan partiendo de un nivel inferior al existente en nuestro país, un nivel de alfabetización, por ejemplo, inferior al que realmente existe. Esto provoca entre otras cosas, desilusiones en quienes participan en el Taller y, en alguna medida, menosprecio de los dirigentes sindicales que (a pesar de que ha costado mucho) abren el espacio para que estos centros de capacitación trabajen en los propios grupos sociales organizados. Esta es una primera limitación que debe ser superada. Deben ajustarse mejor los métodos y formas de capacitación a los propios niveles de nuestra sociedad y para ello es necesario conocer mejor nuestra realidad.

2. Una gran limitación es que no siempre los objetivos y proyectos de educación popular corresponden a los verdaderos objetivos de la organización social en la que se está trabajando; más bien estos objetivos corresponden a los del centro de capacitación y entonces, hemos encontrado en algunos casos, antagonismo en el objetivo, que provoca a su vez nuevas incomprensiones y fricciones que obstaculizan en muchos casos el desarrollo de posteriores iniciativas.

3. Un obstáculo que encuentran los organismos de educación popular son los mismos dirigentes populares; es decir, somos nosotros mismos. En el país, normalmente, los dirigentes menospreciamos todo aquel trabajo intelectual que lleva como fin desarrollar nuestra mentalidad y nuestra conciencia y ponernos en condiciones de ser portadores de un cambio social profundo. Este menosprecio parte también de las relaciones que se dieron anteriormente entre círculos intelectuales y organizaciones populares, donde el científico social aparecía como el "clarividente" trabajando con una mesa de conejillos de indias, a los que investiga como a cualquier otro objeto. Este último factor, de carácter subjetivo, es necesario superarlo al más corto plazo posible.

Para concluir, tendría que decir que habría necesidad no solamente de reformular algunos aspectos de la investigación social para que esté en función de los intereses de las organizaciones y las masas populares (o tal vez profundizar más esa reformulación que ya hace algunos años se viene dando), sino también de que, de una vez para siempre, el científico social y el pueblo sean una sola cosa. Las organizaciones populares y el científico social no pueden estar divorciados uno del otro, porque son un complemento indispensable y necesario.

No vemos, al menos en el caso de nuestra central sindical, al científico social como un instrumento al que se puede acudir en ciertas ocasiones para pedirle un análisis de esto o lo otro; ni puede el científico social ver a las organizaciones populares como un laboratorio donde puede irse en determinado momento a hacer los estudios que él considera convenientes para su propio provecho.

Científicos y organizaciones deben ser una sola cosa, una unidad indispensable y complementaria, fundada en la realidad concreta. Todos somos pueblo y tenemos que transformar la realidad de nuestro pueblo para poder pasar a etapas superiores de vida.

Investigacion-accion: notas en torno a la experiencia del CEPAS

José Manuel Valverde R.

La crisis que atraviesa el país ha estimulado un proceso de cambio conservador, profundamente contaminado de la visión neoliberal de la sociedad y del Estado, que está teniendo profundas consecuencias para el mantenimiento de la democracia en Costa Rica.

La prolongación de la crisis económica, junto con las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, niegan a una gran mayoría de la población trabajadora, la posibilidad de ver realmente mejoradas sus condiciones de vida y de alcanzar los niveles de bienestar a que legítimamente tiene derecho.

Es la época en la cual, a nivel nacional e internacional, la condición para el crecimiento económico es la desaparición de las demandas y aspiraciones de los sectores populares.

Entre tanto, en el seno de las organizaciones populares costarricenses, continúan prevaleciendo intereses particulares que imposibilitan formas de articulación y prácticas que les permitan fortalecer su posición y hacer una defensa más efectiva de las conquistas económicas, sociales y políticas que habían alcanzado.

Por otra parte, las transformaciones que se han venido operando en el país están llevándolo a una posición de mayor dependencia con el mercado internacional y a un acrecentamiento de la influencia de los Estados Unidos sobre Costa Rica, cercenando así, cada vez más, nuestra soberanía e independencia para forjarnos nuestro propio destino.

Los elementos señalados indican que marchamos hacia un modelo de democracia restringida en todos sus órdenes, sin que alcancemos aún a avizorar un proyecto de sociedad centrado en el principio de la igualdad económica y política para todos los ciudadanos.

En este contexto, los compromisos a que nos enfrentamos como intelectuales, educadores populares y dirigentes populares, son múlti-

ples. En el CEPAS tenemos conciencia de los serios problemas a que se enfrenta el país y los retos que plantea esta coyuntura..

Por esta razón, es indispensable reflexionar en torno al trabajo que se desarrolla desde los centros de investigación social y de educación popular, y el papel de éstos en el actual contexto nacional y regional. De esta manera, me corresponde exponer las ideas que al respecto tiene el CEPAS como centro de investigación-acción.

En la creación del CEPAS han estado presentes varias preocupaciones, a las cuales intentamos dar respuesta a través de los diversos proyectos.

1. La primera se refiere al carácter de la investigación social predominante en nuestro país. Pensamos que hace falta desarrollar estudios científicos, objetivos y críticos, sobre los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad costarricense y, particularmente, los sectores populares y sus organizaciones. A cada momento apreciamos la hegemonía intelectual, ideológica y cultural de los grupos dominantes, que mina la agudeza, profundidad y sentido crítico de aquella investigación científica que busca plantearse en forma creativa y desideologizada, el estudio de los viejos y nuevos problemas.

2. En segundo lugar, es claro el reducido número de estudios que se plantean preguntas y respuestas concretas a los diferentes problemas que afronta el país, desde la perspectiva del movimiento popular. A lo anterior se suma el escaso desarrollo de procedimientos y técnicas de investigación social, que permitan avanzar en forma más enriquecedora en el conocimiento de la realidad costarricense y de las condiciones de existencia de nuestro pueblo.

3. En tercer lugar, es preocupante la poca importancia que en algunos medios se le confiere a la investigación social y al trabajo intelectual en general. La "práctica" como concepto es muchas veces rebajado a un activismo puro que implica, a su vez, una cosificación y relegamiento de la teoría y del conocimiento científico. Así, un intelectual es visto como un teórico, sin contacto con la realidad y distante de los hombres "prácticos".

4. El predominio de concepciones y prácticas como las mencionadas nos plantea la tarea de reivindicar la modalidad de trabajo de la investigación-acción. Entendemos ésta como aquel quehacer orientado a generar conocimiento científico sobre la realidad; que incorpora los puntos de vista, análisis y reflexiones de los actores sociales en el proceso de investigación y que se propone incidir en los procesos de cambio que impulsan los sectores populares de nuestro país.

A partir de los elementos expuestos, cabe profundizar sobre la forma en que entendemos la investigación-acción y su papel en el actual contexto nacional y regional.

La experiencia en América Latina en el campo de lo que actualmente se conoce como investigación-participativa, investigación-acción, educación popular, etc., data de varias décadas. Según estudiosos del tema su desarrollo parece encontrar explicación en las limitaciones que ofrece el quehacer investigativo que se limita a conocer y que no se propone incidir sobre los problemas o situaciones que estudia.

Esto nos remite al tema, sin duda importante, de la relación entre la actividad intelectual investigativa y la acción social. Pero antes, hagamos algunas precisiones conceptuales que aseguren la comprensión exacta de las ideas que posteriormente expondremos.

1. Entendemos la investigación como aquella actividad o proceso colectivo encaminado a la producción de conocimiento científico sobre la realidad. En este sentido difiere del conocimiento "no sistemático" y de todo aquello que en ocasiones se quiere hacer pasar como "saber popular", que no es objetivo y crítico. La acción social la entendemos como aquel proceso consciente orientado a la transformación de los problemas estudiados.

2. Así definidos los términos, entendemos la investigación-acción como el proceso encaminado a la producción de conocimiento científico sobre la sociedad, que busca contribuir a forjar el punto de vista de los sectores populares en su tarea de construir una sociedad más justa, solidaria y democrática.

3. Tres elementos aparecen estrechamente relacionados en esta definición, a saber:

- llevar a cabo investigaciones científicas;
- promover el análisis y la reflexión sobre los problemas estudiados entre las organizaciones;
- incidir en los procesos de cambio en favor de las grandes mayorías.

4. Algunos de los principios metodológicos que se desprenden de esta formulación son:

- reconocer a los sujetos sociales como actores de un proceso, que poseen un potencial y una capacidad para la transformación de la sociedad.
- incorporar en el proceso el conocimiento y la experiencia de los sujetos sociales, como una forma de avanzar en una comprensión

más exacta de la problemática estudiada y de sus posibles vías de superación.

- negar sistemáticamente el papel de la ciencia social como instrumento de dominio, subordinación o de preservación de relaciones asimétricas investigador-sujetos sociales.
- desarrollar relaciones de colaboración e intercambio entre el investigador y los sujetos sociales protagonistas de los procesos de cambio.
- sistematizar cada experiencia de manera que se asegure su recuperación en términos investigativos y prácticos.
- respetar y fortalecer la independencia absoluta de las organizaciones y de sus dirigentes, en el sentido de garantizar que éstos respondan a los intereses de quienes las integran.

5. La participación de los sujetos sociales en el proceso de investigación-acción ocupa un lugar central dentro de esta formulación. En ocasiones ocurre que a los grupos se les asigna un papel de simples depositarios del conocimiento generado externamente, se simplifica la explicación de los problemas sociales o simplemente se transmite lo que se considera que pueden alcanzar a entender. De esta manera no se alcanza a superar la relación sujeto-objeto de investigación y se niega la posibilidad de lograr un conocimiento que recupere el cúmulo de saber que se encuentra en la "cultura popular".

Creemos que la participación debe implicar la posibilidad de que los sujetos sociales descubran y desarrollen su capacidad para analizar y reflexionar sobre la realidad en que actúan cotidianamente, elevando su nivel de comprensión de los problemas que los afectan y develando las posibilidades de incidir en los procesos de cambio en que se encuentran inmersos.

6. En este sentido, el intelectual o el educador popular debe ser un agente que favorezca la autonomía de criterio y el espíritu crítico y creativo de los sujetos con que se relaciona.

7. Por último, entendemos que la investigación-acción es un proceso acumulativo de conocimientos y experiencias, esencialmente colectivo, sujeto a cambios y adecuaciones a situaciones concretas y al contexto en que se inserta.

¿Cuál es entonces, partiendo de la especificidad que reviste este trabajo, el papel que corresponde desempeñar a los centros de investigación social y de educación popular en la actual coyuntura nacional y regional?

Vivimos tiempos en que el capitalismo ha renovado sus estructuras y su pensamiento a través de un proyecto neoconservador en lo políti-

co, y neoliberal en lo económico. En Centroamérica, la posibilidad de una guerra generalizada está siempre presente. En Costa Rica, las ideas liberales y conservadoras han venido imponiéndole, en los últimos años, el rumbo a la sociedad costarricense.

Por todo lo anterior pensamos que se requiere:

1. Solucionar la crisis política regional como una condición necesaria para la formulación de una solución global, que permita a cada país centroamericano y al nuestro, aspirar a un desarrollo social mayor e independiente.
2. Trabajar por una democratización de todas las esferas de la vida social (material, espiritual y cultural).
3. Contribuir a renovar con espíritu crítico y creativo, estructuras, concepciones y prácticas en las organizaciones populares y en los partidos políticos.
4. Contribuir a la superación del antiintelectualismo y del activismo tan característicos de nuestro tiempo.
5. Abrir espacios de diálogo, análisis y reflexión entre los distintos sectores interesados en desarrollar una sociedad más igualitaria en lo económico y en lo político.
6. Contribuir, al lado de las organizaciones populares, en la búsqueda de posibles vías de solución a los problemas que aquejan a los sectores populares.
7. Contribuir a desarrollar organizaciones populares autónomas, participativas, democráticas y solidarias.
8. Difundir ideas contrarias al intervencionismo en el área centroamericana y en favor de la paz, la convivencia pacífica entre las naciones y la autodeterminación.
9. Desarrollar una alternativa a los cambios neoconservadores que están predominando en el país, en la cual lo fundamental sea la satisfacción de las necesidades concretas de todos los individuos.

OTRAS PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL DEI

COLECCION TEOLOGIA LATINOAMERICANA

LA IGLESIA LATINOAMERICANA ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA
Pablo Richard

CAPITALISMO: VIOLENCIA Y ANTI-VIDA (2 Tomos)
Saúl Trinidad y Elsa Tamez (editores)

EL DESAFIO DE LOS POBRES A LA IGLESIA
Julio de Santa Ana

ESPIRITUALIDAD Y LIBERACION EN AMERICA LATINA
Eduardo Bonnín, (editor)

EL DIOS DE LOS POBRES
Victorio Araya

APUNTES PARA UNA TEOLOGIA NICARAGUENSE (agotado)
Varios

LAS IGLESIAS EN LA PRACTICA DE LA JUSTICIA
P. Richard, A. Guzmán y otros

LA LUCHA DE LOS DIOSES
P. Richard, F. Hinkelammert y otros

CULTURA NEGRA Y TEOLOGIA
Quince Duncan y otros

LAS BUENAS IDEAS NO CAEN DEL CIELO
Georges Casalis

COLECCION APORTES

CRISTIANISMO ANTI-BURGUES (agotado)
Raúl Vidales

SANTIAGO: LECTURA LATINOAMERICANA DE LA EPISTOLA
Elsa Tamez

LA HORA DE LA VIDA
Elsa Tamez

LA BIBLIA DE LOS OPRIMIDOS
Elsa Tamez

PROTESTANTISMO Y LIBERALISMO EN AMERICA LATINA
J.M. Bonino, Carmelo Alvarez y Roberto Craig

POR LAS SENDAS DEL MUNDO, CAMINANDO HACIA EL REINO
Julio de Santa Ana

PAN, VINO Y AMISTAD
Julio de Santa Ana

CELEBREMOS LA FIESTA
Carmelo Alvarez

COLECCION ECONOMIA TEOLOGIA

LAS ARMAS IDEOLOGICAS DE LA MUERTE
Franz Hinkelammert

LA ESPERANZA EN EL PRESENTE DE AMERICA LATINA
R. Vidales y L. Rivera (editores)

CRITICA A LA RAZON UTOPICA
Franz Hinkelammert

DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO
Franz Hinkelammert

COLECCION ECOLOGIA-TEOLOGIA

SOMOS PARTE DE UN GRAN EQUILIBRIO: LA CRISIS ECOLOGICA EN CENTROAMERICA
Ingemar Hedström

LOS POBRES DE LA TIERRA
Roy H. May

COLECCION UNIVERSITARIA

CENTROAMERICA: LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD
Varios

LA ECONOMIA DEL BANANO EN CENTROAMERICA
José Roberto López

ELEMENTOS DE POLITICA EN AMERICA LATINA
Helio Gallardo

CENTROAMERICA: POLITICA ECONOMICA Y CRISIS
José Roberto López, Ana Sojo, Eugenio Rivera

DEL VIEJO ORDEN AL NUEVO DESORDEN
Reginald Green (editor)

PARA ENTENDER AMERICA LATINA (agotado)
Xabier Gorostiaga (editor)

CAPITALISMO Y POBLACION
Wim Dierckxsens

LOS BANQUEROS DEL IMPERIO (agotado)
Xabier Gorostiaga

TECNOLOGIA Y NECESIDADES BASICAS
Hugo Assmann y otros

ECONOMIA Y POBLACION
Wim Dierckxsens y Mario E. Fernández

CARTER Y LA LOGICA DEL IMPERIALISMO (agotado)
Hugo Assmann (editor)

TEATRO POPULAR Y CAMBIO SOCIAL EN AMERICA LATINA
Sonia Gutiérrez (editora)

EL BANCO MUNDIAL: UN CASO DE "PROGRESISMO CONSERVADOR"
Hugo Assmann (editor)

COLECCION HISTORIA DE LA IGLESIA Y DE LA TEOLOGIA

IDEOLOGIA DEL SOMETIMIENTO (agotado)
Franz Hinkelammert

LA HERENCIA MISIONERA EN CUBA
Rafael Cepeda (editor)

EN NOMBRE DE LA CRUZ
Fernando Mires

MATERIALES PARA UNA HISTORIA DE LA TEOLOGIA EN AMERICA LATINA
Pablo Richard, (editor)

RAICES DE LA TEOLOGIA LATINOAMERICANA
Pablo Richard, (editor)

LA COLONIZACION DE LAS ALMAS
Fernando Mires

LA IGLESIA CATOLICA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO EN CUBA
Raúl Gómez Treto

COLECCION MUJER LATINOAMERICANA

MUJER Y POLITICA
Ana Sojo

EL ROSTRO FEMENINO DE LA TEOLOGIA
Elsa Tamez y otros

TEOLOGOS DE LA LIBERACION HABLAN SOBRE LA MUJER
Boff, Gutiérrez, Assmann y otros

COLECCION ANALISIS

LA IGLESIA ELECTRONICA Y SU IMPACTO EN AMERICA LATINA
Hugo Assmann

TRANSICION Y CRISIS EN NICARAGUA
Rosa María Torres y José Luis Coraggio

COLECCION SOCIOLOGIA DE LA RELIGION

COSTA RICA: LA IGLESIA CATOLICA Y EL ORDEN SOCIAL
Andrés Opazo Bernales

NICARAGUA: IGLESIA, ¿MANIPULACION O PROFECIA?
Rosa Ma. Pochet y Abelino Martínez

COLECCION CUADERNOS

LA IRRUPCION DE LOS POBRES EN LA IGLESIA (DOCUMENTOS)

NICARAGUA: LOS CRISTIANOS ESTAN CON LA REVOLUCION (agotado)

"JUAN, JUAN, TU ERES MI HERMANO" (agotado)

CENTROAMERICA: CRISTIANISMO Y REVOLUCION (DOCUMENTOS)

SACERDOTES EN EL GOBIERNO NICARAGUENSE (agotado)

LA PALABRA SOCIAL DE LOS OBISPOS COSTARRICENSES (DOCUMENTOS)

AMERICA LATINA CLAMA A LAS IGLESIAS (DOCUMENTOS)

¡QUEREMOS LA PAZ! (DOCUMENTOS)

TEOLOGIA DE LA LIBERACION, *Boff, Richard y otros*

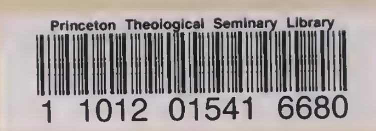
SOBRE EL TRABAJO HUMANO: ENCICLICA Y COMENTARIO
Juan Pablo II y Equipo DEI

TEOLOGIA DESDE EL TERCER MUNDO (DOCUMENTOS)

LA PASTORAL SOCIAL EN COSTA RICA. DOCUMENTOS Y COMENTARIOS ACERCA DE LA POLEMICA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL PERIODICO "LA NACION"
Pablo Richard (editor)

PARA PEDIDOS O INFORMACION ESCRIBIR A:

EDITORIAL DEI
Apartado 390-2070
Sabanilla
San José — Costa Rica
Teléfono 53-02-29



Impreso en los talleres de
Imprenta y Litografía VARITEC S.A.
San José, Costa RIca
en el mes de agosto de 1989.

ISBN 9977-83-005-3

COSTA RICA CRISIS Y DESAFIOS

LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 1987, EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA ACCION SOCIAL (CEPAS). REALIZO SU SENGUNDO COLOQUIO ANUAL "COSTA RICA: BALANCE DE LA SITUACION". EN ESA OCASION SE LOGRO REUNIR A UN GRUPO HETEROGENEO DE PERSONAS, COMPUESTO POR DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES POPULARES, CIENTIFICOS SOCIALES, ANALISTAS POLITICOS Y MIEMBROS DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR, INTERESADOS EN REALIZAR UNA DISCUSION AMPLIA SOBRE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA SOCIEDAD COSTARRICENSE EN LA ACTUALIDAD Y SUS DESAFIOS. EN EL PRESENTE VOLUMEN SE INCLUYEN LAS PONENCIAS MAS INTERESANTES PRESENTADAS EN DICHO ENCUENTRO POR CONSIDERARLAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL FUTURO DE COSTA RICA

